

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORANEA.

BC-FFL-GH-109 R. BL. 57070.



LA SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE Y EL AYUNTAMIENTO.
EL FRACASO DEL REFORMISMO BORBONICO EN LAS INSTITUCIONES DE
LA VILLA Y CORTE.

Director: D. Miguel Artola Gállego.

Carmen de la Guardia Herrero.

INDICE

	Pág.
Indice de Cuadros.	4
Abreviaturas utilizadas.	5
Introducción	6
1. Madrid Villa y Corte.	16
2. La Sala de Alcaldes de Casa y Corte.	31
2.1. Orígenes de la Sala de Alcaldes.	31
2.2. Composición de la Sala de Alcaldes.	50
2.2.1. Los Alcaldes de Casa y Corte.	50
-Categorías de Alcaldes.	50
-Nombramiento y situación de los alcaldes dentro de la carrera administrativa.	57
-Sueldos y remuneraciones de los alcaldes.	67
-Funciones de los Alcaldes.	70
-Promoción de los Alcaldes.	78
2.2.2. El Fiscal de la Sala de Alcaldes.	80
2.2.3. El Gobernador de la Sala de Alcaldes.	84
2.2.4. El personal de la Sala de alcaldes.	90
2.2.5. El Alcalde de Obras y Bosques	93
3.El Ayuntamiento de la Villa.	119
3.1. Orígenes y evolución del Ayuntamiento.	119
3.2. Composición del Ayuntamiento.	130

3.2.1. El Corregidor y sus dos Tenientes.	131
-Tiempo de permanencia en el cargo.	135
-Nombramiento y procedencia de los corregidores.	138
-Sueldo y remuneración del Corregidor.	142
-Funciones del Corregidor.	144
-Los dos Tenientes de Corregidor.	153
3.2.2. Los Regidores de Madrid.	156
-Acceso a la titularidad del oficio.	160
-Salario y remuneración de los Regidores.	166
-Las renunciaciones de oficios.	172
-Funciones de los regidores.	174
3.2.3. Otros oficios municipales.	179
4. Gobierno y administración de justicia en la Villa y Corte de Madrid.	199
4.1. Competencias "privativas" de la Sala de Alcaldes y del Ayuntamiento de la Villa.	207
4.2. Competencias compartidas por la Sala y el Ayuntamiento.	212
4.2.1. Abastos.	213
4.2.2. Justicia.	226
5. Las reformas de Felipe V.	251
6. Las reformas de Fernando VI.	276
7. Las reformas de Carlos III.	303
7.1. Los motines de 1766 y las primeras reformas municipales.	309
7.2. Las reformas de Floridablanca: la Superintendencia General de Policía.	327

Conclusiones. 369

Fuentes y Bibliografía. 395

Apéndices: I. "Ordenanzas para los alcalde de corte hechas por la reina doña Juana y Don Carlos su hijo"(1518)	415
II. "Orden del emperador Don Carlos sobre los derechos que han de llevar los alcaldes por las rebeldias" (1542).	424
III. Estatuto de Madrid (1602).	425
IV. Forma que se han de guardar en las elecciones de oficios de la Villa de Madrid.	428
V. Reflexiones del Corregidor de Madrid, Marqués del Rafal (1747).	431
VI. "Decretos de S.M. sobre la regla y práctica que se ha de observar en el despacho de los negocios y pleitos de la Sala de Alcaldes". (1714).	434
VII. "Real Resolución sobre la consulta hecha por la Sala de Alcaldes en vista de los Decretos de Nueva Planta".	435
VIII. Restauración de la antigua planta de la Sala de Alcaldes (1715)	447
IX. "Despacho del rey Fernando VI extinguiendo el oficio de Corregidor de Madrid y señalando las preheminencias del Gobernador Político y Militar" (1746).	449
X. Real Decreto de creación de la Superintendencia General de Policía(1782).	455
XI. Real resolución suprimiendo la Superintendencia General de Policía (1792).	458

INDICE DE CUADROS

	Pág
CUADRO 2-I. Causas para la concesión de honores de Alcalde de Casa y Corte durante el siglo XVIII.	54
CUADRO 2-II. Alcaldes honorarios que ocuparon plaza de número en la Sala.	56
CUADRO 2-III. Procedencia de los alcaldes de Casa y Corte en el siglo XVII .	60
CUADRO 2-IV. Propinas y dietas en metálico de los Alcaldes de Corte durante el siglo XVIII.	69
CUADRO 2-V. Destino de los Alcaldes de Casa y Corte.	79
CUADRO 2-VI Destino de los Alcaldes de Obras y Bosques	96
CUADRO 3-I. Corregidores de Madrid 1713-1803.	136
CUADRO 3-II. Corregidores interinos de Madrid. 1713-1803.	138
CUADRO 3-III. Ingresos por asistencia a las comisiones de los regidores de Madrid (1772-1773).	168
CUADRO 4-I. Relación de causas criminales tramitadas por el juzgado de Corte (marzo de 1765).	229

INDICE DE MAPAS

MAPA 4.I	Lugares y villas dentro de las cinco leguas que rodeaban Madrid	227
MAPA 4.II	Aldeas y lugares pertenecientes a la Tierra de la Villa de Madrid	236
MAPA 4.III	Pueblos incluidos en la Tierra de la Villa de Madrid y en el Rastro de la Corte	237

LISTA DE ABREVIATURAS.

A.I.E.M.	Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
A.G.S.	Archivo General de Simancas.
A.G.P.R.	Archivo General del Palacio Real
A.H.D.E.	Anuario de Historia del Derecho Español.
A.H.N.	Archivo Histórico Nacional
A.V.M.	Archivo de la Villa de Madrid
B.A.E.	Biblioteca de Autores Españoles.
B.I.I.	Biblioteca del Instituto Internacional
B.M.M.	Biblioteca Municipal de Madrid
B.N.	Biblioteca Nacional
R.A.B.M.	Revista de Archivos Bibliotecas y Museos.
Nov. Rec.	Novísima Recopilación
Leg.	Legajo

Introducción.

El Estado del Antiguo Régimen se caracterizó por una organización muy compleja. No fue un ente igualitario y centralista sino que por el contrario estuvo lleno de particularismos y diferencias. El Estado Moderno surgió como consecuencia de un proceso de incorporación de unidades territoriales diversas que llevaron consigo sus leyes e instituciones propias. Esta acumulación inicial de normas y organismos se complicó a lo largo del Antiguo Régimen.

La forma de gobierno vigente, la Monarquía Absoluta, definida por Bodino en el siglo XVI como aquella en donde el príncipe ejerce su poder desligado del derecho positivo -legibus solutus- en la práctica tuvo límites precisos. Efectivamente no existió una norma escrita que limitase el poder del rey. El monarca además creaba derecho y organismos de gobierno. Pero rara vez derogaba leyes o anulaba instituciones preexistentes. Respetaba la tradición, las normas y los organismos legados por sus mayores. "No hay un código que formular -afirma Bartolomé Clavero- sino una revelación que conocer". Esa "verdad revelada" estaba integrada por una maraña de textos e instituciones que

habían creado a lo largo de siglos los monarcas castellanos. "Estamos ante una cultura de textos, esto es, de heteronomía o autoridad exterior ya revelada" continua Clavero(1). Y es cierto. Los monarcas de la Casa de Austria y los primeros Borbones así como sus instituciones necesitaban anclar sus decisiones en la tradición jurídica castellana. Sus consultas, informes y disposiciones estaban repletos de textos legales promulgados por sus antecesores y sólo estos "corpora" jurídicos permitían o autorizaban la nueva decisión real. La necesidad de apoyarse en el pasado impidió a nuestros monarcas derogar las leyes y suprimir los organismos de épocas anteriores. Ahora bien, el sistema no podía ser estático. Las necesidades de los territorios que integraban la monarquía hispánica fueron variando a lo largo de siglos y era preciso, por lo tanto, continuar promulgando normas y creando organismos. La conclusión lógica de esta práctica de crear sin suprimir fue una superposición de instituciones y competencias que dificultó mucho el funcionamiento del sistema.

El Estado Moderno fue un ente complejo. Su estudio exige un análisis previo y pormenorizado de cada uno de sus niveles de organización, comenzando por el de las administraciones locales.

La elección de una organización institucional concreta, la de la Villa y Corte, no es arbitraria. Madrid constituyó un ejemplo claro de la duplicidad de organismos y competencias características del Antiguo Régimen.

La Villa de Madrid a mediados del siglo XVI se convirtió también en Corte. La Villa como tal, tenía una institución que gobernaba e impartía justicia: el Ayuntamiento. La Corte a su vez, contaba con un organismo propio, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, cuyas funciones eran similares a las de las corporaciones.

Al instalarse el monarca y sus consejeros definitivamente en Madrid coexistieron dos instituciones con competencias comunes actuando sobre el mismo territorio. No se produjo la extinción de la Sala ni del Ayuntamiento. Tampoco se derogaron los privilegios, ordenanzas y reglamentos que regulaban la composición y funciones de los dos organismos. Logicamente los conflictos entre ellos se desataron, siendo necesarios continuos arbitrajes del Consejo de Castilla que no cesó de promulgar autos regulando aspectos concretos de gobierno. Todo ello será la causa de que el modelo gubernativo y judicial de Madrid fuese distinto al del resto de las ciudades y villas del reino. La Villa y Corte precisa por lo tanto de una investigación propia. Sobre todo si tenemos en cuenta la falta de publicaciones sobre la administración local madrileña del Antiguo Régimen.

El Ayuntamiento fue estudiado por Rafael Gibert. Su obra titulada El Concejo de Madrid. Su organización de los siglos XII al XV se publicó en 1.949(2). Desde el punto de vista temporal su trabajo concluía al iniciarse el Antiguo Régimen. No hay otro estudio sobre toda la institución municipal aunque si se han publicado trabajos que, de forma marginal, afectan al Ayuntamiento. Concepción de Castro en su obra El pan de Madrid(3), centrada en los problemas de abastecimiento de la Villa y Corte, hace continuas alusiones al Ayuntamiento y también a la Sala de Alcaldes, que tanto tuvieron que ver con la escasez o abundancia de mantenimientos en la Corte. El Equipo Madrid lleva años trabajando y publicando sobre la Villa y Corte, pero no desde el punto de vista de los organismos de gobierno. Tan sólo Mauro Hernández Benitez ha afrontado problemas institucionales en su Tesis Doctoral todavía inédita titulada El poder difuso. Estudio de una oligarquía urbana (Madrid 1606-1808)(4).

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte, es un tema practicamente virgen. Si exceptuamos las referencias de los juristas del siglo XVIII, Escolano de Arrieta y Martínez de Salazar en sus obras dedicadas al funcionamiento del Consejo de Castilla(5), o la obra de Desdevises du Duzert L' Espagne de l'Ancien Régime y sobre todo su artículo "La Chambre des Juges de l'Hotel et de la Cour en 1745", publicados respectivamente en 1.899 y en 1.916(6), no existen sino

alusiones en obras generales sobre la organización institucional del Antiguo Régimen.

Nos interesa, pues, el estudio de las dos instituciones que comparten las tareas de gobierno y justicia de la Villa y Corte. Evidentemente no a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Para nuestro objetivo nos basta con centrarnos en el siglo XVIII. Con el cambio de dinastía y la llegada del pensamiento ilustrado, se produjeron una serie de reformas administrativas tendentes a mejorar el funcionamiento del aparato burocrático del Antiguo Régimen. Durante los siglos XVI y XVII cuando surgían problemas entre instituciones, o cuando simplemente el sistema parecía ineficaz, los monarcas intervenían pero siempre de manera puntual para resolver un problema concreto. Durante el siglo XVIII, los Borbones afrontaron reformas totales que afectaron a todo el sistema político administrativo de la monarquía hispana.

Las reformas borbónicas han sido objeto de atención de muchos investigadores. José Antonio Escudero en su obra Los Secretarios de Estado y de Despacho(7) afirma que se produjo un profundo cambio de las estructuras con las reformas del siglo XVIII. Estas supusieron el declive del sistema polisinodial de los Austrias y la aparición del sistema ministerial, cuyo origen estaría en las Secretarías de Estado y de Despacho. Fernández Albadalejo también defiende una tendencia, sobre todo durante el mandato de Ensenada, a separar de los Consejos, todo aquello que no fuese

estrictamente judicial(8). Probablemente la intención si que fuese la de una cierta separación de funciones como medio de racionalizar y sobre todo aligerar el funcionamiento de la monarquía hispánica. Pero en cualquier caso la mayoría de las reformas y sobre todo sus objetivos fracasaron. El Consejo de Castilla mantuvo casi intactas sus competencias a lo largo del siglo. No lograron privarle de sus atribuciones administrativas y de gobierno.

Tanto la Sala de Alcaldes como el Ayuntamiento de Madrid se vieron afectados por las reformas borbónicas. En el caso de la Villa y Corte tenemos dos instituciones que durante los siglos XVI y XVII habían tenido prácticamente las mismas atribuciones pero que estaban integradas por oficiales muy distintos. Los miembros de la Sala de Alcaldes, los Alcaldes de Corte, eran ministros togados con una carrera administrativa larga a sus espaldas. La mayoría habían sido anteriormente oidores de las Audiencias o Chancillerías. Su objetivo era lograr la promoción a Consejero preferentemente del de Castilla. Los Regimientos de Madrid estaban enajenados. Los oficios podían ejercerlos los propietarios, o podían arrendarlos a tenientes. En ambos casos había que superar unas pruebas que poco tenían que ver con la preparación del futuro oficial y mucho con su condición de hidalguía. Son instituciones muy distintas. La Sala estaba ligada al Consejo de Castilla, que según nuestros autores fue el blanco de las reformas borbónicas.

El Ayuntamiento de la Villa es una institución municipal, que presumiblemente si se produjese una separación de las competencias, asumiría las de gobierno quedando excluida de las judiciales.

La existencia de dos instituciones de naturaleza tan diversa pero que han asumido históricamente las mismas atribuciones constituye un marco ideal para analizar las reformas del siglo XVIII. La reforma frustrada, es el título que Salustiano de Dios utiliza para el capítulo dedicado en su obra Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla(9), a las reformas ilustradas. Es un título acertado. Las reformas borbónicas, a pesar de sus intenciones, no lograron alterar las atribuciones de los distintos organismos. Podemos afirmar que fracasaron y las razones de ese fracaso son importantes para esclarecer algunos puntos confusos del funcionamiento del absolutismo monárquico.

NOTAS DE LA INTRODUCCION

(1) El texto pertenece a la conferencia pronunciada por Bartolomé Clavero en el Curso sobre "Delito y pecado en la España del Barroco" celebrado en la UIMP durante el verano de 1987. Las conferencias han sido publicadas en un volumen titulado Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid, 1990. Este fragmento está en la pág. 60.

(2) Rafael Gibert, El concejo de Madrid su organización de los siglos XII al XIII, Madrid, 1949. Es una obra imprescindible para entender los orígenes de la Corporación madrileña. Existen también muchas obras clásicas sobre la Villa y Corte pero con pocas alusiones a las instituciones que gobernaban e impartían justicia en Madrid. De todas formas no podemos dejar de destacar la obra de G. González Dávila, Theatro de las Grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España, Madrid, 1623, y la de José Amador de los Ríos, Historia de la Villa y Corte de Madrid, Madrid, 1864, 4 vols.

(3) El capítulo IV de la obra de Concepción de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987, se centra en el abastecimiento de Madrid y en el existen múltiples referencias al Ayuntamiento y a la Sala de Alcaldes.

(4) La tesis doctoral de Mauro Hernández Benítez estudia, sobre todo, el cuerpo de regidores de Madrid. Fue defendida en el Departamento de Historia Moderna de la U.A.M. en octubre de 1991. Mauro Hernández ha publicado también un

artículo sobre los regidores de Madrid titulado "Los Regidores de Madrid en el siglo XVIII" en Anuario de Historia del Derecho español, t. LVI, 1986, pp 637-681.

(5) Pedro Escolano de Arrieta, Práctica del Consejo Real, Madrid, 1796, 2 vols. y Antonio Martínez de Salazar, Colección de Memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo, Madrid, 1764.

(6) Georges Desdevises du Duzert, L'Espagne de l'Ancien Régime t. 2 (Les Institutions), Paris, 1899. En 1989 la F.U.E ha traducido y publicado los tres volúmenes de la obra bajo el título de La España del Antiguo Régimen, con una interesante introducción de Agustín González Enciso. El artículo de Desdevises du Duzert, "La Chambre des Juges de l'Hotel et de la Cour en 1745" en Revue Hispanique, t.36, 1916, pp. 1-51, sigue siendo el único trabajo monográfico sobre la Sala de Alcaldes.

(7) José Antonio Escudero, Los Secretarios de Estado u del Despacho Madrid, 1969, 4 vols.

(8) "A la serie de negocios que ya habían sido desgajados de la competencia del Consejo de Castilla -afirma Fernández Albadalejo- Ensenada pretendía sumar ahora "el gobierno, policía y economía de los pueblos", en la inteligencia de que "mientras no se reglen y establezcan estas materias, no es posible promover en el reino la población, el cultivo y el comercio, sin cuyas circunstancias el herario no puede ser pingüe ni aver exercito y marina proporcionado a la extensión de la monarquía". Concluye Fernández Albadalejo citando a Ensenada. Pablo Fernández Albadalejo, "Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII" en Estudios de hacienda de Ensenada a Mon, Madrid, 1984, pág. 159.

Fernández Albadalejo confirma su tesis en su excelente obra "La monarquía". "Con todas las matizaciones que se quieran -continúa Pablo Fernández Albadalejo- Ensenada representaba una firme apuesta por la monarquía administrativa. Ya no sólo se trataba de intervenir más o menos ocasionalmente sobre las haciendas de los pueblos. Lo que ahora se pretendía era consolidar todo un sistema desde el que, estable y regularmente, pudiera desplegarse ese tipo de actuaciones gubernativas con su inevitable correlato de ejecutividad. Tal línea de acción, inevitablemente, suponía aceptar como principio la definitiva postergación de la monarquía jurisdiccionalista." Pablo Fernández Albadalejo "La monarquía" en Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración" t. I, (El rey y la monarquía), Madrid, 1989, pág.48.

(9) Salustiano de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986. pp 61-84.

CAPITULO 1. MADRID VILLA Y CORTE.

La Villa de Madrid era una de las poblaciones importantes de Castilla antes de la instalación definitiva de la Corte en 1561. Su importancia fue más política que económica. Durante el reinado de los Reyes Católicos, pero sobre todo durante el reinado del emperador Carlos V, la Corte, es decir los reyes o regentes y los Consejos que les auxiliaban en las tareas de gobierno, pasaron largas temporadas en la Villa de Madrid. También compartió con Valladolid y Toledo la honra de ser las ciudades castellanas en donde más veces se celebraron reuniones de Cortes.

La Villa tenía una estructura institucional similar a las de las otras villas y ciudades importantes de Castilla. Villa de origen musulmán, fue conquistada por Alfonso VI en 1083. Desde entonces y hasta las reformas municipales del siglo XIV, se gobernó por un concejo abierto o asamblea general de vecinos. Durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350), concretamente en 1346, se sustituyó el concejo abierto por un Regimiento o concejo de número de designación real. En 1348 se introdujo la figura del Corregidor para presidir las reuniones o "ayuntamientos" del concejo(1).

La Corte estaba integrada por la Casa Real, es decir el conjunto de oficios que auxiliaban al rey como particular, y por un conjunto de instituciones que le ayudaban en sus tareas de gobierno y justicia. La Corte contaba con una institución propia, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que gobernaba e impartía justicia en los sitios en donde esta residiese.

Durante la Edad Media la Corte fue itinerante. El contacto del rey con el reino tenía que ser estrecho. El rey necesitaba a sus ciudades, necesitaba recaudar sus tributos y sus milicias y las ciudades necesitaban al rey como símbolo de su independencia frente a la nobleza. Lo mismo ocurría en los estados que estaban surgiendo en Europa. En Francia, la Corte tampoco estaba establecida en Paris, los reyes se desplazaron continuamente por las ciudades del Valle del Loira, por Normandía y por regiones aun más lejanas(2).

Durante el siglo XV se consolidó el proceso de fortalecimiento del poder real que en Castilla se había iniciado dos siglos atrás. El aparato burocrático había crecido mucho tanto en cantidad como en eficacia y los continuos desplazamientos de la Corte eran caros y además dificultaban el buen funcionamiento de la monarquía. Los reyes, como paso previo al establecimiento de toda la Corte en una única ciudad, desligaron algunas de las instituciones del resto de los organismos que les acompañaban.

La primera en separarse de la Corte fue la Audiencia y Chancillería que se estableció primero medio año entre Olmedo y Medina del Campo y el otro medio en Alcalá, más tarde se trasladó a Segovia y por último se instaló en Valladolid durante el reinado de Juan II en 1452, allí permaneció durante todo el Antiguo Régimen. La Chancillería se encargaba de revisar la actuación de los alcaldes que impartían justicia en Castilla así como de recibir las apelaciones de sus juicios.

En el reinado de los Reyes Católicos y tras la conquista del reino de Granada se creó una segunda Chancillería que se estableció en Granada.

El río Tajo limitaba el área de actuación de las dos Chancillerías. La de Valladolid se encargaba del territorio al norte del Tajo mientras que la de Granada actuaba sobre los lugares situados al sur(3).

A pesar de la separación de la Chancillería de la Corte, ésta seguía teniendo un tamaño considerable lo que dificultaba mucho los desplazamientos. En el siglo XV y la primera mitad del XVI, los traslados de la Corte se fueron distanciando y se hacían cada vez más entre ciudades que tuviesen una infraestructura suficiente para instalar al rey y a sus numerosos funcionarios. Estas ciudades fueron sobre todo Valladolid, Toledo y Madrid.

Los historiadores de los siglos XVI y XVII que escribieron sobre la Villa y Corte como Quintana, González

Dávila, o León Pinelo(4), aún considerando la elección de la Villa de Madrid como sede de la Corte más que acertada, creyeron que Toledo había sido perjudicada porque la Corte, aunque itinerante, había permanecido largas temporadas en la Ciudad del Tajo. Pero durante el siglo XIX historiadores y literatos fueron mucho más allá. Toledo pasó de ser una ciudad perjudicada a ser una ciudad abandonada por la decisión de Felipe II de fijar la Corte en Madrid. Toledo, según ellos, había sido residencia de la Corte de forma continuada hasta que ésta se trasladó a Madrid. Esta idea la compartieron tanto los viajeros extranjeros que viajaron por España en el XIX como nuestros autores románticos(5). Toledo, como todas las ciudades con vestigios medievales no cristianos, apasionó a unos y a otros y para todos la causa de la decadencia toledana no fue otra que el abandono sufrido tras el traslado de la Corte. Así por ejemplo el Barón CH. Davillier que recorrió la Península a mediados del siglo XIX escribía en las memorias de su viaje:

"En el año 1560 un golpe fatal abrumó a Toledo. Felipe II fijó su residencia en Madrid, abandonando la antigua capital de los reyes godos. Desde entonces no ha hecho otra cosa que decaer, y la Ciudad Imperial, que en tiempos de su prosperidad contaba, se dice, con más de doscientos mil habitantes, hoy posee apenas quince mil."(6)

El mismo tono se apreciaba en nuestros poetas románticos. Tanto Gustavo Adolfo Becquer como Zorrilla sintieron predilección por la ciudad del Tajo recreando para ella una tragedia de abandono. Unos versos de Zorrilla resumen claramente el sentimiento de los autores románticos sobre Toledo:

"Negra, ruínosa, sola y olvidada,
hundidos ya los pies entre la arena,
allí yace Toledo abandonada."

Curiosamente la idea de Toledo como ciudad abandonada por una Corte que presumiblemente había permanecido largas temporadas en ella ha permanecido hasta la actualidad. Autores contemporáneos como Juan Ignacio Gutierrez Nieto o Alfredo Alvar Ezquerro consideran Toledo como la sede preferida de la Corte antes de su traslado definitivo a Madrid(7). Pero la realidad es muy distinta. Durante el siglo XVI la Corte permaneció muy poco tiempo en Toledo y probablemente la única ciudad castellana que podía considerarse "abandonada" fue Valladolid.

Carlos V, que reinó desde 1517 hasta 1556, residió muy poco tiempo en la Península Ibérica, solo dieciséis años de los casi cuarenta de reinado(8). Con una concepción de la monarquía más medieval que moderna se desplazó continuamente por todo su imperio, visitando sus reinos y dirigiendo

personalmente sus ejércitos en sus numerosos enfrentamientos con turcos, luteranos y franceses. Durante las ausencias de sus reinos peninsulares siempre nombró regentes; primero a su mujer Isabel de Portugal, luego tras la muerte de Isabel en 1537, a su hijo y heredero, el futuro Felipe II, y en las ausencias de éste, que se inician con su viaje a los Países Bajos y se prolongan al casarse con Maria Tudor reina de Inglaterra, la regente fue Juana, hija del emperador y viuda de Juan de Portugal, quién abandonó a su hijo Sebastian en Portugal a los pocos meses de edad, para hacerse cargo de sus funciones como regente(9).

Tanto el emperador como los miembros de su familia que ejercieron como regentes mostraron enormes simpatías por Valladolid y residieron casi todo el reinado en esa ciudad y con ellos permanecieron los Consejos y demás instituciones que integraban la Corte. Es difícil establecer la cronología exacta de las estancias del emperador o los regentes y de las otras instituciones que integraban la corte en Valladolid, pero según Bennassar estas fueron muy numerosas: "Desde noviembre de 1517 hasta marzo de 1519, desde agosto de 1522 hasta septiembre de 1524 y acaso desde 1527 hasta 1536... y es seguro que lo ha sido durante dieciséis años desde mayo de 1543 hasta octubre de 1559". Las dudas de Bennassar sobre el periodo de 1527 hasta 1536 que coinciden con la regencia de Isabel de Portugal se solucionan revisando obras de cronistas y eruditos y podemos

afirmar que exceptuando el periodo de 1534 a 1536 en que se trasladó a la Villa de Madrid, la Corte residió casi ininterrumpidamente en Valladolid(10).

En el año 1559 la Corte se trasladó de Valladolid a Toledo con motivo de celebrarse en la ciudad imperial una reunion de las Cortes del reino de Castilla, y allí residía en el año 1561 cuando Felipe II decidió trasladar la Corte a la Villa de Madrid. Es cierto que había estado la Corte en Toledo durante otros periodos en el siglo XVI pero también lo había hecho en Madrid y en otras ciudades castellanas, aunque siempre fueron periodos cortos y desde luego muy inferiores a los que permaneció en Valladolid.

Cuando en 1561 se produjo el traslado de la Corte de Toledo a Madrid no fue con una voluntad política de hacer la Corte estable. Felipe II comunicó al Ayuntamiento de la Villa el traslado como otras veces se había hecho. El Ayuntamiento debía preocuparse de buscar abastos y alojamiento para todas las personas que integraban la Corte del rey.

Felipe II tenía muchas razones de índole particular para dejar Toledo. Su mujer Isabel de Valois, con quién se había casado dos años antes en la ciudad del Tajo, había contraído por dos veces viruelas y los médicos aconsejaban un cambio de aires. La hermana del monarca, Juana de Portugal, había adquirido en Madrid el palacio donde había nacido, y mantenía la ilusión de fundar un monasterio para

retirarse a orar "en la cuaresma y en otras festividades". La transformación del palacio en el futuro monasterio de las Descalzas Reales precisaba de muchas obras que Juana quería vigilar. Por último Felipe II estaba también ilusionado con una obra próxima a Madrid. Cuando se produjo el traslado de la Corte, los asesores de Felipe II ya habían encontrado el emplazamiento para levantar el monasterio de San Lorenzo. El lugar según Fray José de Sigüenza, encargado de la Real Biblioteca desde su fundación, estaba situado:

"En la ladera de esta sierra, junto a una pequeña población que se llama el Escorial...a siete leguas de Madrid, muy a su vista, a la parte del poniente... se descubrió una llanura o plaza suficiente para una grande planta, y el contorno de la tierra lleno de muchas comodidades para el propósito, levantando en la ladera, donde no llegan los vapores gruesos que exhalan con el sol a la mañana, puesto al Mediodía, que para las tierras frias como lo son estas tierras es de mucha consideración"(11).

El rey dió su aprobación al proyecto y al lugar elegido por sus asesores el 8 de abril de 1561, y en mayo de ese mismo año se produjo el traslado de la Corte a Madrid. El rey Felipe II, con la meticulosidad que le caracterizaba siguió muy de cerca la construcción del nuevo monasterio de

la orden de los Jerónimos.

A lo largo de su reinado fue cuando Felipe II consideró los beneficios de mantener la Corte estable. Numerosos tratados comenzaron a surgir defendiendo la candidatura madrileña. Argumentos como la situación geográfica de la Villa en el centro de los reinos peninsulares, la abundancia de aguas, sus aires saludables, sus posibilidades de crecimiento, comienzan a barajarse. El tratado más riguroso sobre el tema, se conserva en la Biblioteca Nacional y se publicó alrededor de 1600 con el título de Razon de Corte. En él, sus autores los arbitristas López de Leza y Juan de Jerez consideraban necesario la instalación de las cortes de los monarcas poderosos en un lugar estable. En el caso de la monarquía hispánica creían que el lugar que ofrecía mayores ventajas era Madrid(12). Además de los autores de Razon de Corte, la mayoría de los cronistas e historiadores del reinado de Felipe II como Cabrera de Córdoba o el propio Sigüenza defendieron la idea de mantener la Corte estable.

El establecimiento de la Corte en la Villa, no se hizo por lo tanto con una voluntad de fijar la corte en un lugar de forma definitiva, sino que fue la experiencia la que demostró al monarca las ventajas de no continuar con unos desplazamientos cada vez más costosos y sobre todo más difíciles por el tamaño que había adquirido la Corte. Esta situación de precariedad creó problemas importantes para el gobierno de la Villa y Corte.

La Villa de Madrid, como los otros lugares del reino contaba con una institución, el Ayuntamiento, que se encargaba del gobierno y la justicia del lugar. La Corte a su vez tenía otro organismo, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte cuyas atribuciones eran similares a las de los Ayuntamientos. Tenía que aplicar la justicia y gobernar los lugares en donde residiese la Corte.

Al establecerse la Corte en Madrid no se dieron normas para diferenciar las atribuciones que cada uno de los dos organismos tenían que tener. No se hizo porque el rey, como hemos señalado, no pensó al principio que Madrid fuera a ser la sede definitiva de la Corte. Las competencias de las dos instituciones, la de la Villa y la de la Corte, eran similares y sus enfrentamientos no se hicieron esperar.

Durante los siglos XVI y XVII cada vez que se producía un enfrentamiento entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento madrileño por algún problema de competencias, la Corona intervenía puntualmente, a través del Consejo de Castilla, para solucionar el problema concreto. Pero no se alteraron las ordenanzas y privilegios que definían las atribuciones de las dos instituciones por lo que pasado un tiempo el problema volvía a surgir. Durante el siglo XVIII la Corona afrontó reformas globales que afectaron al gobierno de la Villa y Corte, para intentar evitar los problemas de gobierno que la situación de duplicidad institucional venía acarreado desde antiguo. Con todo,

estas reformas no fueron radicales. Se acometieron de nuevo sin alterar las ordenanzas y privilegios que la Sala y el Ayuntamiento tenían. Ambas instituciones amparándose en sus privilegios se negaban a aceptar cualquier reforma que supusiese una pérdida en sus facultades(13).

La consecuencia de esta situación fue que la Villa y Corte de Madrid se gobernó de forma distinta a las demás villas y ciudades del reino. De forma distinta pero, sobre todo, de forma mucho más compleja, lo que dificultó mucho su buen funcionamiento y preocupó sobremanera a todos los monarcas del Antiguo Régimen(14).

NOTAS DEL CAPITULO 1.

(1) Para la creación de los doce primeros regimientos de Madrid, veáse la "Real Cédula del rey Alfonso XI nombrando los doce primeros Regidores de Madrid" reproducida por Timoteo Domingo Palacio, en sus Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Madrid, 1888, pp. 273-279. Sobre los corregidores de Madrid existe mucha información en el Archivo de la Villa. Los nombramientos de Corregidores en "Lista de los Corregidores de Madrid", A.V.M. Secretaria, 2-398-15.

(2) Bartolomé Bennassar, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1983, pp. 118-122.

(3) Sobre los orígenes de las Chancillerías además de la síntesis contenida en el Curso de Historia de las instituciones españolas de Luis Garcia de Valdeavellano, Madrid, 1973, siguen siendo válidos los artículos de Mendizábal, "Investigaciones acerca del origen, historia y organización de la Real Chancillería de Valladolid su jurisdicción y competencia", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. 30, 1914, pp. 61-72; 243-264, y 437-452; y "La Real Chancillería de Valladolid y su archivo" en Hidalguía, t.I, 1953, pp. 305-336 y 629-644. También sobre los orígenes de la Chancillería de Valladolid la obra de Maria de la Soterraña Martín Postigo, Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1979.

El artículo de Miguel Angel Pérez de la Canal, "La Justicia en la Corte de Castilla durante los siglos XIII al

XV", en Historia, Instituciones, Documentos, t. 2, 1975, pp. 385-481 constituye una gran ayuda para comprender la evolución de los oficios de justicia de la Corte. Más reciente y de gran interés el trabajo de Carlos Garriga, "Observaciones sobre el estudio de las chancillerías y audiencias castellanas (siglos XVI-XVII)" en Hispania entre derechos propios y derechos nacionales, Milán, 1990, t. II, pp. 758-803. También el apartado dedicado a "La Justicia" escrito por Benjamín González Alonso y publicado en el volumen II de la Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, Madrid, 1988, pp 343-417. Las alusiones concretas al origen de las Chancillerías en la pág. 385.

(4) Jerónimo de la Quintana, Historia de la Antigüedad, Nobleza y Grandeza de la Villa de Madrid, Madrid, 1629; G. González Dávila, Theatro de las Grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España, Madrid, 1623; Antonio León Pinelo, Anales de Madrid, edición de Pablo Fernández, Madrid, 1970. La obra de Leon Pinelo cubre los años 447 al 1657. No sabemos cuando fue escrita pero probablemente en la segunda mitad del siglo XVII. El manuscrito de Leon Pinelo se conserva en la B.N. de Madrid (Ms. 1255) y nunca se había impreso completo hasta esta edición de Pablo Fernández.

(5) La obra de Michael Jacobs, A Guide to Andalusia, Londres, 1990, a pesar de su título tiene capítulos francamente documentados. El capítulo VIII dedicado a los viajeros románticos que visitaron España en el siglo XIX es esclarecedor sobre la importancia que ha tenido el movimiento romántico en la construcción de la imagen de España y de los españoles.

(6) Gustave Doré y el Barón Ch.Davillier Viaje por España, Madrid, 1982, vol.II, pág. 113; es una reedición que recoge

el viaje realizado por Gustave Doré y el Barón Charles Davillier por España en 1862.

(7) Juan Ignacio Gutierrez Nieto, "En torno al problema del establecimiento de la capitalidad de la monarquía hispánica en Madrid" en Revista de Occidente, Extraordinario VII, 1983, pp.52-65; Alfredo Alvar Ezquerro, El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, 1989.

(8) J.H.Elliott, La España imperial 1469-1716, Barcelona, 1978, pág.173.

(9) William Thomas Walsh, Felipe II, Madrid, 1946.

(10) Bartolomé Bennassar, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1983, pág 119. Para completar los datos aportados por Bennassar la obra citada de Thomas Walsh titulada Felipe II constituye una gran ayuda .

(11) Fray José de Sigüenza, La fundación del Monasterio del Escorial,(1.602) reedición de Aguilar, Madrid, 1988, pág.34. Fray José de Sigüenza (1544-1606) fue uno de los grandes eruditos castellanos del siglo XVI, encargado de la Biblioteca del Monasterio del Escorial y prior del mismo destacó como gran conocedor del Monasterio donde trascurrió gran parte de su vida.

(12) Lopez de Leza y Juan de Xerez, Razon de Corte, B.N. Ms. 6549. Este manuscrito ha sido bien estudiado por Alfredo Alvar Ezquerro en su obra ya citada El nacimiento de una capital europea....

(13) Las reformas de los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III sobre las instituciones encargadas de gobernar y

aplicar la Justicia en la Villa y corte se estudian en los capítulos V-VII del presente trabajo.

(14) También el capítulo IV de este estudio se centra en las peculiaridades en el gobierno y la administración de justicia de la Villa de Madrid.

CAPITULO 2. LA SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE

La Sala de Alcaldes era la institución encargada de administrar justicia y gobernar la Corte y Rastro del rey. Se denominaba Corte al lugar donde residían el rey y sus ayudantes mientras que el Rastro lo constituían las cinco leguas que rodeaban ese lugar.

La Sala de Alcaldes, cuando la Corte era itinerante, se desplazaba junto al monarca y otras instituciones de la monarquía, reforzando la actuación de los Ayuntamientos de las ciudades y villas que el monarca elegía como sede de la Corte. Al fijarse la Corte en Madrid en 1561, la Sala fue, junto al Ayuntamiento de la Villa, la encargada de gobernar y administrar la justicia en la Villa y Corte.

2.1. ORIGENES DE LA SALA DE ALCALDES

Establecer los orígenes de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte no es tarea fácil. La Sala de Alcaldes no conservó en sus archivos las disposiciones originales promulgadas por

distintos monarcas dibujando su composición y competencias. No sabemos las razones de una pérdida tan lamentada por la propia Sala pero podemos barajar algunas hipótesis. Por un lado la Sala, como en otro lugar señalamos, fue una institución itinerante hasta que se instaló la Corte en Madrid en 1.561 y, aún así, no contó con una sede estable hasta bien entrado el siglo XVII. El actual Palacio de Santa Cruz fue concebido para albergar permanentemente a la Sala de Alcaldes pero se construyó en pleno reinado de Felipe IV. Suponemos que esta itinerancia de siglos causó la pérdida de parte de los archivos originales de la Sala. Además, los miembros de la institución de la Corte, los Alcaldes de Casa y Corte, pasaban poco tiempo como oficiales de la Sala. Todos fueron letrados que provenían de audiencias y chancillerías y que consideraban su paso por la institución de la Corte como "un mal menor". Pretendían, como era lógico, debido a la cantidad y diversidad de funciones que tenían los Alcaldes de Corte, su rápido ascenso a alguno de los distintos Consejos de la monarquía hispana. Normalmente tras tres o cuatro años como alcaldes lograban su promoción a fiscales o consejeros. Los Alcaldes de Casa y Corte, en realidad, se interesaron poco por la Sala de Alcaldes y sus archivos al tener la voluntad de abandonar la institución lo antes posible.

No tenía, por lo tanto, la Sala las disposiciones originales que le afectaban pero sí contó con información

suficiente sobre si misma como para poder funcionar con normalidad. Conocía todas las normas que le incumbían contenidas en la Nueva y después en la Novísima Recopilación. También tenía dos obras fundamentales para el propio funcionamiento de la Sala de Alcaldes que habían sido elaboradas en distintas épocas por los Alcaldes de Corte. Una tenía el expresivo título de Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde(1). Había sido escrita a petición de la Sala por dos de sus alcaldes, Matheu y Elezárraga, a comienzos del siglo XVIII, y completada por alcaldes anónimos en el año 1745. Los autores del libro utilizaron para su elaboración fuentes diversas. Por un lado los expedientes que la propia Sala producía en su trabajo cotidiano y que, encuadrados por años desde 1.579, integraban los llamados Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes y por otro, los alcaldes comisionados utilizaron las disposiciones sobre la Sala contenidas en la Nueva Recopilación. También contaba la Sala con otro libro titulado Noticias de varios papeles existentes en el Archivo de la Sala de Alcaldes y otras curiosas del mismo tribunal(2). Su contenido era muy heterogéneo. Desde copias de algunas disposiciones regias hasta órdenes promulgadas en distintas épocas por la propia Sala para organizar su funcionamiento interno. En cualquier caso, Las noticias tenían considerables lagunas y no contenían las disposiciones originales.

No haber conservado la legislación que le afectaba fue una carencia que desagradó profundamente a la Sala de Alcaldes. En una época en donde la ley y la tradición justificaban la mayoría de las decisiones, como ocurrió en todos los siglos del Antiguo Régimen, la Sala no podía por menos que sentirse en desventaja frente a organismos que habían guardado celosamente en su archivo todas las disposiciones que les incumbían desde los últimos siglos medievales. Ese fue el caso además de una de las instituciones que mas enfrentamientos mantuvo con la institución de la Corte. Nos referimos al Ayuntamiento de Madrid.

En uno de los numerosos pleitos mantenidos entre la Sala de Alcaldes y la Corporación madrileña en el siglo XVIII, el Ayuntamiento recordaba a la Sala su temida "carencia". La Corporación sabía que la institución de la Corte no tenía ninguna recopilación de sus propias normas y que debía recurrir a los libros elaborados por ella misma, a obras de historiadores y juristas que hicieran alguna alusión a la Sala de Alcaldes o a normas promulgadas para otras instituciones que indirectamente le afectasen. Así el Ayuntamiento acusaba a la Sala de necesitar fuentes heterogéneas para contar su propia historia:

"Que suelen los poderosos y sabios dar en pocas palabras argumento de muchos libros, a manera de

Oraculos, que siempre ocasionaron difusas interpretaciones"(3).

En el mismo pleito mantenido con la Corporación la Sala de Alcaldes utilizaba en su defensa el libro de Elezárraga y Matheu titulado Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde. El libro, que como sabemos, estaba escrito por dos Alcaldes de Corte no les pareció nunca argumento serio a los enemigos de la Sala. No se podía comparar una obra escrita por miembros de la institución de la Corte -afirmaba el Ayuntamiento de la Villa- con unas ordenanzas confirmadas por el propio rey. A pesar de todo, los letrados que integraban la Sala de Alcaldes defendieron su libro lo mejor que supieron. Valga el ejemplo:

"Y todo lo referido se dice que no hay ley, auto, ni autoridad que lo afianze? -protestaba la Sala de Alcaldes- Si señor, porque no basta que todo lo recogiese y recopilase Elezarraga, y a ello se remitiese Matheu, poque siendo alcaldes no quiere el teniente que tengan autoridad; pero poco importa que el lo niegue si Su Magestad se la confiere... Juzga que semejantes libros son como los de cualquier mercader, que prueban en contra de el y no a su favor? pues bien debe saber que esto último tiene sus limitaciones, según la calidad del sujeto, y de los libros...Los

alcaldes antiguos y modernos no sientan en los libros lo que quieren sino lo que sucede"(4).

La "pérdida" por parte de la Sala de Alcaldes de las normas que le afectaron tuvo consecuencias más graves que su desventaja frente a instituciones que conservaron sus privilegios y Ordenanzas.

La Sala de Alcaldes desconocía en el siglo XVIII algunas normas importantes que sólo habían sido en una pequeña parte reproducidas en las Recopilaciones de Leyes. Probablemente además a la Sala de Alcaldes le hubiese gustado recuperar esas normas que ella creía no tener. Así la institución de la Corte no conocía que en el reinado de Carlos V había sido objeto de unas completísimas ordenanzas. En el año 1518 fueron promulgadas por la reina Doña Juana y Don Carlos su hijo las Ordenanzas de los Alcaldes de Casa y Corte. La falta de divulgación y el "olvido" de estas ordenanzas de la Sala nos obligan a detenernos en ellas.

Las Ordenanzas comenzaban explicando el motivo que llevaron a los reyes a promulgarlas:

"Sepades que a nos es fecha relación que asta aquí a auido e ay mucho desorden en la expedición de los pleytos e negocios así civiles como crimynales que penden ante los alcaldes de nuestra casa y corte a cuya causa las personas que proşiguen sus pleitos e causas

ante ellos o son demandados, son fatigados o se les hazen algunas bexaciones..."(5)

Los abusos de los oficiales de la Sala no sólo fueron en materia judicial sino que también cometieron muchas infracciones en materia de abastos. "...Y que en el poner de los precios de los mantenymientos y cosas que se vienen a vender en nuestra corte -continuaban las Ordenanzas- y en nuestras cosas que son a su cargo de hazer que no aya horden que conviene"(6). Estas razones llevaron a los reyes, tras escuchar el dictamen del Consejo de Castilla, a enumerar una serie de prohibiciones y castigos para alcaldes, escribanos y alguaciles de la Sala de Alcaldes. Seguían así las ordenanzas:

"mandamos que los alcaldes de nuestra casa y Corte ahora y de aquí en adelante no pongan sustitutos que libren ni reciban rebeldías ny hagan otros autos algunos por los dichos nuestros alcaldes, ni por alguno de ellos en sus presencias ni en sus ausencias salvo que ellos por si mysomos hagan sus abdiencias y esten en ellas dos horas enteramente y no menos so pena...de diez ducados de oro por cada vez para los pobres de la carzel..."(7).

Mucho más grave para los miembros de la Sala fue la obligación que los reyes impusieron de repetir el juramento que todos los oficiales públicos debían realizar antes de ocupar su oficio. La corona quería tener la seguridad de que todos conocían las nuevas disposiciones. "Hordenamos y mandamos que todos los dichos nuestros alcaldes e alguaziles de nuestra casa e corte y escribanos... -exigían las ordenanzas- vengan personalmente ante los de nuestro Consejo y so cargo del juramento que hicieron...prometan cada uno de ellos que en lo que es a su cargo y les toca y atañe guardarán todo lo que en esta carta y ordenanças de ella contenido..."(8).

Las ordenanzas de 1518 fueron confirmadas por Carlos I en el año 1.542. No sabemos cuando la Sala de Alcaldes perdió el rastro de estas disposiciones pero, desde luego, en el siglo XVIII tanto la Sala, como reputados juristas desconocían que la Sala de Alcaldes hubiera sido objeto de atención en el reinado de Carlos I.

La Sala de Alcaldes no sólo ignoraba la existencia de las Ordenanzas de 1.518. Muchas de las disposiciones promulgadas por los Austrias menores y algunas de las reformas que le afectaron realizadas por los primeros Borbones habían sido olvidados por la Sala a finales del siglo XVIII.

La inexistencia de un Archivo organizado en la sede de la Sala de Alcaldes unido a sus continuos enfrentamientos

con instituciones como el Ayuntamiento de Madrid que sí lo tenían, tuvo también aspectos positivos. La Sala de Alcaldes se pasó siglos rastreando en obras de historiadores y juristas datos que le posibilitaran reconstruir su pasado para poder enarbolar la bandera de ser una institución de gran antigüedad e importancia.

La Sala sabía y tenía razón que había sido creada como organismo colegiado por Juan II en las Cortes de Guadalajara en 1436 y que fue confirmada como institución de gobierno de la Corte por los Reyes Católicos en 1480(9). Pero también estaba segura, siempre apoyada en obras de eruditos, de tener claros antecedentes en importantes organismos medievales. Y de nuevo la institución de la Corte estaba en lo cierto.

Efectivamente durante la Edad Media existieron oficiales que desempeñaban las atribuciones que les fueron asignadas a la Sala de Alcaldes. Estos oficiales además estaban muy próximos al monarca. Juan II, en realidad, lo que hizo fue remodelar algo que ya existía. La Sala tuvo su origen en instituciones medievales.

Con todo, la mayoría de los juristas de los siglos XVII y XVIII como Jerónimo de la Quintana, Luis de Salazar y Castro, Pedro Escolano de Arrieta o Antonio Martínez de Salazar no fueron capaces de establecer cual era la institución de la que surgió la Sala de Alcaldes. Buscaron los precedentes de la Sala en todos los oficios de justicia

de la Corte. Luis de Salazar y Castro, cronista mayor de Castilla y de las Indias, en un escrito del año 1708, consideraba que los orígenes de la Sala eran:

"Los Alcaldes, que llamaban del rastro, para lo perteneciente a los Abastos de la Corte, causas, que en ella acaeciessen. Que se llamaban Alcaldes del Rey, Alcaldes de la Corte, y Alcaldes de las Alzadas, o Apelaciones"(10)

No existía para Luis de Salazar y Castro ninguna diferencia entre los oficios de justicia de la Corte, circunstancia que, desde luego, hubiera facilitado mucho las cosas a cualquier historiador contemporáneo.

A caballo entre los siglos XIX y XX, Desdevises du Duzert publicó su ingente obra sobre las instituciones españolas del Antiguo Régimen. En el apartado dedicado a la Sala de Alcaldes afirmaba que ésta fue creada por los Reyes Católicos en 1480; sin embargo no escribió nada sobre sus orígenes y precedentes(11).

Los escasos autores contemporáneos que se han preocupado por los orígenes de la Sala de Alcaldes han llegado a conclusiones enfrentadas. Janine Fayard en su obra Los miembros del Consejo de Castilla considera que los orígenes de la Sala estarían en los Alcaldes de Corte, creados en 1274 por Alfonso X para juzgar los "casos de

corte" o delitos de lesa majestad(12). Miguel Angel Pérez de la Canal cree que los precedentes de los Alcaldes de Casa y Corte fueron los Alcaldes de Rastro creados en 1351 para juzgar los pleitos originados en la Corte. Pérez de la Canal utiliza argumentos semánticos para razonar su decisión estableciendo una dicotomía a partir del significado de la palabra Corte:

" El lugar donde está el rey se designa como corte cuando se le considera en su relación con el reino, y como rastro cuando se le mira en su estricto aspecto geográfico. Por eso son distintos los alcaldes de corte encargados de conocer los pleitos de los reinos, de los alcaldes del rastro, encargados de conocer de los actos y delitos que se originaban en la corte"(13).

Estos últimos serían para Pérez de la Canal los precursores de los Alcaldes de Casa y Corte.

Para establecer los orígenes de la Sala creemos que además de utilizar las normas sobre los oficios de justicia de la Corte contenidas en el Fuero Real, las Partidas, las Leyes de Estilo y los distintos Cuadernos de las Cortes medievales castellanas, hay que examinar las atribuciones de la Sala de Alcaldes durante el Antiguo Régimen.

Los oficios de justicia de la Corte sufrieron una fuerte evolución durante los últimos siglos medievales. El

rey Alfonso X fue el primero en crear un tribunal para juzgar los delitos que correspondían a la justicia real separado de la curia regia. Fue el Tribunal de la Corte integrado por el monarca, el sobrejuez y varios alcaldes o jueces. Sus atribuciones, como señala Janine Fayard, fueron las de juzgar los "casos de corte" o los delitos más graves(14).

El tribunal de la Corte acompañaba al rey en sus desplazamientos así como la Cancillería cuya misión era la de autentificar las disposiciones reales y los dictámenes de los Alcaldes de Corte.

Al ampliarse las funciones del rey a lo largo del siglo XIV su burocracia creció, siendo difícil y costoso mantener una Corte itinerante. Juan I, probablemente intentando mejorar, pero sobre todo abaratar, el ejercicio de la justicia regia, decidió alejar a la Cancillería de su lado. En el año 1379 promulgó una norma estableciendo que la Cancillería, al margen de donde se encontrase el rey, debía asentarse cada año en tres lugares: Medina del Campo, Olmedo y Alcalá de Henares. Con la Cancillería permanecieron algunos de los miembros del tribunal de la Corte. A partir de entonces los Alcaldes que integraron esta nueva institución pasaron a denominarse Alcaldes de Corte y Chancillería. Sus funciones fueron las de controlar la actuación de las justicias ordinarias de los territorios de jurisdicción real y atender las apelaciones en

representación del rey de los juicios que no precisasen su presencia(15).

La Corte continuó siendo itinerante y con el rey seguían trasladándose un grupo de oficiales. Por un lado permanecieron junto al rey algunos Alcaldes de Corte, ya que no todos se fueron con la Cancillería, para juzgar los delitos más graves o "casos de Corte" que requerían la presencia real para su resolución. Por otro, los Alcaldes de Rastro, creados en 1351 para encargarse del gobierno y de la justicia del Rastro del rey, es decir del lugar donde residiese la Corte y cinco leguas a su alrededor.

A finales del siglo XIV estas dos figuras se habían fusionado. Los Alcaldes que acompañaron al monarca en sus desplazamientos recibían el nombre de Alcaldes de Corte y Rastro del Rey y compartían las funciones que tuvieron los Alcaldes de Corte y los Alcaldes de Rastro(16).

Si observamos las atribuciones de la Sala de Alcaldes y su relación con el rey a lo largo del Antiguo Régimen vemos restos de los dos organismos. La Sala tenía que ocuparse de la justicia, de los abastos y del orden público en los lugares donde residía la Corte; es decir, la Sala absorbió las funciones de los antiguos Alcaldes de Rastro. Pero la Sala defendía tener atribuciones que incumbían a todo el reino. Así los delitos de alta traición, apresamiento de naves enemigas, procedimientos contra espías, delitos que las Partidas definían como "Casos de corte", y que fueron

atribuciones del Tribunal de la Corte creado por Alfonso X, eran según la Sala de Alcaldes competencia suya. Pero no sólo los papeles de la Sala defendían esta atribución. También juristas del siglo XVIII que escribieron sobre las competencias de la Sala lo afirmaban. Martínez de Salazar en su obra Noticias del Consejo, defendía que correspondían a la Sala:

"...Las causas de la mayor gravedad, como es el procedimiento contra espías, apresamiento de naves enemigas, infidencias, alistamiento en tropas enemigas..."(17)

Es decir los denominados "casos de Corte". Sin embargo la legislación y la propia práctica de la Sala contradicen esta afirmación. Desde 1489 los Reyes Católicos establecieron que los "casos de Corte" se vieses en las Chancillerías aludiendo a la movilidad de la Corte:

"...Porque los de nuestro consejo que con nos andan, no estan así de reposo y han de atender a otras muchas cosas cumplideras a nuestro servicio..."(18).

Tampoco en los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes aparece ninguna señal de que la Sala tuviese semejantes atribuciones.

Pero no es necesario que la Sala hubiera mantenido las funciones del antiguo Tribunal de la Corte para afirmar que en esa institución junto con la de los Alcaldes de Rastro, está su origen. La Sala de Alcaldes tenía una jurisdicción para los asuntos criminales muy superior a la de otros tribunales del reino porque sus sentencias solamente podían ser apeladas ante la propia Sala. Sólo cuando la pena impuesta era la pena de muerte se revisaban éstas por una institución superior. El propio rey durante todo el Antiguo Régimen revisaba y, si lo consideraba oportuno, alteraba las penas máximas impuestas por la Sala. Hasta que el monarca no diese su placet estas penas no se podían ejecutar y desde el reinado de Carlos III tampoco se podían publicar(19).

La fuerza de la Sala como tribunal de primera instancia, así como su proximidad con el rey recuerda mucho su pasado de Tribunal de la Corte, en donde los Alcaldes juzgaban junto al Rey y al Sobrejuez los delitos más graves. Por supuesto que las sentencias del antiguo tribunal sólo podían apelarse ante el mismo órgano, y por supuesto también las sentencias de muerte podía alterarlas el rey. La Sala de Alcaldes tiene su origen en este tribunal, como defendía Janine Fayard, y de ahí la importancia de la Sala, que muchas veces sorprendía a otras instituciones, pero también tiene mucho que ver con los antiguos Alcaldes de Rastro, como señalaba Pérez de la Canal. Durante todo el Antiguo Régimen se encargó principalmente de aplicar la justicia y

gobernar el territorio que constituía el rastro del rey, es decir la Villa y Corte de Madrid y cinco leguas a su alrededor(20). Los precedentes de la Sala por lo tanto estarían en dos instituciones medievales: el Tribunal de la Corte y los Alcaldes de Rastro.

La Sala de Alcaldes, desde su creación como organismo colegiado en 1436 hasta el siglo XVIII, sufrió algunas modificaciones. El número de alcaldes que la integraban fue aumentando a lo largo del Antiguo Régimen.

Los Reyes Católicos mantuvieron en las Cortes de Toledo los cuatro alcaldes creados por Juan II. Carlos I, preocupado sobre todo por las instituciones más importantes de la monarquía, no introdujo cambio alguno que afectase al número de oficiales de la Sala.

Felipe II, el rey burócrata, reorganizó el sistema administrativo de la monarquía buscando una mayor agilidad y eficacia en su funcionamiento e introdujo reformas vitales para la Sala de Alcaldes. En primer lugar estableció la Corte en la Villa de Madrid de forma prácticamente definitiva, en 1561(21). Este cambio no podía dejar de influir sobre la institución que gobernaba e impartía justicia en la Corte y Rastro del rey. La Sala, acostumbrada a desplazarse con el rey mientras la Corte fue itinerante, no planteó problemas a los Ayuntamientos donde residía el rey y sus Consejos, simplemente reforzaba su actuación. Al instalarse la Corte en la Villa los conflictos entre la Sala

y la Corporación madrileña fueron constantes y precisaron continuas intervenciones del rey pero, sobre todo, del Consejo de Castilla, que cada vez supervisó más la actuación del tribunal de la Corte. En el año 1563 Felipe II decidió que las apelaciones de las sentencias criminales dictadas por el Ayuntamiento de la Villa fuesen tratadas por la Sala de Alcaldes. Probablemente esta carga sobre las competencias de la Sala fue lo que obligó a aumentar el número de sus oficiales(22).

La Sala de Alcaldes a partir de 1583 se compuso de seis alcaldes. Cuatro atendían las causas criminales de la Corte y las apelaciones del juzgado de la Villa. Los otros dos, las causas civiles(23). Las atribuciones de la Sala no se alteraron nunca más. Gobernaron e impartieron justicia en la Villa y Corte conjuntamente con el Ayuntamiento madrileño.

Durante el siglo XVII no se produjeron cambios sustanciales que afectasen a la composición y competencias de la Sala, pero se consolidó un proceso que se había iniciado con anterioridad, el de la aproximación de la Sala al Consejo de Castilla. En el siglo XVII la Sala era considerada como quinta Sala del Consejo a pesar de que esta situación nunca fue confirmada por las ordenanzas del Consejo.

La relación entre la Sala de Alcaldes y el Consejo de Castilla arranca desde la creación de la Sala como organismo colegiado por Juan II en 1436. Ya entonces se estableció

que las apelaciones de las sentencias civiles de la Sala de Alcaldes deberían ir al Consejo de Castilla y no a las Chancillerías(24). Una de las Salas de Justicia del Consejo, la Sala de Provincia, se ocupó sobre todo de revisar las apelaciones de las sentencias dictadas por los Alcaldes de la Sala. Al establecerse todos los tribunales que integraban la Corte en Madrid en 1561, la relación del Consejo y la Sala de Alcaldes fue mayor. Los conflictos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de la Villa por problemas de competencias surgieron pronto y fue el Consejo, quien a través de autos acordados, puso orden entre los dos organismos. Felipe III reconoció esta función del Consejo en 1608:

"8 Y otrosí todas las competencias y diferencias que tuvieren qualesquier tribunales destos reynos que residen en corte o fuera della, entre sí o con las justicias ordinarias, en que yo no tengo dada orden, o la diere en adelante sobre ello; consultandome primero lo que tocare a los tribunales"(25).

También en las ordenanzas de 1608 se confirmó la disposición, aparecida por primera vez en las ordenanzas de 1598, que exigía que la Sala de Alcaldes fuese presidida por uno de los dieciséis ministros que integraban el Consejo de Castilla(26). Desde entonces la historiografía se ha

referido a la Sala de Alcaldes como la quinta sala del Consejo. Durante el siglo XVII fue González Dávila quién en su obra Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España, definió a la Sala de Alcaldes como quinta sala del Consejo. De la misma forma se expresó Martínez de Salazar en su texto Noticias del Consejo, publicado en el siglo XVIII. A finales del XIX Desdevises du Duzert repetía que la Sala de Alcaldes era la quinta del Consejo, afirmación que, matizada, ha llegado hasta nuestros días(27).

En realidad las disposiciones sobre el Consejo de Castilla desmienten que la Sala fuese la quinta sala del consejo. Felipe II, al final de su reinado, dividió el consejo en cuatro salas, una de Gobierno y tres de Justicia, buscando una mayor eficacia en el despacho de los asuntos. La muerte de Felipe II acaecida en 1598 en plena crisis política impidió que sus reformas fuesen efectivas. Felipe III en 1608 impuso definitivamente la división del Consejo de Castilla en cuatro Salas. Carlos II en 1691 y Felipe V en 1701 confirmaron esta medida(28).

Tras el fracaso de los Decretos de Nueva Planta, Felipe V en 1715 vuelve a dividir el Consejo en cuatro salas: La Sala de Gobierno, la de Justicia, la de Provincia y la de Mil Quinientas. La Sala de Alcaldes seguía presidida por un ministro del Consejo pero no era legalmente la quinta de sus salas. Seguía sin serlo a finales del Antiguo Régimen. Pero

poco importaba lo que ocurría en leyes y ordenanzas para la Sala que apoyada por los textos escritos por juristas e historiadores se presentó a sí misma siempre como la quinta de las salas que integraban el Consejo de Castilla(29).

2.2. COMPOSICION DE LA SALA DE ALCALDES

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte estaba integrada en el siglo XVIII por distintos oficios. Por un lado los Alcaldes de Corte que eran letrados con una larga carrera a sus espaldas y cuyo número varió a lo largo del Antiguo Régimen. Formaban también parte de la Sala un fiscal, dos relatores, escribanos, un agente fiscal, abogados y un procurador de pobres así como alguaciles y porteros. Estaba presidida por un consejero de Castilla.

2.2.1. LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE

- CATEGORIAS DE ALCALDES

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte estaba formada por un grupo de Alcaldes "de número" que varió entre ocho y

dieciséis. Los Alcaldes de número eran oficiales que gozaban de todos los beneficios del cargo: sueldo completo, honores y sobre todo antigüedad. Los Alcaldes ascendían a un puesto superior teóricamente por orden, es decir los más antiguos optaban antes a las vacantes de instituciones de más categoría como eran los Consejos o las presidencias de Audiencias y Chancillerías.

Además de los Alcaldes de número existía también un grupo variable de Alcaldes sustitutos o "supernumerarios" que gozaban únicamente de la mitad del sueldo, honores y no tenían antigüedad. Los Alcaldes supernumerarios ocupaban las plazas que esporádicamente los Alcaldes de número dejaban vacantes por enfermedad o porque estuviesen realizando alguna comisión fuera de la Villa y Corte. Normalmente ascendían, en un plazo no superior a los dos años, a ocupar una plaza efectiva de Alcalde(30).

También había Alcaldes honorarios. Desdevises du Duzert y Janine Fayard han intentado establecer el significado de los honores para los Consejeros de Castilla. Desdevises du Duzert afirmaba que el cargo honorífico era una recompensa otorgada a los consejeros al jubilarse; Janine Fayard, por el contrario, afirma que es un título conseguido por los funcionarios antes de la entrada en el Consejo(31). No ocurrió lo mismo en el caso de los alcaldes honorarios. Los honores de Alcalde de Casa y Corte los concedía el monarca por razones distintas. Concedía honores de Alcaldes como

premio por alguna misión bien hecha. Por ejemplo, Felipe V concedió durante la Guerra de Sucesión honores de Alcalde de Casa y Corte a Lope de Bustamante y a Francisco de Milano, Consejeros de Santa Clara en Nápoles "teniendo en consideración los buenos y largos servicios, celo y fidelidad en el tiempo que nos enemigos invadieron el reino de Nápoles"(32).

Pero el rey también otorgaba honores a los oficiales que ocupaban distintos cargos. Los Tenientes de Corregidor de Madrid, desde el fracaso de los Decretos de Nueva Planta, gozaron siempre de los honores de Alcaldes. Una de las primeras veces que el monarca otorgó honores a un Teniente de Corregidor fue en 1715 y se los dió a los dos Tenientes Juan de Castillo y José de Zenzano. Las razones son fáciles de averiguar porque según los Decretos de Nueva Planta los Tenientes de Corregidor quedaban adscritos a la Sala como Tenientes de Alcalde. Tras el fracaso de las reformas los tenientes volvieron a ser oficios municipales y por lo tanto auxiliares del Corregidor de Madrid. El monarca quiso compensarlos aunque con enorme oposición por parte de la Cámara de Castilla. Los honores de Alcalde de Corte suponían vestir toga y jurar el cargo ante el Gobernador del Consejo de Castilla y según la Cámara los Tenientes de Corregidor no tenían dignidad suficiente ni para lo uno ni para lo otro. Felipe V frente a la protesta de la Cámara contestó que "V.M. resolverá lo que fuere más de su real agrado" y lo que

fue de su agrado fue confirmar los honores a los dos Tenientes. Felipe V instituyó esta práctica que permaneció hasta finales del Antiguo Régimen(33).

No sólo el cargo de Tenientes de Corregidor de la Villa de Madrid llevaba adscritos los honores de Alcaldes. También se concedieron honores y esta vez con sueldo de Alcaldes a determinados cargos del Consejo de Castilla. Los Relatores de la Cámara de Castilla gozaron, durante todo el siglo XVIII, de honores y sueldo de Alcaldes al terminar su cometido en el Consejo. Esta práctica primero se hizo por tradición pero a partir de 1762, con la concesión de honores al Relator Pedro Ximénez, se institucionalizó. Pedro Ximénez al hacer su solicitud al monarca aportó una lista de los Relatores que en el siglo XVIII habían obtenido honores, el monarca consultó a la Cámara, que estableció un dictamen positivo. A partir de entonces todos los Relatores tuvieron derecho a honores y sueldo de Alcaldes al jubilarse. También desde mediados del siglo XVIII gozaron de ese derecho los Agentes fiscales del Consejo y desde 1788 los Secretarios de la Presidencia de Castilla(34).

Todavía existió otro oficio que tenía adscritos los honores de Alcalde el de Asesor de los Reales Sitios de Aranjuez y el Escorial. Los siete asesores de los Reales Sitios del Escorial y Aranjuez elegidos durante el siglo XVIII gozaron de honores de Alcalde (cuadro 2.I):

Cap. 2 La Sala de Alcaldes de Casa y Corte

CUADRO 2.I (35). CAUSAS PARA LA CONCESION DE HONORES DE ALCALDE DE CASA Y CORTE DURANTE EL SIGLO XVIII:

OFICIOS QUE TIENEN ADSCRITOS	Nº ALCALDES HONORARIOS
HONORES DE ALCALDES DE CORTE	
-Tenientes Corregidor Madrid	13
-Oficiales del Consejo de Castilla	15
-Alcaldes de los Reales Sitios	7
PREMIOS POR COMISIONES	19

TOTAL	54

Los Alcaldes honorarios no tenían por qué ocupar una plaza efectiva en la Sala aunque tenían derecho a ella y muchos de ellos lo lograron. De los trece Tenientes de Corregidor de Madrid que recibieron honores de Alcaldes de Casa y Corte en el siglo XVIII sólo tres obtuvieron plaza en la Sala. Fueron Manuel Regueiro, Juan de Castillo, ascendido a Consejero de Hacienda en 1726 e Ignacio de Santa Clara que recibió honores de Alcalde en el año 1763, ocupó una plaza efectiva en la Sala en el año 1767 y ascendió a Consejero de

Castilla en 1775. Los honores concedidos a los Relatores, Agentes fiscales y Secretarios de la presidencia del Consejo de Castilla casi nunca terminaron con la concesión de una plaza efectiva de Alcalde de Casa y Corte. La razón es que normalmente eran concedidos al jubilarse los oficiales de sus plazas viniendo siempre acompañados del sueldo completo de Alcaldes. De los quince funcionarios del Consejo de Castilla que obtuvieron honores de Alcalde de Corte en el siglo XVIII, solamente gozaron de plaza de alcalde Pedro Giménez, que había recibido los honores en 1762 y que juró como Alcalde en 1766 y Miguel Munariz que los obtuvo en 1798 y ocupó una plaza de número el mismo año. Los asesores de los Reales Sitios tampoco ocuparon plaza efectiva en la Sala(36).

Otra cosa muy distinta ocurrió con los honores que el rey concedía como recompensa por algún mérito. Normalmente otorgó honores de Alcalde a letrados que habían realizado bien alguna misión y lo normal fue que si sus condiciones se lo permitían ocupasen una plaza en la Sala. Existió la costumbre de otorgar honores a los Auditores de los ejércitos después de una campaña militar y normalmente tras los honores vino el nombramiento efectivo. En total fueron siete los Auditores que recibieron honores y cuatro fueron posteriormente alcaldes. Así, Diego Gobeo, Auditor del ejército de Cataluña, fue nombrado en 1706 Alcalde Honorario y en el mismo año Alcalde ordinario por su buen

hacer en la campaña de Cataluña con el ejército leal a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. También se concedían honores de Alcaldes a ministros de instituciones de menor categoría que la Sala a los que se les había encargado alguna comisión. En total seis oidores de las distintas Audiencias y Chancillerías obtuvieron honores de Alcalde al encomendarle el Consejo alguna comisión y de ellos cuatro lograron plaza efectiva en la Sala (cuadro 2. II):

CUADRO 2. II (37). ALCALDES HONORARIOS QUE OCUPARON PLAZA DE NUMERO EN LA SALA DURANTE EL SIGLO XVIII

Procedencia:	Numero:Plaza Efectiva %		
Tenientes de Corregidor de Madrid	13	3	23,0
Funcionarios del Consejo de Castilla:			
Relatores de la Cámara	7	2	28,6
Agentes Fiscales	4	-	0
Secretarios de la Presidencia	4	-	0
Auditores del Ejército	7	4	57,1
Oidores de Audiencia o Chancillería	6	4	66,6
Asesores de los Reales Sitios	7	-	0
Otros	6	-	0
Total	54	14	25,9

- NOMBRAMIENTO Y SITUACION DE LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE DENTRO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

Los Alcaldes de Casa y Corte ocuparon dentro de la carrera administrativa un lugar intermedio entre los miembros de las Audiencias y Chancillerías y los ministros de los diversos Consejos del reino.

La legislación señaló en distintas épocas los requisitos que debían reunir los Alcaldes. Así en 1325 Alfonso X en las Cortes de Valladolid estableció que debían ser:

"...Buenos y de buena fama, y teman a Dios y al rey; y que les sean pagados sus salarios porque puedan hacer justicia sin codicia, como deben; y que no libren ni den cartas contra derecho, ni tomen ni reciban cosa alguna por los pleitos que hubieren de librar ni de las partes..."(38).

Los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo añadieron :

"...Que sean tales cuales cumplan a nuestro real servicio y a la execución de nuestra justicia; y que sirvan por sus personas los oficios..."(39)

Pero en realidad durante los siglos XVII y XVIII ocupar una plaza de Alcalde de Casa y Corte suponía un escalón más de la carrera administrativa de los funcionarios. Los Alcaldes ordinarios y supernumerarios, los honorarios ya hemos visto que tenían procedencias diversas, eran letrados que procedían en su mayor parte de las Chancillerías de Valladolid y de Granada o de las distintas Audiencias. Rara vez accedieron directamente a una plaza de Alcalde desde las universidades o desde algún corregimiento.

El oficio de Alcalde era, por lo tanto, un paso más en la carrera de los letrados. Los licenciados en derecho, después de unos años de experiencia universitaria, podían acceder a plazas de oidores o alcaldes de las Chancillerías y Audiencias. En ese momento comenzaba lo que los propios funcionarios denominaban "su carrera" en el Consejo. Los oidores, alcaldes y fiscales se denominaban así mismos como miembros del Consejo de su Magestad. Probablemente se debía a que Audiencias y Chancillerías eran instituciones controladas por el Consejo de Castilla. Sus miembros eran nombrados a propuesta de la Cámara de Castilla y ésta además disponía de ellos no sólo para la realización de sus funciones ordinarias en las Chancillerías y Audiencias, sino también para enviarlos a servir cualquier servicio a Su Magestad en cualquier lugar del reino. Así, por ejemplo, a Arias Campomanes siendo oidor de la Chancillería de Granada

se le ordenó por el Consejo pasar a Ecija : "a la pesquisa y averiguación de los capitulos que en el Consejo se pusieron contra el Corregidor"; posteriormente el Consejo le encomendó otra mision : "la de acopio de granos para las reales tropas" y por si esto fuera poco, el Consejo le ordenó después servir interinamente el corregimiento de Valencia(40).

Además la Cámara de Castilla controlaba anualmente la carrera administrativa de los oficiales de las Audiencias y Chancillerías a través del Informe Anual que los presidentes y gobernadores de estas instituciones tenían que remitirle. En el informe se señalaba:

"La edad, partes y calidades que cada uno tiene, de dónde son naturales, en qué universidades y colegios estudiaron se graduaron y ejercitaron, qué ocupaciones tuvieron antes de ser promovidos a esa chancillería y cuanto tiempo ha que sirven en ellas, y como han procedido en su vida y costumbres (41)"

Con toda esa información y utilizando además informes que a título individual enviaban los funcionarios y también las recomendaciones de familiares o protectores, la Cámara proponía que oficiales debían ser promovidos a puestos superiores. Lo normal es que de las Audiencias y Chancillerías pasasen a ocupar una plaza de Alcalde de Casa

Cap. 2 La Sala de Alcaldes de Casa y Corte

y Corte. Aunque algunos tenían la suerte de ser promovidos directamente desde las Chancillerías a los Consejos (cuadro 2. III):

CUADRO 2.III(42).PROCEDENCIA DE LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE
EN EL SIGLO XVIII

PROCEDENCIA	ALCALDES(1700-1800)	
	nº	%
Chancillerías	84	51,2
Audiencias	35	21,3
Juzgado de Obras y Bosques	6	3,6
Corregimientos	5	3,0
Colegios Mayores	3	1,8
Otros	9	5,5
Procedencia ignorada	22	13,4

Total Alcaldes Ordinarios	164	

El grupo mayoritario, por lo tanto, procedía de las Chancillerías de Valladolid y de Granada y dentro de estas la mayoría de los futuros alcaldes, un 83%, habían sido oidores, un 9,5% fiscales, un 5,9% alcaldes y sólo un juez

de Vizcaya fue promovido directamente a Alcalde de Corte(43).

Los Alcaldes que procedieron de las Audiencias también habían sido mayoritariamente oidores, un 80%, y el resto fiscales y alcaldes. Un Regente de la Audiencia de Valencia, Bruno Salcedo, ejerció durante la Guerra de Sucesión el cargo de Alcalde de Casa y Corte por haber caído la ciudad en manos del enemigo y encontrarse el en la Corte(44).

El nombramiento de los Alcaldes de Casa y Corte difería poco del nombramiento de los demás oficiales de la Administración central borbónica tan rigurosamente estudiados por Janine Fayard y Molas Ribalta en trabajos recientes(45).

Todos los años, como ya hemos señalado, los presidentes de las Audiencias y Chancillerías así como el obispo de Salamanca y el abad de Alcalá de Henares como responsables de sus respectivos Colegios Mayores, a solicitud de la Cámara de Castilla enviaban el informe anual en dónde relataban las calidades y la carrera seguida de todos los miembros que integraban sus instituciones. La Cámara también recibía memoriales de letrados que querían cambiar de institución y las recomendaciones. Toda esta información era enviada por la Cámara al monarca quién procedía al nombramiento de los sujetos que debían ocupar las vacantes de los distintos organismos(46).

En el caso de los Alcaldes de Casa y Corte el

procedimiento fue distinto para el nombramiento de las tres clases de Alcaldes: ordinarios, supernumerarios u honorarios.

Los Alcaldes de número o Alcaldes ordinarios eran elegidos normalmente a propuesta de la Cámara de Castilla. Cuando había una vacante en la Sala, la Cámara proponía tres nombres de letrados, que solían proceder de las Audiencias o Chancillerías, y el monarca elegía uno. Pero el rey, a veces, aún siguiendo el procedimiento ordinario, nombraba a algún sujeto que no estaba en la terna de la Cámara. También la corona eligió Alcaldes ordinarios por propia iniciativa sin intervención de la Cámara, fueron los Alcaldes elegidos por "Real Decreto" y normalmente eran oficiales que habían expuesto su deseo de promoción de forma personal por motivos muy distintos. Algunos fueron elegidos Alcaldes por méritos de sus familiares, como ocurrió con el nombramiento de Francisco de Gobeo en 1706, que pasó de ser colegial mayor del Colegio del Arzobispo de Salamanca a oficial de la Sala como premio por la labor que su padre, Juan de Gobeo, había desempeñado como secretario del Consejo de Italia, pero, sobre todo, por el sufrimiento familiar tras la muerte de su hermano Juan Miguel que murió al principio de la Guerra de Sucesión en el río Adda; o con Antonio Torres, oidor de la Chancillería de Valladolid, que ascendió a Alcalde de Casa y Corte en 1733 por su buen hacer pero sobre todo por: "los buenos servicios de vuestro difunto padre Juan Antonio

Torres de mi Consejo y Cámara"(47).

De todas formas la mayoría de los Alcaldes nombrados por Real Decreto lo consiguieron por méritos propios. El rey los nombraba Alcaldes en muchos casos para animarlos a realizar bien una nueva comisión. Así ocurrió con Juan Vazquez de Agueró nombrado Alcalde de Casa y Corte en 1732 siendo alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, para que viajase a Buenos Aires con la intención de "averiguar excesos y perjuicios que se han ocasionado a la Real Hacienda..."(48)y con José de Gálvez, nombrado Alcalde de número en 1764 para viajar a México con "encargos de mi real servicio y confianza..."(49), pero la mayoría de las veces eran nombrados Alcaldes por haber realizado bien alguna comisión anterior.

Los Alcaldes supernumerarios y honorarios siempre fueron nombrados por Real Decreto y a veces hasta con descontento de la Cámara de Castilla que o bien podía considerar que el individuo no reunía las calidades suficientes para ser Alcalde o que existían demasiados alcaldes supernumerarios esperando una plaza efectiva en la Sala.

En total de los 264 nombramientos de Alcaldes honorarios, supernumerarios y ordinarios, realizados entre 1700 y 1801 la mayoría, 162, se realizaron por el procedimiento ordinario, es decir a partir de la terna que la Cámara proponía al rey, y sólo 102, se realizaron por

Real Decreto(50).

Una vez nombrados por el monarca, a los Alcaldes se les expedía un título de nombramiento, en donde se señalaba el tiempo que el oficial debía permanecer en el cargo y se recogía el lugar que ocupaba el nuevo alcalde en la Sala, es decir, detrás de que alcalde se situaba y a quién precedía. Esto era vital porque las promociones a puestos en instituciones superiores teóricamente se realizaban por orden de antigüedad.

Los nuevos Alcaldes debían jurar su plaza en el Consejo de Castilla pero, antes de hacerlo, tenían una serie de compromisos que por costumbre, se realizaron durante todo el Antiguo Régimen y que describe de forma pormenorizada el Alcalde Elezárraga en su obra Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde ; primero, desde la Audiencia o Chancillería donde estuviese destinado, debía escribir a todos sus compañeros. Al llegar a la Corte visitaba al Alcalde más antiguo que era el encargado de explicarle el complicado ceremonial al que se tenía que someter y de nombrar a un oficial de la Sala para que le acompañase. Normalmente era el Alcalde más moderno el que debía atender al nuevo oficial y juntos tenían que visitar a media Corte: al Presidente y ministros del Consejo de Castilla y a todos los oficiales de la Sala de Alcaldes.

Terminada esta etapa del protocolo, el Alcalde debía esperar hasta que recibiese la licencia del Consejo fijando

el día y la hora para su juramento y el nombre de los alguaciles de la Sala que debían acompañarlo. El nuevo Alcalde, el día señalado para su juramento, debía celebrar una pequeña recepción en su casa invitando a chocolate a sus compañeros en el interior y a los Alguaciles en el exterior; Algo más que chocolate debía servirse en la fiesta porque Elezárraga advierte que "en esto no ha de haver ni se debe consentir ningún exceso".

Desde la Casa del oficial todos se dirigían al Consejo para que el nuevo Alcalde procediese a jurar su cargo. Más de una vez la Sala plena debió sufrir un plantón. Elezárraga, tan comedido como siempre, recomienda paciencia y comprensión para estos casos: "desaire que se debe escusar, y es mejor estar aguardando en una de las Salas todos juntos a que les llamen que no volver otro día desairados". Tras la espera, el nuevo Alcalde debía entregar su título al escribano de la Cámara y esperar a que lo avisasen. Después entraba, se le tomaba juramento y arrodillado recibía como símbolo de su nuevo cargo la vara de justicia, vara que previamente había comprado, de manos del Presidente del Consejo de Castilla. Hacía una reverencia: "muy grande al señor presidente y otra al Consejo al lado izquierdo del señor presidente y se sale"(51).

La ceremonia del juramento además de larga y pesada resultaba cara para los alcaldes. Hemos visto como tenían

que costear una fiesta y comprar la vara de Alcalde, pero también tenían que entregar numerosas propinas que estaban como todo en el Antiguo Régimen totalmente reguladas. Así a los lacayos de los Alcaldes tenía que darles un doblón, a los del gobernador de la Sala dos, a los cocheros dos y así continua la lista enumerando a casi todos los subalternos de la Sala, pero lo malo es que también tenía que dar propinas a muchos subalternos del Consejo y a distintas instituciones de la Corte, por ejemplo a los Guardias de Corps y a la Guardia española les debía entregar dos doblones. Además de las propinas en dinero, debía suministrar dos juegos de sábanas a la enfermería de los pobres de la Real Cárcel de la Corte. Estas propinas fueron disminuyendo a lo largo del siglo XVIII y así en el año 1744 un alcalde de la Sala señaló que ya no se pagaban tantas propinas(52).

Con el juramento no terminaban las gestiones ni los gastos que debía realizar el nuevo Alcalde. Este tenía que pagar todavía la media annata, es decir la cantidad que desde el reinado de Felipe IV debían entregar al tesoro los funcionarios antes de ejercer sus cargos. En el siglo XVIII esta cantidad era la mitad del salario que el Alcalde recibía en un año(53).

-SUELDOS Y REMUNERACIONES DE LOS ALCALDES

Los Alcaldes de Casa y Corte recibieron sueldos distintos según fuesen alcaldes de número, supernumerarios u honorarios. Los Alcaldes de número gozaron durante el siglo XVIII de un salario de 30.000 reales anuales hasta 1763 en donde pasaron a ganar 36.000 reales(44). Sueldo que era exactamente el doble de lo que ganaban los oidores y fiscales de las Audiencias (18.000 reales en 1763) y muy superior al de los oidores y fiscales de las Chancillerías que cobraban en la misma fecha 20.000 reales(54).

El sueldo era lógicamente inferior al de los Consejeros. En 1763 los Consejeros de Castilla ganaban 55.000 reales, mientras que los Consejeros de Hacienda y de Indias ganaban 44.000 reales. En 1773 se fijaron los sueldos de los ministros de los tres Consejos en la misma cantidad (55.000 reales)(55).

Los Alcaldes supernumerarios normalmente gozaron de medio sueldo hasta que ocuparan una plaza de número, es decir ganaron 16.000 reales hasta 1763 y a partir de entonces 18.000 aunque había excepciones. A veces el monarca en el título de nombramiento señalaba que el nuevo Alcalde no gozaría de sueldo hasta que ocupase la plaza de número, y otras por el contrario les asignaba sueldo completo.

Para los alcaldes honorarios no existió una norma estable. Ya hemos visto como había cargos que tenían adscritos los honores de Alcalde. Eran los Tenientes de Corregidor de Madrid, algunos oficios del Consejo de Castilla y los Asesores de los reales sitios de Aranjuez y el Escorial. De ellos solo cobraron sueldo de Alcaldes de Casa y Corte los funcionarios del Consejo de Castilla porque recibían los honores como jubilación. Los auditores del ejército o miembros de las Audiencias y Chancillerías que recibían honores como premio por alguna comisión encargada por el Consejo de Castilla, podían recibir medio sueldo de alcalde o sueldo completo y sólo de forma muy aislada recibieron honores sin sueldo(56).

Los sueldos de los Alcaldes se redondeaban con muchas propinas y regalos en especie. Durante el siglo XVII estas constituían una partida importante de la cantidad anual que los Alcaldes recibían, debido, sobre todo, a que el sueldo que recibían del estado era muy inferior al obtenido por los oficiales en el XVIII. Los Alcaldes de Casa y Corte cobraban como salario 16.000 reales. Las dietas y propinas se distribuían de la siguiente manera (cuadro 2.IV):

CUADRO 2.IV PROPINAS Y DIETAS EN METALICO RECIBIDAS POR LOS
ALCALDES DURANTE EL SIGLO XVI:

PROPINAS:

Fiesta de toros de S. Isidro.	1250 Reales
Fiesta de toros de S. Juan.	1250 Reales
Fiesta de toros de sta. Ana.	1250 Reales
Cera de la Candelaria (8 doblones de 2 escudos de oro)	
Dia del Corpus	
(Las concede la Villa de Madrid)	300 Reales

DIETAS:

Cera de Hachas y Rondas	1540 Reales
Casa de Aposento	3500 Reales
Por la Asistencia de las Visitas del Consejo	
(Cada sabado)	8 Reales
Por la Audiencia de lo Civil	
(6 Alcaldes mas antiguos)	30 ducados de maravedi
Por las Tasas de Casas	
(Los concede el Ayuntamiento)	40 ducados de maravedi

Además los alcaldes obtenían todos los años nada menos
que 24 bulas de cruzada y dos nobles.

Anualmente, también les regalaban productos distintos.

Recibían por la Pascua de Navidad diez libras de azúcar, dos cajas de turrón, dos pavos y cuatro capones. En la de Resurrección cuarenta libras de azúcar, dos perniles y dos pollas y por la Pascua del Espíritu Santo obtenían cuarenta libras de azúcar y lo que costaban los despieces(57).

No sabemos como fueron disminuyendo la cantidad de propinas y dietas pero creemos que fue un proceso inverso al del aumento de sueldo. Así en 1745 cuando los Alcaldes cobraban ya 30.000 reales anuales solo recibían como propinas las bulas de cruzada y una serie de productos, diversos: una resma de papel y cuatro libras de cera por navidad, otras cuatro libras de cera por San Juan y una parte pequeña del importe de las ventas de los calendarios o guías de forasteros de la Corte. Estas propinas permanecieron invariables hasta finales del Antiguo Régimen(58).

-FUNCIONES DE LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE.

El oficio de Alcalde de Casa y Corte no fue un oficio popular entre los funcionarios del Antiguo Régimen. Los miembros de las Audiencias y Chancillerías soñaban con ser promovidos directamente a Consejeros evitando así pasar unos años como Alcaldes. Las razones para esta mala fama de la

Sala era la cantidad pero sobre todo la diversidad de funciones que tenían que desempeñar los Alcaldes.

Uno de los oficiales más conocidos de la Sala, Melchor Gaspar de Jovellanos, que fue Alcalde desde 1778 hasta 1780 sintió hacia su labor la misma aversión que muchos de sus compañeros. Meléndez Valdés, poeta y gran amigo de Jovellanos, en una de sus epístolas ponía en boca de su amigo una descripción de las labores cotidianas de un Alcalde de Corte:

Este mi nuevo empleo es un abismo
Y sus obligaciones contempladas
son tantas que no caben en un guarismo.
tener todas las horas ocupadas,
Ora en el tribunal, ora en el juicio,
Y rondar en las noches más heladas;
Negarme a la piedad en perjuicio
De la santa justicia...;duro encargo
Pesada sujeción, gravoso oficio!

Y no sin sorna continuaba Melendez Valdés :

...Más no me negarás cuanta alegría
Un corazon resiente virtuoso
Por tener así lleno todo el día
Del mismo trabajar sale gozoso

cuando el que en ocio vive, o más bien muere
llega hacerse así mismo fastidioso(59).

En las cartas de aceptación del nombramiento que los nuevos alcaldes remitían a la Cámara, estos se solían mostrar correctos pero en muchos casos aludían a problemas de salud, edad avanzada o dificultades familiares para pedir una moratoria en sus puestos de oidores de las Audiencias y Chancillerías y lograr así el salto directo a los Consejos. Otros simplemente tardaban en presentarse a su nuevo cargo. Esa fue la estrategia seguida por Juan José de Mutilosa que fue nombrado Alcalde en 1719 y quién un año después no había comparecido a tomar posesión. El rey tuvo que promulgar un nuevo decreto en el que afirmaba que "teniendo presente la dilatada ausencia de Juan José de Mutilosa alcalde de la Chancillería de Granada y electo de mi casa y Corte, he resuelto haced merced de esta plaza de Alcalde a Don Clemente Usel que lo es de la misma chancillería"(60)

Pero a todos los funcionarios no les desagradó tanto el puesto de alcalde, algunos consideraban que era un paso seguro para acceder a los Consejos, y en muchos casos al Consejo de Castilla que era el más codiciado de todos. También había funcionarios que pedían expresamente el nombramiento de Alcaldes; ahora bien solían estar destinados en lugares que les desagradaban profundamente y sabían que la Sala estaba poco solicitada. Así, por ejemplo, Felipe

Quijada Obejero destinado en la Audiencia de La Coruña, al enterarse del fallecimiento del Alcalde Raimundo Irabién y por lo tanto de la existencia de una vacante en la Sala, escribió al conde de Floridablanca pidiéndole una recomendación para ocupar la vacante de la Sala. Su carta decía lo siguiente: "Suplico se sirva mover el corazón del Rey para que se digne sacarme de aquí (sic); no tanto en atención a mis servicios que exceden de 25 años, como por la circunstancia de haber permanecido en este país más de seis años"(61).

Las funciones de los Alcaldes eran en realidad muchas y algunas de ellas francamente pesadas, sobre todo, teniendo presente la edad de los alcaldes. Todos los días, a excepción de las fiestas, se reunían a las siete de la mañana en la sede de la Sala de Alcaldes que era además cárcel de Corte. La Sala estaba situada desde 1638, como en otro lugar señalamos, en un edificio que constituye una de las pocas muestras de arte barroco que han sobrevivido en Madrid. Es el Palacio de Santa Cruz, sede actual del Ministerio de Asuntos Exteriores(62).

Una vez reunidos los alcaldes en una de las dependencias de la cárcel, su primera misión era la de elaborar el Pliego Diario que debían remitir al gobernador o presidente del Consejo antes de las nueve de la mañana. Llamar pliego a tal cantidad de papeles es un anacronismo. En realidad bajo ese nombre se escondía un grueso informe

que la Sala debía elaborar diariamente y en donde de forma detallada se describía la situación durante el día anterior en la Corte. En primer lugar el Pliego Diario contenía un resumen de la cantidad de productos alimenticios básicos y sus precios en los principales puntos de venta de la Corte. También incluía un resumen del estado de los enfermos ingresados en los hospitales reales de Madrid que en el siglo XVIII eran dos: el General y el de la Pasión. Terminaba el informe con lo acontecido en las rondas que los Alcaldes y alguaciles hacían de día y de noche por toda la Villa y Corte. A partir del reinado de Carlos III y por deseo expreso del monarca, al Pliego se le añadió un resumen de las causas que se seguían en el juzgado de Corte y también en el de la Villa(63). Terminado el Pliego, éste se remitía al gobernador del Consejo quién a su vez se lo hacía llegar al monarca todos los días.

A las nueve de la mañana los alcaldes se dirigían a oír misa. Posteriormente se constituían en Sala. Presididos por el gobernador, que desde 1632 fue un ministro del Consejo de Castilla, y con asistencia de casi todos los alcaldes y oficiales de la institución, iniciaban las vistas y la determinación de las causas criminales. Las Audiencias criminales duraban hasta las doce del mediodía hora en que los Alcaldes se dirigían a sus casas.

Las obligaciones de los alcaldes no cesaban con la elaboración del pliego diario y la vista de las causas

criminales. Los cinco alcaldes más antiguos debían hacer audiencia los martes, jueves y sábados durante dos horas por la tarde para resolver las causas civiles. Cada uno de los cinco alcaldes se reunía junto a dos escribanos en una sala distinta, salas que estaban situadas en el segundo patio de la cárcel.

Todos los Alcaldes, excepto el decano o alcalde más antiguo, tenían otras funciones que cumplir. La Villa de Madrid estaba dividida durante todo el Antiguo Régimen en cuarteles, unas veces fueron seis, otras once y otras nueve, pero siempre tuvieron un Alcalde de Casa y Corte para velar por la tranquilidad de su cuartel. Estos alcaldes eran los alcaldes cuarteros y solían ser los más modernos de la sala. Los Alcaldes tenían que llevar un registro de su cuartel en donde señalaban los sitios que podían ser fuente de conflicto, como tabernas, lugares de juegos y demás garitos. También tenían que controlar a todos los forasteros que viviesen en las pensiones de su cuartel. Debían rondar de día siempre a caballo según la ley, y en coche por lo menos durante el siglo XVIII según distintos testimonios(64).

Todas las semanas por riguroso turno un alcalde era alcalde semanero, es decir velaba por el buen abastecimiento de la corte. Nombraba ayudantes entre los oficales de la Sala y juntos o en turnos recorrían los mercados revisando pesos y medidas, fijando precios y

velando por el buen estado de los alimentos. Diariamente el semanero informaba a la Sala del estado de los abastos de la Corte.

También los alcaldes se turnaban para rondar de noche por la Villa de Madrid. Esta era la obligación más impopular entre los alcaldes y trataron por todos los medios de desprenderse de ella a lo largo del Antiguo Régimen. No lo lograron pero a partir del reinado de Carlos III consiguieron que los Alcaldes sólo rondasen durante el primer turno que iba desde la puesta de sol hasta las doce de la noche, mientras que el segundo turno (desde las doce hasta el amanecer) lo realizaban los alguaciles. Todas las noches se hacían en total seis rondas y en ellas además de velar por la tranquilidad de las calles, los alcaldes y alguaciles debían visitar tabernas, garitos de juego y por supuesto los prostíbulos. Teniendo presente el rigor del clima madrileño y el peligro de semejante trabajo podemos entender que a nuestros letrados, acostumbrados a actuar de jueces en las Audiencias y Chancillerías, nos les resultase agradable este incremento de actividad callejera que el oficio de Alcalde de Casa y Corte acarreaba.

En determinadas ocasiones la Sala entera acompañaba a los tres alcaldes de turno en sus rondas. Eran las vísperas de las tres ferias de toros que se celebraban en Madrid, así como los carnavales, las noches de San Juan y San Pedro y otras fiestas en donde los alborotos debían ser frecuentes.

Pero todavía les quedaban funciones que cumplir a los alcaldes. También por turno todas las semanas dos alcaldes estaban de capilla. Es decir, tenían que acompañar diariamente al rey en sus funciones religiosas. Normalmente los mismos alcaldes que les tocaba capilla visitaban las cárceles, tanto la de la Corte como la de la Villa para cerciorarse del estado de los presos.

También los miembros de la Sala tenían que acompañar a los miembros del Consejo de Castilla a la consulta que todos los viernes realizaban con el rey en palacio.

Esta enumeración de obligaciones eran las ordinarias de los alcaldes pero había muchas más. Los alcaldes se encargaban del buen orden de las mayoría de las diversiones de la corte. Los corrales de comedias, las plazas de toros, algunas procesiones religiosas, los autos sacramentales, tenían que ser vigilados por los alcaldes y los oficiales de la Sala.

Los alcaldes, como el resto de los funcionarios del Consejo de Castilla, podían ser enviados en distintas comisiones fuera de la villa y corte. La mayoría de las veces se trataba de investigar el comportamiento de los oficiales de justicia de los Corregimientos, Audiencias y Chancillerías, es decir el Consejo los nombraba como jueces visitantes o como pesquisidores. Rara vez se les encomendaron comisiones de distinta índole(65).

-PROMOCION DE LOS ALCALDES A INSTITUCIONES DE MAYOR CATEGORIA

La mayoría de los alcaldes consideraron su paso por la Sala como un medio para lograr un cargo de categoría superior como eran el de ministros y fiscales de los Consejos o el de presidentes de las Chancillerías. Pero no todos lograron sus objetivos. Una proporción alta de alcaldes (18,29%) fallecieron ejerciendo sus cargos y en muchos casos con muchos años de servicio en sus plazas. Es el caso por ejemplo de Manuel de Cervantes que accedió al plaza de alcalde desde el juzgado de Obras y Bosques en 1703 y que falleció en 1725 como alcalde. Fueron pues veintidós años los que ocupó plaza don Manuel. La razón es que la Cámara no los consideraba aptos para acceder a puestos superiores.

Los Alcaldes que lograron su promoción lo hicieron siempre a los Consejos o a la presidencia de las Chancillerías. Durante el siglo XVIII el destino de los alcaldes fue el siguiente (cuadro 2.V):

CUADRO 2.V(66). DESTINO DE LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE.

Destino de los Alcaldes	nº	%
Consejo de Castilla	40	24,4
Consejo de Ordenes	34	20,7
Consejo de Hacienda	27	16,5
Presidencia de Chancilleria	12	7,2
Consejo de Indias	11	6,0
Consejo de Guerra	6	3,7
Consejo de Cruzada	2	1,2
Fallecidos como alcaldes	30	18,0
Destino ignorado	2	1,2
Total	164	

El Consejo de Castilla fue la institución a la que más alcaldes fueron promovidos y además era el organismo más codiciado por los letrados del siglo XVIII. Un ministro del Consejo de Castilla gozaba de más prestigio pero sobre todo de un sueldo superior a los ministros de los otros Consejos. Ahora bien no todos los alcaldes que ingresaron en el Consejo de Castilla lo hicieron directamente como consejeros muchos de ellos fueron antes fiscales. De los cuarenta alcaldes promovidos al Consejo de Castilla ocho lo hicieron

como fiscales. Lo mismo ocurrió con los alcaldes que fueron promovidos a los otros Consejos(67).

De los doce alcaldes nombrados presidentes de las chancillerías, cinco lo fueron de la de Valladolid y seis de la de Granada. Los presidentes de la Chancillería gozaron de un sueldo equiparable al de los ministros del Consejo de Castilla (55.000) reales y por lo tanto durante la mayor parte del siglo XVIII superior al sueldo de los demás consejeros(68).

Los Alcaldes de Casa y Corte ocuparon dentro de la carrera administrativa de los letrados del siglo XVIII un lugar intermedio entre los oidores de las Audiencias y Chancillerías y los ministros de los Consejos sobre todo del de Castilla. En muchos casos evitaba el paso por otros Consejos considerados de menor categoría y aseguraba la llegada al cargo más deseado del letrado del XVIII, el de Consejero de Castilla.

2.2.2. EL FISCAL DE LA SALA DE ALCALDES

Además de los alcaldes integraba la Sala un fiscal que debía cumplir las funciones de "procurador fiscal y promotor

de mi real servicio en la dicha cárcel real y audiencia de los Alcaldes de mi Casa y Corte"(69).

Los fiscales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte tuvieron la misma carrera administrativa que los alcaldes. Conocemos quienes ejercieron la fiscalía de la Sala de Alcaldes desde 1747 hasta 1797. En total fueron doce los fiscales y todos provenían de las distintas Audiencias y Chancillerías donde habían sido indistintamente oidores, fiscales o alcaldes del crimen(70).

A diferencia de lo que ocurría con los fiscales del Consejo de Castilla, que tras unos años en el cargo su forma normal de ascenso fue el nombramiento de ministro del Consejo(71), los fiscales de la Sala de Alcaldes ascendieron, casi siempre, a ministros de los Consejos sin ser alcaldes de Casa y Corte. De los doce fiscales que tuvo la Sala en la segunda mitad del siglo XVIII, solo uno, Francisco Fernández Mendevil fue ascendido a Alcalde de Casa y Corte. Nueve ascendieron al cargo de ministros de los distintos Consejos, y dos, Joseph Uvago y Francisco Zamora fallecieron en el puesto de fiscales de la Sala de Alcaldes(72).

El sueldo de fiscal de la Casa de Alcaldes era similar al sueldo de Alcalde de Casa y Corte. Los fiscales de la Sala cobraron 30.000 reales antes de las reformas de 1763 y 36.000 reales después(73).

El rango de los fiscales y de los alcaldes era, por lo

tanto, el mismo. La misma procedencia, igual salario y las mismas posibilidades de ascenso a los distintos Consejos pero las funciones fueron muy distintas.

Las atribuciones del fiscal de la Sala de Alcaldes fueron enumeradas en varias disposiciones reales. Ya en 1436, Juan II establecía la necesidad de que existiese un fiscal en la Corte por su importante cometido:

"Porque los delitos no queden ni finquen sin pena ni castigo por defecto de acusador; y porque el oficio de nuestro Procurador fiscal es de gran confianza, y quando bien se exercita se siguen de el grandes provechos, así en la execución de nuestra justicia como en pro de nuestra Hacienda..."

La misma disposición fue ratificada por los Reyes Católicos en 1489(74). El fiscal de la Sala aparecía, por lo tanto, desde el siglo XV como el defensor de los intereses del rey y de la sociedad. Constituía, como señalaba Janine Fayard en su análisis sobre los fiscales del Consejo de Castilla, el ministerio público(75).

De todas formas el fiscal de la Sala de Alcaldes no cumplió bien con su cometido hasta el reinado de Felipe II. Existieron muchas quejas de los reyes sobre las dificultades que los alcaldes imponían al fiscal para que este defendiese

los intereses del Estado. Sirva como ejemplo la queja de Carlos I recogida en una de sus disposiciones:

"Porque paresce, que a causa que nuestros Alcaldes no facen notificar a nuestro Procurador Fiscal las causas en que ha de asistir, se disimulan muchas cosas, porque no hay parte; mandamos, que de aquí en adelante los nuestros alcaldes lo fagan notificar y notifiquen al nuestro Procurador Fiscal; y que el dicho nuestro Procurador Fiscal tenga grande cuidado de saber y asistir a las tales causas"(76).

El fiscal de la Sala de Alcaldes tenía que asistir a los juicios civiles y criminales para velar por el buen cumplimiento de las leyes y sobre todo por la justicia de las penas impuestas, pero quedaba eximido de muchas otras funciones que tenían los alcaldes. El fiscal no tenía que velar por la tranquilidad de la Corte como tenían que hacer los alcaldes. No tenía, por lo tanto, ninguno de los cuarteles en que se dividía Madrid a su cargo. Tampoco participaba en los turnos para ser alcalde semanero. No tenía que asistir a los repesos ni visitar las tiendas de comestibles. Se libraba también de acompañar al rey en las funciones religiosas.

Es decir, el fiscal de la Sala, estaba eximido de las funciones más onerosas según los propios alcaldes de Casa y

Corte. Teniendo en cuenta que los fiscales gozaron del mismo salario que los alcaldes y de las mismas posibilidades de ascenso, suponemos que el puesto de fiscal debía ser el más codiciado de la Sala.

2.2.3. EL GOBERNADOR DE LA SALA DE ALCALDES.

La Sala de Alcaldes siempre estuvo presidida por un gobernador. Desde su creación como organismo colegiado en 1436 y hasta 1598 el gobernador de la Sala era el alcalde más antiguo. Pero desde finales del siglo XVI, el gobernador de la Sala fue un ministro del Consejo de Castilla porque era el Consejo, como en otro lugar señalamos, el que debía velar en última instancia por el buen gobierno de la Corte de la monarquía hispánica.

La responsabilidad del Consejo sobre el gobierno de la Villa se fue perfilando desde el establecimiento del rey y las instituciones que le acompañaban de forma definitiva en Madrid. A mediados del siglo XVII era un hecho que el Consejo supervisaba y era el responsable del buen gobierno de la Villa y Corte. Así en 1655 Felipe IV recriminó al Consejo por la situación de mal gobierno e intranquilidad por la que atravesaba Madrid:

"He entendido que en mi corte se vive licenciosamente y con escandalo público, que se cometen muchos excesos, y que esta semana en una noche sola han sucedido cinco muertes, que son continuos los robos que se hacen en diversas partes con desestimación de la justicia...(y por todo ello) encargo y mando al Consejo vele continuamente en punto tan necesario, y de su primera obligación..."(77).

El Consejo de Castilla debía vigilar la actuación de las instituciones que gobernaban y administraban justicia en Madrid. En el caso de la Sala de Alcaldes, las Ordenanzas del Consejo establecieron desde 1598 que la Sala ya no estaría presidida por el alcalde más antiguo sino por uno de los dieciséis ministros del Consejo de Castilla.

Esta medida, sin embargo, no se pudo aplicar de forma inmediata porque los consejeros de Castilla consideraban que presidir una institución de rango inferior al Consejo, suponía un descenso en su carrera administrativa. En la Real Cédula de nombramiento de Antonio Chumacero y Sotomayor, primer consejero que ocupó la presidencia de la Sala de Alcaldes, fue necesario precisar que el ministro que presidiese la sala gozaría de todas las preeminencias que había adquirido como consejero de Castilla. Pero el nombramiento de Chumacero fue en 1632, es decir, 34 años después de que las Ordenanzas del Consejo recogiesen por

primera vez que uno de sus dieciséis ministros debía presidir la Sala de Alcaldes. Ahora bien desde 1632 y hasta el final del Antiguo Régimen la presidencia de la Sala siempre estuvo ocupada por un ministro del Consejo de Castilla(78).

Los presidentes de la Sala de Alcaldes eran propuestos por el Presidente o Gobernador del Consejo de Castilla al rey quién normalmente se limitaba a hacer efectivo el nombramiento. La elección se realizaba durante la navidad todos los años, pero esto no implicaba que la permanencia en el cargo fuese de un año porque el antiguo Gobernador podía ser reelegido. Es más, de los 34 consejeros que ocuparon la presidencia de la Sala durante el siglo XVIII fueron reelegidos 23. La estancia media de los gobernadores de la Sala de alcaldes en el cargo fue de dos años y nueve meses(79).

Algunos ministros del Consejo ocuparon el cargo de Gobernador de la Sala más de una vez. Es el caso de Pedro Larreátegui que fue gobernador de la Sala desde enero del año 1704 hasta enero de 1706 en que abandonó el cargo y fue elegido como su sucesor Lorenzo Villamayo y tras un paréntesis de un año volvió a ocupar el cargo el propio Larreátegui; o el de Francisco del Rollo que era Gobernador de la Sala en 1746 al producirse las reformas de Fernando VI. Al ser nombrado como Gobernador Político y Militar de Madrid el Conde de Maceda y ocupar por lo tanto la

Gobernación de la Sala de Alcaldes, del Rollo abandonó el cargo, aunque tras el fracaso del Gobierno Político y Militar de Madrid, a finales de 1746, fue elegido de nuevo Gobernador de la Sala de Alcaldes(80).

El cargo de Gobernador de la Sala no era el más deseado por los Consejeros de Castilla. La razón, igual que ocurría con el oficio de alcalde, era la cantidad y diversidad de los cometidos que el Gobernador de la Sala tenía que asumir. En primer lugar, el Gobernador de la Sala, debía organizar el funcionamiento de la misma, por ello, todos los años, iniciaba su mandato con un discurso en donde recordaba a los alcaldes cuales eran sus obligaciones. Desde finales del siglo XVIII, en el discurso inaugural, el Gobernador no enumeraba las obligaciones de los alcaldes sino que literalmente les remitía a las recopilaciones de leyes. Sirva como ejemplo el discurso pronunciado por Domingo Fernández de Campomanes en donde el Consejero recomienda a los alcaldes:

"...tener entre otras cosas a la vista el Título 21 del lib. 3 de la Novísima recopilación, en cuyas leyes advierte el Alcalde de Corte lo que es de su obligación..."(81).

En el discurso inaugural, el Gobernador hacía también un breve resumen de las actividades de la Sala en el año recién

terminado.

Tras el discurso, el gobernador, distribuía las actividades de la Sala entre los alcaldes. Elegía a los alcaldes que iban a encargarse de las audiencias civiles, repartía los cuarteles en los que estaba dividida Madrid entre los alcaldes mas modernos, establecía el turno para ser alcalde semanero y en definitiva distribuía todas las actividades de la Sala entre sus funcionarios.

Además debía confirmar los nombramientos de todo el personal de la Sala. Escribanos, relatores, porteros y alguaciles, debían reiterar su juramento de fidelidad a la Sala.

Una vez organizada la actividad anual de la Sala de Alcaldes el Gobernador comenzaba con sus actividades cotidianas. Debía presidir la reunión diaria de la Sala para elaborar el pliego diario, así como las audiencias criminales. No participaba en los juicios civiles ni tampoco en las rondas de cuarteles pero tenía que representar a la Sala en todos los actos en los que esta tenía que participar que eran muchos. Procesiones, actos religiosos, corridas de toros, representaciones teatrales contaban, casi siempre, con la presencia del Gobernador de la Sala(82).

Los ministros del Consejo nombrados como gobernadores de la Sala aceptaban el cargo sin excusas probablemente porque la permanencia en el puesto era corta. Las quejas comenzaban cuando el rey reelegía varias veces al mismo

consejero como presidente de la Sala de Alcaldes. Ese fue el caso de Raimundo Irabién, que fue reelegido durante siete veces consecutivas y a la octava argumentó lo siguiente al presidente del Consejo de Castilla:

"...como hace siete años que estoy sirviendo con Real aprobación el gobierno de las Salas de corte...y aunque he cumplido este encargo y pesada comisión por tanto tiempo que no creo que haya exemplar...y en atención a todo y a que en los demás ministros del consejo hay varios con disposición de desempeñar este cargo con toda satisfacción pido a vuestra Ilustrísima se sirva proponer a S. M. para el gobierno de la Sala en el año próximo a otro ministro del Consejo que sea de su agrado.." (83).

La solicitud de Irabién fue atendida y dos meses después de expresar su deseo fue nombrado Jerónimo Velarde y Sola como Gobernador de la Sala. Irabién tenía razón porque nadie había permanecido tanto tiempo como él en la presidencia de la institución de la Corte, aunque, posteriormente, un Consejero fue Gobernador de la Sala durante más de siete mandatos. Juan Matías Azcárate ocupó el cargo de Gobernador desde 1792 hasta 1804, nada menos que 12 años (84).

Los gobernadores de la Sala de Alcaldes, como ministros

del consejo que eran, gozaron de los mismos honores y sueldo que el resto de los consejeros. Durante la primera mitad del siglo XVIII el sueldo fue de 44.000 reales y a partir de las reformas de 1763, fue de 55.000 reales. Esta cantidad permaneció invariable hasta finales del Antiguo Régimen(85).

2.2.4. EL PERSONAL DE LA SALA DE ALCALDES

Completaba la Sala de Alcaldes un conjunto de oficiales que auxiliaban al Gobernador, Alcaldes y Fiscal en sus numerosas tareas.

El servicio de escribanos lo ejercían cuatro escribanos de lo criminal de la Cámara de Castilla y diez escribanos de Provincia de Madrid. El rey les había autorizado a tener en cada una de sus catorce escribanías a seis escribanos reales, como auxiliares, que recibieron el nombre de escribanos oficiales de la Sala.

Los escribanos titulares de las escribanías debían recibir las quejas de los litigantes y controlar la autenticidad de todos los documentos. Tenían que entregar todas las quejas recibidas en sus escribanías a la Sala de Alcaldes. Si la Sala las aceptaba, escapaban de las manos de los escribanos y las recibían los relatores. Una vez celebrados los juicios, los escribanos se encargaban de

redactar las sentencias(86).

Los escribanos oficiales de la Sala debían auxiliar a los alcaldes en todas sus tareas. Acompañaban a los alcaldes cuarteleros en sus rondas diurnas y los sustituían en las nocturnas, acompañaban al alcalde semanero a sus repesos y visitas de tiendas de comestibles, visitaban los hospitales y hacían relación de los nuevos ingresos para comunicarlos a la Sala y que ésta lo incluyera en el pliego diario. Es decir, ayudaban a los alcaldes en sus cometidos. El sueldo de los escribanos oficiales de la Sala era de 3.300 reales(87).

La Sala tenía tres relatores que nombraba el rey. Los relatores debían elaborar los informes de las causas aceptadas por la Sala y exponerlos a los alcaldes. Su sueldo era de 15.000 reales anuales.

Estaban también adscritos a la Sala de Alcaldes seis abogados nombrados por el Colegio de Abogados de Madrid para defender a los presos pobres.

Además componían la Sala de Alcaldes un número variable de porteros de vara y alguaciles. Los porteros de vara eran los encargados del orden público durante la celebración de las audiencias. También debían realizar encargos especiales que le encomendasen los alcaldes o el gobernador. Los alguaciles tenían que acompañar a los alcaldes en todas sus rondas por la ciudad y por los repesos, así como rondar ellos solos para mantener el orden público. Su sueldo era

similar al de los escribanos oficiales de la Sala con los que compartían muchas de sus funciones. Cobraban 3.300 reales(88).

El comportamiento de los subalternos de la Sala no siempre fue tan bueno como cabría desear. Muchas veces fueron reñidos por los alcaldes. En el libro titulado Advertencias para el ejercicio de la Plaza de Alcalde, un capítulo, el capítulo 44 se titula: "Alguaciles y Escribanos como se han de tratar y reprender". Entre otras cosas señala que "cuando cometen faltas (los alguaciles y escribanos) el alcalde más antiguo los llama a su casa para reñirles"(89). Pero el mal comportamiento de los subalternos de la Sala no sólo fue castigado con reprimendas; a veces se tuvieron que tomar medidas especiales para garantizar que la corrupción no se extendiera. Así en 1655 un auto del Consejo de Castilla afirmaba que :

"habiendo tenido noticia de los excesos y desordenes que los alguaciles y escribanos cometen en los repesos, rondas y visitas habiendolo consultado con su magestad mandaron que en los cinco puestos de repeso...asistan junto a los escribanos y alguaciles el alcalde semanero para imponer multas y vigilar su comportamiento"(90).

Otras veces fueron los propios escribanos y alguaciles los protagonistas de desórdenes y como tales fueron

detenidos. Así en un registro efectuado en casa de Josefa Prats, por el alcalde de Casa y Corte Antonio de Pinedo, a petición de la Sala al tener noticias de que allí "concurrían muchos hombres y mugeres de estragadas costumbres y que con ocasión de los bailes y festejos se cometían muchas ofensas de Dios", el Alcalde Pinedo encontró a mucha gente en el cuarto de estar y "a hombres y mugeres sin luz en la alcoba". En la sala se hallaban -entre otros muchos individuos- Andrés de Arce que era alguacil de Corte y un tal de Navas que ejercía como escribano oficial de la Sala. Tanto el escribano como el alguacil fueron conducidos junto a cinco hombres más y diez mujeres a la Cárcel de Corte para vergüenza de toda la Sala y escándalo de la Villa y Corte(91).

2.2.5. EL ALCALDE DE OBRAS Y BOSQUES.

El Alcalde de Obras y Bosques fue durante todo el Antiguo Régimen el encargado de ejercer la justicia en los Reales Sitios. Estos -como señalan las Ordenanzas de los Bosques Reales- "son sitios exemptos de otra cualquier jurisdicción, y que inmediatamente estan sugetos al rey, y en nombre suyo a este especial magistrado que creó para ellos"(92).

El Alcalde de Obras y Bosques estaba vinculado a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte por varios motivos.

Por un lado, los individuos que ejercieron el oficio siempre defendían que el nombramiento de Alcalde de Obras y Bosques tenía aparejado el ser Alcalde de Casa y Corte. En la "Recopilación de Ordenanzas y Cédulas de los Bosques Reales del Pardo, Aranjuez, Escorial, Balsaín y otros", realizadas sucesivamente por dos alcaldes de Obras y Bosques durante el reinado de Carlos II, aparece una reproducción de los títulos de nombramiento de los alcaldes de Obras y Bosques. En ellos, desde luego, se resalta la estrecha relación existente entre los dos oficios. Así todos los títulos reproducían la misma cláusula:

"Y porque es anexo a este oficio el título de Alcalde de nuestra Casa y Corte, y Rastro, con el salario que como a tal le pertenece, es nuestra merced, que por aora, y de aquí en adelante, y por el tiempo que fuere nuestra voluntad, seáis también Alcalde de nuestra Casa, y Corte, y Rastro, juntamente con el dicho oficio de juez de Obras y Bosques, con tal, que no os ocupeís en negocios civiles, y criminales tocante al dicho oficio de Alcalde, sino solamente en las cosas pertenecientes al Juez de Obras y Bosques"(93).

Sabemos que efectivamente los Alcaldes de Obras y Bosques juraban como Alcaldes de Casa y Corte en la Sala de Alcaldes al ser nombrados como jueces de los Sitios Reales. Así, por ejemplo, Manuel de Cervantes juró su cargo de Alcalde de Casa y Corte al ser nombrado como Alcalde de Obras y Bosques en 1687. Sin embargo la Sala de Alcaldes no los consideraba como Alcaldes de Casa y Corte. La razón era clara. La alcaldía de Obras y Bosques ocupaba un escalón inferior a la Sala de Alcaldes dentro de la organización institucional del Antiguo Régimen. Aunque algunos alcaldes de Obras y Bosques ascendieron directamente a los Consejos lo normal fue que de Alcaldes de Obras y Bosques pasaran a ejercer una plaza de número de Alcalde de Casa y Corte. Volviendo al caso de Manuel de Cervantes podemos observar que ascendió a alcalde de número de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en 1703, después de haber ejercido durante dieciséis años como Alcalde de Obras y Bosques. Y aunque Manuel de Cervantes exigía una antigüedad en la Sala de Alcaldes desde el año 1687 en que inició su ejercicio como alcalde de Obras y Bosques sus compañeros de la Sala simple y llanamente se la negaron(94). Para ellos no era lo mismo ser Alcalde de Obras y Bosques que Alcalde de Casa y Corte.

Durante el siglo XVII algunos de los alcaldes de Obras y Bosques sí lograron su promoción a los Consejos sin pasar por la Sala pero en el siglo XVIII todos los Alcaldes de Obras y Bosques ascendieron a Alcalde de Casa y Corte.

Veamos el cuadro adjunto:

CUADRO 2.VI(95). DESTINO DE LOS SUCESIVOS ALCALDES DE OBRAS
Y BOSQUES DESDE 1612 HASTA 1749.

Nombre del Alcalde de Obras y Bosques	Institución
Juan de Aguilera	Sala de Alcaldes
Manuel de Cárdenas	Consejo de Hacienda
Francisco de Quiñones	Sala de Alcaldes
Andrés de Torres Pacheco	Consejo de Hacienda
Pedro de Cervantes	Fallece
Juan de Castro y Cárdenas	Sala de Alcaldes
Julián Ortega	?
Manuel Antonio de Cerbantes	Sala de Alcaldes
Alonso Uría de Llano	Sala de Alcaldes
Francisco Portell	Sala de Alcaldes
José Valero	Sala de Alcaldes
Jacinto Jover	Sala de Alcaldes

Si los alcaldes de Obras y Bosques ascendían tras unos años en el juzgado de los Reales Sitios a Alcalde de Casa y Corte era comprensible que los alcaldes de Corte se considerasen a si mismos como oficiales de más categoría. En

las Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde de Casa y Corte, Elezárraga y Matheu dedicaron el capítulo 47 al Alcalde de Obras y Bosques y desde luego señalaron un protocolo para el mismo que coincidía con el de los oficiales de inferior categoría que los alcaldes. "Hay en esta Corte un alcalde de Obras y Bosques -afirmaban Elezárraga y Matheu- que algunas veces acude el alcalde para informar... entra con gorra y se le da asiento después del alcalde más nuevo"(96). Pero la Sala de Alcaldes todavía marcaba más distancia con el alcalde de Obras y Bosques en cuestiones de protocolo. "Y visto el negocio informa (el alcalde de Obras y Bosques) y acabando se sale, y para entrar embia un recado, más no se le acompaña a la entrada ni a la salida -concluyen las Adverencias(97).

No sólo estaba vinculada la Sala con el Juzgado de Obras y Bosques porque sus alcaldes ascendieran a un puesto de número en la Sala de Alcaldes y desde allí continuasen su carrera administrativa. La Sala de Alcaldes recibía las apelaciones de las sentencias de los Sitios Reales juzgadas por el Alcalde de Obras y Bosques o por otros jueces capacitados para ello (98). En el libro de Elezárraga y Matheu se recordaba esa atribución de la Sala de Alcaldes: "El alcalde de obras y bosques esta subordinado a la Sala porque de el se apela a ella"(99).

El Alcalde de Obras y Bosques tenía jurisdicción civil y criminal en los Reales Sitios pero era una jurisdicción

compartida con otros jueces en algunas de las propiedades reales. Era juez único para el monte del Pardo pero tenía jurisdicción "acumulativa" con el Gobernador del Real Sitio de Aranjuez para los pleitos surgidos en ese territorio, con el Corregidor de Segovia para todo lo concerniente al Real Sitio de Balsaín y con el Alcalde Mayor del Escorial para los pleitos que se diesen en San Lorenzo(100).

De la misma forma que la Sala de Alcaldes tenía jurisdicción sobre el Rastro de la Corte, es decir sobre las cinco leguas que rodeaban a Madrid, el Alcalde de Obras y Bosques tenía jurisdicción sobre las cinco leguas que rodeaban a los Reales Sitios, aunque, eso sí, sólo para algunas materias. Para todos los asuntos relacionados con la caza y con la pesca la jurisdicción del alcalde de Obras y Bosques iba más allá de los límites de las propiedades reales. Esta jurisdicción de nuevo fue compartida o "acumulativa". Esta vez con las justicias ordinarias de las villas y lugares comprendidas dentro de esas cinco leguas(101). Como era lógico existiendo jurisdicciones "acumulativas" entre el alcalde de Obras y Bosques y otras justicias ordinarias, existieron muchos conflictos entre ellos. Así en el año 1718 la justicia ordinaria del término de Gózquez, jurisdicción de San Martín de la Vega, elevó una protesta al Consejo por:

"haverse introducido el alcalde de Obras de Bosques a conocer en razon de una muerte sucedida en el termino de Gorquez...(y pide) se le guarde la executoria que tiene del año 624 confirmada por Real Cédula en tres de agosto de 714 por donde toca a la justicia ordinaria de ella el conocimiento de las causas civiles, y criminales que se ofreciesen en sus terminos, excepto las de caza y pesca que estan reservadas al expresado alcalde de Obras y Bosques"(102).

El Consejo, para resolver el enfrentamiento, propuso a Felipe V la formación de una junta integrada por dos ministros del Consejo de Castilla, por dos Asesores del Bureo y por un Consejero de Ordenes y otro de Hacienda. La junta estaría presidida por el Gobernador del Consejo de Castilla y se reuniría en su casa. La Junta después de examinar todos los expedientes relativos al caso consideró: "que V.M. deve declarar la competencia a favor del Alcalde de Obras y Bosques por tocarle su conocimiento"(103).

Las apelaciones de las sentencias del Alcalde de Obras y Bosques iban, como ya hemos señalado, a la Sala de Alcaldes. Normalmente era el escribano del juzgado de Obras y Bosques el que llevaba personalmente los papeles del juicio visto en primera instancia en su juzgado a la Sala de Alcaldes. A veces, sin embargo, era precisa la presencia del juez, el Alcalde de Obras y Bosques "para informar de algún

negocio del que se ha apelado" (104).

Las competencias del alcalde de Obras y Bosques no sólo fueron judiciales sino que, haciendo gala de su nombre, debía encargarse también de todo lo referido a las obras de los Reales Sitios. Así las Ordenanzas y Cédulas de los Reales Bosques recogían que:

"Estale al dicho alcalde encargado el mandar proveer para las obras reales del Alcazar de Madrid, Casas reales del Pardo, del Campo y las demas de su distrito, y contorno, en que se comprehenden las mas modernas de la Zarzuela, y del Palacio Real del Buen Retiro, todos los materiales oficiales, gente, vagages, y otras cosas que le fueren pedidas por los oficiales reales, para que las obras de dichas casas esten bien proveídas y el hazer los Registros y mantenimientos necessarios, y el apremiar a que se den, y vendan dichos materiales ...y que vayan a trabajar los oficiales y los peones..."(105).

El Alcalde de Obras y Bosques estaba, por lo tanto, vinculado a la Sala de Alcaldes, aunque no era en realidad un alcalde de Casa y Corte.

Al ser nombrado alcalde de Obras y Bosques, juraba su cargo en la Sala de Alcaldes y además en la Cédula de nombramiento se recogía que era Alcalde de Casa y Corte pero

hasta que no abandonaba el juzgado de obras y Bosques y era promovido a Alcalde de Casa y Corte no ejercía como tal. Su contacto con la institución de la Corte era continuo porque era la Sala la que recibía las apelaciones de sus sentencias.

NOTAS DEL CAPITULO 2

(1) Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde de Casa y Corte según está en un libro antiguo de la Sala que es el que cita el señor Matheu por anotaciones del señor Elezárraga con las notas marginales con que se halla hasta el presente año de 1745, era el libro que utilizaban los Alcaldes de Casa y Corte para conocer las competencias y el funcionamiento de la Sala. Es una obra magnífica para el estudio de la institución pero hace escasas referencias a las disposiciones reales. Consta de 70 capítulos y tiene al final un índice alfabético. Comienza con lo que los alcaldes deben hacer diariamente y señala también sus obligaciones extraordinarias. Así tiene capítulos dedicados a las procesiones, a maitines, a los días públicos, a las muertes de reyes, a las fiestas, a las comedias. También explica el ceremonial de la Sala para los juramentos de los nuevos alcaldes. El interés del libro no sólo radica en que nos permita conocer el funcionamiento de la institución sino que contiene una información muy valiosa sobre la vida cotidiana del Madrid del siglo XVIII. La obra fue utilizada por Desdevises de Duzert para la elaboración de su artículo "La Chambre des Juges de l' Hotel et de la Cour en 1745" en Revue Hispanique, XXXVI, Paris, 1916, pp. 1-52. El manuscrito inédito en el A.H.N. Consejos, libro 1420 e.

(2) Las Noticias de varios papeles existentes en el Archivo de la Sala de Alcaldes y otras curiosas del mismo tribunal, es una obra que recoge dónde se localizan algunas de las reales disposiciones referentes a la Sala de Alcaldes dentro del propio archivo de la Sala o en la Nueva Recopilación. La

Sala de Alcaldes, como señalamos en el texto, encuadernaba sus expedientes en los Libros de Gobierno que enumeraba por años. Así, por ejemplo, comienza la obra recordando que todo lo relativo a rondas y cuarteles de los alcaldes esta en el Libro de Gobierno de la Sala del año 1669, nº 9. o en la ley. 20, tit. 6. libro 2 de la Recopilación. También tiene alguna información diversa sobre distintos asuntos como pueden ser "los gastos que tienen los señores alcaldes para entrar a servir sus plazas" o la "consulta hecha por la Sala el año de 1674 sobre visitas de cárceles de los sábados". De todas formas es una información muy heterogénea y claramente insuficiente. A.H.N. Consejos, Libro 1422 e.

(3) A.H.N., Consejos, libro 1478, fol. 232.

(4) A.H.N. Consejos, libro 1478, folios 241 y 242.

(5) "Ordenanzas para los Alcaldes de Corte hechas por la reina D^a Juana y el emperador Don Carlos su hijo", A.G.S. Diversos de Castilla, leg. 1, núm. 60. El interés de estas ordenanzas nos han movido a incluirlas como apéndice documental del presente trabajo. Véase, por lo tanto, el apéndice I.

(6) Eran muchas las faltas cometidas por los Alcaldes de Corte, alguaciles y escribanos de la Sala que enumeran las ordenanzas de 1.518. Véase apéndice I.

(7) "Ordenanzas para los alcaldes de corte...". Véase apéndice I.

(8) A.G.S. Diversos de Castilla, leg.1, num. 60. Véase apéndice I.

(9) Nov. Rec. Libro IV, Tit. XXVIII. Ley I. "Número y calidad de los Alcaldes de Corte; y su conocimiento en las causas civiles, con las apelaciones al Consejo".

(10) A.H.N. Consejos, Libro 1478, fol. 233.

(11) Georges Desdevises du Duzert, L' Espagne de l'Ancien Régime, t. 2. Les institutions. Para el presente trabajo hemos utilizado, sin embargo , una edición española. Nos referimos a la realizada por la Fundación Universitaria Española en 1989, con una interesante introducción de Agustín Gonzalez Enciso bajo el título de La España del Antiguo Régimen. La Sala de Alcaldes en las pp. 314-316.

(12) "La Sala de alcaldes de Casa y Corte apareció a finales del siglo XV como consejo organizado, tal como iba a permanecer durante todo el Antiguo Régimen, pero la existencia de los Alcaldes de Corte, que son el origen de la misma se remonta a la ordenanza de Alfonso X de 1274". Janine Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla, Madrid, 1982, pág. 23.

(13) Miguel Angel Pérez de la Canal, "La Justicia en la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV" en Historia, Instituciones, Documentos, nº 2, 1974. pág. 419.

(14) Janine Fayard, Los miembros del Consejo ... pág.23.

(15) Ordenamiento de Bribiesca, Ley 30, año 1387. Citado por D. Marcelo Martínez Alcubilla, en la parte dedicada al Ordenamiento de Alcalá de sus Códigos Antiguos de España, Madrid, 1885, Vol. I, pág. 687.

(16) Nov. Rec. Libro IV. Título XXVIII. "De los Alcaldes, Jueces de Provincia de la Corte".

(17) Martínez de Salazar, Colección de Memorias y Noticias del Gobierno General y Político del Consejo, Madrid, 1764, capítulo XXXII.

(18) Nov. Rec. Libro V, Título I, Ley IX. "Conocimiento de las Chancillerías de todos los pleytos sobre casos de Corte".

(19) "Real Resolución del 30 de enero de 1778 mandando que no se publiquen las sentencias de muerte hasta dar cuenta a S.M. y esperar su respuesta" A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(20) Sobre las competencias que tuvo la Sala de Alcaldes el mejor resumen es el manuscrito de los alcaldes Elezárraga y Matheu citado con anterioridad titulado Noticias de la Sala... A.H.N. Consejos, libro 1.420 e.

(21) La Corte se trasladó a Valladolid en 1601 durante el reinado de Felipe III a propuesta del duque de Lerma. En 1606, tras una larga pugna entre Valladolid y Madrid, el rey decidió que la Corte regresase a Madrid. La primera parte del capítulo 4 del presente trabajo se centra en las razones para estos traslados sucesivos de la Corte.

(22) Nov. Rec. Libro IV, Título XXVII. "De las dos Salas de Corte y sus Alcaldes"

(23) Nov. Rec. Libro IV, Título XXVII, Ley II. "Asignación de quatro Alcaldes de Corte para el conocimiento de las causas criminales; y modo de proceder en ellas."

(24) Nov. Rec. Libro IV, Título XXVIII, Ley I. "Número y calidad de los Alcaldes de Corte; y su conocimiento de las causas civiles, con las apelaciones al Consejo".

(25) Nov. Rec. Libro IV, Título V, Ley VI. "Conocimiento de los negocios respectivos al Consejo, con distincion de Salas de Gobierno y de Justicia; y modo de proceder a su vista y determinación".

(26) Salustiano de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986. Pág. XLV.

(27) Georges Desdevises du Duzert, "La Chambre des Juges de L'Hotel..." Es uno de los pocos escritos sobre la Sala de Alcaldes y en el Desdevises definió a la Sala como la quinta del Consejo.

(28) Nov. Recop. Libro IV, Título V. "De los negocios pertenecientes al conocimiento del Consejo"

(29) Existen muchos escritos en donde la Sala afirmaba que era la quinta Sala del Consejo de Castilla o por lo menos que formaba parte del mismo. Asi por ejemplo en el pleito mantenido con el ayuntamiento a finales del siglo XVIII la sala afirma: "Si esto vió y leyo el Theniente, para que se puso a hacer en su dictamen una baja pintura de la sala?...Porque le niega la Suprema , que tiene en las materias criminales como Quinta Sala del Consejo..." A.H.N. Consejos, libro 1478, fol. 233,

(30) La información sobre la carrera administrativa de los alcaldes de Casa y Corte procede fundamentalmente de los Libros de Plazas que en realidad son un resumen de las actas de nombramiento de los "miembros del Consejo de S.M." es decir de los letrados que integraban las audiencias y chancillerías, la Sala de alcaldes y los Consejos. Los relativos a los alcaldes y fiscales de la Sala durante el siglo XVIII en A.H.N. Consejos, libros 738, 739, 740 e. A esta serie hay que añadir los legajos 13.643, 13.644 y

13.645 de la sección de Consejos que contienen mucha información sobre los nombramientos de Alcaldes de Casa y Corte. También son interesantes las relaciones de méritos que son en realidad historiales profesionales de los letrados que querían hacer carrera en "los consejos", sección de Consejos, legajos 13.383- 13.386.

(31) Janine Fayard, Los miembros..., pp 96-98.

(32) A.H.N. Consejos, leg. 13.643.

(33) La verdad es que la carrera de José de Zenzano y de Juan de Castillo era muy similar a la de los Alcaldes de Casa y Corte. Así, por ejemplo, José de Zenzano había sido fiscal de la audiencia de Galicia para ascender a oidor de la de Valencia y llegar después a teniente de Corregidor de Madrid. Era, eso sí, mucho mayor que los alcaldes de Corte porque había ocupado durante treinta años corregimeintos de letras de la "primera graudación". Y esa era la principal diferencia. Los alcaldes de Casa y Corte llegaban directamente a las audiencias y chancillerías desde las Universidades. A.H.N. Consejos, leg. 13.643.

(34) A.H.N. Consejos leg. 13.644.

(35) El cuadro 2-I se ha elaborado organizando los datos contenidos en los legajos 13.643, 13.644 de la sección de consejos del A.H.N. que contienen los nombramientos de alcaldes de Casa y Corte del siglo XVIII.

(36) A.H.N. Consejos, leg. 13.644.

(37). También el cuadro 2-II ha sido elaborado con la información de los legajos 13.643 y 13.644 de la sección de Consejos del A.H.N.

(38) Nov. Recop. Libro IV, Título XXVII, Ley VII. "Calidades y juramentos de los Alcaldes de la corte para el uso de sus oficios"

(39) Nov. Recop. Libro IV, Título XXVIII, Ley I. "Número y calidad de los Alcaldes de Corte; y su conocimiento en las causas civiles, con las apelaciones al Consejo".

(40) A.H.N. Consejos, Libro 736 e.

(41) A.H.N. Consejos, Libro 738.

(42) Como los cuadros anteriores, el cuadro 3-III también ha sido elaborado con la información sobre el nombramiento de Alcaldes de Casa y Corte contenida en los legajos 13.643 y 13.644 de la sección de Consejos del A.H.N.

(43) A.H.N. Consejos, leg. 13.643 y 13.644.

(44) La carta que Bruno Salcedo escribió al rey Felipe V en plena Guerra de Sucesion es un indicador de las dificultades de los oficiales fieles al rey Borbón en territorio hostil. El interés de la carta nos lleva a reproducirla una parte. "Don Bruno Salcedo y Vives, cavallero de la Orden de Montesa, del Consejo de S.M. en la Real Audiencia de Valencia dice: que a los reales pies de S.M. a representado repetidas veces sus empleos y servicios...Haver abandonado su casa y hacienda, y dejado en Valencia su muger y de sus ocho hijos que tiene los siete, que el mayor que era capaz de tomar las armas desde que se ha tomado Valencia sirvió y actualmente sirve de voluntario en el regimiento del Marqués de Pozoblanco. Que inmediatamente salieron fugitivos su hermano y hijos varones los cuales buscaron al suplicante y desde entonces se mantienen en su compañía de limosna, y en esta corte meses ha solicitado su consuelo en la real

benignidad de S.M. dejando en un conbento aunque expuestas a la tiranía enemiga a su muger y tres hijas de quien sabe pasan extremos ahogos sin tener que ponerse a la boca por haverlas quitado sus bienes y saqueado su casa ..." después de seguir enumerando desgracias Don Bruno le pidió al rey una plaza en el Consejo de Hacienda, el rey decidió, por Decreto, nombrarle Alcalde de Casa y Corte: "Don Bruno Salcedo y Vives a quien tenía elgido por regente de la Audiencia de Valencia ...le he hecho merced de la plaza de Alcalde de Corte. Tengase entendido en la Cámara...A.H.N. Consejos, leg. 13.643.

(45) Pedro Molas Ribalta en su artículo "La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII apunte sociológico" publicado en la obra colectiva Historia social de la administración española, Barcelona, 1980, hace un profundo estudio sobre los miembros de la chancillería de Valladolid. Janine Fayard en la obra Los miembros ..., dedica un apartado del capítulo tercero a las modalidades del nombramiento de los consejeros de Castilla.

(46) Janine Fayard, Los miembros del Consejo... pp.85-93.

(47) El expediente de Francisco de Gobeo en A.H.N. Consejos, leg. 13.643. El de Antonio Torres en A.H.N. Consejos, Libro 736 e.

(48) A.H.N. Consejos, Libro 736 e.

(49) A.H.N. Consejos leg. 13.644. José de Gálvez hizo una brillante carrera. La comisión que tenía que desarrollar en México fue la de Visitador General de los Tribunales y real hacienda de Nueva España. Tras su experiencia americana regresó como consejero de Indias en 1772, después de desempeñar con brillantez varias comisiones fue nombrado

Ministro de Indias en 1776. José Antonio Escudero Los orígenes del Consejo de ministros en España, Madrid, 1979. pp. 350-351. Escudero a su vez recuerda que existe abundante bibliografía sobre Gálvez. Destacan la obra de M^a Angeles Rubio-Arguelles, Un ministro de Carlos III. D. José de Gálvez y Gallardo, Marqués de la Sonora, Ministro General de Indias, Visitador de Nueva España, 1949; Larry Brigs, A pilgrimage to the home of Joseph de Gálvez, The father of California, Oakland, 1949. Un clásico sobre la vida y obra del alcalde de Casa y Corte y después ministro de Indias es la obra de Herbert I. Priestley, José de Gálvez, : Visitor General of New Spain, 1765-1771, Berkeley, 1.916.

(50) A.H.N. Consejos, Legajos 13.643 y 13.644.

(51) Elezárraga y Matheu, Advertencias para el ejercicio... A.H.N. Consejos, Libro 1420.

(52) "Memoria de los gastos que tienen los señores alcaldes para entrar a servir sus plazas", Noticias de varios papeles... A.H.N. Consejos, Libro 1422 e

(53) Janine Fayard, Los miembros... pág. 99.

(54) "Memoria de los gages y emolumentos que gozan los señores alcaldes por sus plazas", Noticias de varios papeles..., A.H.N. Consejos, libro 1422 e.

(55) Molas Ribalta, "La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII apunte sociológico" en Historia social..., pág. 93 y Janine Fayard, Los miembros... pág. 102.

(56) A.H.N. Consejos, Legajos 13.643 y 13.644.

(57) El cuadro 2-IV ha sido elaborado con información procedente del apartado titulado "Memoria de los gages y emolumentos que gozan los Señores alcaldes por sus plazas" de la Noticias de varios papeles..., A.H.N. Consejos, libro 1422 e.

(58) Noticias de varios papeles... A.H.N. Consejos, Libro 1422 e.

(59) El poema de Meléndez Valdés sobre su "pobre" amigo el Alcalde de Casa y Corte Jovellanos lo podría haber escrito unos años después sobre si mismo. Meléndez Valdés, como Jovellanos, desarrolló una carrera administrativa similar a la de la mayoría de los miembros de los Consejos. Así fue alcalde del crimen de Zaragoza (1789-1791), oidor de la Chancillería de Valladolid (1791-1798), llegando a fiscal de la Sala de Alcaldes en 1798. Un fragmento del poema de Meléndez Valdés lo cita Javier Varela en su obra Jovellanos, Madrid, 1.988, pág. 45, el resto procede de Poetas Líricos del siglo XVIII en B.A.E. nº 63 , Madrid 1871, pág. 214. Sobre la figura de Meléndez Valdés y sobre su amistad con Jovellanos veáse la obra de Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Madrid, 1971.

(60) A.H.N. Consejos, leg. 13.643.

(61) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 822.

(62) La Cárcel de Corte estuvo transitoriamente en la calle Salvador hasta que se construyó el actual Palacio de Santa Cruz. La primera piedra del edificio se puso en el año 1629. Martínez de Salazar nos cuenta el tesoro que se enterró junto a la primera piedra de la futura sede de la Sala de Alcaldes: "en el hondo de los cimientos que esta próximo al

colegio de Santo Tomás de esta Villa, en la calle de Atocha y en la piedra se metió una caja de plomo...con un doblón de oro de a dos, un escudo sencillo también de oro; un real de a ocho y otro de a quatro, otro de a dos, y dos reales sencillos; medio real, todos de plata, un quarto, un ochavo y un maravedí labrado todo en la casa de la moneda de la ciudad de Segovia; y en la misma caja se incluyó un pergamino...", Colección de memorias ..., capítulos XXXII-XLIX.

(63) Muchos de los Pliegos Diarios elaborados por la Sala durante el siglo XVIII en A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 808.

(64) Nov. Rec. Libro III, Título XX "De las rondas y visitas de la corte por los alcaldes y sus ministros" contiene disposiciones obligando a rondar a los alcaldes a caballo pero la propia Sala reconoce en la obra de Matheu y Elezárraga, Advertencias para el ejercicio.. que esta disposición no se cumplía. A.H.N. Consejos, libro 1.420 e.

(65) Capítulo 43 "Comisiones de Gobierno a que sale un Alcalde", Elezárraga y Matheu, Advertencias para el ejercicio... A.H.N. Consejos, libro 1.420 e.

(66) El cuadro 2-V ha sido elaborado con información procedente de los expedientes sobre los nombramientos de los Alcaldes de Casa y Corte del siglo XVIII. A.H.N. Consejos, legajos 13.643 y 13.644.

(67) A.H.N. Consejos, legajos 13.643 y 13.644.

(68) Molas Ribalta, "La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico" en Historia social... pág. 94.

(69) En las Reales Cédulas de nombramiento de los fiscales siempre se repetía la misma fórmula. A.H.N. Consejos, libro 739 e.

(70) A.H.N. Consejos, libros, 738, 739e, 740e ,

(71) Janine Fayard afirma en su obra Los miembros ... que "de los 77 fiscales(del Consejo) nombrados entre 1621 y 1746, solo hubo nueve que no entraron en el Consejo como consejeros" pág. 156.

(72) A.H.N. Consejos, libros 738, 739e, 740e.

(73) Nov. Rec. Libro IV, Tit. II, Leyes 14 "Asignación de salarios fixos en la tesorería general a los ministros del Consejo y Cámara, Alcaldes de Corte y subalternos" y 15 "Aumento de sueldos a los ministros de los Tribunales superiores y establecimiento de un Montepío para sus viudas y pupilos".

(74) Nov. Rec. Libro IV, Título XVI, Ley 1. "Creación de dos Procuradores fiscales en la Corte; sus calidades, y prohibición de poner substitutos".

(75) Janine Fayard, Los miembros... pág. 155.

(76) Nov. Rec. Libro V, Título XVII, Ley 9. "Cuidado y asistencia del fiscal a las causas fiscales pendientes en las Audiencias".

(77) A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes del año 1655. fol. 399.

(78) Antonio Martínez de Salazar, Colección de memorias..., los capítulos XXXII al XLIX los dedica a la Sala de

Cap. La Sala de Alcaldes de Casa y Corte

Alcaldes. En el apartado dedicado al Gobernador de la Sala reproduce una lista de los ministros del Consejo que fueron Gobernadores de la Sala de Alcaldes. El primero fue Don Antonio Chumacero y Sotomayor nombrado en 1632.

(79) Reproducimos la lista de los ministros de la Sala de Alcaldes contenida en la obra de Antonio Martínez de Salazar, Colección de memorias...:

NOMBRE:	ALTA:	BAJA:
Francisco Villabeta	XII-1700	XII-1701
Gaspar Quintana Dueñas	XII-1701	XII-1703
Pedro Larreátegui	XII-1703	XII-1706
Lorenzo Villamayo	XII-1706	VII-1707
Pedro Larreátegui	VII-1707	XII-1707
Luis de Mirabal	XII-1708	X-1710
Francisco Alvarez Guerrero	X-1710	XII-1711
Luis de Mirabal	XII-1711	Xi-1713

PRESIDENTES DURANTE LA NUEVA PLANTA (noviembre 1713-junio 1715. Durante la reforma la Sala tuvo tres presidentes)

Juan Riomol y Quiroga	I-1714	XII-1714
Manuel de Fuentes	I-1714	VI-1715
Ambrosio Bernal	I-1714	3-1714
Francisco de Gobeo	XII-1713	VI-1715

FIN DE LA NUEVA PLANTA (junio 1715)

Marcos Sanchez Salvador	VI-1715	XII-1717
Alvaro José de Castilla	I-1718	XII-1724
Apostol Andrés de Cañas	II-1724	XII-1735
Francisco Velázquez Zapata	I-1726	XII-1728
Juan Valcárcel Dato	I-1729	XII-1730

Cap. 2 La Sala de Alcaldes de Casa y Corte

Tomás Melgarejo	I-1731	XII-1733
Fernando de Quincoces	I-1736	Xii-1738
Gabriel Rojas y Loyola	I-1739	XII-1744
Francisco del Rollo	I-1746	IX-1746

GOBIERNO POLITICO Y MILITAR DE MADRID (julio 1746- julio 1747. El Gobernador presidía la Sala de Alcaldes)

Conde de Maceda	IX-1746	VII-1747
-----------------	---------	----------

FIN DEL GOBIERNO POLITICO Y MILITAR

Francisco del Rollo	VII-1747	XII-1747
Arias Campomanes	I-1748	XII-1750
Pedro Colón y Larreátegui	I-1751	XII-1753
Pedro Castillo Caballero	I-1754	XII-1756
Andrés de Valcárcel y Dato	I-1757	Continuaba en el 64

Martínez de Salazar publicó su libro en el año 1764 por eso finaliza en esa fecha el listado

(80) Véase la lista de la nota anterior. Martínez de Salazar, Colección de memorias..., pp. 374-378

(81) A.H.N. Consejos, libro 1507 e

(82) Elezárraga y Matheu, Advertencias para el ejercicio... A.H.N. Consejos, libro 1420 e.

(83) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(84) A.Gonzalez Palencia y E.Varón Rojo, La Sala de Alcaldes de Casa y Corte, (catálogo por materias), Madrid, 1925, en las pp. 782-801 informa sobre quienes ocuparon el cargo de

Cap. La Sala de Alcaldes de Casa y Corte

Gobernador de la Sala de Alcaldes completando la información de Martínez de Salazar. Así sabemos quienes ocuparon el cargo desde 1775 hasta 1804:

NOMBRE	ALTA	BAJA
José Faustino Perez de Hita	I-1775	I-1776
Domingo Alejandro Cerezo	I-1776	I-1780
Raimundo Irabién	I-1780	I-1787
Jerónimo Velarde y Sola	I-1787	IX-1792
Juan Matias Azcárate	IX-1792	VII-1804

(85) Janine Fayard, Los miembros... pág. 101.

(86) Georges Desdevises du Duzert, "La Chambre des Juges..." pp. 1-52.

(87) Janine Fayard, Los miembros..., pág. 26.

(88) Georges Desdevises du Duzert, "La Chambre des Juges..." pp. 1-52.

(89) Elezárraga y Matheu, capítulo 44 "Alguaciles y Escribanos como se les han de tratar y repprender" en Adevertencias para el exercicio... A.H.N. Consejos, libro 1420 e.

(90) Noticias de varios... A.H.N. Consejos, libro 1422 e.

(91) Noticias de varios ..., A.H.N. Consejos, libro 1422 e.

(92) "Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cédulas de los Bosques Reales del Pardo, Aranjuez, Escorial y otros" es una obra que comenzó Pedro de Cervantes que fue alcalde de Obras y Bosques a finales del siglo XVII y que continuó su

sobrino y sucesor en el Juzgado de Obras y Bosques Manuel Antonio de Cervantes. La obra está dedicada al rey Carlos II, está impresa y existe un ejemplar en la Biblioteca Municipal de Madrid bajo la signatura MB 2003.

(93) Y continúan las Reales ordenanzas: " en la qual clausula se prueba, que el Alcalde de Obras y Bosques tienen in habitu, toda la jurisdicción que los demás alcaldes de Casa y corte y Rastro, pero el exercicio actual della restringido al distrito de los bosques reales...". "Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cédulas..." B.M. MB 2003, pág. 332

(94) Ante la negativa de la Sala de Alcaldes Manuel de Cervantes reclamó a la Cámara de Castilla su antigüedad. Había sido nombrado Alcalde de Casa y Corte después que Marcos Sánchez y que Pablo Diamante y exigía mayor antigüedad por haber jurado el cargo en 1687. No sabemos lo que resolvió la Cámara de Castilla. A.H.N. Consejos, leg. 13.643.

(95) Para la elaboración del cuadro 2.VI se ha utilizado información procedente de la "Recopilación de las Reales ordenanzas y Cédulas..." B.M. MB 2003, pp.361 y 362 así como información de los legajos 13.643 y 13.644, de la sección de Consejos del A.H.N..

(96) Elezárraga y Matheu, Advertencias para el exercicio de la plaza..., A.H.N. Consejos, libro 1420 e.

(97) Advertencias para el exercicio..., A.H.N. Consejos, libro, 1420 e.

(98) "Recopilación de las Reales ordenanzas y Cédulas..." B.M. MB 2003, pág. 336.

(99) Elezárraga y Matheu, Advertencias para el ejercicio..., A.H.N. Consejos, libro 1420 e.

(100) "Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cédulas..." B.M. MB 2003, pág. 330.

(101) La "Recopilación de las Reales ordenanzas y Cédulas..." tiene un apartado de la parte siete, Glossa I titulada "Lugares comprendidos dentro de los límites de la pragmática" y otro llamado "Sotos particulares que se comprehenden dentro de dichos limites de pragmática" que en realidad son un listado de lugares que rodean a los Sitios Reales y caen bajo la jurisdicción del Juzgado de Obras y Bosques. B.M. MB. 2003, pp. 355-358.

(102) A.G.S. Gracia y Justicia, leg.166.

(103) El enfrentamiento entre el Alcalde de Obras y Bosques y el Ayuntamiento de San Martín de de la Vega fue difícil. Pasó por muchas instancias y nadie parecía saber nada del asunto. Por eso el rey se decidió a formar una Junta que dirimiese las competencias. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 166.

(104) Elezárraga y Matheu, Advertencias para el ejercicio..., A.H.N. Consejos, libro 1420 e.

(105) "Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cedula..." B.M. MB 2003, pág.358.

CAPITULO 3. EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y CORTE

El Ayuntamiento era la institución encargada de gobernar y administrar justicia en la Villa de Madrid pero, sin embargo, desde el año 1561, el Ayuntamiento madrileño, inició un proceso de pérdida de competencias al existir otra institución, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, con atribuciones similares operando sobre un mismo territorio. La Sala de Alcaldes, vinculada como estaba al Consejo de Castilla, salía casi siempre triunfante de los pleitos y litigios que mantenía con el Ayuntamiento sobre competencias "acumulativas" de las dos instituciones. Las ordenanzas de Madrid no se cumplían y la institución municipal cada vez se alejó más del gobierno real de la Villa convirtiéndose en una institución conflictiva para el rey y sus ministros.

3.1.ORIGENES Y EVOLUCION DEL AYUNTAMIENTO

Establecer los orígenes del Ayuntamiento de Madrid, a diferencia de lo que ocurre con la Sala de Alcaldes, es una tarea sencilla. Casi todos los Ayuntamientos del Antiguo Régimen conservaron como un preciado tesoro las

disposiciones regias que dibujaban su configuración y atribuciones. El Ayuntamiento de la Villa de Madrid no fue una excepción y guardó celosamente las Reales Cédulas, las Sentencias Judiciales, las Ordenanzas, los Privilegios Reales y los Autos del Consejo, que establecieron su composición y competencias. El único problema es que todo este conjunto de disposiciones constituye un bloque heterogéneo y muchas veces contradictorio. Son normas promulgadas en épocas muy distintas de la historia del municipio madrileño y obedecen a contextos también diferentes. Algunas disposiciones datan del siglo XIV mientras que otras se promulgaron a finales del Antiguo Régimen.

En el caso del Ayuntamiento de la Villa de Madrid, y atendiendo al contenido de las distintas disposiciones reales, podemos distinguir tres etapas.

La primera es la etapa de formación de la Corporación y coincide con los siglos XIV, XV y XVI. La Corona promulgó Reales Cédulas de nombramiento de regidores y de Corregidor y ratificó sentencias de jueces especiales enviados por el rey para solucionar los primeros conflictos municipales. También en esta primera etapa la corporación madrileña elaboró ordenanzas para solucionar algunos aspectos relativos a la composición municipal, ordenanzas que siempre fueron aprobadas por el Consejo de Castilla.

La segunda etapa la podemos denominar de crecimiento.

Las corporaciones estaban sorprendidas con el proceso de acrecentamiento y enajenación de los oficios municipales que coincidió con la costosa política imperial que los Austrias desarrollaron a finales del siglo XVI y XVII y por lo tanto con su desesperada búsqueda de recursos. El Ayuntamiento, que crecía involuntaria y desordenadamente, logró como compensación por los abusos que la Corona estaba cometiendo, una serie de Privilegios Reales que afectaron, sobre todo, a la composición municipal.

En la tercera etapa, que se desarrolló en el siglo XVIII, el proceso de enajenación de oficios públicos ha concluido y la Corona no promulgó ninguna norma relativa a la composición de la Corporación madrileña. Los reyes Borbones, sin embargo, cansados como estaban de los conflictos que enfrentaban al Ayuntamiento y a la Sala de Alcaldes por tener competencias comunes, efectuaron reformas que afectaron globalmente a las dos instituciones. Las Reformas Borbónicas intentaron limitar las funciones del Ayuntamiento madrileño para evitar conflictos con la Sala y lograr una mayor eficacia en el gobierno y la administración de justicia de la Villa y Corte.

Comencemos analizando la primera etapa o etapa de formación de la Corporación madrileña. A lo largo del siglo XIV se produjo un proceso de fortalecimiento del poder real

en Castilla que afectó mucho a la vida local. Los monarcas sustituyeron los concejos abiertos o asambleas generales de vecinos por regimientos de designación real.

En el caso de Madrid fue Alfonso XI (1312-1350), quién en 1346, nombró a los primeros doce regidores de la Villa amparándose en los continuos disturbios que ocurrían en las asambleas de vecinos. Así en la Cédula de nombramiento de los doce primeros regidores de Madrid, Alfonso XI afirmaba que su intervención en la vida municipal de la Villa se justificaba "porque en los concejos vienen omnes a poner discordia e estorbo en las cosas que deben ffazer e ordenar por nuestro servicio por comun de la dicha villa e de su termino"(1). En la misma Cédula Alfonso XI otorgaba capacidad a los nuevos doce regidores para "ffazer e ordenar todas las cosas que el concejo ffaria e ordenaria estando ayuntados"(2). Los nuevos Regidores nombrados por el rey, así como las personas que les fuesen a suceder que, por supuesto, también nombraría el rey, tenían por lo tanto el poder y la capacidad del antiguo concejo abierto.

También fue Alfonso XI quién introdujo en Castilla la figura del Corregidor para que presidiese las corporaciones y tuviese la jurisdicción civil y criminal del municipio arrebatándosela a los antiguos alcaldes que elegían los concejos. El Corregidor era un representante directo de los intereses de la Corona en el Ayuntamiento. Las corporaciones lo sabían y se opusieron más de una vez a su presencia. Por

ello su implantación en todos los ayuntamientos castellanos no fue un proceso fácil. En Madrid, aunque de forma esporádica existiesen corregidores desde 1348, no se instucionalizó la figura del Corregidor hasta 1473(3).

La aceptación por parte de los vecinos de los nuevos oficiales reales que detentaban el poder municipal fue difícil. En la Villa de Madrid, el estamento nobiliario siguió interviniendo en los asuntos de la vida local y asistiendo a los "ayuntamientos" o reuniones municipales. Por ello fue necesario el envío de jueces regios con poder para dictaminar sobre los conflictos entre los caballeros de la Villa y el Regimiento.

En el año 1.453 el rey Juan II (1406-1454), conociendo el enfrentamiento que existía entre sus regidores y el cuerpo de caballeros de Madrid sobre las competencias que tenían unos y otros en materias municipales, envió un juez regio, Alfonso Díaz de Montalvo, para solucionar el conflicto. Los caballeros pretendían participar directamente en las elecciones de oficios que la Villa proveía cada año, así como fijar las posturas de los mantenimientos y recaudar los impuestos. Díaz de Montalvo, como era de esperar, falló a favor del regimiento y por lo tanto del fortalecimiento del poder real. Era la Corporación la que debía controlar las elecciones así como fijar las posturas y los impuestos y

recaudarlos. A cambio decidió que determinados oficios municipales que se elegían todos los años debían recaer en miembros del cuerpo de caballeros de Madrid(4).

Poco tiempo después en 1473, siendo Corregidor de Madrid Juan de Bobadilla, y debido a que los regidores cometían irregularidades en las elecciones de oficios de la Villa, se fijaron las normas para las elecciones de todos los oficios concejiles. Los oficios que los vecinos de Madrid elegían todos los años el día de San Miguel fueron muchos: dos oficios de fieles ejecutores, dos fieles de vara, dos alcaldes de la hermandad, dos alcaldes de la mesta, dos guardas mayores de montes, tres plantadores y conservadores de montes, un mayordomo de sus propios, un mayordomo de su pósito, dos receptores de sus sisas, dos ejecutores de montes, un contraste, un marcador, doce alarifes, porteros y un Procurador General así como un Secretario Mayor del Ayuntamiento(5).

Las normas de las elecciones fueron completadas a lo largo del Antiguo Régimen por distintas ordenanzas elaboradas por el Ayuntamiento y aprobadas por el Consejo de Castilla. Las primeras se promulgaron el 30 de Septiembre de 1493. Fueron elaboradas por la Corporación así como por representantes de los caballeros y de los pecheros de la Villa. Su contenido alejaba de las elecciones anuales a dos de los oficios más importantes: los oficios de Mayordomo y de Procurador, que en adelante serían designados por los

regidores. Las segundas ordenanzas fueron elaboradas exclusivamente por la Corporación y promulgadas por el Consejo de Castilla el 29 de Septiembre de 1511. Trataban de solucionar un problema de corrupción electoral. A lo largo del Antiguo Régimen se siguieron elaborando y promulgando ordenanzas. Así conocemos las de 1569 y las de 1575 que establecían las condiciones que debían reunir los madrileños para tener el estatuto de vecinos y las de 1713 y 1716, que regularizaban de nuevo las elecciones municipales(6).

La segunda etapa o etapa de crecimiento de la Corporación madrileña se inició con fuerza a finales del siglo XVI. Los monarcas de la casa de Austria acrecentaron y vendieron diversos oficios públicos como medida extraordinaria para aumentar sus maltrechas arcas. La Corporación madrileña se vió duramente afectada por esta práctica y todos sus regimientos, sus secretarías, su procuración de número, así como otros oficios menores, fueron enajenados. No solo se acrecentaron y vendieron los oficios de Madrid sino que el Ayuntamiento tuvo que contribuir de forma extraordinaria con distintas cantidades a la hacienda pública. Estos abusos de la Corona no fueron siempre gratuitos. Madrid consiguió a lo largo del Antiguo Régimen un gran número de lo que ella definía como Privilegios. La diferencia fundamental entre las otras disposiciones regias, ya fuesen Reales Cedúlas, Sentencias de Jueces especiales u Ordenanzas y los Privilegios, es que

estos últimos, los obtenía Madrid como premio por alguna contribución económica o de cualquier otra índole a la Corona. Es decir, la Corona, a través de la promulgación de "Privilegios", compensaba y tranquilizaba a los miembros del Ayuntamiento de Madrid.

El privilegio más importante concedido a Madrid fue su Estatuto, otorgado en 1602 por el rey Felipe III. El Estatuto de Madrid establecía que todo aquel que aspirase a la propiedad o al ejercicio de un regimiento del Ayuntamiento de la Villa debía reunir condiciones de hidalguía. El Estatuto fue un intercambio entre el rey y el regimiento de Madrid. Los regidores aceptaban el acrecentamiento y venta de regimientos de la Villa pero a cambio de que los nuevos propietarios y tenientes perteneciesen a la nobleza. El Estatuto fue una iniciativa de los regidores que se reunieron en la Corporación el miércoles 23 de octubre de 1602 estipulando:

"que si algunos regimientos de aquí en adelante se acrecentaren o renunciaren sea en personas tales quales convenga a la autoridad y reputación de esta republica pues es tan grandiosa que suplica a vuestra magestad lo mande ver y considerar"(7).

La Corona aceptó la propuesta y otorgó el Estatuto a la Villa de Madrid en 1602 confirmándolo en 1603.

Además del Estatuto, Madrid logró otros Privilegios. En Agosto de 1630, tras otorgar la Villa de Madrid un servicio de 1.593 ducados, obtuvo del rey Felipe IV un privilegio prometiendo que no se enajenarían ni los oficios que Madrid elegía el día de San Miguel ni los lugares de su jurisdicción. Este privilegio fue renovado el mes de septiembre del mismo año tras conceder Madrid un nuevo servicio, así como en el año 1636, 1666, 1674 y 1679, siempre después de que Madrid hubiese contribuido de forma extraordinaria con nuevos pagos a la Corona(8).

En la tercera etapa de la historia del Ayuntamiento madrileño durante el Antiguo Régimen, no se produjeron cambios en la composición municipal pero si un duro recorte en sus atribuciones.

Desde la instalación de la Corte en Madrid había habido roces entre el Ayuntamiento y la Sala de Alcaldes al compartir las dos instituciones muchas atribuciones. En el el siglo XVIII, los enfrentamientos fueron todavía mayores y las intervenciones de la Corona mucho más drásticas. Cada vez que se producía un enfrentamiento entre la Sala y el Ayuntamiento, por algún problema de competencias, intervenía el Consejo de Castilla como árbitro. Normalmente el Consejo o bien creaba una Junta presidida por alguno de sus ministros para actuar "privativamente" sobre esa competencia o bien fallaba a favor de la Sala de Alcaldes. Los autos del Consejo, sin embargo, no anulaban los privilegios y

ordenanzas promulgados a lo largo del Antiguo Régimen, que recogían las atribuciones del Ayuntamiento, por lo que pasado un tiempo la Corporación volvía a actuar, avalada por sus disposiciones reales, como si el Consejo no hubiese intervenido.

El cansancio y la preocupación del rey y sus ministros por las continuas pugnas entre la Sala y el Ayuntamiento era grande y decidieron realizar reformas que afectasen globalmente a todo el sistema de administración de justicia y de gobierno de la Villa y Corte.

Las Reformas Borbónicas fueron muy distintas. Las que afrontaron Felipe V y Fernando VI tenían algo en común. Los dos reyes y sus equipos ministeriales pretendieron evitar los conflictos de competencias entre la Sala de Alcaldes y la Corporación limitando las funciones de los dos organismos. Tanto los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V en 1713, como la creación del Gobierno Político y Militar de Madrid, ideada en 1746 por los ministros reformistas de Fernando VI, pretendían alejar las atribuciones de justicia del ayuntamiento de Madrid y reforzar las que tenían que ver con el gobierno político y económico de la Villa y Corte.

Los Decretos de Nueva Planta, que afectaron al Ayuntamiento y a la Sala de Alcaldes, suprimieron el juzgado

de la Villa de Madrid. Los dos Tenientes de Corregidor de Madrid pasaron a formar parte de la Sala de Alcaldes y el Corregidor quedó privado de sus competencias judiciales.

Las disposiciones reales que creaban el cargo de Gobernador Político y Militar de Madrid anularon el puesto de Corregidor de la Villa, asumiendo las funciones del antiguo Corregidor el recién nombrado Gobernador Político y Militar de Madrid, pasando así a convertirse en presidente de la Corporación madrileña y de la Sala de Alcaldes. Era una nueva forma de alejar las funciones de justicia del Ayuntamiento de Madrid.

Las reformas de Felipe V y las de Fernando VI, sin embargo, fracasaron. Una de las muchas razones para su fracaso fue que no habían anulado las disposiciones anteriores que reconocían al Ayuntamiento más atribuciones que las que las reformas pretendían. La Corporación no estaba dispuesta a renunciar al contenido de sus Privilegios y Ordenanzas y levantó pleitos, desobedeció al Gobernador y actuó como si los cambios no existiesen.

Las reformas de Carlos III fueron menos drásticas. El rey no pretendió con ellas evitar que hubiese atribuciones compartidas entre la Sala y el Ayuntamiento. No separó por lo tanto las funciones de justicia de la Corporación municipal. Sólo quería que lo que ya existía funcionase mejor. Fueron reformas, por lo tanto, mucho mejor recibidas no sólo por la Corporación sino también por la Sala de

Alcaldes. Tuvieron éxito en cuanto que sobrevivieron pero no lograron su objetivo de racionalizar el sistema de administración de justicia y de gobierno de la Villa y Corte. Al seguir existiendo competencias "acumulativas" entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de Madrid los conflictos entre las dos instituciones no cesaron y las intervenciones del Consejo de Castilla y del monarca siguieron siendo necesarias y continuas(9).

3.2. COMPOSICION DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Madrid, como ocurría con todas las corporaciones del reino, estaba integrado en el siglo XVIII por gran cantidad de oficios. Por un lado oficios que tenían voz y voto en los "ayuntamientos" o reuniones periódicas que celebraba la Corporación, que eran el de Corregidor y en su ausencia cualquiera de sus dos Tenientes, los Regidores y desde las reformas de Carlos III, los Diputados del Común. También participaban en los plenos con voz pero sin voto el Procurador General y tras las reformas carolinas el Procurador Síndico Personero y en todas las épocas firmaban las actas de las reuniones municipales cualquiera de los dos Secretarios del Ayuntamiento(10).

Además, integraban la Corporación muchos otros oficios, que aunque no participaban en las reuniones municipales si lo hacían en las distintas comisiones en que se dividía el Ayuntamiento para realizar sus funciones. Estos oficios eran muy distintos. Unos estaban enajenados de la Corona, como el de los procuradores de número, los escribanos de número, algunos alguacilazgos y varios oficios de alcabalas y millones. Otros eran electivos como los oficios de fieles ejecutores, el de Mayordomo de Propios, los alcaldes y alguaciles y otra serie de oficios menores(11). Por último existían en el siglo XVIII algunos oficios que, aunque ya no tenían ningún cometido que realizar, se seguían eligiendo todos los años por la Corporación

3.2.1. EL CORREGIDOR Y SUS DOS TENIENTES

El Ayuntamiento de Madrid, casi desde su creación como organismo colegiado, estuvo presidido por un Corregidor. Ya en la Real Cédula de nombramiento de los primeros doce regidores de Madrid, Alfonso XI hacía referencia a un juez regio que junto a los doce y a los alcaldes y alguacil de la Villa se encargarían de aplicar la justicia y gobernar la Villa y Tierra de Madrid(12). Pero la participación en los ayuntamientos de un juez regio o "Juez de fuera" como se

denominaba en el siglo XIV, no quiere decir que este fuese un Corregidor.

Benjamín González Alonso, en su obra El Corregidor castellano, distingue entre oficiales de justicia "que ejercen en los municipios atribuciones específicas y atribuciones genéricas"(13). En el primer grupo estarían los "jueces de residencia pesquisidores, y jueces de comisión en general", es decir oficiales nombrados para resolver un conflicto concreto, mientras que el segundo grupo lo integrarían los jueces nombrados para "administrar justicia en tal lugar y por tanto tiempo". Dentro de este segundo grupo, González Alonso establece una nueva distinción. El oficial de justicia podía enviarlo el rey a petición de la villa o por voluntad propia. Estos segundos, es decir los que la Corona enviaba porque ella quería, son los corregidores y por supuesto, eran los representantes de los intereses regios en las corporaciones.

La figura del Corregidor esta documentada, como en otro lugar señalamos, desde el reinado de Alfonso XI (1312-1350), concretamente desde 1348, pero no sabemos cuando estos fueron una figura fija y continua en los municipios. Los reyes castellanos no tenían la suficiente fuerza para imponerlos en todos los ayuntamientos a la vez. Lo que hicieron fue introducirlos de forma individual en los distintos municipios castellanos(14).

En Madrid, a pesar de haber existido jueces regios desde 1346, no apareció la figura del Corregidor de una forma estable hasta 1473 al nombrar el rey como Corregidor a Fernando Gómez de Ayala(15). Este nombramiento, que se hizo por un año, tenía una característica que mostraba la debilidad del nuevo oficio de Corregidor. Enrique IV no dió por hecho la obediencia de la corporación madrileña hacia su representante y por ello recordaba a los regidores sus obligaciones frente al nuevo oficial. Dice así la Cédula de nombramiento del nuevo Corregidor:

" e le dexedes e consintades libremente de aquí en adelante usar y exercer el dicho oficio, e tener los dichos oficios de justicia e corregimiento e judgado, e los exercer e complir e executar mi justicia por si e por sus oficinas e lugartenientes los quales pueda quitar y amover y poner."(16)

Al nombramiento de Fernando Gómez de Ayala le siguió el de Juan de Bobadilla en 1477, el de Alonso de Heredia en 1479, el de Rodrigo de Mercado en 1481 y así sucesivamente hasta la desaparición de la figura del Corregidor(17).

Los primeros Capítulos para Corregidores fueron promulgados por los Reyes Católicos en 1500. En ellos se fijaron las funciones de los corregidores y de sus tenientes así como las de los jueces de residencia encargados de

evaluar la gestión de los corregidores cesantes. Estos primeros Capítulos fueron renovados en 1648 por Felipe IV. En el siglo XVIII nuevos cambios afectaron a la figura del Corregidor. Felipe V importó de Francia la institución de los intendentes, con competencias en muchos casos similares a la de los corregidores, y Fernando VI optó por unir las intendencias a los corregimientos más importantes de la provincia. Esta decisión fue revocada por Carlos III, en 1766, al separar corregimientos e intendencias. También fue importante para los corregidores la nueva instrucción de 1788, que se hacía eco de la Real Cédula de 21 de abril de 1783, dividiendo los corregimientos en tres categorías y creando un escalafón de corregidores a imitación de lo que ocurría con otros funcionarios como los miembros de las Audiencias y Chancillerías y los de los Consejos(18).

Esta legislación dibujaba las calidades y obligaciones de los corregidores así como su tiempo de permanencia en el cargo y el sistema de control de su gestión por parte de la Corona.

En la Villa y Corte de Madrid, durante el siglo XVIII, toda esta legislación sobre corregidores apenas se cumplió. Los corregidores de Madrid no permanecieron en el puesto el tiempo que señalaba la instrucción, no recibieron nunca el salario recogido en los capítulos, tuvieron una carrera administrativa totalmente distinta al resto de los corregidores del reino y , por si todo esto fuese poco, no

les permitieron desarrollar las funciones que tenían como corregidores.

- TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO

En Madrid, en el siglo XVIII, si exceptuamos los avatares de la Guerra de Sucesión y arrancamos de 1713, sólo hubo once Corregidores y eso que dos de ellos, Martín Gonzalez de Arce y Andrés Gómez de la Vega, estuvieron menos de un año como corregidores al fallecer poco después de su nombramiento.

El tiempo de permanencia para los Corregidores madrileños, si hacemos caso de las instrucciones, debía ser de tres años para los elegidos con anterioridad a la promulgación de la Cédula de abril de 1783 y de cinco a seis para los elegidos después. En la Villa y Corte, sin embargo, el cargo de Corregidor fue vitalicio. Casi todos los Corregidores que tuvo Madrid en el siglo XVIII murieron en el cargo y alguno de ellos con muchos años de servicio:

CUADRO 3-I (19). CORREGIDORES DE MADRID 1713-1803.

NOMBRE:	PERMANENCIA	MOTIVO ABANDONO CARGO
Conde de la Jarosa	1.713-15	?
Marqués de Vadillo	1.715-29	Fallece
Martín González de Arce	1.730-31	Fallece
Marqués de Montealto	1.731-46	Fallece
Conde de Maceda		
(Gobernador Polit.y Militar)	1.746-47	Fracasa Gob.Pol y Mil
Marqués del Rafal	1.748-53	Fallece
Juan Francisco de Luján	1.753-65	Fallece
Alonso Pérez Delgado	1765-75	Fallece
Andrés Gómez de la Vega	1776	Fallece
José Antonio de Armona	1.777-92	Fallece
Juan de Morales Guzmán	1.792-1.803	Enxerado

La razón para esta larga permanencia de los corregidores era que el corregimiento de Madrid lo entendía la Corona como el broche final de una gran carrera administrativa. En realidad era un puesto de representación con escasos cometidos.

Entre el fallecimiento de un Corregidor y el nombramiento de otro siempre elegía el rey a un Corregidor

interino que normalmente era un Teniente de Corregidor o un Regidor de la Villa. Algunos corregidores interinos lo fueron más de una vez como Joseph de Pasamonte que fue Teniente de Corregidor durante el mandato de tres corregidores y ejerció dos veces como Corregidor interino. Julián de Hermosilla también repitió como interino. Al morir el Marqués de Montealto, Julián de Hermosilla como Teniente de Corregidor más antiguo, fue nombrado Corregidor interino. Durante su gestión, el rey Fernando VI, afrontó una de las numerosas reformas sobre el sistema de gobierno y justicia de la Villa y Corte, la del Gobierno Político y Militar de Madrid. Tras el fracaso de la reforma Julián de Hermosilla volvió como Corregidor interino de Madrid(20).

También nombraba el rey interinos cuando mandaba al Corregidor de Madrid a alguna importante comisión como ocurrió con el Marqués del Rafal enviado como visitador a Andalucía "con todas las facultades que residen en el Gobernador del Consejo". El Marqués del Rafal tardó un año en regresar y ejerció como interino su Teniente de Corregidor(21). En el siguiente cuadro enumeramos los corregidores interinos que tuvo Madrid en el siglo XVIII, así como las etapas que ejercieron como corregidores y el cargo que ocupaban al ser nombrados interinos:

CUADRO 3-II (22).CORREGIDORES INTERINOS DE MADRID 1713-1803.

NOMBRE:	PERIODO DE PERMANENCIA:	CARGO:
Joseph de Pasamonte	22/6/1729-10/1/1730	Tte. Correg.
Joseph de Pasamonte	6/11/1730-28/6/1731	Tte. Correg.
Julián de Hermosilla	29/3/1746-24/9/1746	Tte. Correg.
Julián de Hermosilla	17/10/1747-1/12/1747	Tte. Correg.
Francisco A.Izquierdo	9/5/1753-18/5/1753	Tte. Correg.
Pedro Joseph Valiente	10/7/1765-10/8/176	Tte. Correg
Pablo A. Ordanza	-/12/1775-18/1/1776	Tte. Correg.
Juan A. Santa Maria	23/5/1792-12/6/1792	Regidor

- NOMBRAMIENTO Y PROCEDENCIA DE LOS CORREGIDORES.

El corregimiento de Madrid, a pesar de ser un corregimiento de capa y espada, es decir un corregimiento que para su ejercicio sólo se exigía pertenecer a la nobleza, durante el siglo XVIII estuvo siempre ocupado por letrados que habían realizado una importante carrera administrativa. Así, de los once corregidores que tuvo

Madrid en el siglo XVIII, cinco fueron ministros de los Consejos. Dos de ellos, Juan Francisco de Luján y Alonso Pérez Delgado, pertenecían al Consejo de Castilla, el Marqués de Vadillo era consejero de Indias, el de Montealto de Hacienda y Andrés Gómez de la Vega era ministro del Consejo de Guerra(23). Los que no eran consejeros también gozaban de una carrera administrativa importante. Es el caso del Corregidor José Antonio de Armona, del que sabemos muchas cosas porque nos ha dejado escritas sus memorias tituladas Noticias privadas de casa útiles para mis hijos. Armona que ocupó el corregimiento de Madrid desde 1777 hasta su muerte acaecida en 1792, había iniciado su servicio a la Corona por intervención de su hermano mayor, Francisco Anselmo, amigo del Marqués de Ensenada. Esta amistad llevó a que el Marqués pensase en José Antonio de Armona para ocupar el cargo de contador de almojarifazgos y puertos secos de la Aduana de Huelva, donde permaneció diez años. Después, en el año 1762, fue enviado a Extremadura para revisar y reorganizar la recaudación de sus rentas y en 1764 fue destinado a América para poner orden en la hacienda de la isla de Cuba. Tras diez años en América, Jose Antonio de Armona regresó a España para ocupar la intendencia de Galicia, cargo en el que estuvo poco tiempo. Dos meses después de su llegada a la Coruña, fue llamado por el Marqués de Grimaldi, quien le comunicó su nombramiento como Corregidor de Madrid jurando su cargo el 21 de enero de

1777(24).

Cada vez que fallecía el Corregidor de Madrid se iniciaba el mismo proceso de elección. Hasta 1749, cuando se unificaron los corregimientos de las capitales de provincia con las intendencias, para elegir un nuevo Corregidor intervenían únicamente la Cámara de Castilla y el rey. La Cámara debía entregar al monarca una terna de candidatos con sus respectivos historiales profesionales, y el rey decidía. Desde 1749, además de la Cámara, intervenían los Secretarios de los Despachos de Hacienda y de Guerra. Algunas veces, dada la importancia del corregimiento de Madrid, el procedimiento normal se alteraba. Por ejemplo José Antonio de Armona nos contaba en sus memorias que fue un Corregidor de "banquillo", término que el mismo definía:

" El banquillo es, y se entiende, la audiencia secreta que el rey da todos los viernes al gobernador del Consejo, que se sienta delante de S.M. en un banquillo sin respaldo. Esta audiencia es siempre a solas después que el Consejo se retire de la suya".

Es decir en la elección de Armona participaron exclusivamente el Gobernador del Consejo, que entonces era Ventura Figuerola, y el propio Rey, 'y si hacemos caso a nuestro Corregidor habría sido elegido, sobre todo, por voluntad de Carlos III. Así continuaba Armona:

"Entonces me dijo el rey (a Figueroa) ese ha venido ahora de la Habana. Si quieres saber sobre el preguntaselo a Grimaldi, que el te dirá como me ha servido. Ese que no lo pretende quiero que sea el Corregidor de Madrid" (25).

Elegido el nuevo Corregidor de la Villa y Corte, éste tenía que iniciar una serie de trámites para poder ejercer su nuevo cargo. En primer lugar realizaba su juramento en la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, ante el Gobernador y con asistencia del Escribano de Cámara y Secretario del mismo Consejo. También debía abonar en el Consejo de Hacienda, una cantidad en metálico exigida para el ejercicio de cualquier oficio público, la media annata. Cuando el Consejo de Hacienda confirmaba que la media annata había sido pagada, el rey expedía su carta de nombramiento. En ese momento comenzaban las relaciones del nuevo Corregidor con la Corporación madrileña. El Corregidor debía realizar un segundo juramento frente al Ayuntamiento. Este acto, como todas las ceremonias municipales, estaba sometido a una rigurosa etiqueta. En primer lugar dos capitulares recogían al nuevo Corregidor en su posada. Juntos se dirigían a la Casa Consistorial en donde el nuevo Corregidor mostraba el Real Título que acreditaba su nombramiento y juraba ante el Corregidor interino, Regidores y el Procurador General que respetaría las ordenanzas y

privilegios municipales. Además depositaba una fianza en metálico, para garantizar así que podía responder en caso de cometer alguna irregularidad en su gestión(26).

- SUELDO Y REMUNERACION DEL CORREGIDOR

El sueldo de los corregidores madrileños no era elevado si se tiene en cuenta la larga carrera administrativa que tenían estos oficiales a sus espaldas. En 1715 el sueldo de Corregidor de Madrid ascendía a 40.000 reales de vellón. Esta cantidad era superior a la de los alcaldes de Casa y Corte que en la misma época ganaban 30.000 reales pero muy inferior al de los consejeros que, si recordamos, cobraron 44.000 hasta 1763(27). Teniendo en cuenta que muchos corregidores madrileños del siglo XVIII procedían de los Consejos esta claro que el nuevo sueldo era un anacronismo. En los títulos de nombramiento aparecía el sueldo oficial que gozaban todos los corregidores del reino, pero sabemos que la realidad era muy distinta.

Los corregidores de Madrid pactaban su sueldo de forma individual con el monarca. Era frecuente que retuviesen sus sueldos de consejeros, lograsen algunas pensiones y añadiesen a todo esto el sueldo de Corregidor. Así, por ejemplo, Andrés Gómez de la Vega además del sueldo

que gozaba como Corregidor de Madrid, cobraba como consejero de Guerra y tenía "dos pensiones con que la piedad de su Magestad le había atendido"(28). José Antonio de Armona que no había sido ministro de ningún Consejo lo resolvió de distinta manera. Lo primero que hizo al enterarse que sería el nuevo Corregidor de Madrid fue preocuparse por las cuestiones económicas. Antes incluso de jurar su cargo ante el Consejo de Castilla ya había escrito dos representaciones al Consejo de Hacienda para estipular cuales iban a ser sus ingresos. En la segunda, que resumía el propio Armona en sus memorias, exponía sus necesidades como padre "de crecida familia" y por ello las diferencias salariales que debía tener con su predecesor "que era hombre solo". Sus argumentos obtuvieron resultados y Armona logró además del sueldo de Corregidor, "el sueldo de 50.000 reales correspondiente a la intendencia de la provincia de Madrid, para gozarle, interin que se me daba correspondiente plaza en el Consejo."(29).

No todos los Corregidores que tuvo la Villa y Corte en el siglo XVIII fueron tan buenos negociadores como Armona. Sabemos que Martín González de Arce, que murió como Corregidor de Madrid en 1731, no tenía absolutamente nada. Cuando fueron dos regidores a su casa para buscar algo con lo que costear el entierro de su antiguo Corregidor no encontraron "ni dinero ni alhaja que pudiese superar para dar tierra a su cuerpo"(30). Fue la propia Corporación quién

decidió costear, con 600 ducados procedentes de sus bienes de propios, el entierro de su Corregidor.

- FUNCIONES DEL CORREGIDOR

El oficio de Corregidor de Madrid, a pesar de tener prestigio social, no era un cargo deseado por los burócratas del siglo XVIII. Todos los corregidores que tuvo Madrid en ese siglo escribieron memoriales al monarca protestando por su situación. La existencia de la Sala de Alcaldes, con las mismas atribuciones que la Corporación madrileña, limitaba mucho las funciones del Corregidor. Además la proximidad de la Sala con el Consejo de Castilla, recordemos que se definía en el siglo XVIII como quinta Sala del Consejo y que estaba presidida por uno de sus ministros, hacía que en los numerosos enfrentamientos entre la Sala de Alcaldes y el Corregidor de Madrid, saliese perdiendo este último.

El Corregidor además se sentía humillado. Los corregidores de Madrid eran letrados de superior categoría que los alcaldes de Corte y no soportaban la superioridad real de estos últimos. José Antonio de Armona llegó a afirmar que la muerte de su antecesor en el corregimiento de la Villa de Madrid, Andrés Gómez de la Vega, se debió a sus enfrentamientos con la Sala de Alcaldes:

"Con efecto aquellos días había tenido un lance(Andrés Gomez de la Vega) demasiado empeñado, con la Sala de Alcaldes y un ministro de ella. Era de genio ardiente y pronto se alteraron sus humores y a pocos días perdió la vida"(31).

Suponemos que Armona exageraba cuando atribuyó la repentina muerte de su antecesor a sus enfrentamientos con la Sala, pero lo que si que es cierto, es que todos los Corregidores de Madrid, en sus memoriales al rey, exigían un mayor protagonismo en el gobierno de la Villa y Corte.

Las funciones del Corregidor de Madrid se habían ido limitando desde que se instaló la Corte en la Villa en 1561 y eran desde luego inferiores a las de cualquier otro Corregidor del reino. El Marqués de Vadillo, Corregidor de Madrid desde 1719 hasta 1730, en un memorial escrito al rey en 1727, con la finalidad de recuperar las atribuciones perdidas por la Corporación, resumía muy bien cual era la situación:

"(se halla) disipada la jurisdicción de Madrid, así en lo jurídico y contencioso como en lo gubernativo y económico, a causa de haverse por la Sala de sus alcaldes ido abrogando de tiempo a esta parte, la que no le corresponde y en que Madrid esta considerablemente perjudicado"(32).

El Corregidor de Madrid teóricamente presidía la Corporación municipal e impartía justicia en la Villa y Corte a través del Juzgado de la Villa. El Corregidor efectivamente presidía las reuniones que cada tres días, más o menos, celebraba la Corporación. Pero en esas reuniones se decidían pocas cosas.

El Ayuntamiento de Madrid funcionaba por comisiones para resolver los asuntos de política económica y gubernativa que le correspondían. En total se votaban anualmente 47 comisiones(33). alguna de estas comisiones estaban presididas por el Corregidor pero las más importantes, como eran la comisión de carnicería, abastos, tasas de casas y la comisión de hospitales entre otras, las dirigía un ministro del Consejo de Castilla bajo el nombre de Juez Protector(34).

Esta intervención directa del alto tribunal en los asuntos municipales causaba un desvanecimiento de la autoridad del Corregidor. Se podría argumentar, sin embargo, que el Corregidor como presidente de la Corporación participaba en el nombramiento de los miembros que debían integrar las comisiones. Hasta 1755 fue así, pero a partir de esa fecha el monarca dispuso que las comisiones del Ayuntamiento de Madrid debían ser revisadas por el Consejo de Castilla y aprobadas cada dos años por el rey(35). Esta intromisión sin límites del Consejo de Castilla y hasta del propio rey, solo se producía en Madrid por ser sede de la

Corte y aunque el Consejo intentó que los corregidores de la Villa y Corte lo entendiesen como un honor, la realidad fue que lo entendieron como lo que era, una limitación clara en sus atribuciones.

Escuchemos lo que sobre esta situación afirmaba uno de los más ilustres pero sobre todo preclaros corregidores de Madrid en el siglo XVIII. Armona tras enumerar los lores y glorias del Corregidor de Madrid afirmaba que "este resumen de autoridades y obligaciones puede decirse que en Madrid es cierto y es ilusorio a un mismo tiempo en su práctico sistema". José Antonio Armona continuaba explicando esta contradicción:

" Es cierto porque el Corregidor las tiene de por sí y viven siempre para la responsabilidad, y por ellas será culpado y juzgado en los casos de adversidad. Es ilusorio, porque esta autoridad está muy limitada en Madrid, subordinada al Gobernador del Consejo y al Consejo mismo, a todas las horas y en todos los casos. Lo que manda hoy sin su aprobación y su permiso anticipado se anula mañana, o se le hace un cargo fiscal. El Corregidor es un hombre destinado "al encuentro entre dos torrentes poderosos" que pueden arrebatarse a un tiempo si por desgracia al pueblo le falta algo de lo que se le debe, o si las consecuencias

piden procedimiento judicial para salvar al gobierno superior"(36).

Armona sabía perfectamente lo que decía. El Corregidor, que en realidad estaba maniatado por la directa supervisión del Consejo de Castilla hacia su gestión, sí aparecía en cambio como último responsable del buen gobierno de la Villa y Corte.

Cada vez que se produjeron tumultos en Madrid durante el Antiguo Régimen se solucionaron castigando a la Corporación madrileña. Así tras los tumultos de 1699, que se produjeron en Madrid por la escasez y carestía del pan, se suspendió la Comisión del Pósito que presidía el Corregidor. Esto era un agravio contra la Corporación que sin embargo actuó con dignidad y siguió haciendo a lo largo del siglo XVIII "memoria de esta comisión al tiempo que se sortean las demás...por no perder Madrid la regalía de su derecho"(37). Otros tumultos, esta vez más graves y más complejos, los de 1766, se saldaron con la creación de nuevos oficios municipales: los de Diputados del Común y el de Procurador Síndico Personero, cuyas atribuciones principales se centraban en los abastos. Esto no hubiese sido del todo preocupante para el Ayuntamiento madrileño, de no haber supuesto la desaparición de uno de sus oficios tradicionales más importantes, el de Procurador General. Desaparición que sólo se produjo en Madrid y que fue entendida por la

Corporación como un grave castigo(38). Pero todavía fue peor para la institución la promulgación por parte del Consejo de Castilla de un Reglamento, en el año 1766, fijando los salarios de todos los oficios municipales y quitando propinas y emolumentos a los que todos los oficiales estaban acostumbrados(39).

No sólo las funciones que el Corregidor de Madrid tenía como presidente de la Corporación se hallaban limitadas, sino que también sus competencias en el "ámbito de lo jurídico y contencioso", como nos explicaba el Marqués de Vadillo, se encontraban recortadas. Esta limitación se debía, de nuevo, a la existencia de la Sala de Alcaldes, que también tenía jurisdicción civil y criminal, sobre el mismo territorio: la Villa y Corte de Madrid.

El Corregidor de Madrid ejercía su jurisdicción civil y criminal a través del Juzgado de la Villa integrado por sus dos Tenientes. Su jurisdicción era "acumulativa" con la de la Sala de Alcaldes quién impartía justicia a través del Juzgado de la Corte. Es decir los dos Juzgados el de la Villa y el de la Corte tenían jurisdicción civil y criminal sobre Madrid.

Las intromisiones de la Sala en el Juzgado de la Villa eran continuas lo que exasperaba a los corregidores de Madrid. Así nos resumía la situación el Marqués de Vadillo en el memorial escrito al rey en 1727:

"...Por que si bien la experiencia de muchos años, que por especiales honrras,y gracias de S.M. sirbo los corregimientos de las primeras ciudades del Reyno pudiera haberme puesto en el conocimiento fixo de las facultades que comprenden una jurisdicción ordinaria, de esta enseñanza (con no pequeña confusión mia) me disuadieron las nobedades con que cada dia se altera, y limita la de esta imperial villa de Madrid, por la Vra. Sala de Alcaldes de Corte, procurando ampliar la suya a mas de lo que sus establecimientos le permiten"(40).

La Sala de Alcaldes podía fácilmente entrometerse en el Juzgado de la Villa porque, en realidad, sí tenía cierta superioridad en relación al Corregidor y sus Tenientes. La Sala y el Corregidor compartían la jurisdicción civil en la Villa y Corte, pero las apelaciones de menor cuantía de las sentencias en materia civil dictadas en el Juzgado de los Tenientes iban a la Sala de Alcaldes. Solo las que excedían a los cien mil maravedíes las recibía el Consejo de Castilla. Los asuntos criminales los podía juzgar indistintamente el Juzgado de la Villa o el de la Corte, ahora bien, las apelaciones de los Tenientes siempre iban a la Sala de Alcaldes(41).

Hasta aquí lo que la legislación establecía y lo que reconocía el Corregidor pero la Sala de Alcaldes exageraba continuamente sus atribuciones. Así, por ejemplo, el

presidente de la Sala de Alcaldes emitió un escrito al Juzgado de la Villa, el 23 de agosto de 1723, en que con motivo de la enfermedad del Teniente de Corregidor, Diego Bustillo, y alegando que el otro Teniente no podría despachar solo todas las causas, se tramitasen todos los asuntos por la Sala de Alcaldes. Es decir, el presidente de la Sala de Alcaldes lisa y llanamente clausuraba el Juzgado de los Tenientes de Corregidor. El Corregidor, el Marqués de Vadillo, estaba desesperado. Solo él elegía a sus tenientes y solo él decidía lo que ocurría en su Juzgado, sobre todo, si se trataba nada menos que de clausurarlo. La Sala, sin embargo, disfrutaba con su superioridad y con los sustos que propinaba al Corregidor y de paso a toda la Corporación.

La Sala de Alcaldes no sólo se entrometía de manera ocasional en el Juzgado de la Villa sino que, durante el siglo XVIII, había conseguido hacerlo de forma habitual.

La Sala, cada vez que lo consideraba oportuno, obligaba a los Escribanos de Número, es decir, a los escribanos adscritos al Juzgado de la Villa, a hacer relación de los pleitos seguidos por el Juzgado de la Villa. No sólo lo hacía por curiosidad, sino que algunos pleitos, que por una u otra razón le interesaban a la Sala, se los apropiaba. Es decir robaba pleitos a sus rivales. Así nos lo contaba el Marqués de Vadillo:

" Manda la Sala a su arbitrio y quando la (sic)parece, que de las causas en que estan conociendo en primera instancia los thenientes vayan los escrivanos de numero a hacerles relación; oyda esta sin especial providencia las debuelbe unas veces, otras lo hace previniendoles tiempo dentro del qual devan determinarlas, y otras absolutamente las retiene"(42).

Esta situación era muy incómoda para unos Corregidores, como los de Madrid, que habían sido altos funcionarios y que en muchos casos habían sido ministros de los Consejos, y que desde luego todos tenían un rango muy superior al de los Alcaldes de Casa y Corte a los que, sin embargo, debían aguantarles mas de una impertinencia.

Ahora bien, no todo iban a ser desazones para los Corregidores madrileños. La Corona había otorgado a los Corregidores de Madrid algunas competencias que no tenían otros corregidores del reino. En 1747, el rey concedió al Corregidor entrante, Marqués del Rafal, el ser Juez Protector de Comedias y Compañías del Reino. Era una nueva atribución que hasta entonces había desempeñado el Consejo de Castilla por lo que dignificaba al Corregidor de Madrid. Para realizar este nuevo cometido el Corregidor contó con la ayuda de la Junta de Comedias que el presidía e integraban además dos regidores. Tenían que otorgar las licencias para la formación de compañías, examinar y censurar las comedias

antes de su representación en cualquier lugar del reino, visitar o hacer visitar los teatros, velar por las buenas costumbres de los comediantes y juzgar los pleitos que surgieran relativos a esta materia(43).

- LOS DOS TENIENTES DE CORREGIDOR

Los Tenientes de Corregidor de Madrid auxiliaban al Corregidor en todas sus funciones. Presidían las reuniones municipales en ausencia del Corregidor e integraban el Juzgado de la Villa.

Los Tenientes de Corregidor eran letrados que habían estudiado en las universidades.

Durante el siglo XVIII, los Tenientes de Corregidor de Madrid, eran elegidos por el Corregidor, si exceptuamos los años que estuvieron en vigor los Decretos de Nueva Planta, que afectaron al Ayuntamiento de la Villa, años en que fueron directamente nombrados por el rey. Los Tenientes de Corregidor permanecían de forma vitalicia en el cargo salvo los que consiguieron promocionarse y entrar a formar parte de la Sala de Alcaldes y seguir desde ahí la carrera administrativa de los Alcaldes de Casa y Corte.

Los Tenientes de Corregidor, como en otro lugar señalamos, ostentaron desde el fracaso de los Decretos de

Nueva Planta en 1715, honores de Alcalde de Casa y Corte, por el hecho de ocupar el cargo de Tenientes del Corregidor de Madrid(44). Algunos lograron que los honores se trasformasen en un puesto de número de Alcalde de Casa y Corte, como son los casos de Manuel Regueiro, de Juan de Castillo, que fue Teniente de Corregidor de Madrid durante las Reformas de Nueva Planta, recibió los honores de Alcalde de Casa y Corte en 1715 y ocupó una plaza de Alcalde de número en 1719, para después ascender en 1726 a Consejero de Hacienda. También Ignacio de Santa Clara, siendo Teniente de Corregidor de la Villa recibió los honores de Alcalde en 1763, logrando una plaza de número en 1767, para ascender en 1755 a ministro del Consejo de Castilla (45).

Los honores de Alcalde de Casa y Corte se recibían de manos del Gobernador del Consejo e implicaban vestir toga durante la ceremonia de nombramiento. También ocupar asientos en plano de igualdad con los Alcaldes de Casa y Corte en las ceremonias que asistiesen el Corregidor y sus Tenientes y los Alcaldes de Casa y Corte. La concesión de honores a los jueces ordinarios de la Villa de Madrid disgustó sobremanera a los letrados que ejercían como Alcaldes de Casa y Corte.

Fue Felipe V quién institucionalizó la practica de conceder honores a los Tenientes de Corregidor de la Villa de Madrid tras atender un memorial de los Tenientes de Corregidor Juan de Castillo de la Concha y Joseph Zenzano en

donde recordaban su larga carrera administrativa y su calidad para ser despreciados por los Alcaldes de Corte. Los Tenientes de Corregidor querían corregir cuestiones de protocolo que les humillaban. Así se expresaban en el memorial mandado al rey:

"Quando el ministro del Consejo va con toda su representación a la visita de la Carcel de la Villa se sentaban los antiguos thenientes enfrente de un banco raso, y lo mismo executaban quando pasaban a la Sala de Alcaldes a la defensa de las causas que iban a ella"

Pedían al rey un asiento más digno, o por lo menos menos "raso", suponemos que para poder mirar de frente a los Alcaldes. Los Tenientes fueron atendidos y el rey resolvió :

"Que en la visita que todos los sábados hace un ministro del Consejo en la Cárcel de la Villa se assienten en un banco que esta puesto por sí el Corregidor quiere assistir a un lado, pues no concurriendo (el corregidor) y teniendo ellos en ausencia suya la misma representación es consiguiente se les de un asiento el cual no han gozado sus antecesores..."

Más importante todavía para una sociedad de honor, como era la del Antiguo Régimen, es que el rey les permitió sentarse en plano de igualdad, nada menos que con el Corregidor de Madrid que, como hemos visto, era un cargo que ejercían letrados con una larga e importante carrera a sus espaldas. Continuaba así el documento: "y en el caso que el Corregidor quiera también asistir no puede haber embarazo en que se asienten los tres juntos"(46).

La concesión de honores de Alcalde a los Tenientes de Corregidor de Madrid implicó que desde 1715 las personas nombradas para el cargo tuviesen una carrera larga e importante antes de acceder a su nuevo puesto. Todos fueron letrados y procedieron o de corregimientos pequeños o de las audiencias y chancillerías.

Aún así, el salario de los Tenientes de Corregidor de Madrid era pequeño. En 1766 el salario que la Villa pagaba a sus tenientes era de 8.800 reales para los dos. Es decir gozaban de 4.400 reales cada uno, cantidad similar a la que el reglamento de 1766 señalaba para los regidores. Además el reglamento afirmaba que no podrían recibir ninguna otra cantidad como "ayuda de costa alguna de los Propios, ni de las sisas con ningún pretexto, ni motivo"(47).

3.2.2. LOS REGIDORES DE MADRID

Además del Corregidor, que presidía las reuniones de la Corporación, asistían a estas, con voz y voto, un número variable de Regidores, que se encargaban del gobierno político y económico de la Villa y Corte.

Los regimientos de Madrid, como muchos de los regimientos del reino, estaban todos enajenados en el siglo XVIII.

El proceso por el cual oficios públicos pasaron a engrosar el patrimonio de particulares fue similar en todos los lugares del reino y lo conocemos, sobre todo, por los trabajos de Francisco Tomás y Valiente, Antonio Dominguez Ortiz y más recientemente por los de J.M. Torras y Ribé, Encarnación Garcia Ribero y Carlos Merchán Fernández (48).

Fue Alfonso XI, como en otro lugar señalamos, el primero que en 1346 nombró regidores en la Villa de Madrid y lo hizo "por tanto tiempo como la nuestra merced fuere e tobiesemos por bien"(49). Es decir la Corona se guardaba la facultad de nombrar y cesar a los regidores cuando lo considerase oportuno.

A finales del siglo XIV se inició el primer paso hacia la enajenación de oficios públicos al permitir la Corona la práctica de la renuncia de oficios. Los oficiales podían renunciar su oficio en manos del rey y éste nombraba un sucesor. La renuncia, sin embargo, encubría una sucesión familiar. El antiguo titular proponía junto a la renuncia a un sustituto que solía ser o su hijo o su yerno. De todas

formas todavía no se puede hablar de enajenación de oficios. Las renunciaciones se hacían ante el rey y los nombramientos los hacia el rey. El regidor no era propietario del oficio porque, en realidad, no disponía libremente de su regimiento.

Durante el reinado de Enrique IV, en pleno siglo XV, es cuando se producen las primeras enajenaciones. La Corona concedía a los titulares de distintos oficios la facultad de traspasarlos y venderlos. Es decir les concedía la propiedad sobre el Regimiento. Así en Madrid conocemos el permiso otorgado por Enrique IV, en 1468, al licenciado Alonso Fernández de las Vivas, que ejercía su oficio de regidor de la Villa, para que:

"en vuestra vida o al tiempo de vuestro finamiento o cada vez e quando vos quisieredes o por vien tuvieredes podades traspasar o renunciar y renunciades el dicho vuestro oficio(50).

Si los oficios se empezaron a vender en el siglo XV, éstos no se acrecentaron hasta la llegada de los Austrias y de su costosa política. El número de doce regimientos, que había creado Alfonso XI para integrar la corporación madrileña, permaneció inalterable durante los siglos XIV y XV y sólo empezó a aumentar durante el siglo XVI llegando a su máximo en 1640 al existir en Madrid, nada menos, que 41

regimientos(51). A partir de este momento el número de Regimientos no creció debido a las quejas de los regidores, a las críticas de los juristas de la época pero, sobre todo, a las concesiones que la Corona siempre tenía que otorgar a las corporaciones a cambio del acrecentamiento de sus oficios.

La mayoría de los oficios enajenados formaban parte de los bienes que integraban los mayorazgos de familias e instituciones. Así de los cuarenta y un regimientos de Madrid casi la mitad estaban vinculados a mayorazgos(52). La forma de transmisión de estos oficios era por herencia aunque en muchos casos, durante el siglo XVIII, los herederos intentaron desvincularlos para proceder a su venta. Así M^a Manuela Quijada, que había heredado un regimiento de Madrid al fallecer su marido y no tener hijos, obtuvo de la Cámara, tras presentar numerosos memoriales, la posibilidad de desvincular su regimiento del mayorazgo, alegando una pequeña cláusula contenida en su contrato que literalmente afirmaba: "que los bienes contenidos en dichos vínculos quedasen libres en el último poseedor"(53).

El resto de los regimientos enajenados en Madrid, como propiedad libre, podían ser objeto de venta, donación o también transmitirse de padres a hijos.

Los oficios, a pesar de estar enajenados, no escapaban al control de la Corona ni por supuesto de la Corporación madrileña.

- ACCESO A LA TITULARIDAD DEL OFICIO

Cada vez que se producía un cambio en la titularidad de un regimiento madrileño se abría un proceso largo y complejo para el nuevo propietario. El candidato a la titularidad del regimiento debía iniciar una serie de trámites, primero, para obtener el Real Título que expedía la Cámara de Castilla, y luego, para ser aceptado como propietario de un regimiento por el Ayuntamiento de la Villa.

Los requisitos exigidos por la Cámara de Castilla para ser propietario de un regimiento eran sobre todo económicos. En primer lugar, cada vez que se producía un cambio de titular de un regimiento, se tenía que pagar una cantidad al estado para poder obtener el título de regidor. Daba igual que el nuevo titular hubiese heredado el oficio o que lo hubiese comprado. Siempre había que pagar una cantidad inicial al estado que, en el siglo XVIII, osciló entre los 1.371 reales pagados por el titular del Mayorazgo de Barajas y los 2.023 reales pagados por Antonio M^a de Quijada.

También nuestros candidatos a titulares debían pagar la media annata que, en el caso de los regimientos de Madrid, no era muy gravosa. Sabemos que la cantidad que el titular de un oficio público debía pagar por la media annata equivalía a la mitad de la renta de ese oficio en un año. Con los regimientos de Madrid ocurría, sin embargo, una

cosa curiosa. Sólo se pagaba la media annata por la llamada perpetuidad del oficio. Al estar los regimientos de Madrid enajenados de la Corona antes de la creacion del derecho de la media annata, en 1631, y escapar teóricamente al control de la Hacienda Publica, el monarca ideó un nuevo gravamen, que no tenía mucho que ver con la media annata, aunque recibió el mismo nombre.

Cada vez que un oficio de regidor cambiaba, no solo de propietario, sino también de persona que lo ejerciese, se tenía que pagar "la media annata" por el Derecho de Perpetuidad. La media annata pagada por nuestros propietarios era variable y nada tenía que ver con la renta anual del oficio, sino con la cantidad inicial que el estado exigía al nuevo propietario. La Cámara de Castilla calculaba la media annata de los regimientos de Madrid dividiendo por cuatro la cantidad inicial desembolsada por el propietario.

Volvamos a Antonio Maria de Quijada y analicemos las cantidades que tuvo que desembolsar. Como cantidad inicial, ya hemos señalado que abonó, para lograr la titularidad del oficio, 2.023 reales, a lo que hay que añadir 506 reales por los llamados derechos de la media annata. En total el desembolso inicial engrosaba la cantidad de 2.529 reales.

Si además, el nuevo propietario no pudiese desempeñar el oficio, por ser menor o mujer, o no quisiese, porque estuviera en la carrera militar o perteneciese a alguno de

los Consejos, el desembolso sería mucho mayor. Tendría que obtener una licencia de la Cámara de Castilla para renunciar el oficio, licencia que volvía a costar dinero. En muchos casos la cantidad desembolsada, para obtener la facultad de renunciar el oficio, era similar a la cantidad pagada como media annata(54).

Teniendo en cuenta que el salario base de los regidores de Madrid era, desde la promulgación del reglamento de 1766, de 400 ducados, es decir de 4.400 reales anuales, nuestros regidores, tanto si ejercían el oficio personalmente como si decidían arrendarlo, desembolsaban, para hacerse cargo del oficio, una cantidad inicial superior a la pagada por los titulares de oficios no enajenados que sólo tenían que pagar la media annata o la mitad de la renta anual de su oficio(55).

No dejaron de ser rentables para la Corona los oficios enajenados y de ahí la importancia que la Cámara de Castilla otorgó a los asuntos económicos a la hora de conceder sus Reales Títulos.

La Cámara exigía otros requisitos para ser Regidor de la Villa y Corte aunque el Ayuntamiento madrileño se quejaba mucho del escaso interés que el alto organismo demostraba por los asuntos extraeconómicos.

Los candidatos a ser propietarios de un regimiento de Madrid tenían que demostrar que no tenían "otro regimiento ni judería" y también que cumplían las calidades que la

Villa pedía a sus regidores. Calidades referentes a la hidalguía del aspirante que la Cámara investigaba poco.

Cumplidos todos los requisitos el nuevo titular obtenía de la Cámara de Castilla el Real Título necesario para iniciar los trámites requeridos por el Ayuntamiento(56).

El Ayuntamiento de Madrid exigía a los titulares de Regimientos una serie de condiciones que tenían mucho más que ver con la hidalguía y nobleza de sangre que con la capacidad del candidato. Madrid, como señalamos al comienzo de este capítulo, era Villa de Estatuto, es decir era una de las ciudades castellanas que habían obtenido un Privilegio Real que imposibilitaba a los que no acreditasen nobleza y limpieza de sangre el acceso a la propiedad y al ejercicio de sus regimientos. El estatuto, otorgado en 1602 por Felipe III y confirmado al año siguiente por el mismo rey, se seguía exigiendo a rajatabla por la Corporación madrileña en el siglo XVIII(57).

El Estatuto era en realidad un arma que utilizaba la Corporación para defender sus intereses. Cuando un nuevo titular de un regimiento acudía a la Corporación madrileña con su Real Título y con la intención de jurar su oficio, el Ayuntamiento convocaba a su Comisión de Estatuto, integrada por el Corregidor y dos Regidores, que examinaban las condiciones del nuevo propietario. Según el Estatuto de Madrid, para ser Regidor había que acreditar condiciones de

hidalguía. El Estatuto prohibía expresamente a los aspirantes que:

"ellos ni sus padres ni abuelos ayan tenido oficio mecánico, ni tienda de paños, joyería ni lencería, ni otro ningún género de tienda en que se venda cosa alguna".

También exigía que el candidato reuniese las condiciones de los regidores de las otras ciudades que habían obtenido Estatuto. Así el Privilegio Real afirmaba :

"que las personas que hubieren de ser admitidas en a los oficios de regidores de la dicha Villa sean, y ayan de ser precisamente hijosdalgo de sangre y no de privilegio, ni descendiente de ellos y concurren en ellos las calidades que hayan de concurrir y concurren en los que son, y fueren mis veinticuatro de las ciudades de Sevilla, Cordova y Toledo..."(58)

La comisión, para cerciorarse de que los candidatos reunían las condiciones exigidas en el Estatuto de Madrid, interrogaba por escrito, a través de unos cuestionarios elaborados por el ayuntamiento, a una serie de testigos y reclamaba al candidato los documentos que acreditasen su nobleza(59). La comisión de estatuto también se cercioraba

de que el candidato cumpliera los requisitos de edad y sexo y de no tener tratos con los abastos de la Corte que el ayuntamiento exigía a todos sus oficiales.

En teoría el propietario de un regimiento de la Villa había demostrado ante la Cámara de Castilla, como requisito imprescindible para obtener su Real Título, que cumplía las condiciones de nobleza exigidas por la Villa de Madrid, pero el Ayuntamiento no se conformaba con los resultados obtenidos por la Cámara y nunca dejaba de reunir a su Comisión de Estatuto y sobre todo de poner dificultades a algunos candidatos. Así, por ejemplo, conocemos el caso de Ramón Diosdado Moret, que era Alférez del Regimiento de América y que había heredado de su padre un regimiento de Madrid. La Cámara le había otorgado el Real Título pero el Ayuntamiento no lo aceptó como uno de sus miembros. La razón la explicaba bien uno de los Tenientes de Corregidor de Madrid:

" Que al Ayuntamiento de Madrid no se le ofreció reparo en cuanto a la notoria nobleza de sangre por línea materna, porque su abuelo Julian Moret practicó la justificación conducente a su ingreso en el mismo oficio; pero por lo respectivo a la familia de Diosdado aunque la tienen por distinguida... echo de menos una justificación formal.."(60)

Ramón Diosdado no fue aceptado a pesar de tener su Real Título y el Gobernador del Consejo de Castilla, después de escuchar a las partes, aceptó, muy a su pesar, la decisión municipal. Esto sucedía el 30 de junio de 1772 y podemos afirmar que a lo largo de todo el siglo XVIII, a Madrid y a sus regidores no sólo les preocupaban las cuestiones de honor a la hora de rechazar a estos candidatos. Mucho más importantes fueron para la Corporación las razones económicas. Las cantidades definitivas que cobraban los regidores madrileños estaban en relación directa con el número de regidores que acudían a los "ayuntamientos" o reuniones periódicas de la Corporación.

- SALARIO Y REMUNERACION DE LOS REGIDORES

El salario que Madrid pagaba a sus regidores era, como ya hemos señalado, muy pequeño: 4.400 reales(61). Era un salario muy inferior al que en la misma época cobraban los funcionarios de la Corona. Recordemos que los Alcaldes de Casa y Corte ganaban 36.000 reales desde 1763 y que miembros de menor categoría en el escalafón de los consejos, como los oidores de las audiencias, cobraban 18.000 reales. También había una enorme distancia entre el salario de los regidores, que por supuesto salía de los propios y las sisas

de la Villa, con el de su Corregidor, que era de 40.000 reales negociables. Es decir, un ilustre Regidor de la muy Coronada Villa de Madrid, no ganaba practicamente nada. Los regidores, sin embargo, estaban acostumbrados a recibir una cantidad extra, que superaba en muchos casos al sueldo base, por participar en las comisiones en que se dividía la Corporación para resolver los asuntos de su incumbencia. Eran 47 las comisiones que Madrid tenía, pero el rey Carlos III, a través del reglamento promulgado como consecuencia del Motín de Esquilache, había reducido a nueve el número de las comisiones remuneradas. En el mismo reglamento de 1766 se establecía la cuantía que los regidores debían obtener por servir las distintas comisiones, así como la obligatoriedad de comunicar al rey los sujetos que iban a ocuparlas cada dos años(62).

Las nueve comisiones remuneradas eran: la de Tasa de Casas, la de Millones, la de Pleitos, la de Carnicerías, la de Corrales de Comedias, la de Fuentes, la de Propios, la del Corpus y la de la Cera. En el cuadro adjunto señalamos los sujetos elegidos por la Corporación para servir las nueve comisiones remuneradas durante los años 1772 y 1773, así como la cuantía obtenida por servir cada una de las nueve comisiones, y el nombre de los regidores que las ocupaban. Los regidores podían ser miembros de varias comisiones a la vez:

Cap. 3 El Ayuntamiento de la Villa y Corte

CUADRO 3-III. INGRESOS POR ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE LOS REGIDORES DE MADRID (1772-1773) (63)

TASA DE::	CASAS	MILL	PLEIT	CARN	COM	FUENT	PROP	CORP	CERA	TOTAL
Agustín Moreno								1100		1100
Ramón Sotelo	1176									1176
Julían Moret					2200		3300			5500
Joseph Olivares							3300			3300
Juan Novales							3300	1100		4400
Antonio Moreno							3300			3300
Manuel Pinedo					2200	2200				4400
Joseph Clemente		588								588
Manuel Sta. Clara							3300			3300
Mateo Larrea				1100						1100
Manuel Reynalte						2200				2200
Francisco Taona			1100							1100
Juan de las Peñas		588							550	638
Joseph Pacheco								1100	550	1650
Felix Yanguas			1100	1100						2400
Pedro Noriega								1100		1100

Si tenemos en cuenta que el salario de los regidores

era de 4.400 reales, a través de las comisiones esta cantidad aumentaba mucho. En el caso de Juan Novales, que servía a la vez dos comisiones bien retribuidas, como eran la de Propios y la del Corpus, el salario base se duplicaba. Lo mismo le ocurría a Manuel de Pinedo, que servía la de comedias y la de fuentes. Julián Moret recibía por ser comisario de comedias y de propios 5.500 reales. Superaba, por lo tanto, con creces los 4.400 reales de sueldo que el Consejo había establecido en el reglamento de 1766.

Los regidores de Madrid, además del salario y de lo que recibían por participar en las comisiones, tenían otra entrada importante por ser comisarios cuarteleros, es decir, por velar por la limpieza y empedrado de los distintos barrios de Madrid. El Reglamento de 1766 regulaba que solo trece regidores podían ser cuarteleros y obtener los 700 reales que esa ocupación proporcionaba. Además los regidores habían convertido esa tarea en vitalicia y ni el propio reglamento de 1766 había logrado suprimir esa práctica. Así, junto a la lista de los regidores que iban a servir las comisiones durante los años 1770- 1771, aparecía una minuta de la Corporación comunicando al monarca "el nombramiento de Don Manuel de Santa Clara para que durante el tiempo que fuese regidor se encargue del cuartel de San Idelfonso" que había vacado solo "por fallecimiento de Ramón Sotelo"(64).

Un regidor cobraba, además de los 4.400 reales que tenía de salario, una media de 4.660 por las comisiones y

los cuarteles, es decir cobraba más que de sueldo fijo. Pero como hemos analizado el salario extra dependía del número de regidores activos de la corporación y esto si que preocupaba a los regidores madrileños. Había que evitar a toda costa que el número de regidores que participasen en los "ayuntamientos" aumentase porque a menor número de regidores mayor sueldo para los existentes.

A nuestros regidores les interesó, por lo tanto, que el número de regidores que asistiesen a las reuniones municipales fuese pequeño. Para lograrlo utilizaron diversas argucias. Una de ellas era, como en otro lugar señalamos, hacer cumplir a rajatabla el Estatuto. El candidato que llegaba con su Real Título de la Cámara a jurar su cargo en el Ayuntamiento de la Villa y Corte, se tenía que enfrentar a los interrogatorios y exigencias de la comisión de Estatuto y podía ser rechazado, muy a pesar de la Cámara de Castilla, como le ocurrió a Juan Diosdado.

Otro recurso utilizado por el Ayuntamiento de Madrid fue la práctica de pagar el salario base de los 4.400 reales al propietario de un Regimiento aunque no ejerciese como regidor. Pero estos regidores "ausentes" debían comprometerse a no nombrar tenientes. Es decir a no elegir a personas que desempeñasen el cargo en su lugar. De esta manera los regidores madrileños lograban que aquellos propietarios que, por no reunir los requisitos de sexo y edad exigidos por la Corporación, o por estar desempeñando

un cargo público más rentable, no pudiesen acudir a las sesiones municipales, no nombrasen jamás a un teniente para sustituirlos. Así eran menos los regidores y más las comisiones que cada uno desempeñaba.

Esta práctica de pagar salarios a regidores ausentes disgustó al rey y a sus instituciones centrales de gobierno y por supuesto quedó suprimida por el reglamento de 1766. Pero en 1768, siempre de acuerdo con la Corporación madrileña, existió un decreto del Consejo de Castilla que autorizaba de nuevo el pago de salarios a:

"los dueños de los oficios de regidores aunque estuviessen vacantes, para que con este motivo no se apressurasen a arrendarlos por los perjuicios que de esto se seguía".

Ahora bien, los propietarios tenían que estar empleados en "el Real Servicio" término ambiguo que se prestó a muchas confusiones. Por el mismo decreto se ordenaba también "que no se arrendasen dichos oficios"(65).

Esta disposición del Consejo de Castilla parecía desconocerla hasta el propio rey Carlos III quien, en el año 1773, consultó a la Cámara de Castilla a través del Secretario de Gracia y Justicia lo siguiente:

"si a la excepción de los que se hallen empleados en mi real servicio para gozar el sueldo sin exercer el oficio de Rexidor quiere el rey, que exprese el Consejo si ha precedido su real aprobación"(66).

- LAS RENUNCIAS DE OFICIOS

La oposición de los regidores madrileños a que se acrecentase el número de miembros de las sesiones municipales obtuvo sus frutos. Aunque la mayoría de los oficios de regidores de Madrid tenían la facultad de ser renunciables, es decir el propietario podía nombrar un teniente, sabemos que durante el siglo XVIII, se nombraron pocos.

Los tenientes, para poder desempeñar el oficio de Regidor, tenían que cumplir con las condiciones de edad, sexo e hidalguía exigidas por Madrid y su Estatuto. Si la Comisión de Estatuto ponía las cosas difíciles a los propietarios, con los tenientes su comportamiento fue mucho más duro. Además existía, según la Corporación, esa disposición del Consejo que permitía continuar pagando el sueldo a los propietarios que no eligiesen tenientes.

También había una prohibición, desde el año 1768, para que los oficios se sirviesen por tenientes, aunque era la Cámara de Castilla quién tenía la última palabra. La Cámara,

a veces, contradecía las disposiciones del Consejo de Castilla y por supuesto los deseos de los regidores madrileños. Así, frente a una reclamación de Juan Joseph de Hoces exigiendo se cumpliera la facultad de elegir teniente que tenía adscrita el regimiento de su propiedad y que la Corporación le negaba, la Cámara contradijo los deseos del Ayuntamiento y concedió al titular del regimiento la facultad de elegir teniente en 1771(67).

De todas maneras, iniciar un recurso para poder renunciar un oficio de Regidor era un proceso largo y tampoco muy necesario, porque, como hemos analizado, los propietarios ya obtenían una rentabilidad por la propiedad del oficio aunque no lo ejerciesen, siempre y cuando hubiesen obtenido el Real Título de la Cámara y jurado su cargo frente a la Corporación.

Sabemos, por un informe elaborado por la Corporación en 1800, que de los diecisiete regimientos activos que integraban el Ayuntamiento de Madrid solo cuatro eran ejercidos por tenientes. Uno de ellos pertenecía a una mujer, María Josefa Moreno, que lógicamente no podía demostrar estar en "el real servicio". Otro era propiedad de una fundación y dos estaban adscritos a mayorazgos siendo los titulares varones que reunían las condiciones para ejercerlos(68).

- FUNCIONES DE LOS REGIDORES

Los Regidores de Madrid, de igual manera que los Corregidores, asistieron a lo largo del Antiguo Régimen a un proceso de pérdida de atribuciones como resultado de los continuos enfrentamientos del Ayuntamiento con la Sala de Alcaldes.

La primera función de los Regidores era la de integrar las comisiones en que se dividía la Corporación para resolver los asuntos que eran de su incumbencia. Estas comisiones eran muy numerosas, nada menos que cuarenta y siete, pero de ellas solo nueve, como en otro lugar señalamos, eran remuneradas(69). Las comisiones que no tenían asignación tampoco tuvieron ninguna atribución que cumplir durante todo el siglo XVIII. Los Regidores las seguían eligiendo todos los años porque las consideraban como un Privilegio al que, por supuesto, no querían renunciar(70).

Muchas de las comisiones tenían nombres llamativos pero, sobre todo, nombres que aclaraban el escaso interés de las atribuciones que habían tenido. Así, por ejemplo, una de las comisiones más sorprendentes fue la de la Baronesa, cuyo origen estuvo en "la regalía que Madrid tenía de poder nombrar religiosos en el convento de ese nombre", pero que ya en 1722, aunque se seguía eligiendo a un Regidor para

servirla, "no tiene que hacer cosa alguna por no tener ya dotación que hacer a ese convento"(71). Otra comisión llamativa fue la de Obrería y Guardarropa, cuya misión había terminado al construirse el edificio donde se celebraban los "ayuntamientos", es decir en 1640. Los Regidores de la comisión de Obrería tenían que encargarse, cuando Madrid no tenía sitio fijo para celebrar las reuniones municipales, de adornar las casas o las iglesias donde se desarrollaban los plenos y después recoger todos los ropajes y guardarlos en la sacristía de la iglesia de El Salvador. Era, como vemos, una función agotadora. Todavía había muchas comisiones más: la de Sermones "solo para la cuaresma" cuyos miembros tenían, nada menos, que buscar e invitar "a los predicadores de más crédito de la Corte", la de Pésames y Enhorabuenas, la de Música, la de las Barcas y otras de similar importancia(72).

Las nueve comisiones que sí tenían funciones específicas tampoco eran resolutivas. Las comisiones se integraban en organizaciones superiores: las Juntas.

Las Juntas, en casi todos los Ayuntamientos del reino, estaban presididas por el Corregidor pero, de nuevo, Madrid fue una excepción. Las Juntas más importantes en que se dividía la Corporación estuvieron presididas hasta 1.748 por un ministro del Consejo que recibía el título de Juez Protector. Seis fueron las Juntas que tuvieron a consejeros de Castilla como presidentes: la de Abastos, Comedias,

Hospitales, Camino de El Pardo, Autos y Fiestas del Corpus y la de Fuentes. Además del ministro del Consejo y de las comisiones integradas por los regidores formaban parte de las Juntas: el Corregidor, el Procurador General y a veces uno de los Secretarios de la Corporación(73). Las Juntas que no estuvieron presididas por un ministro del Consejo lo estaban por el Corregidor de Madrid(74).

A veces las Juntas sólo contaban con una comisión de regidores como le ocurría a la Junta de Propios que estaba formada por el Corregidor, los regidores comisarios de Propios, el Procurador General y un Escribano del Ayuntamiento(75). Otras veces, sin embargo, integraban la Junta varias comisiones. Era el caso de la Junta de Hacimientos de Rentas que estaba formada por el Corregidor, los Regidores comisarios de tres de las comisiones municipales: la de Propios, la de Cientos y la de Alcabalas, el Procurador General, los Escribanos y el Fiscal de Alcabalas y Millones(76).

Todas las Juntas del Ayuntamiento de Madrid se reunían, tras ser convocadas por su presidente, en el domicilio de éste. Se ocupaban de los asuntos que tenían encomendados y debían dar cuenta de lo tratado en los plenos municipales. Sin embargo, las seis Juntas que estaban presididas por un ministro del Consejo de Castilla muchas veces no fueron meras ejecutoras sino que resolvieron sobre distintas materias sin contar con los acuerdos municipales. Se

produjeron, como era lógico, enfrentamientos entre el presidente de la Corporación, el Corregidor de Madrid y los presidentes de las Juntas, los consejeros de Castilla.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Madrid elevó escritos a la Corona para que cesase la intromisión directa del Consejo en sus asuntos. Casi siempre aludieron a lo que más podía conmovier al Monarca: el coste de los salarios que había que pagar a los ministros del Consejo y que, por supuesto, debía proceder de las maltrechas arcas de la Corporación madrileña(77). No sabemos si por razones económicas o políticas, pero lo cierto es que el Rey Fernando VI suprimió la figura de Juez Protector. En 1748 el Rey ordenó que "las comisiones que en tiempos de los Corregidores que le han precedido corrían al cuidado de Jueces Protectores, a partir de este Decreto quedan al cuidado del Corregidor"(78).

Los regidores del Ayuntamiento de Madrid, además de formar parte de Comisiones y Juntas, debían acudir con voz y voto a las reuniones que periódicamente celebraba la Corporación (79).

Las reuniones, como casi todo en el Antiguo Régimen, estaban reguladas por la Corona. En la Carta de Creación de los primeros doce Regidores de Madrid, Alfonso XI estipuló que la Corporación "había de fazer concejo dos días cada semana, que serán el uno el lunes e el otro el viernes"(80). En el siglo XVI se celebraron tres "ayuntamientos"

semanales(81). Mientras que en los siglos XVII y XVIII la frecuencia volvió a ser de dos plenos a la semana(82). La Corona también fijó las horas en que la Corporación debía reunirse. La verdad es que los plenos se celebraban muy temprano. Desde la creación del Concejo hasta comienzos del siglo XVII, la Corporación se reunía a las siete de la mañana, en primavera y verano, y a las nueve en invierno y otoño(83). Los regidores de Madrid enviaron multitud de escritos a la Corona intentando retrasar el horario de las reuniones. Así lograron en 1609 que los "ayuntamientos" se celebrasen en verano de ocho a diez y en invierno de nueve a once(84). Consiguiendo una mejora en 1806: los "ayuntamientos" se celebrarían siempre a partir de las diez de la mañana(85).

No sabemos por qué a los regidores del Ayuntamiento de Madrid les preocupó tanto la frecuencia y el horario de los plenos porque la verdad es que acudían poco a los mismos. En el año 1772 hubo reuniones a las que asistieron sólo siete de los cuarenta regidores que tenía la Villa y no fue un año excepcional. Esas cifras de asistentes se repiten en las Actas de las sesiones municipales de todos los años consultados, y aunque es cierto que a veces algunos de los regimientos podían estar vacantes las ausencias siguen siendo considerables(86).

Además de las reuniones municipales ordinarias se podían celebrar "ayuntamientos" extraordinarios. Estas reuniones eran convocadas por el Corregidor cuando lo consideraba necesario. Se solían desarrollar en épocas de elecciones de oficios concejiles, de reparto de las comisiones municipales, para las juras de nuevos oficiales y, por supuesto, si ocurrían calamidades públicas.

3.2.3. OTROS OFICIOS MUNICIPALES

Además del Corregidor o sus Tenientes y de los Regidores participaban en los "ayuntamientos" el Procurador General y desde las reformas carolinas los Diputados del Común y el Procurador Síndico Personero. Firmaba las Actas, como en otro lugar señalamos, uno de los Secretarios del ayuntamiento.

El Procurador General era uno de los llamados oficios de Concordia. Se denominaban así porque su procedimiento de elección se decidió por intervenciones de jueces regios que intentaron terminar con los conflictos existentes entre los regidores y los caballeros de la Villa de Madrid. En el siglo XV, como en otro lugar señalamos, los enfrentamientos entre los caballeros escuderos de Madrid y los regidores eran continuos y fue necesario que el Rey enviase al Juez

Montalvo en 1453 y al Corregidor Bobadilla en 1.478 para mediar en el conflicto. Sus Sentencias "de concordia", entre muchas cosas, recogían el procedimiento que se debía seguir en las elecciones de la Villa(87).

Algunos de los oficios que inicialmente eran electivos dejaron de serlo a lo largo del Antiguo Régimen, o bien por pactos entre los Caballeros y los regidores de la Villa o por Privilegios otorgados por la Corona tras el pago de alguna contribución extraordinaria por parte de la Corporación(88).

El oficio de Procurador General dejó de elegirse según lo establecido para las elecciones tradicionales de la Villa y pasó a ser nominado exclusivamente por los regidores. Al acuerdo se llegó en 1493 como fruto de una negociación entre los Regidores y los Caballeros y Escuderos de Madrid, acuerdo que fue ratificado por la Corona ese mismo año. La Procuración General en realidad se convirtió en un cargo vitalicio ejercido por uno de los regidores de Madrid. El día que se celebraban las elecciones tradicionales lo que se hacía era confirmar al Regidor en su cargo(89).

Era además un cargo deseado porque tenía un salario muy superior al de los regidores. Recordemos que el sueldo de los regidores era en 1766 de 4.400 reales a lo que había que añadir lo ingresado por las comisiones, mientras que el salario del Procurador General era de 24.000 reales(90).

Esta diferencia salarial era lógica. El Procurador General sí que acudía a todas las runiones municipales y además participaba en casi todas las Juntas. Su función siempre era la misma: defender al común e intentar beneficiar a los caudales y rentas de Madrid. Era además el representante legal de la Villa en caso de que ésta se involucrase en algún pleito(91).

El Procurador Síndico Personero y los Diputados del Común fueron las aportaciones de Carlos III a los ayuntamientos del Antiguo Régimen. Creados tras los Motines de 1766 pretendían corregir los distintos abusos de las corporaciones que, según nuestros ilustrados, tanto tuvieron que ver con el inicio de las algaradas. Defenderían los intereses de la Villa y del "común" de las arbitrariedades cometidas por los propietarios y tenientes de oficios enajenados(92).

Formaban también parte de la Corporación dos Secretarios. Una de las Secretarias del Ayuntamiento estaba enajenada y la otra era de designación real. Los salarios de los secretarios eran también altos. El Secretario que ocupaba la Secretaría enajenada cobraba 26.100 reales anuales a lo que había que añadir algunos emolumentos que en el año 1.800 ascendían a 1.100 reales anuales. El secretario de designación real ingresaba más que su compañero: 24.000 reales anuales y otros 1.100 reales de emolumentos(93). Sus funciones eran diversas: asistir a los "ayuntamientos" para

elaborar y firmar las actas municipales, redactar y dar fe de los distintos acuerdos tomados por las Juntas y Comisiones así como custodiar y organizar los documentos del Archivo Municipal(94).

Además de los oficios que participaban en los "ayuntamientos" existieron una gran cantidad de cargos que auxiliaban al Corregidor y a los regidores en sus múltiples funciones. La mayoría de estos oficios estaban enajenados. Así en 1800 la Corporación informaba a la Corona que dieciocho oficios de escribanos del número, cinco de procuradores, varios oficios de alcabalas y millones, una vara de alguacil y el oficio de alcalde de la cárcel de la Villa estaban enajenados y o bien los ejercían sus propietarios o bien estos nombraban tenientes(95).

El resto de los oficios eran electivos celebrandose las elecciones anualmente el 29 de septiembre, es decir el día de San Miguel. Existieron dos procesos electorales distintos. Los oficios de Fieles de Madrid eran los únicos oficios de "concordia" que se seguían eligiendo todos los años el día de San Miguel. El resto, o había desaparecido por no tener funciones que cumplir, como ocurría con los oficios de alcaldes y de Guía y Sello, o habían dejado de ser electivos como el oficio de Procurador General o el de Mayordomo de Propios.

Las normas para elegir a los dos Fieles de Madrid configuraban un complicado mosaico formado por la Sentencia

de Montalvo, la Concordia de Bobadilla, y un grupo de ordenanzas promulgadas a lo largo del Antiguo Régimen(96). La verdad es que era un proceso largo y enrevesado para elegir sólo las dos fieldades pero el respeto hacia la tradición y hacia todas las normas promulgadas a lo largo de siglos, tan característico de los monarcas y las instituciones del Antiguo Régimen, hicieron que ningún año se dejasen de convocar elecciones tradicionales(97).

También el día de San Miguel se celebraban las elecciones para los oficios creados en el siglo XV por los Reyes Católicos. Estos fueron dos alcaldes, uno de la Hermandad y otro de la Mesta por el estado noble; y otros dos, también uno de la Hermandad y otro de la Mesta, por los Labradores. Las normas de estas elecciones se promulgaron en el reinado de los Reyes Católicos y eran comunes para todo el reino(98).

La composición del Ayuntamiento de Madrid fue, por lo tanto, compleja. Existieron oficios de designación real como el de Corregidor, oficios enjenados de la Corona como los de los regidores, escribanos, secretarios y otros menores, y oficios elegidos por distintos procesos electorales. Esta complejidad de la Corporación madrileña era similar a la de otros ayuntamientos del Antiguo Régimen. En cambio, la limitación de funciones que tuvieron los oficios que integraban el Ayuntamiento de la Villa de Madrid no ocurrió en otras villas y ciudades del reino. La

existencia de los Alcaldes de Casa y Corte y sus ayudantes con competencias similares a las del Corregidor y los regidores tuvo mucho que ver con esa limitación de las competencias municipales.

NOTAS DEL CAPITULO 3

(1) "Real Cédula de nombramiento de los primeros doce regidores de Madrid", en Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, interpretados y coleccionados por el Archivero-Bibliotecario Timoteo Domingo Palacio, Madrid, 1878, pág. 274.

(2) "Real Cédula de nombramiento de los primeros doce regidores de Madrid", Timoteo Domingo Palacio, Documentos del Archivo.... pág. 275.

(3) "Lista de Corregidores de Madrid", A.V.M. 2-398-15. La lista de Corregidores de Madrid fue mandada elaborar por el Corregidor José Antonio de Armona que fue Corregidor desde el año 1777 hasta el año 1792. Sus sucesores continuaron la obra hasta el año 1857 al ser nombrado alcalde el Duque de Sesto.

(4) La sentencia de Montalvo se repite en todos los libros de elecciones de los oficios que se elegían en el Ayuntamiento el día de San Miguel. A. V. M. Secretaría, Libros de elecciones.

(5) También la Concordia de Bobadilla aparece reproducida en los libros de elecciones de la Villa. A.V.M. Secretaría, Libros de elecciones.

(6) Un resumen de las Ordenanzas de Madrid en el A.V.M. 2-355-12. También encabezan junto a la Sentencia de Montalvo y

la Concordia de Bobadilla los libros de elecciones de la villa. A.V.M. Libros de elecciones 42-44.

(7) El interés del Estatuto nos ha llevado a reproducirlo como apéndice. Véase el apéndice III. El manuscrito en el A.V.M. 2-306-22.

(8) A.V.M. 2-355-12.

(9) Las Reformas Borbónicas son estudiadas detenidamente en los capítulos cinco, seis y siete del presente trabajo.

(10) A.V.M. Secretaría, Libros 196 al 230. Estas signatures corresponden a los libros de Acuerdos de los años 1.768 al 1.800. En ellos, además de otras muchas cosas, se hace relación de los oficiales que acudían a los "ayuntamientos" y siempre firma el Corregidor o en su ausencia uno de sus Tenientes y un Secretario del Ayuntamiento.

(11) Membrete de las elecciones de oficios de concordia de los años 1728 al 1.746. A.V.M. Secretaría 2-356-3.

(12) Timoteo Domingo Palacio, Documentos del Archivo... pág. 275.

(13) Benjamín González Alonso, El Corregidor Castellano, Madrid, 1970 pág. 34.

(14) González Alonso, El Corregidor..., pág. 42.

(15) Lista de Corregidores. A.V.M. Secretaria 2-398-15.

(16) A.V.M. Secretaria 2-397-79.

(17) Lista de Corregidores. A. V. M. Secretaria 2-398-15.

(18) Una reproducción de los Capítulos para Corregidores así como de la Instrucción de 1788 en la obra de Benjamín González Alonso, El corregidor... citada con anterioridad. pp. 279-381.

(19) La fuente fundamental para la elaboración del cuadro ha sido la Lista de Corregidores de Madrid. A.V.M. Secretaria 2-398-15. También es de gran utilidad para conocer pormenores de los Corregidores de la Villa y Corte la obra de J. Farraldo y de A. Ullrich, Corregidores y Alcaldes de Madrid Madrid, 1906.

(20) Lista de Corregidores. A.V.M. Secretaria 2-398-15.

(21) "Informe sobre la forma de evitar competencias entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento", escrito por el Marqués del Rafal, Corregidor de Madrid; el interés y la claridad de este informe nos ha llevado a reproducirlo como apéndice. Véase el apéndice V del presente trabajo. El manuscrito en A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 783.

(22) Las fuentes para la elaboración del cuadro de los corregidores interinos también son la Lista de Corregidores y la obra de J. Farraldo y A. Ullrich, Corregidores y alcaldes....

(23) En los Reales Títulos que los Corregidores de Madrid presentaban al hacerse cargo de su empleo en la Corporación madrileña, aparecen a veces los historiales profesionales de los Corregidores. A.V.M. Secretaria 2-397-130 y 2-398-4.

(24) José Antonio de Armona, Noticias privadas de casa utiles para mis hijos. Las memorias fueron escritas por Armona en 1789 y constan de tres volúmenes. Joaquín Álvarez Barrientos, Emilio Palacios Fernández y M^a Carmen Sánchez

Garcia han publicado en el año 1989 una preciosa edición comentada del tercer volumen siguiendo un manuscrito original que se encuentra en la Real Academia de la Historia. En el presente trabajo no se ha utilizado el original sino la edición de Emilio Palacios y los otros.

(25) José Antonio de Armona, Noticias privadas... pág. 110 y 111.

(26) Nombramientos de Corregidores, A.V.M. Secretaria 2-397 y 2-398 Todos sus expedientes.

(27) El Corregidor cobraba los 40.000 reales de la siguiente manera: 9.204 reales los percibía de los caudales de propios de donde siempre los había percibido y los 30.796 restantes procedían de las sisas municipales. Reglamento de Salarios y consignas de 1715. A.V.M. Secretaría 2-311-15.

(28) José Antonio de Armona, Noticias privadas..., pág. 109.

(29) José Antonio de Armona, Noticias privadas..., pág. 109.

(30) J. Farraldo y A. Ullrich, Corregidores y alcaldes, pág. 78.

(31) José Antonio de Armona, Noticias privadas... pág. 105.

(32) "Acuerdos de Madrid y de la Junta para tratar la Jurisdicción y las regalías que se hallan inbertidas". A.V.M. Secretaría, 2-422-91.

(33) En mi memoria de licenciatura titulada El Ayuntamiento de Madrid en el Antiguo Regimen dediqué parte del capítulo cuatro a las comisiones y juntas de Madrid. La tesina es

inédita y fue leída en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en abril de 1984.

(34) Comisiones y Patronatos de Madrid, Biblioteca Municipal, Ms 57.

(35) El rey siempre aprobaba la organización de las comisiones que Madrid le presentaba pero el requisito siempre se cumplía. La mayoría de los expedientes sobre listas de regidores enviadas al monarca para su aprobación en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 786.

(36) José Antonio de Armona, Noticias privadas... pág. 117.

(37) Comisiones y Patronatos de Madrid, Biblioteca Municipal, Ms. 57.

(38) Javier Guillamón, Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III, Madrid 1980. pp. 248-252.

(39) "Reglamento que deberá observarse en la administración, recaudación y distribución de los caudales de propios, sisas, impuestos, arbitrios y rentas de Madrid", A.V.M. 2-353-43.

(40) "Acuerdos de Madrid y de la Junta formada para tratar la Jurisdicción y las regalías que se hallan inbertidas", A.V.M. 2-422-91.

(41) Nov. Rec. Libro IV, Tit. XXVII, Ley I. "Conocimiento de los Alcaldes de Corte de las apelaciones en causas criminales de los jueces ordinarios de los pueblos en que reside la Corte".

(42) "Acuerdos de Madrid y de la Junta formada para tratar las regalías que se hallan inbertidas", fol 10. A.V.M. 2-422-91.

(43) A.H.N. Consejos, Sala de Alcaldes, Libro de Gobierno, año 1793.

(44) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.

(45) A.H.N. Consejos, leg. 13.643 y leg. 13.644.

(46) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1

(47) "Reglamento que deberá observarse en la administración, recaudación de los caudales de propios, sisas, impuestos y arbitrios y rentas". fol. 8. A.V.M. 2-535-43.

(48) Francisco Tomás y Valiente ha escrito mucho sobre el problema de la enajenación de oficios publicos, destacamos "Origen Bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla" en Actas del I Symposium de Historia de la Administración", Madrid, 1970, "Dos casos de incorporación de oficios públicos a la Corona en 1793 y 1800", en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971 y "La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII) en Historia, Documentos, Instituciones, II, Sevilla 1974.

Dominguez Ortiz por su parte analizó el problema en "La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económico-sociales" en Seminario de Historia Social y Económica, Madrid, 1975.

Más recientes las obras de J. M Torras i Ribe, "La venta de oficios municipales en Cataluña", en Actas del IV Symposium

de Historia de la Administración, Madrid, 1984, la de Carlos Merchán Fernández, Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1988, y la de Encarnación García Monerri, La monarquía absoluta y el municipio borbónico, Madrid, 1991.

(49) Timoteo Domingo Palacio, Documentos del Archivo..., pág.278.

(50) A.V.M. Secretaria, 2-246-5.

(51) Listas de Regidores, A.V.M, Secretaria, 2-359-1.

(52) Mauro Hernández Benitez, "Reproducción y renovación de una oligarquía urbana: los Regidores de Madrid en el siglo XVIII" en Anuario de Historia del Derecho español, nº LVI, 1986, pág. 649.

(53) A.H.N. Consejos, Junta de Incorporaciones, leg. 11.580.

(54) A.H.N. Consejos, leg. 11.580.

(55) "Reglamento que deberá observarse en la Administración y distribución de los Caudales de los Propios, Sisas, Impuestos, Arbitrios y Rentas de Madrid, folios. 8 y 9. A.V.M. 2-353-43.

(56) A.V.M. 2-287-2.

(57) Véase la reproducción del Estatuto en el apéndice III del presente trabajo. El manuscrito original en A.V.M. 2-355-12.

(58) El "Estatuto de Madrid" fue confirmado y completado por los sucesores de Felipe III. Este fragmento pertenece a la

confirmación del Estatuto realizada en el año 1638 por Felipe IV. Una reproducción de esta confirmación en Carmen de la Guardia, El ayuntamiento..., pág. 91.

(59) También en mi memoria de licenciatura incorporé, en las páginas 97 y 98, una reproducción del Interrogatorio que la comisión de Estatuto pasaba a los testigos para que respondiesen. El interrogatorio, en el siglo XVIII, estaba impreso. Constaba de diez preguntas. La primera era la promesa de que los interrogados guardarían el secreto. La segunda tenía que ver con la edad y el lugar de nacimiento del candidato a regidor. La tercera, cuarta, quinta y sexta preguntas se preocupaban por la hidalguía del candidato. La séptima sobre el carácter del pretendiente. Nada menos que preguntaban al testigo: "Si saben que el dicho pretendiente es persona de buena vida y costumbres, de natural quieto y pácifico, y de una suficiencia y habilidad qual se requiere para exercer el oficio público de Regidor de esta villa". La octava y novena preguntas trataban de evitar la corrupción, para ello exigían que el candidato no tuviese parientes en el Ayuntamiento, ni nada que ver con los abastos de la Villa. La décima decía textualmene: "De público y notorio, pública voz y fama".

(60) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 788.

(61) "Reglamento que deberá observarse en la administración, recaudación y distribución de los caudales de los propios, sisas, impuestos, arbitrios y rentas de Madrid". Folios 8 y 9. A.V.M. 2-353-43.

(62) En el mismo reglamento del año 1766, en los folios 18, 19 y 20 se fijan las comisiones, que a partir de ese momento, obtendrán remuneración así como aquellas, que por

no tener ya ningun cometido, se quedan sin presupuesto. A.V.M. 2-353-43.

(63) Las fuentes para elaborar el cuadro de las comisiones han sido los expedientes titulados: "Representaciones en que la Villa de Madrid propone al rey los regidores que servirán sus comisiones", A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 786. y "Razón de los oficios de Regidores... con expresión de los sujetos que las sirven y sueldos". A.V.M. Secretaría, 2-317-8.

(64) A.G.S. Gracia y Justicia, leg.786.

(65) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 786.

(66)El Secretario de Gracia y Justicia contestó literalmente a Carlos III: "Extraoficialmente se sabe que el Reglamento se hizo por el Consejo y lo aprobó S.M. por la Secretaria de Despacho de Hacienda. De lo determinado por el Consejo en febrero de 1768 no consta en esta de Gracia y justiciaque diese cuenta el Consejo a S.M. ni obtenido su real aprobación". A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 786.

(67) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 788.

(68) A.V.M. Secretaria, 2-317-8

(69) Nos extendimos sobre las comisiones municipales en el apartado dedicado al SALARIO Y REMUNERACION DE LOS REGIDORES de este capítulo. La información procede del "Reglamento que deberá observarse en la administración, recaudación y distribución de los caudales de los propios, sisas, impuestos, arbitrios y rentas de Madrid", folios 8 y 9, A.V.M. 2-535-43.

(70) Las comisiones del Ayuntamiento de Madrid se elegían el primer día del año en "ayuntamiento" extraordinario. Se elegían Regidores para todas las comisiones tuviesen o no funciones que cumplir. El procedimiento no era el mismo para todas. Las consideradas de "mayor aprecio" (Alcalbalas, Cientos, Millones, Baronesa y Tasas de Casas) eran de "turno" es decir se establecía un orden entre los Regidores y cada año tenían que ocuparlas unos que no volverían a hacerlo hasta que todos no las hubiesen servido. El resto eran de "suertes". El procedimiento de elección era muy solemne. Uno de los Escribanos iba extrayendo de una arquilla bolas de plata que tenían grabados los nombres de los Regidores y las separaba en dos grupos el de los Regidores antiguos y el de los modernos introduciéndolas de nuevo en dos cántaras distintas. El Corregidor procedía a leer los nombres de las comisiones y se iban extrayendo una bola de cada cántara porque las comisiones las solían servir dos Regidores, uno antiguo y otro moderno. A.V.M. Secretaría, caja 247, exp. 95.

(71) B.M. "Comisiones y Patronatos de Madrid", Ms. 57.

(72) También vienen enumeradas las comisiones de Madrid en el leg. 786 del A.G.S. Sección de Gracia y Justicia.

(73) "Ceremonial o colección de Noticias de Madrid". A.V.M. Libro 150.

(74) "Ceremonial o colección de noticias de Madrid" A.V.M. Libro 150.

(75) A.V.M. Secretaría, Libro 212.

(76) B.M. Ms. 57.

(77) Con motivo de haber concedido Madrid el consentimiento para el servicio de los 18 millones con el resto del reino en 1619, además de las condiciones generales elevó otras, entre ellas nos interesa destacar la exigencia de Madrid de reducir a uno el número de protectores del Consejo y que este cobrase unicamente 50.000 mrs. B.M. Ms. 57.

(78) El capítulo 6 de esta obra se centra en las Reformas de Fernando VI. La presente información procede del A.V.M. Secretaría, Caja 397, exp. 129.

(79) A.V.M. Libros de Acuerdos de los años 1.768, 1.772 y 1.800.

(80) "Traslado de una Cédula del rey Alfonso XI nombrando los doce primeros Regidores de Madrid". Timoteo Domingo Palacio, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Madrid, 1.888.

(81) "Real Cédula de 16 de Noviembre de 1541", A.V.M. Secretaría, Caja 248, exp.68.

(82) A.V.M. Libros de Acuerdos de los años 1.768, 1.772 y 1.800.

(83) A.V.M. Secretaría, Caja 248, exp.68.

(84) "Auto del Consejo de 13 de septiembre de 1.609". A.V.M. Secretaría, caja 159. exp.18.

(85) "Real Orden de S.M. del 8 de abril de 1.806" A.V.M. Secretaría, caja 248, exp.68.

(86) A.V.M. Libros de Acuerdos de los años 1.768, 1.772 y 1.800.

(87) A.V. M. Secretaría, Libros de elecciones.

(88) A.V.M. Secretaría, Caja 356, exp. 11.

(89) Revisando las minutas de las elecciones tradicionales de los años 1.728 al 1.746, vemos que el oficio de Procurador General lo ejercía siempre el mismo regidor. A.V.M. Libros de Elecciones 42-44.

(90) "Reglamento que deberá observarse en la administración de caudales..." A.V.M. 2-353-43.

(91) El las residencias efectuadas a la corporación madrileña se enumeran las funciones que tenían que haber cumplido no solo el Corregidor y los Regidores sino también otros oficios municipales. Para las competencias del Procurador General de Madrid revisar la residencia tomada por el Corregidor entrante, marqués de Montealto al recién fallecido Marqués de Vadillo. A.H.N. Consejos leg. 42.647.

(92) El capítulo siete del presente trabajo analiza las Reformas de Carlos III y por supuesto los oficios de nueva creación.

(93) A.V.M. 2-317-8.

(94) A.H.N. Consejos, leg.42.647.

(95) A.V.M. 2-317-8.

(96) Toda la legislación que regulaba las elecciones municipales se encuentra en los Libros de elecciones de la Villa de Madrid. Además de la Sentencia de Montalvo (1.453), de la Concordia de Bobadilla (1.478) existieron una serie de ordenanzas elaboradas por la Corporación y aprobadas siempre

por el Consejo de Castilla. Esas ordenanzas cronologicamente son las siguientes: Ordenanzas del 30 de septiembre de 1493, Ordenanzas del 29 de septiembre de 1511 y Ordenanzas del 29 de julio de 1713.

(97) Intentaremos resumir el complejo porceso electoral de las elecciones tradicionales de la Villa. Los electores fueron siempre el Corregidor y los regidores de Madrid. Los candidatos a las dos fieldades tenían que cumplir una serie de requisitos: pertenecer al cuerpo de caballeros de la Villa y Corte y ser varón mayor de dieciocho años y vecino de Madrid. Pertenecer al cuerpo de caballeros de Madrid requería haber realizado un enorme "papeleo". El hidalgo debía presentar las Reales Provisiones expedidas por la Chancillería de Valladolid en el Ayuntamiento y la Corporación tras una laboriosa y larga investigación aprobaba o suspendía al candidato. Si el hidalgo había pasado con éxito los trámites quedaba inscrito en los Libros de Hidalguía de la Villa y podía gozar de todos los privilegios económicos y jurídicos que su condición llevaba aparejados. Entre ellos poderse presentar a las elecciones tradicionales de la Villa. Estas se celebran en el Ayuntamiento dividiendose Madrid en doce parroquias agrupadas en dos cuadrillas. La elección recaía cada seis años en una cuadrilla. El párroco de la parroquia que le tocaba tenía que enviar una lista de los parroquianos que cumpliesen los requisitos y se quisiesen presentar. Los fieles tenían que ser elegidos por unanimidad y si esta no se producía se recurría a las suertes. A.V.M. Libros de elecciones.

(98) El proceso para elegir a los alcaldes de la hermandad y de la mesta por el estado noble y por el llano también era complicado. Para los oficios de hidalguía el Corregidor y los regidores revisaban los libros de hidalguía del

ayuntamiento y elaboraban una lista con los hidalgos que no hubiesen disfrutado el cargo y procedían a la elección. Para los del estado llano se colocaban el día de San Miguel unos carteles en puntos fijos de la Villa y quién quería se apuntaba. Los regidores y el Corregidor tras revisar si los candidatos reunían las condiciones de edad y vecidad requeridas procedían a la elección. A.V. M. Secretaría, caja 356, exp.3 y caja 5 exp.188.

CAPITULO 4. GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA VILLA Y CORTE DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid había luchado mucho para lograr que la Corte permaneciese en la Villa. A finales del reinado de Felipe II, Madrid consideró que lo había conseguido y que era la sede estable del monarca y de las instituciones de la monarquía hispana. Pero la subida al trono de Felipe III, y sobre todo la ascensión de su valido, el duque de Lerma, ocasionó un nuevo traslado de la Corte. En 1601 Madrid vió salir al monarca y a los consejos con la intención de instalarse en Valladolid.

La decisión de trasladar la Corte inició una dura y costosa pugna entre las dos ciudades castellanas. Valladolid, para que la Corte siguiese en su recinto, y Madrid para atraerse de nuevo al rey y a sus instituciones. Este enfrentamiento fue seguido con entusiasmo y diversión por todos los castellanos de principios del XVII. El propio Cervantes aludía a la disputa entre las dos ciudades aspirantes a Corte. Así en un fragmento del Licenciado Vidriera uno de los niños le preguntaba al entonces loco licenciado:

"...Cuál era la mejor tierra. Respondió que la temprana y agradecida. Replicó el otro

-No pregunto eso sino cual es el mejor lugar: Valladolid o Madrid.

Y respondió:

-De Madrid los extremos; de Valladolid, los medios.

-No lo entiendo -repitió el que se lo preguntaba.

-Y dijo:

-De Madrid cielo y suelo; de Valladolid los entresuelos"(1).

El regreso de la Corte a Madrid se produjo en 1606 tras unas costosas negociaciones. Tanto la Corporación madrileña como la vallisoletana ofrecieron cuantiosas sumas a la corona para facilitar la decisión del monarca y del valido y lograr la permanencia de la Corte. En esta carrera Madrid venció por lo que la Casa Real y los Consejos volvieron a ocupar sus antiguos aposentos madrileños.

Madrid, para conseguir el regreso de la Corte, se había comprometido a pagar al rey un sexto del alquiler de todas las casas de la Villa durante diez años. También le había obsequiado al duque de Lerma con uno de sus regimientos(2). El Ayuntamiento madrileño, estaba feliz con su victoria y no se daba cuenta que con la Corte volvía la Sala de Alcaldes que tantos problemas le iba a causar a lo largo del Antiguo

Regimen.

La Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento, como en otro lugar señalamos, tenían competencias similares. Las dos tenían que gobernar y aplicar la justicia en la Villa y Corte. Pero la Sala desde el mismo momento en que, debido a las excelentes ofertas de la Corporación, regresó la Corte a la Villa, empezó a atribuirse como propias y exclusivas competencias que debía compartir con la institución municipal. Lo hizo porque se sentía fuerte frente a la Corporación que permanecía asustada ante la posibilidad de un nuevo alejamiento de la Corte.

La Sala actuaba con dureza olvidándose de la legislación vigente. Y el Ayuntamiento, aunque protestaba, permitía en cierta manera los abusos al no recurrir a ninguna instancia superior para reclamar que se cumpliesen las leyes y ordenanzas en las que se le reconocía facultad para actuar en ese área de competencia.

La Sala aprovechó bien su momento de fuerza y logró asumir de forma exclusiva competencias que en todos los lugares del reino ejercían los ayuntamientos y que en Madrid tendría que haber compartido con la Corporación.

La primera usurpación de la Sala de Alcaldes ocurrió pronto y fue en un área importante: la de elaborar y promulgar los bandos, pregones o autos de buen gobierno en la Villa y Corte. Así en 1618, la Sala de Alcaldes promulgó un bando afirmando que sólo ella podía dictar los autos

relativos al gobierno político y económico de la Corte. Esta disposición sorprendió negativamente al Corregidor y a sus Tenientes que hicieron caso omiso de la orden. El Corregidor promulgó un nuevo auto relativo a la forma y precio en que se debían vender determinados productos alimenticios. Pero la Sala estaba dispuesta a llegar hasta el final y dictó un nuevo bando en donde ordenaba:

"que el dicho pregón (el del Corregidor) se borre y no se use de ninguna manera de el y se notifique al dicho corregidor de aquí en adelante no haga dar semejantes pregones ni otros que toquen a mantenimientos ni gobierno de esta corte so pena que se proceda contra el"(3).

El Corregidor y sus Tenientes no estaban dispuestos a ceder facilmente la facultad de promulgar Autos de Buen Gobierno y no hicieron ningún caso a lo ordenado por la Sala. La reacción de la Sala fue sorprendente y desmedida. La Sala de Alcaldes, haciendo un alarde de fuerza, mandó multar y apresar al Corregidor y a sus dos tenientes. El Corregidor y sus ayudantes fueron conducidos por los alguaciles de la Sala frente a ella y amenazados por los Alcaldes. Así se dirigió la Sala al presidente de la Corporación madrileña:

"que de aquí en adelante cuando se les notifique (al Corregidor y tenientes) qualquier auto de la Sala tengan el respeto que se debe suplicando dellos y no apelando con apercibimiento que no lo haciendo y cumpliendo se proceda contra ellos con mayor razon "(4)

Y procedieron. El Corregidor se negó a aceptar el mandato de la Sala y esta lo arrestó, eso sí, en su domicilio, pero con el agravante de incluirlo en el libro donde se anotaban las condenas dictadas por la Sala.

En una sociedad de honor, como era la sociedad española del siglo XVII, la mancha que el apresamiento de un Corregidor producía era la mayor humillación que la Sala podía haber infringido a la Corporación madrileña.

El triunfo rotundo de la Sala frente al Ayuntamiento, sobre quien debía elaborar y promulgar los Autos de Buen Gobierno, sirvió para que la Sala se apropiase de otras atribuciones que en las demás villas y lugares del reino competían a los Ayuntamientos.

Los Autos de Buen Gobierno, promulgados por la Sala de Alcaldes, trataban de multitud de asuntos pero, sobre todo, se centraron en normas referentes a los distintos gremios de la Corte, así como a las tabernas y mesones de Madrid. El primer "Pregón General para la buena gobernación de esta Corte" fue promulgado por la Sala de Alcaldes en 1585. El siguiente en 1594 sucediéndose muchos a lo largo del siglo

XVII y XVIII (5).

Los pregones se parecían mucho en organización y contenido. Examinando el primero, el de 1585, que sirvió de modelo para todos los posteriores, vemos que de los 79 puntos del pregón, 63 trataban de los distintos oficios gremiales y de los mesoneros y taberneros de la Corte. Si la Sala se encargaba de promulgar las disposiciones referentes a los gremios y a las tabernas y mesones de Madrid era lógico que todo lo relativo a gremios y mesones se resolviese en la Sala de Alcaldes. Así, desde el triunfo frente al Corregidor en 1618, la Sala de Alcaldes se encargó de forma exclusiva del control sobre los gremios de Madrid. La aprobación de las ordenanzas gremiales, las visitas a los gremios, los juramentos de los veedores eran competencia exclusiva de la Sala de Alcaldes. Lo mismo ocurrió con las tabernas, mesones y bodegas de la Corte. La Sala debía otorgar las nuevas licencias para abrir tabernas, mesones o bodegas. Tenía que visitarlas y controlarlas.

La Sala de Alcaldes supo aprovechar el momento de indecisión municipal y logró asumir de forma "privativa" competencias claves.

La Sala, después del éxito obtenido por su primer golpe de fuerza frente a la Corporación, intentó seguir aplastando y humillando al Ayuntamiento como medio de ampliar sus competencias. Pero la Corporación no estaba dispuesta a permitirlo.

En 1650, la Sala de Alcaldes se atrevió de nuevo a apresar al Corregidor de Madrid. Esta vez la causa no fue un conflicto de competencias sino un pulso claro entre los dos organismos.

El Corregidor iba paseando por la calle y se cruzó con dos alguaciles de la Sala de Alcaldes que, según el, "no le saludaron con el debido respeto". Al tratarse sólo de alguaciles, el Corregidor se sintió con capacidad para apresarlos. Fue un claro error de apreciación del presidente de la Corporación. La Sala no iba a permitir semejante afirmación de poder municipal y mandó a uno de sus alcaldes junto a dos alguaciles para que arrestaran al Corregidor en su casa. También decidió incluir su nombre en el libro donde se recogían las condenas dictadas por la Sala.

El Ayuntamiento, en 1650, estaba seguro que la Corte no se iba a trasladar de nuevo. Sabía que Madrid iba a ser sede definitiva del rey y de sus instituciones de gobierno y se atrevía a expresarse, cosa que no ocurrió en 1618. El Corregidor de Madrid y toda la Corporación no querían aceptar esta nueva humillación y protestaron airadamente al Consejo de Castilla. El Ayuntamiento afirmaba y con razón, si hacemos caso a la legislación vigente, que para apresar a un Corregidor se necesitaba auto del Consejo de Castilla y aunque la Sala aseguraba que había sido el Consejo, en Sala de Gobierno, quien había decidido el apresamiento del Corregidor, el Ayuntamiento sabía que la Sala de Alcaldes

mentía. El apresamiento había sido muy rápido y sin ningún documento que mostrase la intervención del Consejo. El Consejo mandó liberar al Corregidor de Madrid pero nunca reconoció, por lo menos públicamente, que no hubiese habido auto del Consejo ordenando el apresamiento. Era lógico porque la Sala estaba mucho más próxima al Consejo que la institución municipal y el Consejo, por lo menos en el siglo XVII, no quería desautorizarla(6).

Pero lo importante es que el Consejo de Castilla había intervenido en la vida local madrileña. La exigencia por parte del Ayuntamiento de un arbitraje del Consejo de Castilla en los problemas de competencias con la Sala de Alcaldes marcó un punto de inflexión en la forma de gobierno y administración de justicia de la Villa y Corte.

Desde 1650, cada vez que se inició un problema entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento, intervenía el Consejo promulgando un auto de gobierno que solucionaba el problema surgido. Los autos de gobierno del Consejo fueron separando las competencias entre los dos organismos. El problema radicó en que los autos de gobierno no invalidaban la legislación anterior que reconocía la participación de las dos instituciones en ese área de competencia. Lo normal era que la institución que había salido perjudicada por el auto de gobierno, pasado un tiempo, reclamase de nuevo la atribución perdida. Y los conflictos se sucedían desesperando al rey y a sus ministros. Y sobre todo

complicando las cosas mucho para los historiadores que tratamos de dilucidar que institución velaba por los distintos aspectos del gobierno y la administración de justicia de la Corte.

4.1. COMPETENCIAS "PRIVATIVAS" DE LA SALA DE ALCALDES Y DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA.

Los autos de gobierno y la costumbre marcaron áreas de competencia exclusiva o utilizando el lenguaje de la época "privativas" de cada una de las dos instituciones. La Sala se encargó, como ya hemos señalado, privativamente de dictar los autos de buen gobierno, de todo lo referente a los gremios y de lo relativo a las bodegas, mesones y tabernas de Madrid. También la Sala se encargó de forma privativa del orden público. La Villa estaba dividida en cuarteles y al frente de cada uno había un alcalde de Casa y Corte que, junto a sus alguaciles, debía rondar por el cuartel para prevenir disputas, visitando las bodegas y mesones y también los lugares de diversión pública. Los Alcaldes estaban presentes en los corrales de comedias así como en las plazas de toros y en los lugares donde se celebraba cualquier clase de festejo. Ahora bien, si los Tenientes de Corregidor o el Corregidor sorprendían "in fraganti" a cualquier delincuente

tenían capacidad para apresarlos. Pero ésta era la única concesión a la Corporación en lo relativo al orden público.

La Sala de Alcaldes, por lo menos en el siglo XVIII, se había atribuido una nueva función honorífica: la de presidir las obras de teatro que se celebraban en los corrales de comedias. Era una atribución que las leyes y ordenanzas reconocían como propia del Corregidor y que la Sala había sabido conseguir. Así nos lo cuenta el Ayuntamiento de Madrid en una representación enviada a Fernando VI en el año 1754.:

"La concurrencia a los corrales de comedias de un señor alcalde tubo principio...a mediados del siglo passado, por providencia del consejo por solo el fin de evitar los disturbios y que en ellos hubiere la debida quietud, para lo qual estaba el señor alcalde con su ronda, sentado en una silla en el tablado; y modernamente, por no parecer este sitio el mas decente se pone en uno de los dos alojeros, y aunque su comission según el establecimiento solo fue para evitar disturbios, despues ha querido extender sus facultades con el apoyo de la superioridad del consejo"(7).

Una representación de la La Sala de Alcaldes acompañaba a los miembros del Consejo de Castilla a la consulta de los viernes en palacio.

La Sala tenía otras competencias exclusivas que eran residuos de las funciones que tuvieron los Alcaldes de Corte a finales de la Edad Media y que la aproximaban mucho a la figura del rey. Dos alcaldes en representación de la Sala de Alcaldes estaban de capilla. Es decir debían acompañar al rey en sus salidas públicas y en las ceremonias religiosas. Los Alcaldes, en la comitiva, debían situarse delante de los individuos que integraban la Casa Real y hacer el trayecto a caballo.

La Sala también debía organizar los viajes del monarca. Un alcalde de Casa y Corte acompañaba al rey en todos sus desplazamientos, precediendo al cortejo real y examinando que todo estuviese en orden. La Sala de Alcaldes, además, revisaba el itinerario y notificaba a todos los corregidores y justicias implicados las fechas de la visita del rey para que tomaran las medidas oportunas(8).

El Ayuntamiento había logrado mantener algunas atribuciones exclusivas a pesar de los envites de la Sala. La primera era la de la limpieza y empedrado de la Villa. La Villa se dividía en trece cuarteles y al frente de cada uno un comisario cuartelero, siempre un regidor de Madrid, velaba por el buen estado de las calles y plazas.

También tocaba a la Corporación velar por la buena disposición y funcionamiento de lo que llamaríamos obras públicas. Las fuentes, caminos aledaños a la Villa y los puentes eran competencia del Ayuntamiento que la ejercía a

través de una junta presidida por el Corregidor e integrada por Regidores de la Villa.

Además correspondía a la institución de la Villa la administración de los propios y arbitrios municipales. El mal funcionamiento de la hacienda municipal madrileña, sin embargo, produjo continuas intervenciones del Consejo de Castilla. Prácticamente, desde el mismo momento de la instalación de la Corte, las Juntas que se encargaban de la administración de los propios y sisas municipales estuvieron presididas por un consejero de Castilla. En el siglo XVIII la intervención del Consejo fue todavía mayor. Desde 1713, el Consejo de Castilla elaboró un reglamento enumerando los ingresos de la Villa y fijando el destino que se les debía dar. En 1760 se creó para todo el reino la Contaduría General de Propios y Arbitrios, entidad adscrita al consejo de Castilla, que estableció a través de reglamentos detallados un control exhaustivo en la gestión económica de todos los municipios del reino.

El reglamento para Madrid, se promulgó en 1766 y establecía al mínimo detalle las cantidades que Madrid ingresaba y el destino que había que darles. Aunque siguió existiendo la Junta de Propios y Arbitrios esta era nada más que una simple ejecutora de lo que el reglamento establecía. El Corregidor además, como presidente de la Corporación, debía informar anualmente de la práctica seguida y justificar cualquier incumplimiento de lo establecido en el

reglamento(9).

El Ayuntamiento se encargaba de todo lo relativo a su organización interna. La convocatoria y celebración de las elecciones de los oficios electivos de la villa, la organización de los "ayuntamientos" o reuniones periódicas de la corporación, así como los sorteos de las comisiones en que se dividía el ayuntamiento para afrontar sus obligaciones eran competencia municipal. De todas formas tampoco escapó el ayuntamiento de un control exhaustivo de la corona en sus asuntos internos. El ayuntamiento tenía que enviar al rey cada dos años la lista de los integrantes de las comisiones para su aprobación. Sin el placet regio las comisiones no podían trabajar(10).

El Ayuntamiento de Madrid había visto pues usurpadas algunas funciones por el hecho de ser la Villa sede de la Corte pero eso también le ocasionó disfrutar de atribuciones que ninguna otra ciudad castellana gozaba. Una de ellas no era agradable por costosa. El Ayuntamiento debía encargarse "de los cuarteles y utensilios de las compañías de Guardias de Corps, de los regimientos de la infantería valona y de la franquicia de la guardia de alabarderos"(11). El Ayuntamiento de Madrid tenía la obligación de afrontar los gastos de mantenimiento de los cuarteles y provisión de armas de toda la guardia real. En el siglo XVIII la guardia real la integraban una compañía de guardias alabarderos, cuatro compañías de guardias de corps, un regimiento de

guardias de infantería valona y una brigada de carabineros(12). Este gasto lo compartía la corporación madrileña con los ayuntamientos de las villas situadas dentro de las diez leguas que rodeaban a Madrid.

Si el mantenimiento de cuarteles y el abastecimiento de "utensilios" para la Guardia Real no era una competencia que enorgulleciese al Ayuntamiento de Madrid, no ocurría lo mismo con todo lo relativo a las compañías de comedias del reino. Desde el nombramiento del Marqués del Rafal como corregidor de Madrid, como en otro lugar señalamos, la Villa tenía que controlar a las compañías de cómicos. Tenía que otorgar las licencias para la formación de compañías, dar los permisos a quienes pretendían ser actores y lo que era más importante tenía que aprobar las obras escritas por los autores teatrales. Esta atribución la ejercía de nuevo a través de una junta, la Junta de Comedias que presidía el corregidor y estaba integrada por regidores(13).

4.2 COMPETENCIAS COMPARTIDAS POR LA SALA DE ALCALDES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Los autos y la costumbre también señalaron una serie de atribuciones "acumulativas" entre los dos organismos. Estas competencias compartidas por la Sala y el Ayuntamiento

fueron una fuente de conflicto a lo largo del Antiguo Régimen. Las intervenciones del Consejo debían ser continuas y sus disposiciones extremadamente minuciosas. Las dos atribuciones compartidas por la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento fueron los abastos y la administración de Justicia.

4.2.1 ABASTOS

El abastecimiento de Madrid fue un asunto difícil y complicado a lo largo del Antiguo Régimen. El Consejo de Castilla se había reservado para sí la organización del abastecimiento de la Corte, pero había reconocido a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento capacidad para que, una vez situados los productos en Madrid, elaborasen "reglamentos de posturas en los géneros, abastos y mantenimientos que conforme a los autos acordados, órdenes, resoluciones del consejo y según costumbre corresponden a cada una". Estos reglamentos los aprobaba mensualmente el Consejo. La Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento también debían velar para que estas disposiciones relativas a la calidad y precio de los productos se cumpliesen(14).

Las dos instituciones por lo tanto tenían capacidad para fijar y revisar las posturas de los "mantenimientos"

que viniesen a la Corte y lo normal fueron las disputas y los enfrentamientos entre ellas. El Consejo, como árbitro en las pugnas entre la Sala y el Ayuntamiento, no cesó de idear soluciones para mejorar algo tan importante en el Antiguo Régimen como la buena organización de los abastos de la Corte de la monarquía hispana. Así fue formulando una curiosa y compleja telaraña que complicó mucho las cosas.

La Sala y el Ayuntamiento se habían repartido los productos del mercado. Así la primera se encargaba de tasar y repesar la caza y aves vivas, los pescados frescos y escabechados, el pan, el vino, el tocino en témpano, los jamones y chorizos, los despojos del cerdo, las criadillas de ternera, los melones de Valencia, los espárragos y otros géneros de "regalo"(15).

Los productos que tocaban a la Villa eran más comunes. La Villa se encargaba del azúcar y la pastelería, las frutas "normales", las especias, los frutos secos, las legumbres, los escabeches de aceitunas y alcaparras, las salchichas, los adobos, de las mantecas de vacas de Leon y Espinosa, las natas, los turrónes, el aceite, el jabón, y las cebollas(16).

Esta división no era tan sencilla. Por ejemplo, hemos dicho que los pasteles era un producto por el que velaba el ayuntamiento. Pero otras cosas que se hacían aprovechando el horno de las pastelerías y que hacían los pasteleros madrileños del siglo XVIII, como empanar las aves y los

cabritos que los madrileños habían comprado pero que llevaban a preparar a sus hornos, dependían de la Sala(17).

Cada uno de las dos instituciones debía vigilar repesando y midiendo que las condiciones de venta que ellas fijaban y aprobaba el Consejo para sus respectivos productos se cumpliesen. Tenían capacidad para juzgar y castigar a los infractores. Pero el problema es que sólo se preocupaban por "sus" productos. Pasaban por alto todas las infracciones de los artículos que tenía que vigilar la otra institución. Nos atreveríamos a afirmar, conociendo la rivalidad existente entre la Sala y el Ayuntamiento, que en realidad se alegraban de los defectos en los productos de la otra institución.

En la Sala de Alcaldes era el alcalde semanero el que se encargaba de los asuntos relacionados con los abastos que le correspondían. Sus funciones eran muchas y nos las cuenta con asombrosa precisión los alcaldes Elezárraga y Matheu en su obra Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde(18). Lo primero que debía hacer el alcalde elegido como semanero era nombrar a los alguaciles y porteros que le ayudarían en su misión.

Todos los días el alcalde semanero y sus ayudantes "deben madrugar" y dirigirse a la Plaza Mayor, concretamente a la Casa de la Carnicería donde se encontraba en el siglo XVIII el Peso Real. Allí asistía al repeso de los productos que tocaban a la Sala y ponía los precios

siempre de acuerdo con el reglamento elaborado por la Sala y aprobado por el Consejo, y ordenaba pregonarlos y fijarlos en lugares públicos de la Villa. Los días de pescado el alcalde debía separar los mejores para la Casa Real y los altos funcionarios de la Corte. También debía repartir el pescado entre las distintas pescaderías de la villa teniendo en cuenta el número de familias que allí se abastecían. Debía visitar los días de fiesta los mataderos, rastro, carnicerías y plazuelas para velar que se cumplía con lo dispuesto por la Sala.

Cuando en sus rondas el semanero y sus ayudantes encontraban productos en mal estado "si se pueden aprovechar los manda a los pobres de la cárcel u hospital sino lo entierra a bombo y platillo para que sirva de escarmiento".

Las infracciones las juzgaba el semanero verbalmente aunque los infractores podían ir siempre a reclamar a la Sala de Alcaldes. También los comerciantes que no estaban de acuerdo con los precios fijados por la Sala podían reclamar en la Sala de Alcaldes.

El Ayuntamiento tenía a sus dos fieles ejecutores para encargarse de los abastos que tenían que controlar. Los oficios de fieles ejecutores de Madrid fueron creados por el rey Felipe II en el año 1.569 "con jurisdicción y facultad para denunciar y sentenciar las causas sobre calidad, peso y precio de los comestibles y otros géneros". Estos oficios fueron comprados por la Villa en 1596 y desde entonces

ejercidos por turno por dos de sus regidores. Los dos Regidores Fieles eran ayudados por los Fieles de Vara, oficios elegidos anualmente en el Ayuntamiento(19).

Del mismo modo que el alcalde semanero, los dos fieles ejecutores de Madrid y sus ayudantes tenían "que madrugar" y junto a un escribano de número y algunos porteros acudir a la Plaza Mayor para asistir en la Casa de la carnicería a los repesos de los abastos que eran competencia municipal. También tenía que fijar sus precios y calidades en sitios visibles y pregonarlos. Rondaban por las plazuelas, rastro y tiendas para vigilar que sus condiciones se cumplieran. Los juicios por las infracciones se veían en el Juzgado de los Fieles ejecutores de Madrid. El Juzgado lo constituían los dos regidores fieles y uno de los tenientes de corregidor. Se reunían tres veces a la semana en la sala de vistas de la cárcel de la Villa que estuvo desde el siglo XVII en el mismo edificio en que hoy día está el Ayuntamiento de la Villa de Madrid. Las apelaciones de las sentencias dictadas por el juzgado de los fieles ejecutores se dirigían al Consejo de Castilla(20).

Tanto el alcalde semanero como los regidores fieles debían informar diariamente sobre el estado de los abastos de la Corte a la Sala de Alcaldes para que ésta informase a través del Pliego Diario al rey. Los Pliegos Diarios del siglo XVIII se conservan en el Archivo de Simancas y siempre comienzan relatando la situación de los abastos de la Corte.

Así, por ejemplo, este era el inicio del remitido el 24 de marzo de 1765 a Carlos III:

"La Plaza Mayor esta abastecida de Pan su precio a 10 quartos: en los puestos panecillos a 12 maravedies; en la carnicería Carnero, Baca, tocino y Despojos; en la calle del Pulgar Pescado seco, y remojado, salmon salado, huebos y otros géneros: en las mesas frutas y legumbres del tiempo.

Por la memoria de la real Alhondiga resulta haberse pesado el dia de ayer 90 fanegas de Arina de flor a 62 reales cada una(21)"

La división de los abastos entre los que correspondían a la Sala y los que correspondían a la Villa fue causa de innumerables conflictos durante el Antiguo Régimen. Había muchas autoridades vigilando las calles, distintos juzgados para controlar las infracciones, pero trabajaban a medio rendimiento. Sólo tenían que preocuparse por determinados productos y si observaban infracciones en abastos que no les correspondían normalmente no se lo comunicaban entre sí. No sólo era una locura sino lo que es peor una locura que funcionaba mal.

Los enfrentamientos entre las dos instituciones por asuntos de abastos fueron constantes. El límite de los productos entre una institución y otra se fue construyendo a

lo largo de siglos y siempre quedaron situaciones confusas que llevaban a la disputa. Lo normal es que la Sala revisase precios y calidades de los productos alimenticios considerados de lujo mientras que el Ayuntamiento fijaba los precios de los alimentos cotidianos. Pero precisar que artículos eran de "regalo" y cuales necesarios no era fácil. Así, por ejemplo, en el año 1639 la Sala de Alcaldes exigió fijar las posturas de las cebollas a lo que el Ayuntamiento no estaba dispuesto. La Corporación entendía que las cebollas no eran desde luego un artículo de "regalo" sino uno más bien humilde y de primera necesidad. Tuvo que resolver como siempre el Consejo de Castilla y falló a favor de la Corporación(22).

En 1665 la disputa estalló por las fresas. A la Villa correspondía fijar el precio de las frutas a excepción de las de lujo. Los alcaldes reclamaron las fresas para ellos por considerarlos "frutos exquisitos". El Consejo dió en este caso la razón a la Sala.

El Ayuntamiento y la Sala de Alcaldes no sólo se enfrentaron por los productos que cada institución tenía que controlar. La Sala de Alcaldes, incumpliendo las ordenanzas y autos del Consejo, recibía las apelaciones de las sentencias dictadas por el Juzgado de Fieles Ejecutores de la Villa. Las sentencias debían apelarse ante el Consejo de Castilla, pero los madrileños conociendo las malas relaciones que tenían la Sala y la Corporación, llevaban sus

apelaciones a la Sala y ésta gustosamente las recibía. En muchas ocasiones el Consejo de Castilla recordó a la Sala que ésa no era una atribución suya. En 1677 fue la propia Corona la que en un Real Decreto señaló:

"Que la Sala no conozca por ahora de las apelaciones y recursos de las causas que hiciese ...el Corregidor de Madrid en lo tocante a mantenimientos, posturas y pesos de ellos, en la parte que toca y que las apelaciones de sus autos vengan al Consejo" (23).

Los problemas eran continuos y el Consejo de Castilla estaba saturado. No quería seguir controlando los abastos ni continuar resolviendo disputas y enfrentamientos entre la Sala y el Ayuntamiento(24).

Muchas veces el Consejo de Castilla había expresado al rey su repulsa por tener la responsabilidad sobre los abastos de Madrid así, por ejemplo, en 1743 el Consejo afirmaba:

"que el manejo de tales abastos no es compatible con las serias ocupaciones del Consejo y pertenece a la economía particular de la justicia y del ayuntamiento"(25).

Las quejas del Consejo fueron escuchadas y el monarca y sus ministros decidieron crear en 1743 una Junta, la Junta de Abastos, para encargarse "privativamente" de todo lo concerniente a los abastos de la Corte. La Junta la integraban el Gobernador del Consejo de Castilla, el fiscal del mismo, el Corregidor de Madrid, el Procurador General de la Villa, un ministro del Consejo de Hacienda y un secretario que era un oficial de la primera mesa de la Secretaría de Gracia y Justicia. Contaban además con la ayuda de cuatro alguaciles de la Sala de alcaldes de Casa y Corte(26).

La junta, como hemos señalado, conocía privativamente de todo lo concerniente a los abastos de Madrid "con las amplias facultades convenientes a este fin y con inhibición del Consejo, que solo deberá conocer por apelación de los recursos de mera justicia"(27).

El Consejo había logrado sus objetivos y parecía que por fin se libraba de los engorros del abastecimiento de la Villa y Corte. La Sala y el Ayuntamiento, sin embargo, según la Real Cédula de creación de la Junta de Abastos, continuarían fijando las condiciones de venta de sus respectivos "mantenimientos", aunque solo podían hacerlo una vez al mes teniendo además que remitir a la Junta las posturas fijadas para su aprobación.

La Junta de Abastos, que estuvo funcionando desde 1743 a 1766, con la interrupción del año 1746 en que estuvo en

vigor la experiencia del Gobierno Político y Militar de Madrid, funcionó mal y lo que es más grave tuvo enormes pérdidas. La Junta no terminó con los enfrentamientos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento, las dos instituciones siguieron revisando las condiciones de venta de sus respectivos productos, y por lo tanto enfrentándose. Además la Junta era la responsable de los abastos de la Villa y Corte cuando estallaron los motines de 1766. Una vez que los amotinados habían sido aplacados, entre otras muchas cosas, Carlos III decidió la supresión de la Junta de Abastos. Así por Real Decreto de 24 de Marzo de 1766 se suprimió la Junta de Abastos, "mandando que la provisión de este pueblo corra por las mismas manos y medios que antes de su establecimiento"(28).

El problema estuvo en saber como funcionaban los abastos antes de la creación de la Junta de Abastos. El fiscal del Consejo de Castilla, sin saber que resolver envió una consulta al Consejo, a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento de Madrid. Las respuestas nos indican que nadie, después de los sucesos de 1766, quería la responsabilidad de los abastos de la Villa y Corte.

El Consejo de Castilla en su respuesta a la petición del fiscal aseguraba "que el Consejo atiende tranquilamente a otros graves e importantes asuntos. Este en lugar de ser carga se devuelve materia util de comercio al vecindario de cada ramo de abasto...", es decir, el Consejo no quería

saber nada con el abastecimiento de la Corte. Y además tenía sus ideas sobre quién debía responsabilizarse en 1766 de los abastos de Madrid. Así continuaba el Consejo:

"Lo primero se debe recomendar mucho al Corregidor y al Ayuntamiento de Madrid, para que por manera alguna falte el abasto y cuiden por quarteles los regidores de velar e inquirir, haciendo el Consejo a la Sala el mismo encargo: de suerte que cesando competencias todos de acuerdo caminen a un propio fin guardandose la armonía que pide el bien común y que en tiempos anteriores a sido poco favorable y que dió motivo a pensar en juntas y otras administraciones que no han producido mejores efectos"(29).

El Consejo de Castilla quería que fuesen el Corregidor y el Ayuntamiento, junto a la Sala de Alcaldes, los que se ocupasen del abastecimiento de Madrid. La Sala, sin embargo, en 1766 justo después de los motines no tenía ningún interés en asumir la responsabilidad de los abastos.

La estrategia de la Sala de Alcaldes fue doble. Por un lado no quiso mostrar los papeles que había en sus archivos sobre abastos de la corte. Así afirmaba que había muchos "inconvenientes que pueden seguirse de extraer de las oficinas de la Sala los expedientes originales en punto de abastos de esta corte, que les están pedidos". La Sala

recomendaba que mucho mejor que mostrar sus expedientes sobre los abastos era "que la Sala dicesse comisión a dos alcaldes para que reconociesse los mismos expedientes y demás decretos y ordenes que hubiesse en el asunto y de acuerdo con ella executassen un informe methodico y ordenado". Los alcaldes comisionados elaboraron un informe negando descaradamente haber tenido alguna responsabilidad en materia de abastos. Los alcaldes afirmaron que "en esta materia (los abastos) no ha tenido jamás otra intervención la Sala que la que corresponde a un executor de Providencias gubernativas". La Sala, además, en 1766 estaba orgullosa de no tener nada que ver con los abastos de productos cotidianos que tanto había ambicionado. Así afirmaba que toda "cosa necesaria para la vida humana, como es el pan, la carne, el carbon, aceite, jabon...no puede dejar de hacer presente la sala que lo mas de ello o todo es preciso se halle ... en la escrivanía de Gobierno del Consejo no pudiendo tener la Sala otra cosa que lo que del Consejo hubiera dimanado". Por lo tanto, según la Sala, toda la responsabilidad sobre los abastos era del Consejo de Castilla(30).

Si el Consejo de Castilla no quería, después de los sucesos de 1766, ninguna responsabilidad sobre los abastos de Madrid y la Sala de Alcaldes tampoco, no es de extrañar que el fiscal Campomanes dedujese que era el Corregidor y el Ayuntamiento de la Villa el organismo que privativamente

debía de velar por el buen funcionamiento de los abastos de la Corte. Así, los abastos de Madrid dejaron de ser un asunto "acumulativo" entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de la Villa, aunque supervisado por el Consejo y se convirtió en un asunto "privativo" del Corregidor y el Ayuntamiento.

Es el Corregidor José Antonio de Armona quien nos cuenta en sus memorias como le fue al Ayuntamiento en su nuevo cometido:

"Entro a manejarlos (los abastos) con fondos sumamente disminuidos, en general y en particular, porque la junta estaba debiendo 21 millones...Madrid tuvo la administración pública y la arregló en lo posible, aprovechó bien los primeros diez años que fueron buenos, especialmente en los ramos de carne, tocino y aceite...

Pero los años siguientes hasta el 19 de su administración fueron malos, unos más que otros. Las posturas que corrieron en ellos, inferiores al costo y costas de cada ramo, hicieron un descalabro grande a sus fondos... En fin se acordó que la diputación de los cinco gremios mayores...los tomase en arrendamiento al mayor beneficio posible, y sobre todo a la mayor seguridad"(31).

No fue exitosa como vemos la gestión municipal por lo que a todos les pareció bien el arrendamiento a los Cinco Gremios Mayores de Madrid de todo lo concerniente a los abastos de Madrid.

4.2.2. JUSTICIA

La otra materia "acumulativa" entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de la Villa fue la administración de justicia en la Villa y Corte. En Madrid existieron a lo largo del Antiguo Régimen dos juzgados: el de los Alcaldes de Casa y Corte y el de los Tenientes de Corregidor.

La Sala de Alcaldes tenía jurisdicción civil y criminal sobre la Corte y su Rastro, es decir, los pueblos y lugares que se hallaban dentro de las cinco leguas que rodeaban Madrid. Aunque no todos los pueblos que se encontraban dentro de las cinco leguas estaban sometidos a la jurisdicción de la Sala sí lo hacían la mayoría. Había, claro está, lugares y villas exentas por escapar a la jurisdicción real. En el siguiente mapa señalamos los pueblos, que por estar dentro del Rastro de la Corte, estuvieron sometidos a la Sala de Alcaldes y aquellos que, a pesar de su situación, escaparon a su control.

MAPA 4. I (32) LUGARES Y VILLAS DENTRO DE LAS CINCO LEGUAS QUE RODEABAN MADRID.



- Pueblos bajo la jurisdicción de la Sala de Alcaldes.
- x Pueblos dentro de las cinco leguas pero exentos.
- Límite de la actual provincia de Madrid.

En 1792, Carlos IV amplió el Rastro de la Corte a diez leguas(33).

La Sala tenía sobre su territorio jurisdicción "absoluta" en materia criminal porque sus sentencias no podían ser apeladas ante otra institución. Sólo las sentencias de muerte eran revisadas por una instancia

superior. El propio rey, a través de la Cámara de Castilla, revisaba y si lo creía oportuno alteraba las sentencias de muerte promulgadas por la Sala.

La Sala de Alcaldes era también tribunal de apelación. Los habitantes de Madrid o de los lugares incluidos en el Rastro de la Corte podían ser juzgados en primera instancia indistintamente por la Sala de Alcaldes o por las justicias ordinarias de sus pueblos. Ya hemos visto que las sentencias de la Sala eran "absolutas" pero, sin embargo, las sentencias en materia criminal dictadas por los Tenientes de Corregidor de la Villa de Madrid o por los alcaldes de los lugares de las cinco leguas podían apelarse ante la Sala de Alcaldes(34).

Todas las mañanas los alcaldes se reunían en un recinto de la Cárcel de Corte para celebrar las vistas y determinación de las causas criminales. Los alcaldes, sin embargo, trabajaban solos. Cada uno de los alcaldes llevaba determinadas causas y sólo se recurría a la Sala Plena para aprobar o suspender la sentencia propuesta por el alcalde. Así por ejemplo, examinando la información judicial que la Sala de Alcaldes incluía una vez a la semana en el Pliego Diario que remitía al rey, podemos saber la cantidad de causas criminales que tramitaba cada alcalde:

Cap.4 Gobierno y Administración de Justicia

CUADRO 4.I(35) RELACION DE CAUSAS CRIMINALES TRAMITADAS POR EL JUZGADO DE CORTE (MARZO DE 1765).

NOMBRE DE LOS ALCALDES:	DIA 7	DIA 14	DIA 26
Manuel de Azpilicueta:	5	5	3
Nicolas Blasco Orozco:	6	7	6
Felipe Cedallos:	4	4	3
*Agustín de Leiza:	1	4	3
Juan Moreno	-	-	2
Manuel Ramos Crespo:	1	2	3
Juan Esteban Salaberri:	4	8	9
Antonio de Sesma:	-	1	1
-----	---	---	---
Nº Total de causas	21	31	30

Los alcaldes, por lo tanto, dirigían solos las fases iniciales del proceso penal. Los Alcaldes se constituían en Sala plena para decidir la sentencia una vez escuchado el informe del alcalde responsable del caso quién a su vez proponía sentencia. La Sala votaba la propuesta y la sentencia se decidía por mayoría simple de votos. A veces, sin embargo, las cosas se complicaban. Veamos uno de los casos tramitados por la Sala de Alcaldes en el año 1785.

Agustín Romero era un soldado del regimiento de Murcia que había falsificado moneda, junto a otros compañeros, aunque si hacemos caso de las palabras de su abogado defensor más bien lo que habían hecho era una burda imitación:

" que lo que han hecho no es moneda; pues no tiene cordoncillo, peso figura, ni metal del que se fabrican; siendo solo de evillas viejas de estaño, por lo que es una cosa tan informe como vaciada en un poco de arena y tan fázil de discernir, que a la más pequeña advertencia estaba conocida."

No pensó de la misma manera el Alcalde de Corte que llevaba el caso y propuso como sentencia para Agustín Romero la "pena ordinaria de muerte y fuego". La Sala plena votó pero "después de dos discordias hay cinco jueces que confirman la sentencia... y otros cinco que votan la extraordinaria de presidio". Estaba claro que los alcaldes eran incapaces de llegar a un acuerdo. Estos "empates" se resolvían normalmente con un ministro del Consejo de Castilla "a quien es costumbre llamar en tales casos"(36).

Si la sentencia dictada por la Sala de Alcaldes, como en otro lugar señalamos, era la pena capital, tenía que ser comunicada al rey quién decidía si la sentencia se cumplía o por el contrario conmutaba la pena. Hasta el reinado de Carlos III las penas de muerte sentenciadas en la Sala

primero se hacían públicas y después se comunicaban al rey pero una Real Disposición del 30 de enero de 1778 ordenó a la Sala "que no se publiquen las sentencias de muerte hasta dar cuenta a S.M. y esperar su respuesta"(37).

El rey además del informe de la Sala recibía informes de los abogados, de las familias y hasta de los propios reos pidiendo clemencia. Los argumentos de los defensores y familiares de los condenados fueron siempre los mismos. El reo nunca sabía lo que hacía o bien porque estuviese loco, o bien borracho o porque estuviese sometido a cualquier pasión cegadora. Así el defensor de Lázaro López Villabril que fue juzgado por "la muerte alevosa dada a Ignacio Ugena robándole una porción de dinero" y condenado a muerte por la Sala, aludía a "la demencia y locura que ha padecido y padece (el reo) y le ha conducido al miserable estado en que se halla". Muchas fueron las extravagancias de Lázaro Villabril reconocidas por la Sala. Así por ejemplo:

" Que hallandose en esta Corte contó en la Quadra - Lázaro era caballerizo real- que había visto muchos franceses e ingleses que estaban haciendo sepulturas desde la Plaza maior a la de la Cebada, y que le querían meter dentro...".

"Y ultimamente -continuaba el relato de la Sala de Alcaldes- estando en esta carcel dio en perseguir a un negro que tambien se hallaba preso, con la idea de que

lo había de meter en el pilón de la fuente del patio, para lavarle y ponerle blanco y otras extravagancias".

Pero una cosa era la locura y otra eran estas "pequeñas acciones" que la Sala calificaba de propias de "un genio alborotado y libre" pero no de un loco(38).

Tampoco estaba en sus cabales, siempre según su defensor, Joaquín Franco, "alias el chichiliano", al robar y asesinar a la enfermera del Conde de Altamira, María Ayala. "La muerte y robo fue por el vino que bebió el día 12 de Noviembre en que sucedió la muerte sin premeditación", explicaba su defensor, que también elaboró una detallada historia del vino y de las borracheras:

"Desde la segunda edad del mundo causó el vino grandes estragos: en el Genesis consta que el primer hombre que plantó viñas fue el Santo Patriarca Noé, ignorando la fuerza del vino exprimió uvas bebió y quedó embriagado".

Y continúa nuestro defensor:

"En la segunda edad consta asimismo que habiendo destruido Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra, se refugio Lot a una cueba con sus hijas, creiendo estas

que se acabaría la procreación del género humano entre las dos consintieron en embriagar a su padre para concebir de el y así tuvo efecto"(39).

También había perdido el juicio, siempre según el interesado, Blas Ballesteros cuando decidió "seducido, impelido, y auxiliado" de su amante, María de San Andrés, dar muerte a Javier Collado, marido de esta. Es uno de los pocos reos que se dirigen personalmente al rey y probablemente lo hizo, como el propio condenado reconocía, porque su delito en el siglo XVIII era "de aquellos que más horrorizan a la humanidad". Blas Ballesteros, sin embargo, pedía clemencia, comunicando al rey "que fue arrastrado de una pasión tan violenta que perturbándole y obediéndole el juicio ciega y furiosamente, procedió sin libertad alguna y obró sin duda como verdadero loco y demente(40)".

De poco sirvieron, sin embargo, los escritos de los defensores, familiares y condenados porque normalmente el rey devolvía toda la información con una minuta que decía "quiere el rey que se haga justicia" y la justicia era que se aplicase la pena capital impuesta por la Sala. De las consultas de las sentencias de muerte realizadas por la Sala entre 1776 y 1784 sólo dos fueron conmutadas por esta vía por el rey(41). Nuestro soldado falsificador de moneda Agustín Romero vio sustituida su pena de muerte por la de

presidio "en el Peñón o Alhucemas por un tiempo de diez años"(42). También vió conmutada su pena Andrés Martínez a quién la Sala había condenado a la pena de muerte por participar en robos cometidos en iglesias de la Corte. La razón de la clemencia real fue una promesa incumplida. El alcalde había prometido al acusado la libertad si declaraba el nombre de otros implicados porque "no podía por menos que mezclarse algún platero, y que el principal objeto de la causa era aberiguar quién era". El rey consideró que las promesas hechas y reconocidas por los jueces debían cumplirse y mandó a Andrés Martínez a presidio(43).

Curiosamente en los dos casos había intercedido por los reos el Gobernador del Consejo de Castilla: don Manuel Ventura Figueroa. Sabemos por una serie de cartas escritas por Figueroa en abril y mayo de 1776 al entonces Secretario de Gracia y Justicia, Manuel de la Roda, que el Gobernador del Consejo era poco partidario del uso abusivo de la pena de muerte. "Es cierto que se necesita una nueva legislación criminal -escribía Figueroa a su amigo- ya la experiencia nos tiene acreditado que muchas penas capitales mas promueben a compasión que a escarmiento"(44).

La Sala de Alcaldes tenía también jurisdicción civil. Hasta 1768 los cinco alcaldes más antiguos debían hacer audiencia los martes, jueves y sábados para resolver los pleitos civiles(45). Tras las Reformas de Carlos III, Madrid quedó dividida en ocho cuarteles y al frente de cada uno el

rey puso a un Alcalde de Corte con el título de Alcalde Cuartelero que, entre otras muchas cosas, tenía jurisdicción civil en su cuartel. Las apelaciones de los juicios civiles de los alcaldes iban a la propia Sala si eran inferiores a 300.000 maravedíes. Si superaban esa cantidad y no sobrepasaban los 375.000 maravedíes los recursos iban a la Sala de Provincia del Consejo de Castilla y todas las apelaciones de los juicios superiores a los 375.000 maravedíes iban a la Sala de Mil Quinientas del Consejo(46).

El juzgado de los Tenientes del Corregidor también tenía jurisdicción civil y criminal sobre la Villa y Corte. Era una jurisdicción, por lo tanto, "acumulativa" con la de la Sala de Alcaldes.

La jurisdicción de los Tenientes, como ocurría con la Sala de Alcaldes iba más allá de las murallas de la Villa de Madrid. El Corregidor y sus Tenientes tenían jurisdicción civil y criminal sobre los pueblos que integraban la Tierra de la Villa. Revisaban los distintos procesos electorales de las justicias ordinarias de todos los lugares de la Tierra de Madrid y por supuesto su actuación como jueces(47). Veamos el siguiente mapa:

MAPA 4.2(48). ALDEAS Y LUGARES PERTENECIENTES A LA TIERRA DE LA VILLA DE MADRID.



Los lugares que integraban la Tierra de la Villa eran menos que los que formaban el Rastro de la Corte pero curiosamente todos los pueblos de la Tierra, salvo cinco: Humera, Perales, Velilla, Chamartín y Leganes, pertenecían al Rastro de la Corte. De ellos, dos, Humera y Perales, nunca habían pertenecido a la jurisdicción de la Sala pero los otros tres, es decir, Velilla, Chamartín y Leganes, estando incluidos en el Rastro, por alguna razón que

La situación, como podemos observar, de la mayoría de los habitantes de los pueblos y lugares de la Tierra de Madrid era peculiar. Estaban sometidos a la jurisdicción de la Sala, estaban sometidos a la jurisdicción de los Tenientes y por supuesto estaban sometidos también a la de las justicias ordinarias de sus pueblos.

Las causas criminales seguidas en el Juzgado de la Villa eran menos numerosas que las seguidas en el Juzgado de la Corte. Era lógico porque la Villa sólo contaba con los dos tenientes de Corregidor como jueces. Así, al revisar las causas seguidas en el mes de julio de 1780 en el Juzgado de la Villa y en el de la Corte vemos que en este último había abiertos veintisiete procesos criminales mientras que en el Juzgado de la Villa sólo había ocho. Ahora bien, únicamente dos Alcaldes de Corte: Andrés Cornejo y Francisco Treviño, se encargaban de seis procesos, mientras que cinco alcaldes, entre ellos Gaspar Melchor de Jovellanos, estaban trabajando en un solo caso. En cambio, el Teniente de Corregidor Bernardo Cantero estaba encargado de los ocho casos criminales de su Juzgado(50).

Los Tenientes de Corregidor, sin embargo, tenían limitaciones. No podían aplicar tormento sin el consentimiento de la Sala de Alcaldes, tenían que informar a la Sala semanalmente del estado de sus causas y también debían consultar al rey las sentencias de muerte a través de la Sala. Además las apelaciones de las sentencias

criminales del Juzgado de la Villa se resolvían en la Sala de Alcaldes.

La jurisdicción civil de los tenientes era "igual y acumulativa" que la de la Sala de Alcaldes. Las apelaciones de menor cuantía de las sentencias en materia civil promulgadas por los tenientes, "y que no exceden de cien mil maravedies" eran apeladas en la Sala revisándolas dos alcaldes nombrados mensualmente por el Gobernador del Consejo. Las sentencias superiores a cien mil maravedíes eran apeladas ante la Sala de Provincia del Consejo de Castilla(51).

La dependencia de los Tenientes de Corregidor de la Sala de Alcaldes les exasperaba. La Sala de Alcaldes no se conformaba con las competencias que la legislación le reconocía sino que, durante todo el Antiguo Régimen, exageró sus atribuciones. Uno de los múltiples memoriales que los corregidores de Madrid elaboraron y enviaron al rey protestando por los abusos de la Sala, se centró en materias judiciales.

El Marqués de Vadillo, Corregidor de Madrid durante los años 1715 al 1729, dirigió la preparación de un largo memorial titulado "Acuerdos de Madrid y de la Junta formada para tratar de la Jurisdicción y Regalias que se hallan inbertidas" enviado al rey en 1727, y muchas eran las cosas que se hallaban "imbertidas" en materia judicial según, claro está, el criterio de la Corporación madrileña.

Comienza el escrito haciendo un resumen de la legislación existente sobre las atribuciones judiciales de los dos organismos para seguir conciliadoramente señalando que:

"Con estos principios (los que señalaba la legislación) tan solidos en qualquiera sería seguro el acierto, si todos se contubiesen en aquella ligne; o authoridad de que se halla adornado, por voluntad del principe, el empleo, o ministerio en que se les constituye, pero del contrario todo el orden se turba y no hay paso en que no se tropiece cuando separado de sus limites se adelanta a más de los que estos le circunscriben"(52).

Y lo cierto fue que la Sala y el Ayuntamiento tuvieron varios "tropiezos" en materia judicial. La Sala intentó a lo largo del Antiguo Régimen que su juzgado, el Juzgado de Corte, tuviese supremacía sobre el Juzgado de los Tenientes de Corregidor.

En primer lugar obligaba a los cirujanos de Madrid "que solo al alcalde de quartel y no a otro juez alguno hayan de dar quenta de las causas que hubiere herida y si no lo hazen o la han dado a los thenientes les multan"(53). La Sala estaba mucho más informada de lo que ocurría en la Corte que los Tenientes y además lógicamente abría más investigaciones y disponía de más pleitos criminales(54).

Las apelaciones de las sentencias criminales promulgadas por los Tenientes debían ser apeladas, como ya hemos señalado, en la Sala de Alcaldes pero, de nuevo, la institución de la Corte actuó con un exceso de celo. La Sala de Alcaldes no sólo recibía la sentencia de los Tenientes en apelación sino que obligaba a trasladar al reo desde la cárcel de la Villa a la cárcel de Corte. Una vez revisada la sentencia por la Sala, estuviese o no de acuerdo con lo sentenciado en primera instancia por los tenientes, la Sala de Alcaldes se encargaba de ejecutarla. "Es abuso que remite el derecho y el unibersal común estilo de todos los otros superiores tribunales -afirmaba el ayuntamiento de Madrid en 1727- en que dificilmente se dará el ejemplar que al reo se le remueva de la prisión en que se le tiene por el inferior y que para ejecutar la sentencia dejen de remitirle los autos"(55).

En materia civil también se enfrentaron continuamente la Sala y el Juzgado de los Tenientes. En primer lugar los casos en donde existieron "acumulaciones de autos", es decir, casos en donde las partes habían acudido a los dos tribunales de la Villa y Corte, siempre se resolvieron, en el Juzgado de la Corte. La Sala obligaba a los escribanos de número, o sea a los escribanos adscritos al juzgado de la Villa, "a hacerles relación" de los casos abiertos en su juzgado y por supuesto la institución de la Corte no permitía que sus escribanos, los escribanos de provincia,

"puedan ser llamados para el propio fin, ante los thenientes, lo que -afirmaba la Corporación- debiera ser reciproco según para donde la acumulación se solicitase"(56). Los escribanos de número, no solo acudían a informar a la Sala cuando existían "acumulaciones" sino que lo hacían cada vez que la institución de la Corte quería. Los escribanos de número debían hacer relación de las causas civiles seguidas en su juzgado y la Sala o bien las devolvía o, lo que fue frecuente, "absolutamente las retiene"(57).

Las continuas intromisiones de la Sala de Alcaldes en el Juzgado de la Villa ocasionó un claro descontento de la Corporación pero, sobre todo, un sinfín de recursos y protestas que el Consejo de Castilla debía dirimir.

La existencia de materias "acumulativas" o compartidas por la Sala y el Ayuntamiento de la Villa dificultaron mucho el buen funcionamiento del gobierno y de la administración de justicia de la Villa y Corte. Las intervenciones del Consejo de Castilla eran continuas pero su respeto hacia las ordenanzas y privilegios de las instituciones le impedían solucionar definitivamente los conflictos.

NOTAS DEL CAPITULO 4

- (1) Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, Madrid, 1983, pp.206-207.
- (2) Alfredo Alvar Ezquerro dedica el capítulo 3 de su obra ya citada El nacimiento de una capital europea, Madrid entre 1561 y 1606, al enfrentamiento entre Valladolid y Madrid para lograr ser sede de la Corte (pp. 292-297).
- (3) A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcades de Casa y Corte del año 1619.
- (4) A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes del año 1618, folios 141-149.
- (5) A.H.N. Consejos, Sala de Alcaldes. Libros de Gobierno de los años 1586,1594,1601,1611 y 1613.
- (6) A.V.M. Secretaria, 2-422-32.
- (7) "Methodo que se observaba antes que la corte viniese a Madrid en la direccion y gobierno de los abastos, policia, cómicos y demás asuntos públicos" A.V.M. Secretaria, 1-61-89.
- (8) El mejor resumen de las atribuciones de la Sala de Alcaldes esta en el libro titulado Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde citado previamente en este trabajo. A.H.N. Consejos, Libro 1420.
-

(9) Un excelente trabajo sobre la Contaduría de Propios y Arbitrios lo constituye la Memoria de Licenciatura todavía inédita de Carmen Garcia Garcia titulada La administración de las rentas municipales en el Antiguo Régimen. La contaduría General de Propios y Arbitrios (1760-1824). La tesina fue defendida en el Departamento de Historia Contemporánea de la U.A.M en abril de 1984.

(10) A.G.S.Gracia y Justicia, leg. 786.

(11) A.H.N. Consejos, Libro 1478.

(12) Desdévise du Dezert, La España del Antiguo Regimen(1899) Madrid, 1989 p.495.

(13) "Real Decreto del 29 de Noviembre de 1.747". A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.793.

(14) A.H.N. Consejos, Libro 1478, fol. 244. También A.V.M. Corregimiento, 1-170-45.

(15) A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes año 1779. f. 583.

(16) Tanto en los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes como en los libros de acuerdos del Ayuntamiento aparecen los productos que tocaban a la Sala y a la Villa. También aparece una relación en la Nov. Rec. Libro III. Título XVIII. "De los fieles executores de Madrid".

(17) A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1721, folios 398-401.

(18) A.H.N. Consejos, Libro 1420 e.

(19) Antonio Martínez de Salazar, Colección de memorias y Noticias del Gobierno General y Político del Consejo: Lo que se observa en el despacho de los negocios que le competen; los que corresponden a cada una de sus Salas; Regalías Reminencias y actividad de este supremo tribunal y lo perteneciente a los señores alcaldes de Casa y Corte, Madrid, 1764, capítulo XXXIX. La parte dedicada a la Sala de Alcaldes es francamente interesante para analizar las competencias de la institución de la Corte.

(20) Martínez de Salazar, Coleccion de memorias y Noticias..., también en el capítulo XXXIX.

(21) Los Pliegos Diarios tenían cuatro partes bien definidas. En la primera la Sala de Alcaldes informaba al rey de la situación de los abastos de la Villa y Corte, en la segunda se enumeraban los enfermos que había ingresados en el hospital General y en el de la Pasión, la tercera se centraba en lo acontecido en las rondas de los Alcaldes y por último incluían, aunque no siempre, una relación de las causas seguidas en el juzgado de la Villa y en el de la Corte. A.G.S. Gracia y Justicia, legajos 807 y 808.

(22) A.H.N. Consejos, Libro 1174.

(23) A.H.N. Consejos, Libro 1478, fol. 262.

(24) A.H.N. Consejos, Libro 1478, fol.244.

(25) A.H.N. Consejos, Leg. 6.796. fol. 1.

(26) "Real Cédula del 10 de mayo de 1743". A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes del año 1743, folios 728 y ss.

(27) En la misma "Real Cédula del 10 de mayo de 1743". A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1743.

(28) A.V.M. Secretaria, Libro 113.

(29) A.H.N. Consejos, leg. 6.796.

(30) También en A.H.N. Consejos, Leg. 6796.

(31) José Antonio de Armona, Noticias privadas de casa utiles para mis hijos, (¿1789?), Madrid, 1989. pág. 116.

(32) Para el mapa 4.I se ha utilizado información procedente del libro de Martinez de Salazar, Colección de memorias y noticias del ..., pp. 318-319.

También nos ha sido de gran utilidad la obra de Carmelo Viñas Mey y de Ramón Paz, Relaciones histórico geográficas estadísticas de los pueblos de España. Provincia de Madrid, Madrid, 1971, así como la de Fernando Jimenez de Gregorio, La población de la actual provincia de Madrid en el Censo de Floridablanca (1786), Madrid, 1980.

(33) Las razones para esta ampliación de la jurisdicción de la Sala nos las explica el propio Carlos IV, quién por Real Resolución del 28 de Julio de 1792 dispuso "La extensión de la jurisdicción de la Sala a todos los pueblos que estuviesen a diez leguas en contorno de Madrid sin perjuicio de mis Chancillerías de Valladolid y Granada y a prevención con ellas, para que de este modo se puedan atacar los desarreglos y velar más de cerca a las justicias de los Pueblos estando la Sala en la vista para castigar sus omisiones y poco zelo." A.H.N. Consejos. Libro 1501.

(34) Nov. Rec. Libro IV. Título XXVII. "De las dos Salas de Corte y sus Alcaldes".

(35) Los Pliegos Diarios remitidos por la Sala de Alcaldes al rey en el año 1765 se encuentran en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 808. No todos los Pliegos Diarios contenían la información de los Juzgados de la Villa y Corte esta solo se añadía al pliego una vez a la semana.

(36) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(37) Desde 1778 las respuestas a las consultas sobre la pena de muerte dirigidas por la Sala al rey iban encabezadas de la siguiente manera: "Conforme a la Real resolución, que comuniqué a V.e. en 30 de enero del año pasado de 1778 para que no se publiquen las sentencias de muerte hasta dar cuenta a S.M. y esperar su respuesta, me ha pasado su excelencia con su papel del..." A.G.S. Gracia y Justicia leg. 804.

(38) El informe sobre el caso de Lázaro Lopez Villabril era muy extenso. Contenía el informe de la Sala y también una petición de clemencia de su tío carnal Gonzalo Albáñez así como la de su defensor Sebastián Thimoteo Fachón. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(39) El escrito de Francisco Antonio Montemaior y Bocanegra "abogado primero y más antiguo de pobres presos en la cárcel de Corte de la Villa de Madrid, y como tal defensor que ha sido de Joaquín Franco (alias el chichiliano) preso en ella", tiene un tono desesperado. No creemos que ni el propio defensor tuviese esperanzas de la clemencia real. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(40) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(41) Además de la posibilidad de ver conmutada la pena impuesta por los alcaldes al ser estas consultadas al rey, los presos sentenciados por la Sala de Alcaldes podían acogerse a los indultos generales. Francisco Tomás y Valiente en su obra, El Derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Madrid, 1969. dedica parte del último capítulo al indulto real. Existían indultos generales "o en la conmemoración del viernes santo ("por amor de Nuestro Señor y en recuerdo de su pasión") o por alguna alegría (como expresaban las Partidas) o causa justa", pág. 400.

(42) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(43) El rey a través de la Cámara de Castilla literalmente afirmaba "luego le conmuto esta pena en la diez años de presidio atendiendo a que cumplio la oferta que hizo de descubrir varios reos" A.G.S. Gracia y Justicia, leg.804.

(44) En el Archivo General de Simancas se conservan tres cartas escritas por Figueroa a Manuel de la Roda fechadas el 22 de abril, el dos y el seis de mayo de 1776. El asunto principal de todas ellas es la pena de muerte. En la última, Figueroa utiliza lo que ocurre en Europa para justificar sus opiniones "Los principes de Europa, o muchos de ellos se ban poniendo del mismo dictamen...,no conviene quitar absolutamente la pena de muerte, pero no es razón estimar en tan poco la vida de los hombres, que se cambie por cualquier dinero". Gracia y Justicia, leg. 804.

(45) Nov. Rec. Libro IV. Título XXVIII. "De los Alcaldes, jueces de Provincia de la Corte". Sobre las Reformas de Carlos III existe mucha información en el A.H.N. Consejos, leg. 504. exp.6.

(46) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 808.

(47) Es Rafael Gibert en su obra El concejo de Madrid. su organización de los siglos XII al XV, Madrid, 1949, quién nos explica la relación entre el Corregidor y sus Tenientes y las aldeas de Madrid: "En 1264 los Pecheros de Madrid se dirigieron a Alfonso X mostrándole que en razón de de los emplazamientos judiciales, se les hacia venir desde muy lejos a la Villa, "sobre cosas menudas y chicas demandas", por lo que perdían sus labores y recibían gran daño. El rey ordenó que la Justicia de la Villa fuese a cada una de las aldeas e hiziese ayuntar a todos los hombres del lugar "e que den los ommes bonos para alcaldes aquellos que entendieren que serán mas para ello". Se les concedía - continúa Gibert- jurisdicción sobre los pleitos y las demandas de los aldeanos, y facultad de poner tregua y tomar salvo, debiendo aplicar el Fuero de la Villa," , pág. 225.

(48) Para la elaboración del MAPA 4. II, hemos utilizado información procedente de la obra de Gil Gonzalez Dávila, Theatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Catholicos de España, Madrid, 1623, pág. 11. En las residencias tomadas a los corregidores de Madrid después de su mandato también aperecen reproducidos las aldeas de la Villa de Madrid. Hemos revisado las residencias realizadas a los corregidores del siglo XVIII localizadas en el A.H.N. Consejos, legajos 42.646 y 42.647. También nos ha sido de gran utilidad la obra de Carmelo Viñas Mey y Ramón Paz, Relaciones histórico geográficas ..., citada con anterioridad.

(49) El MAPA 4.III en realidad es el producto de la comparación del mapa dedicado a los pueblos del Rastro de la Corte y el que se centra en los lugares pertenecientes a la Tierra de la Villa (mpapas 4. I y 4. II).

(50) A.G.S. Gracia y Justicia leg. 804.

(51) Nov. Rec. Libro IV. Título XXVIII. "De los alcaldes , Jueces de Provincia de la Corte".

(52) "Acuerdos de Madrid y de la junta formada para tratar de la jurisdicción y Regalías que se hallan inbertidas". A.V.M. secretaria, 2-422-91.

(53) "Acuerdos de Madrid..." A.V.M. Secretaria, 2-422-91.

(54) La costumbre instaurada por la Sala de Alcaldes, de que los cirujanos les diesen cuenta de las heridas a ellos y no a los Tenientes, se convirtió en norma en el reinado de Fernando VI, al promulgarse la Real Resolución de 11 de julio de 1748 titulada "Asiento de heridos en los hospitales de la Corte; su manifestación a los oficiales de la Sala para recibirles declaraciones; y facultad de los alcaldes para examinar como testigos a los exentos de la jurisdicción ordinaria. Nov. Rec. Libro. IV. Título XXVII. Ley XIV.

(55) "Acuerdos de Madrid..." A.V.M. Secretaría, 2-422-91.

(56) "Acuerdos de Madrid..." A.V.M. Secretaria, 2-422-91.

(57) También esta información procede del escrito dirigido por el Marqués de Vadillo, "Acuerdos de Madrid..." A.V.M. Secretatia, 2-422-91.

CAPITULO V. LAS REFORMAS DE FELIPE V.

Durante el siglo XVIII los enfrentamientos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de Madrid se intentaron solucionar de forma definitiva.

La llegada al trono de los Borbones pero, sobre todo, el triunfo de planteamientos ilustrados ocasionaron un cambio en la manera de afrontar los problemas relacionados con la administración de justicia y el gobierno político y económico del reino.

Los monarcas de la casa de Borbón emprendieron reformas globales para mejorar pero, sobre todo, racionalizar el sistema de administración de justicia y de gobierno de los territorios que configuraban la monarquía hispana.

La Villa y Corte no fue una excepción. Los Borbones apreciaron pronto el mal funcionamiento de las instituciones encargadas de gobernar la Villa de Madrid. Sus continuos enfrentamientos causados por el solapamiento de atribuciones ocasionaban un claro desgobierno.

Durante los siglos XVI y XVII, cada vez que existía un problema entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento, por dilucidar a quien correspondía actuar sobre un área de

competencia, el Consejo de Castilla intervenía promulgando Autos de Buen Gobierno que reconocían jurisdicción sobre ese área a la Sala o al Ayuntamiento. Esas intervenciones puntuales del Consejo, como en otro lugar señalamos, rara vez solucionaron el conflicto porque siempre respetaron las Ordenanzas y Privilegios anteriores que reconocían a los dos organismos competencia sobre la materia en litigio. Trascurrido un tiempo, la institución a la que el Consejo había privado de actuar en un determinado asunto, volvía a intervenir como si nada hubiese cambiado. Siempre existía una disposición previa, y muchas veces de rango superior al Auto de Buen Gobierno promulgado por el Consejo, reconociendo a la institución perjudicada jurisdicción sobre la materia en conflicto. Esos Privilegios, Reales Cédulas y Ordenanzas que la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de Madrid tenían y que enumeraban sus atribuciones, fueron siempre la base para un nuevo conflicto.

El sistema era por lo tanto ineficaz. Los enfrentamientos entre la Sala y la Corporación madrileña continuos y el desgobierno de la Villa y Corte, obvio. Los Borbones y sus gabinetes reformistas no podían olvidarse de la Villa de Madrid en sus proyectos de cambio.

Las reformas que afectaban al sistema de gobierno y administración de justicia de Madrid muchas veces formaban parte de un plan general de reformas, como ocurrió en el reinado de Felipe V, pero otras fueron proyectos aislados.

La subida al trono, a comienzos del siglo XVIII, del primer Borbón supuso algo más que un simple cambio de dinastía. Una serie de innovaciones, la mayoría inspiradas en el modelo político francés, iban a producirse poco tiempo después de iniciarse el reinado. En 1700 nadie auguraba que Felipe V fuese a introducir grandes cambios en el sistema político vigente. El nuevo rey había presidido la reunión de Cortes celebradas en Barcelona y su joven mujer, Maria Luisa de Saboya, había jurado en su ausencia los Fueros de Aragón en las Cortes celebradas en Zaragoza en el año 1702. Nada parecía augurar que los Borbones fuesen a actuar de distinta manera que sus antecesores los Austrias(1).

Fue al transformarse la Guerra de Sucesión en una contienda civil cuando una serie de cambios se iniciaron con fuerza en los reinos peninsulares. Los Decretos del 29 de junio de 1707 supusieron el inicio de un conjunto de medidas conocidas como la Nueva Planta que transformaron la situación de los territorios forales que habían apoyado al archiduque Carlos.

Estas medidas que afectaron tanto a la organización institucional como al derecho público y privado de Aragón, Cataluña y Valencia han sido interpretadas de muy distinta manera. Para algunos historiadores fue el deseo de venganza lo que llevó a Felipe V a suprimir los fueros de los territorios que le eran hostiles, para otros la Guerra de Sucesión dió una oportunidad de realizar el viejo deseo de

los reyes españoles de uniformizar los reinos peninsulares siguiendo el patrón de Castilla(2).

Las reformas Borbónicas no sólo afectaron a los territorios que habían perdido la guerra. Las principales instituciones castellanas también sufrieron reformas aunque con menor éxito que las de los territorios forales. No podemos hablar aquí de venganza puesto que Castilla había apoyado a Felipe V desde el principio de la Guerra de Sucesión y tampoco del deseo de terminar con los privilegios forales. Los Decretos de Nueva Planta del diez de noviembre de 1713 que afectaron a la planta del Consejo de Castilla, a la del Consejo de Hacienda y a la de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, tuvieron mucho que ver con un proyecto político triunfante en los primeros años de reinado de Felipe V(3).

Al iniciarse el siglo XVIII la institución más importante de la monarquía hispana seguía siendo el Consejo de Castilla. Estaba integrado, como en otro lugar señalamos, por un número de ministros que habían seguido una carrera administrativa estable. Habían estudiado leyes, de allí habían pasado a ser oidores o fiscales de las Audiencias o Chancillerías ascendiendo después a la Sala de Alcaldes o directamente a los Consejos. En esta carrera la endogamia era más importante que los méritos propios. La mayoría de los burócratas castellanos pertenecían a la pequeña nobleza y habían acudido a la universidad como miembros de los

Colegios Mayores. Según Janine Fayard el número de ministros del Consejo de Castilla que habían pasado por los colegios mayores ascendía a un 77 por ciento del total de los consejeros en el reinado de Carlos II(4). En realidad eran pocas las familias que repetían sus nombres en las instituciones castellanas y muchos buenos estudiantes no tenían oportunidad de seguir una carrera administrativa brillante. Los nombramientos para todos los estadios de la carrera administrativa los controlaba la Cámara de Castilla, organismo vinculado al Consejo de Castilla e integrado por ministros del Consejo. La Cámara proponía al monarca las ternas para ocupar las vacantes de todas las instituciones del reino y por lo tanto era la responsable directa de que preferentemente accediesen a las instituciones miembros de la élite formada por los colegiales.

El Consejo de Castilla, que tenía que atender un cúmulo de funciones de índole muy diversa, era considerado como ineficaz pero sobre todo como una institución que podía frenar los deseos de absolutismo del nieto del Rey Sol. El Consejo era, para los primeros colaboradores del rey, el vehículo de los burócratas castellanos, que como hemos visto constituían un grupo cerrado, para defender sus intereses de grupo y no los del propio estado. Como primera institución del reino podía actuar como resistencia para las reformas centralizadoras de Felipe V. El Consejo de Castilla debía ser controlado si se quería que cualquier cambio que

afectase a la planta política del reino triunfase.

Las reformas de los Consejos más importantes de la monarquía hispana fueron preparadas por una serie de individuos que no tenían mucho que ver con la burocracia tradicional castellana. Juan Bautista Orry, de origen francés y con experiencia financiera en la corte de Luis XIV, fue recomendado a Felipe V por Chamillart, ministro del Rey Sol, para poner orden en las finanzas españolas. Logró tener una gran importancia en la primera etapa del reinado de Felipe V desde su puesto de Veedor General que estaba integrado dentro del Consejo de Hacienda. El otro personaje importante detrás de las reformas de los Consejos fue Melchor Gaspar de Macanaz perteneciente a una familia hidalga de Hellín, en el reino de Murcia. Estudió leyes y cánones en la Universidad pero no desde la posición de colegial por lo que su acceso a la carrera administrativa, tan deseada por los juristas castellanos del Antiguo Régimen, fue difícil. Al estallar la Guerra de Sucesión trabajaba como secretario particular del hijo del Conde de Villena, el Marqués de San Esteban de Gormaz y desde esa posición y en plena guerra logró que algunos de sus trabajos llegasen a manos del Rey. A partir de entonces su carrera fue fulminante. Accedió a la fiscalía del Consejo de Castilla sin pasar por audiencias y chancillerías, algo que ni la burocracia castellana ni los defensores del orden tradicional le iban a perdonar. Uno de sus numerosos

enemigos, el obispo Belluga, en una carta enviada a Luis XIV afirmaba criticando la rápida carrera de Macanaz "que no ha corrido la carrera regular ni de judicatura, y solo se a ocupado de estas turbulencias en varias confiscaciones en el reino de Valencia y Aragon"(5).

Todos los proyectos reformistas de Orry y de Macanaz contaron con el apoyo del rey y también con el de las personas que en la primera etapa del reinado de Felipe V le influyeron: la Princesa de los Ursinos, camarera mayor de la jovencísima Maria Luisa de Saboya y protegida de Luis XIV, y el padre Robinet, confesor del rey.

Las intenciones últimas de las reformas del 10 de noviembre de 1713 que afectaron al Consejo de Castilla, a la Sala de Alcaldes, al Consejo de Hacienda y a otros organismos, aparecen en los Decretos, en las consultas, en las cartas y en los demás escritos que nos quedan de los protagonistas(6).

El primer deseo del rey y de sus asesores era controlar sus propias instituciones como medio de acrecentar pero, sobre todo, de hacer más efectivo su poder. En ese sentido se puede entender que en los Decretos de Nueva Planta se creasen cinco presidencias para el Consejo de Castilla en lugar de una como hasta entonces. Era probablemente la única manera de mitigar el poder de la figura del presidente del Consejo de Castilla(7).

También pretendían los Decretos un control mayor del

Consejo con las nuevas atribuciones otorgadas al Fiscal General del Consejo, cargo que recayó en Macanaz. El Fiscal General, aparte de otras muchas obligaciones, debía controlar estrechamente las actividades de las distintas Salas del Consejo de Castilla. Ese es el sentido de distintos apartados del decreto promulgado por Felipe V comunicando a Macanaz su nuevo destino : "...y habeis de firmar las consultas que cada una de las cinco salas me hiciere por escrito diciendo en ellas que las habeis visto y si tuvierais algo que representarme sobre ellas lo hareis por papel aparte cerrado...". El fiscal también debía evitar que el Consejo exagerase su poder con atribuciones que las leyes no le otorgaban. Así el decreto de nombramiento decía expresamente: " ...habéis de cuidar y velar de que se observen las ordenanzas y pragmáticas". La figura del Fiscal General en realidad escondía a un representante de los intereses del rey dentro del Consejo de Castilla. Por eso a Macanaz se le encomendó que: "será de vuestra obligación que en la consulta particular que el presidente acostumbra a hacerme después del consejo los viernes concurrir con el, a fin de informarme separadamente lo que más convenga a mi servicio y al bien del estado"(8).

El rey no sólo pretendía controlar al Consejo de Castilla sino limitar también el poder del núcleo de familias que monopolizaban los cargos de la administración castellana. Para ello los decretos del 10 de noviembre

suprimieron la Cámara de Castilla, es decir el organismo encargado de efectuar casi todos los nombramientos de la administración del Antiguo Régimen. La Cámara de Castilla era el blanco de numerosas críticas que partían de juristas no colegiales que tenían dificultades para acceder a la carrera administrativa. Macanaz, que estaba detrás de los Decretos de Nueva Planta, era uno de ellos y por lo tanto la Cámara representaba para él la simbolización clara del nepotismo castellano. Suprimió así este organismo y además tomó otras medidas para facilitar el acceso a la carrera administrativa de los no colegiales. Aumentó el número de ministros que a partir de entonces debían integrar las instituciones afectadas explicando sus razones de forma clara en los decretos. Afirmaba así Macanaz:

"Para que haya sujetos que en adelante se apliquen más a la literatura y estudio de las leyes viendo que tienen salida por el medio del crecido número de plazas que habrá en los tribunales en que poder emplearse"(9).

También con los Decretos de Nueva Planta se pretendía acabar con la corrupción existente en la administración. Dos medidas se tomaron en ese sentido. Por un lado terminar con propinas y comisiones creando un salario aceptable para los ministros y por otro poner por encima de los Escribanos la figura de los Secretarios que serían nombrados por el rey y

que se ocuparían de todos los negocios que llevaban las escribanías. Los escribanos pasaban a convertirse en meros subalternos a sus órdenes. Así en los Decretos de Nueva Planta se recogía que se establecería un salario:

" que sea considerado por suficiente para el mantenimiento y decencia de cada uno, teniendo entendido no han de percibir otro alguno más por razón de casa de aposento, ayuda de costa, propinas ni otros emolumentos...y siendo consecuente con esta resolución cesen desde luego todos los derechos, propinas, y demás utensilios que hasta aquí se han percibido, cobrado y manejado así por la cámara como por el consejo de Castilla y hacienda, Sala de Alcaldes, Contaduría mayor y demás tribunales..."(10).

Todas estas intenciones se aprecián en la Nueva Planta promulgada para la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y para el Ayuntamiento de la Villa. Para evitar un exceso de poder en la figura del presidente de la Sala se crearon tres presidencias que recayeron en tres ministros del Consejo de Castilla. Así los consejeros Julián de Riomol y Quiroga, Francisco de Henao y Ambrosio Bernal pasaron a presidir la Sala de Alcaldes(11).

Se aumentó el número de alcaldes, pasando de ser doce a ser dieciocho, con la sana intención de crear trabajo para

los juristas que no pertencían al grupo endogámico que hasta entonces había controlado los consejos(12); se creó además una figura desconocida hasta entonces: la de los Tenientes de Alcaldes. Los alcaldes de Casa y Corte según los Decretos de Nueva Planta contarían con la ayuda de dieciocho tenientes que les auxiliarían en todas sus tareas. Así el Real Decreto establecía:

"Y para alivio de los ministros que han de componer esta Sala de alcaldes, y que tengan quien les ayude he resuelto se creen dieciséis Tenientes de alcaldes con este título, para con los dos que actualmente tienen el Corregidor de Madrid, asistan a los dieciocho alcaldes a lo que les hordenaren"(13).

También se tomaron medidas para terminar con la corrupción. Se promulgó un reglamento aumentando el salario de los alcaldes para evitar la aceptación de propinas y emolumentos(14). Se quitó poder a los Escribanos sometiendo los a los cuatro Secretarios nombrados con ese fin:

"Teniendose enttendido que en adelante han de ser y se deven reputtar los escribanos de Camara, los de Provincia y los del Numero por unos subalternos de los mismos secretarios y devajo de sus ordenes..."(15).

Pero lo más interesante de las reformas no se apreciaba tanto en las que fueron dirigidas al Consejo de Castilla y al de Hacienda como en las que se centraron en la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento madrileño. En los Decretos de Nueva Planta existió la intención de limitar las funciones de las instituciones. Hasta entonces la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento compartían, como en otro lugar señalamos, funciones de justicia y gobierno político y económico de la Villa y Corte. Los Decretos de Nueva Planta intentaron, por primera vez, separar las funciones de justicia de las de gobierno. Era una manera de terminar con los continuos conflictos entre la Sala y el Ayuntamiento y de lograr un gobierno más eficaz de la Villa y corte.

La Sala de Alcaldes se encargaría de la justicia mientras que el Ayuntamiento de Madrid se ocuparía de los problemas de abastecimiento, limpieza, empedrado y mantenimiento de la Villa.

Así por los Decretos de Nueva Planta se suprimió el Juzgado de la Villa de Madrid quedando el Ayuntamiento privado de las atribuciones judiciales que hasta entonces había tenido. Los dos Tenientes de Corregidor de Madrid, que habían ejercido como jueces de primera instancia del Juzgado de la Villa, pasaron a engrosar el grupo de los dieciocho Tenientes de Alcalde que auxiliaban a los Alcaldes de Casa y Corte(16).

Además el reglamento que explicaba el nuevo

funcionamiento de la Sala de Alcaldes no hacía ninguna mención a materias de gobierno político y económico de la Villa de Madrid. La Sala de Alcaldes, por lo tanto, quedaba privada de capacidad gubernativa. Por los Decretos de Nueva Planta la Sala de Alcaldes quedó dividida en cuatro Salas. Una plena en donde debían concurrir al menos dos presidentes y doce alcaldes para tratar los asuntos de mayor gravedad, es decir aquellos en "que aya de pronunciarse sentencia de muerte o siendo civil de quantiosa cantidad que pase de diez mil ducados"(17) y tres Salas integradas por un presidente y seis alcaldes que se ocuparían de los pleitos civiles y criminales de la Villa y de las cinco leguas a su alrededor. Nada se decía sobre materias económicas o políticas(18).

Los Decretos de Nueva Planta pretendieron, por lo tanto, que la Sala de Alcaldes se encargase de los asuntos de justicia y el Ayuntamiento de los asuntos del gobierno político y económico de la Villa y Corte. Era la primera vez que se intentaba separar las funciones de las dos instituciones como medida lógica para evitar los conflictos. Este intento se repetirá muchas veces a lo largo del siglo XVIII.

Los Decretos del diez de noviembre estuvieron poco tiempo en vigor y contaron con una fuerte resistencia por parte de los ministros que integraban las instituciones afectadas.

Las reformas que afectaron a las intituciones de la

Villa y Corte fueron muy contestadas tanto por el Ayuntamiento como por la Sala de Alcaldes.

La Sala actuó con una lentitud desconocida en ella. Su estrategia fue la de ejercer una resistencia pasiva capaz de desesperar a cualquiera. Los brillantes letrados que integraban la Sala de repente eran incapaces de entender los decretos y así lo expresaban en voluminosas consultas elevadas al rey a través del Consejo de Castilla.

La primera consulta la dirigió la Sala el treinta de enero de 1714 y tenía dieciséis dudas la mayoría centradas en cuales debían ser sus competencias en relación a las del Ayuntamiento. La Sala estaba dispuesta a asumir sola las competencias judiciales de la Villa y Corte pero no quería dejar sus atribuciones de gobierno. Entendió las reformas como un reconocimiento de su supremacía frente a la institución municipal y no contenta con la supresión del Juzgado de la Villa quiso lograr la supresión del Ayuntamiento. El monarca intervino en marzo de 1714 para recordar a la Sala que la jurisdicción que debía tener su tercera Sala que era la que tenían los Tenientes de la Villa:

"debe entenderse en lo jurídico y contencioso pero no en el gobierno público , político y económico, y en los pleitos y conservaduría de los propios y arbitrios porque en todo eso y en lo demás que fuese privativo

del Corregidor y Regidores y del ayuntamiento ha de quedar como hasta aquí ha estado" (19).

La Sala permitió que el Ayuntamiento tuviese competencias de gobierno pero no "privativamente", como era la intención de los decretos originales, sino "acumulativamente", como hasta entonces había ocurrido. Las consultas posteriores de la Sala demuestran que esta seguía controlando la cantidad y calidad de determinados productos, revisando las ordenanzas gremiales y asumiendo en definitiva las atribuciones de gobierno que hasta noviembre de 1713 había tenido(20).

Conforme crecía la oposición de las instituciones afectadas por los Decretos de Nueva Planta aumentaron los problemas para sus principales impulsores, el Fiscal General Macanaz y el Veedor General Orry. Sus apoyos originales, la reina Maria Luisa de Saboya, la princesa de los Ursinos y el confesor del rey Robinet habían desaparecido de la Corte. Maria Luisa había muerto prematuramente, y tanto la Princesa de los Ursinos como el confesor Robinet habían tenido que abandonar Madrid al no ser aceptados por la nueva reina Isabel de Farnesio partidaria e impulsora del orden tradicional.

Los enemigos de las reformas estaban tomando de nuevo posiciones. El primer signo de cambio en la actitud del rey fue la llegada del exilio del Cardenal de Giudice que había

apoyado al rey en la Guerra de Sucesión pero que fue un duro defensor de la continuidad del sistema desde su puesto de Inquisidor General. Enfrentado a Macanaz desde antes del nombramiento de éste como Fiscal General, su enemistad se agravó con el intento de reforma del Consejo de Inquisición. De Giudice había desplegado gran actividad diplomática en la corte de Luis XIV en contra de las reformas introducidas en los Consejos consiguiendo el apoyo del rey. Un texto citado por Carmen Martín Gaité resume la nueva situación política de la monarquía a finales del año 1714. Felipe V escribía así a su abuelo Luis XIV:

"Puedo aseguraros que la reina no me deja nada que desear...He seguido el consejo que me daís de hacer volver llamar al cardenal Del Giudice, juzgandolo como Vos, muy capaz por su espiritu y sus luces de ayudarme en el gobierno de mis asuntos, donde veo que conviene absolutamente introducir cambios para mi bien y el de mis vasallos"(21)

Los cambios no se hicieron esperar. Tanto Orry como Macanaz fueron destituidos de sus cargos el 7 de febrero de 1715 y con su destitución parte de sus reformas fueron anuladas. La fuerza de la burocracia tradicional castellana se había impuesto y el final del espíritu reformista había llegado.

Con los Decretos del 9 de junio de 1715 Felipe V anuló los Decretos del 10 de noviembre de 1713 y restituyó a los tribunales afectados su antigua planta y jurisdicción.

"He venido en restituir la Sala de alcaldes -afirmaba el Real Decreto- a su antigua jurisdicción y ejercicio que le pertenece por las leyes del reino y reales disposiciones, con toda aquella autoridad misma que tenía antes de los Decretos del 10 de Noviembre..."(22).

La Sala de Alcaldes volvió a estar dirigida por un único gobernador que era uno de los ministros del Consejo de Castilla. El número de alcaldes quedó reducido a doce pero con la calidad "de por ahora" debido a que el monarca pretendía no ocupar las tres primeras vacantes que ocurriesen y así reducir el número de alcaldes a nueve. Felipe V en realidad nombró catorce alcaldes pero a uno de ellos, José Llopis, debido a su edad y achaques le permitía asistir a la Sala solo cuando quisiese. Además de los alcaldes integraban la Sala un Fiscal, cuatro Escribanos de la Cámara del Crimen, dos Relatores, un Agente Fiscal, un Abogado, un Procurador de pobres y el mismo número de Escribanos de Provincia que tenía. Nombró el rey una comisión de ministros del Consejo que hubiesen sido alcaldes para examinar las solicitudes de los que quisieran ser alguaciles y porteros aunque el rey se reservaba la última palabra. Para los cargos de Escribanos de la Cámara del Crimen, Relatores, Agente Fiscal, Abogado, Procurador de

pobres, y Escribanos de Provincia el rey nombró a los individuos que ocupaban las plazas antes de las reformas(23).

Muy poco después, el 22 de junio de 1715, un Real Decreto restituyó a Madrid, a su Corregidor y tenientes, la jurisdicción civil y criminal que tenía antes de las disposiciones de Nueva Planta:

"En consecuencia de la Nueva disposición que he resuelto dar al consejo de Castilla y Sala de alcaldes he resuelto en restablecer las jurisdicciones civil y criminal que tenía la villa de madrid y exercían el Corregidor y sus Tenientes en la misma forma que estaba antes de los Decretos del 10 de noviembre"(24).

El rey, eso sí, se reservaba el nombramiento de los dos tenientes y los honores que quisiera otorgarles(25).

A partir de junio de 1715 poco quedaba de las reformas instigadas por Macanaz y Orry. Los tribunales volvieron a su antigua planta y jurisdicción. Tanto los Alcaldes de Casa y Corte, miembros de la burocracia tradicional castellana, como el Corregidor y los nobles regidores de la Villa estaban tranquilos. Sus facultades y las de sus instituciones permanecían inalteradas. Ahora bién, en la Villa y Corte los enfrentamientos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento se iniciaban de nuevo con el lógico

deterioro del gobierno de la capital de la monarquía hispana.

NOTAS DEL CAPITULO 5

(1) Sobre los primeros momentos del reinado de Felipe V son interesantes las obras ya clásicas de Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976; Richard Herr, España y la Revolución del siglo XVIII, Aguilar, 1964; así como las más recientes de Pablo Fernández Albadalejo, "La monarquía", publicada en el volumen primero de las Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración" titulado El Rey y la Monarquía, Madrid, 1989 y la de John Lynch, Bourbon Spain 1700-1808, Oxford 1989.

(2) Pedro Voltes en "Felipe V y los Fueros de Aragón" publicada en la Revista de Estudios Políticos, nº 84, Madrid, 1955, defiende que Felipe V, con los Decretos de Nueva Planta, continuaba las fallidas reformas del reinado de Felipe IV; Domínguez Ortiz en el capítulo titulado "El prerreformismo borbónico" de su libro Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, citado con anterioridad, concilia la postura de aquellos que defienden que los Decretos de Nueva Planta surgieron como simple venganza contra los territorios hostiles al Borbón, con la de los que consideran que los Decretos eran la culminación de un proyecto uniformador presente ya en los monarcas de la Casa de Austria. Así en la página 86 afirma "parece, por lo tanto, evidente, que a la momentánea intención vengativa se unió otra de más largo alcance, que se suponía benéfica; el primer borbón decretó, para sus vasallos renuentes, la Nueva Planta como una medicina amarga y, a la vez, salutífera."

(3) Sobre la Nueva Planta de algunas instituciones castellanas Janine Fayard escribió un artículo titulado "La tentative de réforme du Conseil de Castille sous le règne de Philippe V", Melanges de la Casa de Velázquez II, 1966; También el excelente libro de Carmen Martín Gaité, El proceso de Macanaz, Historia de un empapelamiento, Madrid, 1970, aunque centrado en la vida de Macanaz, se adentra en los entresijos del reinado. Más reciente la obra de María Isabel Cabrera Bosch, "El Poder legislativo en la España del siglo XVIII (1716-1808)" en La economía española al final del Antiguo Régimen, vol. IV, Las Instituciones, Madrid, 1982, pp. 187-268, la de Salustiano de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986, y la ya citada de Pablo Fernández Albadalejo, "La monarquía".

(4) Janine Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982. pág. 55.

(5) Citado por Carmen Martín Gaité en El proceso de Macanaz... pág. 222.

(6) Sobre la aplicación de los Decretos de Nueva Planta es interesante, sobre todo, el Libro 1196 de la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional que contiene tanto los Reales Decretos como las numerosas consultas tramitadas por la Sala de Alcaldes al Consejo de Castilla sobre dudas ocasionadas por las reales disposiciones. También en los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de los años 1714 y 1715 hay mucha información sobre la actitud de la Sala frente a los Decretos de Nueva Planta. Martín Gaité en su obra El proceso de Macanaz... reproduce la carta de nombramiento de Macanaz para el nuevo cargo así como correspondencia entre los distintos protagonistas de las reformas. Para la restauración de la antigua planta de los tribunales una vez fracasadas las reformas de Felipe V es

importante el Legajo 804 de la sección de Gracia y Justicia del Archivo General de Simancas porque no sólo contiene las disposiciones reales sino también los nombramientos para ocupar las vacantes de Sala de Alcaldes.

(7) Un excelente resumen de las intenciones de los Decretos de Nueva Planta que afectaron al Consejo de Castilla en el trabajo de Maria Isabel Cabrera Bosch, "El Poder legislativo en la España...", antes citado, pp. 191-198.

(8) Carmen Martín Gaité, El proceso de Macanaz..., pág. 175.

(9) "Decretos de S.M. expedidos al Consejo de Castilla el día diez de noviembre de 1713, en que se sirve dar reglas para la observancia de la nueva planta que establece en ella, y sus salas ..." A.H.N. Consejos, Libro 1196. fol. 2

(10) También en los "Decretos de S.M. expedidos..." en el A.H.N. Consejos, Libro 1196. fol. 7.

(11) "Elección de sugetos para presidentes, Conxejeros, fiscales, abogados generales, alcaldes de casa y corte y secretarios para el Consejo de Castilla, y Sala de Alcaldes y para el Consejo de Hacienda con el sueldo que han de gozar cada uno y división de las Salas que se ha de componer y ministros destinados para cada una de ellas. 3 de enero de 1714", en A.H.N. Consejos, Libro 1196, fol. 13.

(12) Los nuevos Alcaldes nombrados por Felipe V el día tres de enero de 1714 fueron: Manuel de Zervantes, Joseph de Llopis, Francisco Gobeo, Juan José de Mutilosa, Joseph Dardón, Gaspar Zorrilla, Francisco Velázquez Zapata, Pedro Afán de Rivera, Balthasar Alvarez de Medrano, Lorenzo de la Bastida, Julián Francisco, Santos de San Pedro, Alonso Rico de Villarroel, Pedro Ruiz y Perales, Thomas Molinillo, Diego

de Guevara, Alvaro de Villegas, Luis Burgomo, en "Elección de sugetos para presidentes..." A.H.N. Consejos. Libro 1196 fol. 13

(13) "Decretos de S.M. expedidos al Consejo de Castilla el día diez de noviembre de 1713..." A.H.N. Consejos, Libro 1196, folios 4 y 5.

(14) Los nuevos sueldos para la Sala de Alcaldes fueron fijados muy poco tiempo después de promulgarse los Decretos de Nueva Planta, el tres de enero de 1714. Fueron los siguientes:

Cargos	Cantidad en Escudos de Vellon
Presidentes: Primero	50
Segundo	40
Tercero	30
Alcaldes	20
Fiscal	30
Abogados: Primero	20,500
Segundo	20
Substitutos del fiscal: Primero	10,.250
Segundo	10
Tenientes de Alcaldes	9,500
Secretarios	20
Oficiales de los Secretarios: 4 primeros	9,750
4 segundos	9,500

La información procede de "Plan de sueldos para los ministros de que se componen las Salas de alcaldes de corte" en A.H.N. Consejos, Libro 1196, fol.38

(15) "La regla y practica que se ha de observar en el consexo de Castilla, y Sala de alcaldes que de nuevo se estableze", en A.H.N. Consejos, Libro, 1196, fol. 33.

(16) "Decretos de S.M. expedidos al Consejo de Castilla el día de 10 de Noviembre..." A.H.N. Consejos, Libro 1196, folios 4 y 5.

(17) "Distribución de los negocios que se han de repartir en las quattro salas de Alcaldes de Casa y Corte y de los días y horas que se han de juntar en ella" en A.H.N. Consejos, Libro 1196, fol. 40.

(18) "En esta Sala -la primera- se ha de sentenciar ttodo lo criminal ordinario y que no deva sentenciarse por la Sala plena". Entre las funciones de la Sala segunda y tercera tampoco se apreciaban otras que no fuesen judiciales. Seguía así el decreto: "en estas dos salas -la segunda y la tercera- se ha de trattar y sentenciar todo lo que toca adentro y afuera de la Villa de Madrid en ttodo lo zivil y que no concurra causa que se deva reservar a la Sala plena". A.H.N. Consejos, Libro 1196, folio 41.

(19) El interés de la "Real resolución del 11 de henero de 1714" nos ha llevado a reproducirla como apéndice. Véase el Apéndice VI. El manuscrito original en A.H.N. Consejos, libro 1196, fol. 37.

(20) En los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de los años 1714 y 1715 no se observa cambio con relación a los anteriores. La Sala seguía fijando precios de los productos que le tocaban y nombrando un alcalde semanero para controlar los abastos. También en el libro 1196 de la sección de Consejos del A.H.N. aparecen expedientes sobre materia de abastos que seguía la Sala. Así el 18 de junio de

1714 el Consejo ordenaba a la institución de la Corte que le informase sobre un auto que la Sala había promulgado dirigido a los a los mozos que vendían el aceite. El cinco de octubre de 1715 surgió de nuevo un enfrentamiento entre la Sala de Alcaldes y Ayuntamiento por un problema de competencias sobre el aprovisionamiento de azúcar de la Villa.

(21) Carmen Martín Gaité, El Proceso de Macanz..., pág. 255.

(22) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(23) La nueva composición de la Sala de Alcaldes tras el fracaso de los Decretos de Nueva planta fue promulgada por Felipe V el 22 de junio de 1715 y constituye el apéndice VIII del presente trabajo. Una copia en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(24) A.H.N. Consejos. Libro 1475, expte. 111.

(25) Continuaba así el Real Decreto: "reservando en mi el nombramiento de los Tenientes con los honores y circunstancias que tuviere a bien darles" en A.H.N. Consejos, libro 1475, expte. 111. También en el A.V.M. Secretaria 2-160-98.

CAPITULO VI. LAS REFORMAS DE FERNANDO VI.

La muerte de Felipe V supuso la llegada al trono de Fernando, único hijo varón que había sobrevivido del matrimonio del rey con M^a Luisa de Saboya. Fernando VI llegó al poder con 33 años y sin ninguna experiencia política. Los príncipes de Asturias, Fernando y su mujer Bárbara de Braganza, habían estado apartados de las responsabilidades de gobierno por su madrastra Isabel de Farnesio(1).

El nuevo rey no introdujo cambios importantes nada más acceder al trono. Los dos ministros que acaparaban las cinco Secretarías creadas por Felipe V continuaron al frente de sus respectivas departamentos. Así Sebastián de la Cuadra, Marqués de Villarías, continuó como titular de Estado y de Gracia y Justicia, y Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, siguió al frente de las Secretarías de Hacienda, Guerra y Marina e Indias(2). Sin embargo, la actitud continuista de Fernando VI fue alterada por el impulso reformista de sus dos ministros que consideraron que el cambio de monarca les otorgaba la posibilidad de realizar proyectos que habían sido frenados en el reinado anterior por la reina Isabel de Farnesio(3).

Villarías y Ensenada, a pesar de haber tenido una carrera política parecida, no compartían las mismas ideas sobre las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento del aparato burocrático de la monarquía hispana.

Sebastián de la Cuadra, Marqués de Villarías y Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, no habían seguido la carrera administrativa común a los miembros de los Consejos de la monarquía hispana. No habían estudiado en la Universidad, ni tampoco habían ejercido como oidores de las Audiencias o Chancillerías y por supuesto no habían sido consejeros. Ninguno de los dos formaba parte del grupo de los "golillas" que era como los reformistas del siglo XVIII calificaban a los que seguían la carrera administrativa para llegar a los Consejos.

Villarías se incorporó con dieciséis años a las funciones burocráticas haciendo carrera en la Secretaría de Estado. Fue nombrado Secretario del Rey en 1723 y desde 1730 ocupó la Secretaría de Gracia y Justicia compartiéndola desde 1731 con la de Estado(4).

El Marqués de la Ensenada tenía una trayectoria más rica que Villarías aunque tampoco se parecía a la de los miembros de los Consejos. Nacido en el pueblecito riojano de Alesanco en 1701, se formó en la escuela de Patiño especializándose en asuntos relativos a la Armada española. Participó en expediciones navales como la Reconquista de Orán en 1732 o la de Nápoles en 1733. Ascendido a Secretario

del almirantazgo en 1737, trabajó en la reconstrucción de la marina de guerra. En 1743, muerto Campillo, Ensenada se convirtió en su sucesor. El nueve de mayo fue nombrado Secretario de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Indias(5).

Los dos Secretarios compartían una experiencia en las Secretarías y un cierto recelo hacia el cuerpo de burócratas integrados en los Consejos. Esta aversión contra "los golillas" era comprensible. Ensenada y Villarías, como la mayoría de los reformistas de su siglo, consideraban necesario escindir las funciones administrativas de los consejos. Separar, como señala Gallego Anabitarte, lo contencioso de lo meramente administrativo(6). Es decir, realizar en los Consejos lo que Macanaz y Orry habían intentado hacer con la Sala de Alcaldes en el reinado de Felipe V. Los "golillas", como aspirantes o miembros de los Consejos, no estaban dispuestos a perder facultades, lo que implicaría una pérdida del poder que tenían sus instituciones. El propio Ensenada, en distintos apartados de su obra política, explica su posición frente a "los golillas" o "garnachas" y también frente a los Consejos. En su Dictamen secreto al rey sobre el gobernador del Consejo y juicio que hace de los Golillas, afirma:

"Un Oidor de Chancillería, después Obispo, no puede tener experiencia de lo que es policía ni economía de un reino, así como el Capitan General, el Intendente o

el Corregidor no entienden de la justicia en los tribunales, porque son profesiones diferentes, de que dimana la dificultad o imposibilidad de encontrar sujetos para ambas sillas..."

y continuaba Ensenada:

"Yo no soy, Señor, tan idiota que sea enemigo de Garnachas, pues los considero precisos en todos los reinos...pero no puedo conformarme con que siendo diferente la jurisprudencia propia del Consejo de Hacienda de la de Indias, estas de la de Ordenes y las tres de la de Castilla, sean pocos los togados que de todas no se consideren maestros; y aún sin haber visto un ejército ni una plaza, un puerto de mar, una corte extranjera ni un papel sobre intereses de príncipes, si vuestra majestad los preguntase sobre puntos graves de pura práctica de Guerra, marina y Estado, no responderan que no lo entienden , ni tampoco querrán creer que lo pueden ignorar, sino darán su parecer, y se ofenderán si no se sigue"(7).

Si los "golillas" eran, según Ensenada, incapaces de encargarse de funciones tan diversas como la policía, economía y justicia del reino, sus instituciones, los

Consejos debían así mismo especializarse. En el Plan General de Gobierno o representación de 1751 proponía:

"Dejar al Consejo de Castilla con solo lo de la justicia civil y criminal, patronato y cuidado de la jurisdicción real, repartiendo el gobierno, policía y economía de los pueblos, con ordenanzas entre ministros que respondan inmediatamente a V.M. de esta importancia"(8).

En este fragmento, el marqués de la Ensenada, denunció otro de los problemas que le preocupaban en el funcionamiento ordinario de los Consejos. Eran cuerpos escasamente resolutivos. Los expedientes se perdían entre sus múltiples dependencias. Los consejos, no solo eran criticables por la multitud y la diversidad de funciones que debían afrontar, sino por su sistema de funcionamiento. Ensenada consideraba mucho más efectivo el poder unipersonal de los Secretarios implantados por Felipe V que el poder sinodial de las instituciones tradicionales de la monarquía hispana.

En otro apartado del mismo escrito, Ensenada mostraba sus simpatías por el modelo de estado implantado en Francia por el rey Sol. Así afirmaba que la segregación de materias de gobierno de los Consejos y su absorción por los ministros es la "que sin duda alguna practica la Francia por el

establecimiento de Luis XIV"(9).

Es precisamente en esta relación con Francia donde se aprecian las diferencias esenciales entre Ensenada y Villarías. El Marqués de la Ensenada encabezaba el sentir de un grupo de funcionarios que integraban el llamado partido o cábala española. Además de Ensenada integraban el grupo de "los españoles", José de Carvajal, que hasta diciembre de 1746 no ocupó ninguna Secretaría, el Duque de Montemar y el Duque de Huéscar entre otros(10). El grupo de los españoles era partidario de reformar el sistema administrativo y judicial español siguiendo el modelo francés pero sin la presencia francesa. Consideraban espléndidas las reformas iniciadas por Colbert y Luis XIV en Francia, reformas que habían permitido la centralización y el incremento del poder del rey, pero despreciaban la dependencia que durante el reinado de Felipe V había tenido la Corte española del país vecino(11). Una cosa era apreciar el modelo político francés y otra que la Corte de Francia moviese los hilos del gobierno de España. La llegada al trono de un Borbón pero totalmente español llenaba de ilusiones y proyectos a "los españoles".

El otro grupo estaba encabezado por Arizaga, ayo de Fernando VI, y formaba parte activa del mismo Villarías. Junto a ellos una serie de altos funcionarios oriundos de la cornisa cantábrica. Contaban con el apoyo del confesor del rey, el jesuita francés Lefevre, así como de miembros

prestigiosos de la nobleza como el Conde de Maceda. Los vizcaínos eran también partidarios de reformas, pero a diferencia de los españoles, estaban satisfechos con la tutela que la Corte de Francia había desempeñado sobre España.

El enfrentamiento entre los dos grupos no se hizo esperar y además fue muy duro. Los primeros síntomas de que las cosas no funcionaban armoniosamente entre los dos Secretarios de Fernando VI fueron anteriores a la muerte de Felipe V. En marzo de 1746, Ensenada había logrado colocar una doble representación diplomática en la corte de Francia. El embajador ordinario, el principe de Campoflorido, se vió desagradablemente sorprendido por el nombramiento de embajador extraordinario ante la corte de Francia del duque de Huéscar. El nuevo embajador debía, al igual que Campoflorido, despachar con el Secretario de Estado, marqués de Villarías. Pero Huéscar mantuvo una correspondencia reservada con su entonces amigo y compañero de grupo José de Carvajal, que a su vez informaba a Ensenada. El marqués había tomado precauciones políticas exigiendo a Huéscar que nunca se dirigiese personalmente a él(12).

El enfrentamiento entre los dos partidos, el de los españoles y el de los vizcaínos, se hizo abierto y radical con una reforma que Villarías consideraba imprescindible para mejorar el gobierno y la seguridad en la Corte. El Gobierno Político y Militar de Madrid se creó el 24 de julio

de 1746 y como Gobernador se designó a un partidario de los Vizcaínos, el conde de Maceda(13).

La reforma de inspiración francesa, afectaba directamente a las dos instituciones que compartían las tareas de justicia y gobierno de la Villa y Corte, la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de la Villa (14). Con ella se pretendía separar atribuciones de las dos instituciones: la Sala se quedaría sin sus competencias en materia de gobierno y al Ayuntamiento se le privaría de las de justicia; al frente de las dos instituciones habría una única persona, el gobernador, que despacharía directamente con el Secretario de Gracia y Justicia, cargo que desempeñaba Villarías(15). El proyecto, por lo tanto, no era muy novedoso. Tenía mucho que ver con la Nueva Planta para la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento intentada en el reinado anterior.

La reforma en si misma no podía parecerle mal al grupo de los españoles. Es más, podría haber sido una reforma de Ensenada si examinamos sus proyectos políticos. Se separaban las competencias administrativas de las contenciosas y se aligeraba el funcionamiento de las instituciones al instaurar el despacho del gobernador con el Secretario Villarías. De hecho, muy a su pesar, el grupo de los españoles reconocía, en distintos fragmentos de la correspondencia que intercambiaban sus miembros, que la reforma no estaba del todo mal. Así el Duque de Huéscar en

carta enviada a José de Carvajal, el 6 de Marzo de 1747, afirmaba: "Cuidado con todo esto de no quitar el gobierno de Madrid que es cosa buena cuando lo es el governador"(16). El problema estaba para Ensenada y su grupo, en la persona del Gobernador, el Conde de Maceda, que era un miembro vigoroso del partido de los vizcaínos y, sobre todo, en que la idea de la reforma hubiese partido de Villarías enemigo político de Ensenada.

La creación del Gobierno Político y Militar de Madrid, no sólo supuso el enfrentamiento entre las dos facciones políticas existentes al inicio del reinado de Fernando VI, sino también entre los reformistas, representados por Villarías y Ensenada, situados en las Secretarías y la burocracia tradicional asentada en las Audiencias y Chancillerías, en la Sala de Alcaldes y en los Consejos.

En el decreto de creación de la nueva institución, Fernando VI, a través de Villarías, establecía que el Gobernador Político y Militar de Madrid debía actuar "con independencia del Consejo". Así continuaba el decreto:

"que en su consecuencia ni el Consejo, ni sus Gobernadores, ni otro tribunal alguno tenga en adelante conocimiento, ni intervención en todos ni en algunos negocios tocantes al mando Político, Económico y Militar de Madrid y que vos como tal gobernador la exerzais privativa y Omnimodamente(17)"

Para que la inhibición del Consejo fuese real el decreto establecía a su vez que el nuevo Gobernador, conde de Maceda, debía presidir la Sala de Alcaldes, novedad que suponía que ésta se alejaba realmente de la tutela del Consejo. Por primera vez, desde 1598, la Sala era gobernada por un extraño, por alguien que no tenía nada que ver con el Consejo de Castilla. También disolvía todas las juntas en donde participaban miembros del Consejo como la Junta de Abastos o la del Real Hospicio de Madrid. Este recorte de las atribuciones del Consejo de Castilla no gustó a sus ministros aunque no mostraron inmediatamente su descontento.

A los Alcaldes de Casa y Corte tampoco les gustó ese alejamiento de la institución de la que se consideraban parte integrante y a la que pretendían acceder como ministros tras unos años ocupando sus plazas de alcaldes. El descontento de la Sala fue todavía mayor al privarle de parcelas de poder que siempre había ostentado. La Sala, según el Decreto de creación del nuevo cargo de Gobernador, quedaba eximida de actuar "en las causas pertenecientes a la policía y economía de Madrid...respecto de pertenecer a la Jurisdicción privativa del gobernador"(18). Es decir se convertía en mero tribunal de justicia, siguiendo el deseo de los reformistas del siglo XVIII de separar los asuntos contenciosos de los meramente administrativos.

Los Alcaldes de Casa y Corte también tardaron en mostrar su descontento. Las razones nos las explica Don José

de Carvajal en carta enviada a su amigo y compañero de intereses políticos el Duque de Huéscar:

" El sobredicho varon, (conde de Maceda), es tanto lo que desbarra verbo et opere, que no le falta un dedo para estar declarado a Mojarrilla, ia fastidia donde se había de apoyar, conque oliendolo las gentes saca la quenta de lo que harán con el, cuando todos los golillas y corbatones creen que la novedad, que por tal aborrecen, se hizo para que la disfrutara el, y no hacen contra el lo que temen que no pueden conseguir"(19).

Para nuestros burócratas, despectivamente llamados golillas por Carvajal, el momento de la lucha contra el Gobernador todavía no había llegado. El mentor político de Maceda, el marques de Villarías, seguía manteniendose fuerte al lado del rey Fernando VI. Había que esperar, pensaban los burócratas, que la lucha en las altas esferas entre Villarías y Ensenada se resolviese para empezar su lucha particular contra Maceda.

La creación del Gobierno Político y Militar de Madrid, no sólo disgustó al Consejo de Castilla y a la Sala de Alcaldes, sino que también, fue duramente contestada por el Ayuntamiento de la Villa.

El deseo de separar las competencias judiciales de las

del gobierno político y económico en Madrid llevó a la supresión del Corregimiento de la Villa y por supuesto de las dos tenencias de Corregidor. El juzgado de Villa desaparecía y por lo tanto el Ayuntamiento quedaba privado de sus competencias de justicia. El nuevo presidente de las reuniones municipales pasaba a ser el Gobernador Político y Militar de Madrid.

La nueva figura de Gobernador gozaría sin embargo de más poder que la figura del Corregidor de la Villa. Con la nueva reforma, no solo se pretendía evitar los roces entre la Sala y el Ayuntamiento, causados por compartir sus atribuciones, sino que también, se intentaba poner orden en la economía de la corporación madrileña. Para ello, en primer lugar, Villarías estableció la vía reservada entre el Gobernador y el rey. Era necesario controlar directamente la Corporación madrileña si se quería poner fin a sus males económicos. En segundo lugar, se tomaron una serie de medidas extraordinarias. Se le dieron más recursos al Ayuntamiento de Madrid, aumentando su dotación en 190 escudos. Se suprimieron antiguos gravámenes sobre las sisas de Madrid, en concreto 400 ducados que se utilizaban para sueldos de funcionarios del Ayuntamiento, encargándose la Real Hacienda en adelante de ellos. Se formó, además, para la administración de las nuevas dotaciones, una contaduría nueva suprimiendo "las otras que ay que son muchas y de crecido gasto". A su vez, se creó una Junta para la

administración general de las sisas presidida por el Conde de Maceda. También el nuevo gobernador presidiría la nueva Junta de Abastos(20). Por último, el Gobernador debía investigar. La Corona consideraba que la Corporación madrileña funcionaba mal y era necesario conocer a fondo lo que ocurría para imponer soluciones. El Conde de Maceda debía lograr:

" Que se examine el origen y naturaleza de los grandes atrasos y empeños de Madrid, y se propongan medios para que S.M. los examine:Que se averigue en que consiste la confusión y falta de papeles del Archivo de Madrid...Que se informe a S. M. del estado de los muchos Pleitos detenidos que tiene Madrid. Que se averigue el estado de los propios de Madrid y en que consisten sus grandes perdidas..."(21).

El rey y el Secretario de Gracia y Justicia sí tenían intuiciones sobre el origen de los males del ayuntamiento. Para ellos estaba claro que una gran parte de la culpa recaía en la incapacidad de los propios regidores y de los subalternos de la corporación madrileña.

Los regimientos de Madrid, como en otro lugar señalamos, estaban enjenados y para servirlos se tenían que pasar unas pruebas en el propio Ayuntamiento relativas sobre todo, al ser Madrid ciudad de Estatuto, a la limpieza de

sangre. Una vez superadas la Cámara de Castilla otorgaba el título necesario para desempeñar el oficio(22).

Pero tras la reforma de 1746, el rey pasaba a controlar directamente los nombramientos por una doble vía: una, que conocía la Corporación, establecida por un Real Decreto comunicado el 22 de Septiembre de 1746 al Ayuntamiento; y otra reservada, que solo conocían el nuevo Gobernador, el Secretario de Gracia y Justicia y el propio rey.

El Decreto de septiembre del año 1746 se presentó a la Corporación como una ventaja y un honor adelantándose a las presumibles protestas al ir en contra de las ordenanzas del Ayuntamiento. Así el decreto señalaba "que habiendose dispensado al ayuntamiento el honor de que su jefe no tenga otra responsabilidad, ni subordinación que al persona de S. Magestad..." y continuaba "que siempre que hubiere de entrar en el Ayuntamiento de Madrid algun regidor nuevo...haya de preceder aprovación expresa del Rey, sobre representación que V. E.ha de dirigir por esta via". Este control, que era el que conocía el Ayuntamiento de Madrid, no parecía suficiente ni al rey ni a Villarías y por ello establecieron la via reservada y secreta con el Gobernador. El Conde de Maceda debía elaborar dos informes de los aspirantes, uno público, cumpliendo los requisitos del decreto de 22 de septiembre, y otro elaborado "reservadamente al mismo tiempo y en representación separada" en donde el nuevo gobernador debía "explicar a S. magestad las circunstancias personales

que concurran en el pretendiente, sean en pro o en contra de las que prescriban las leyes, y que también explique V.E. a su magestad su dictamen en quanto si le tiene por digno de ser o no ser admitido..."(23).

De todas las reformas sobre la administración local llevadas a cabo en el siglo XVIII, la del Gobernador Político y Militar fue la que menos tiempo estuvo en vigor. Fue creada el 24 de Julio de 1746 y suprimida, tras la dimisión del Conde de Maceda, el 13 de Julio de 1747.

Las razones de este estrepitoso fracaso fueron muchas. Por un lado el Conde de Maceda probablemente no era la persona adecuada para el cargo; sus oponentes políticos, los miembros del grupo de los españoles, le pusieron el sobrenombre de Mojarrilla y no porque fuese una persona locuaz y populachera sino por todo lo contrario. Maceda era grandilocuente, ceremonioso y reglamentarista. Al conocer su nombramiento como gobernador, el Conde elevó al rey un enorme memorial de 64 folios en donde además de resumir los Decretos de nombramiento exigía mayores honores. Maceda quería gozar del mismo rango y honores que el Gobernador del Consejo de Castilla. Así afirmaba, con ese lenguaje sencillo que le había supuesto el mote de Mojarrilla, que "el prefecto Pretorio con que tiene alguna similitud el consejo y el Prefecto de la corte a que se equipara el gobierno son en la consideración del común derecho de igual autoridad, y parece que se hace inferior a esta ultima prefatura..."(24).

El Conde de Maceda no era un subordinado fácil y el propio Villarías consideraba exageradas sus pretensiones. En cierto modo tenía razón el duque de Huéscar cuando en carta a su amigo José de Carvajal afirmaba: "no hay duda que Mojarrilla hará disparates"(25).

Existieron, sin embargo, factores más importantes que contribuyeron al fracaso del Gobierno Político y Militar de Madrid.

La oposición del Consejo de Castilla y de la Sala de Alcaldes se hizo radical al triunfar claramente el partido de los españoles y ocupar sus miembros todas las Secretarías. Al ser destituido Villarías de la Secretaría de Estado y nombrado en su lugar Carvajal, el cuatro de Diciembre de 1746, los consejeros y alcaldes no necesitaban agazaparse. Los españoles habían triunfado, Villarías caído en desgracia y el Gobernador, creación de Villarías, podía ser atacado impunemente(26). El Conde de Maceda dejó de ser obedecido y sobre todo dejó de ser respetado. El Consejo, que presumiblemente estaba alejado de los asuntos de gobierno y Justicia de la Corte, intervino en los mismos e intentó situarse por encima del Gobernador. El siete de febrero de 1747, en un memorial de Maceda dirigido al Secretario de Gracia y Justicia, el gobernador expresaba su descontento e indignación con el Consejo de Castilla. La razón enarbolada por el Conde era el trato humillante que le

infringía el Consejo. Se comportaba con él como con cualquier otro subordinado. Afirmaba Maceda:

" Paso a manos de v. e. (para que se sirva con toda brevedad ponerlos en manos del rey), los papeles que he tenido esta mañana del Gobernador del consejo...que me han causado notable admiración, pues mantengo muy en la memoria los Decretos que S.M. se sirvió expedir para la creación de mi empleo en que se manda se me comuniquen qualesquiera ordenes por la Secretaria de Gracia y Justicia...con independencia del Consejo y demás tribunales por la inmediación que su Magestad ha declarado tener el Gobierno a su real persona"(27).

Si el Consejo humillaba al Gobernador, la Sala simple y llanamente no le obedecía (28). En su escrito de dimisión Maceda expresaba su exasperación por la actitud de la Sala de Alcaldes. Así afirmaba su deseo de que:

"Se conozca hasta donde ha llegado la haviantez (sic) de la Sala de Alcaldes, en la resistencia con la que repugna la obediencia de mis providencias acordadas ...con el mayor examen, y reflexión, habiendo hasta ahora, hecho la costa mi sufrimiento en otros asuntos por no molestar a S. M., de que no me es posible

libertarle en esta ocasión (aunque con mucho dolor) por haver llegado, al no esperado extremo su proceder."(29)

La caída de su mentor, el Marqués de Villarías y la actitud de los miembros de la Sala y del Consejo hicieron que Maceda, primero cayese en desgracia frente al rey y al nuevo Secretario Carvajal y luego, presentase su dimisión. El 23 de Febrero de 1747 el rey promulgó un Decreto fallando a favor del Consejo de Castilla en un litigio que este mantenía contra el Gobernador. En el mismo escrito, Fernando VI reconocía la superioridad del Consejo de Castilla sobre Maceda (30). Desde ese momento todos esperaban la caída del Gobernador. Así el cinco de julio del año 1747 Carvajal escribía a Huéscar: "...me aseguran (que Maceda) está quemado, pero no se atreve a poner ocico al Señor como habíamos temido..."(31). En realidad Maceda se atrevió pronto. El 13 de Julio de 1747, aprovechando un duro enfrentamiento con la Sala de Alcaldes, el Gobernador presentó su dimisión al rey. Fernando VI la aceptó y el conde de Maceda, previo nombramiento de Capitan General, fue apartado de la vida pública.

La dimisión de Maceda supuso el fin del Gobierno Político y Militar de Madrid. El grupo de los españoles había utilizado a la burocracia castellana en su lucha política contra los vizcaínos. Se habían apoyado en esos "golillas" que tanto criticaban en sus escritos, para lograr

su triunfo contra el grupo de Villarías y Maceda. La lucha había sido tan encarnizada que no podían salvar una reforma con la que ideológicamente estaban de acuerdo. Nadie mejor que José de Carvajal, figura ascendente en el año 47, para explicar la situación:

" ...ya te escribirán que salimos de Maceda. no pude mantener vivo el gobierno, del fastidio que avia dado, aunque solo puse en el decreto: he resuelto no nombrar governador sino es corregidor como antes..."(32)

A pesar del subterfugio de Carvajal nunca más se volvió a nombrar un Gobernador Político y Militar de Madrid.

Primero se restituyó el Corregimiento de Madrid y las dos tenencias de corregidor y posteriormente se devolvió a la Sala y al Ayuntamiento su antigua planta y atribuciones(33). En ese momento, de nuevo todo estuvo dispuesto para que los conflictos y pleitos entre los dos organismos se iniciasen otra vez. Una nueva reforma había fracasado.

NOTAS DEL CAPITULO VI.

(1) Para el reinado de Fernando VI siguen siendo ciertas las palabras de Don Marcelino Menéndez Pelayo, repetidas después por muchos historiadores: "... no hay parte de nuestra historia desde el siglo XVI acá, más obscura que el reinado de Fernando VI. Todavía está por hacer el cuadro de aquel periodo de modesta prosperidad y reposada economía, en que todo fué mediano y nada pasó de lo ordinario ni rayó en lo heroico; siendo el mayor elogio de tiempos como aquellos, decir que no tienen historia." Fernando VI fue estudiado por Alfonso Dánvila, Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza, Madrid 1905. Distintos aspectos del reinado han sido analizados por M^a Dolores Gómez Molleda en varios trabajos publicados alrededor de los años 50. Destacan, "Viejo y nuevo estilo en la corte de Fernando VI", Eidos, 4, 1957 y "El Marqués de la Ensenada a través de su correspondencia íntima" Eidos, 2, 1955.

De varios autores y de desigual interés son los ensayos contenidos en La época de Fernando VI. Ponencias leídas en el coloquio conmemorativo de los 25 años de la fundación de la cátedra de Feijoo, Oviedo, 1981. Visiones más recientes de las reformas de Fernando VI en los trabajos de Pablo Fernández Albadalejo, "La monarquía", en El rey y la Monarquía, Madrid , 1989 y John Lynch, Bourbon Spain 1700-1808, Oxford, 1989.

Sobre las relaciones entre Fernando VI e Isabel de Farnesio un breve pero interesante comentario lo constituye el de John Lynch al afirmar que: "But he (Fernando VI) could not inspire his ministers or give them leadership and unity; he was in any case poorly prepared for government; his suspicious stepmother, Elisbeth Farnese, had kept him out of

public affairs, and now his solicitous wife and ministers kept public affairs from his easily disturbed mind", Bourbon Spain..., pág. 158

(2) José Antonio Escudero, Los orígenes del Consejo de ministros en España, Madrid, 1979, pp. 163-168

(3) John Lynch, Bourbon Spain..., pág.158.

(4) La figura del Marqués de Villarías ha sido poco estudiada. Algún apunte biográfico en J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España. pp. 99-100. y Miguel Martínez Robles, los oficiales de las Secretarías de la Corte bajo los Austrias y los Borbones, Alcalá de Henares, 1987. pp. 200-201

(5) El marqués de la Ensenada sí ha sido centro de interés para los investigadores que han realizado sus trabajos basándose en la propia obra de Ensenada y en su correspondencia. Son de gran interés los trabajos de Antonio Rodríguez Villa, Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, Madrid, 1878; M^a Dolores Gómez Molleda, "El marqués de la Ensenada a través de su correspondencia íntima", en Eidos, 2, 1955, y el de Felipe Abad León, El Marqués de la Ensenada, su vida y su obra, Madrid, 1985. Para el apunte biográfico me he basado en la obra de John Lynch, Bourbon Spain, pp. 158-160.

(6) Gallego Anabitarte fue, como señala Fernández Albadalejo, pionero al afirmar que la intención de alguno de los reformistas del siglo XVIII fue la de separar lo gubernativo de lo contencioso. Gallego Anabitarte, Administración y jueces: gubernativo y contencioso, Madrid, 1971. Fernández Albadalejo corrobora las tesis de Anabitarte al afirmar que "Ensenada, prácticamente en todas sus representaciones, insistió en la necesidad de que las tareas

de gobierno pudieran desempeñarse libres de la asfixiante tutela judicial. Consecuente con este planteamiento llegó a plantear abiertamente la necesidad de que la justicia debía reducirse abiertamente a una dimensión estrictamente contenciosa". "La monarquía", en El rey y la monarquía, pág. 48.

(7) Recogido por F. Abad León, El Marqués de la Ensenada... pág. 198.

(8) También recopilado por F. Abad, El Marqués de la Ensenada.... pág. 269.

(9) Representación del Marqués de la Ensenada al rey Fernando VI del año 1751, Reproducida por Abad Leon, El Marqués..., pág.. 295.

(10) Para la vida política de la primera etapa del reinado de Fernando VI es imprescindible revisar tanto la introducción como la correspondencia contenida en la obra de Didier Ozanam, La diplomacia de Fernando VI. Correspondencia entre Carvajal y Huéscar, 1746-1749. También el libro de Teófanés Egido, Opinión Pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII, Valladolid, 1971.

(11) Sobre las reformas llevadas a cabo en Francia durante el reinado de Luis XIV, revisar en primer lugar las Memorias de Luis XIV, publicadas traducidas por el F.C.E. México, en 1989. Entre los estudios contemporáneos resaltamos el de Ernest Lavissee, Louis XIV, Paris, 1978 y el de Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la Monarchie Absolue, Paris, 1974.

(12) En carta enviada el 15 de agosto de 1746 Ensenada le exigía a Huéscar: "...por estos tres conductos (la marquesa

de Salas, madame Obrien y Macanaz), y no por vuestra merced, quiero saber novedades de las que se llaman de Estado", recogida por F. Abad, El Marqués de la Ensenada... pág. 142.

(13) "Don Antonio Pedro de Nolasco de lanzas, conde de Maceda y de Taboada, Grande de España, Gentilhombre de Cámara de S.M. con ejercicio, caballero de la Real orden de San Genaro, Teniente General de los ejércitos de S.M. Gobernador Militar y Político de esta corte de Madrid..." A.H.N. Consejos, Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Libro de Gobierno, folio 205. Los encabezamientos de las ordenes y edictos del conde de Maceda permiten conocer parte de su biografía. Además sabemos que nació en el año 1689 y falleció en 1754. Realizó una carrera militar brillante, llegando a Teniente General y que fue nombrado virrey de Navarra en 1737, cargo que desempeñaba al ser elegido para el nuevo cargo de Gobernador Político y Militar de Madrid. Didier Ozanam, La Diplomacia de Fernando VI, pág. 146.

(14) Sobre el Gobierno Político y Militar de Madrid se han publicado dos trabajos, el de José Luis Bermejo Cabrero, "Figuras institucionales de la Edad Moderna", en Derecho y Administración Pública en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985, pp. 42-60; y el de Ana M^a Fernández Hidalgo, "Una medida innovadora en el Madrid de Fernando VI. El Gobernador Político y Militar de Madrid" en Cuadernos de investigación Histórica, 7, Madrid, 1987. Para el presente análisis, sin embargo, utilizamos fuentes primarias fundamentalmente del Archivo General de Simancas.

(15) Así por Real Decreto de uno de octubre de 1746 Fernando VI declaraba que "he extinguido el cargo, y oficio de corregidor de Madrid y creado en su lugar el de Gobernador Político y Militar que he concedido a vos el citado conde de

Maceda" y continuaba el Real Decreto "nombrandoos para evitar disputas y competencias como por la presente os nombro como tal Gobernador Político y Militar de Madrid, por Presidente de la Sala de Alcaldes...". A. G. S. Gracia y Justicia, leg. 783.

(16) Huéscar a Carvajal, 6 de marzo de 1747, recopilada por Didier Ozanam, La diplomacia de Fernando VI, pág. 152.

(17) A. G. S. Gracia y Justicia, leg. 783, folios 1 y 2

(18) A.G. S. Gracia y Justicia. leg. 783, folio 4

(19) Carvajal a Huéscar, 19 de Febrero de 1747, Didier Ozanam, La Diplomacia de Fernando VI, pág. 146.

(20) A. V. M. Secretaría 2-397-128 y "Resumen de la instrucción al conde de Maceda", A.G.S. leg. 783, folios 1 y 2.

(21) "Resumen de la instrucción al Conde de Maceda", A.G.S. leg. 783, fol.2.

(22) En el capítulo 3 del presente trabajo dedicamos un apartado a los regidores de Madrid señalando las condiciones de acceso al cargo.

(23) "Encargo reservado al Gobernador para que cuando informe de las circunstancias publicas de qualquiera que pretenda entrar a ser regidor, informe separadamente de las prendas personales, y si le tiene por util, inutil o perjudica" A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 783.

(24) "Memorial del Conde de Maceda del 24 de Agosto de 1747", fol 26, A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 783.

(25) Huéscar a Carvajal, 6 de marzo de 1747, en Didier Ozanam, La diplomacia..., pág. 152.

(26) Didier Ozanam, La diplomacia..., pág. 17.

(27) Escrito del Conde de Maceda del 7 de Febrero de 1747, A. G. S. Gracia y Justicia, leg. 783, fol. 1

(28) En el Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes de 1747 se recogen numerosas quejas de la Sala y no solo quejas sino testimonios de su desobediencia. Así por ejemplo la Sala le " prevenía al gobernador que no gravase a los alcaldes con lo que parece corresponder a los Regidores, una vez separada la Sala y sus alcaldes y cometido todo al Gobernador de Madrid..." A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1747, folios 404 y 405.

(29) Y continua así el Conde de Maceda "Persuadome que v. e. me hará la justicia de considerarme tan mortificado, como asistido de razón, y que dará cuenta al rey de mi citada consulta con la brevedad que pide esta urgencia, y que le hará saber, espero de su piedad, ha de hacer valer las patentes authorities que se leen en sus decretos de erección del Gobierno que se dignó poner a mi cargo". Escrito de dimisión del Conde de Maceda del 13 de julio de 1747. A.G.S. Gracia y Justicia, Legajo 783.

(30) El decreto era firme con el Gobernador de Madrid. Así se dirigió Fernando VI al Conde de Maceda: "Siendo la exemption del Consejo que he concedido a vos el Gobernador de Madrid, en la erección de este empleo, solo en lo tocante a lo gubernativo, económico y político del casco de la Villa, y las cinco leguas de su partido , y no en lo judicial ni en lo general de todos mis reinos, en que como

una parte de ellos es este lugar y territorio comprendido, por lo cual solo el Consejo de Castilla tiene la general y suprema jurisdicción; mando que en todos los casos que la ejerza, según lo prevenido en las leyes, ó por especial encargo de nuestra Real persona, hagáis dar toda la asistencia que os prevenga en la forma acostumbrada a los demás virreyes, gobernadores y corregidores jefes de partido o provincias, recibiendo con la mayor atención en estos casos, sus ordenes que dimanen de mi real persona por un conducto de la mayor autoridad, y representación y las executeis. Tendréislo entendido para su cumplimiento" Buen Retiro 23 de febrero de 1747. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 783.

(31) Carvajal a Huescar, 5 de Julio 1747, en Didier Ozanam, La Diplomacia... pág. 208.

(32) Carvajal a Huéscar, 18 de Octubre de 1747, en Didier Ozanam, La Diplomacia... pág. 238.

(33) Por real Decreto del 26 de noviembre de 1747 Fernando VI dispuso que "Deseando evitar los embarazos que suele ofrecer la diferencia de jurisdicciones para el uso de las respectivas providencias y precaver el que haya confusión y motivo de recursos entre las facultades del nuevo corregidor, las de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y los tribunales, tengo por conveniente declarar que la Sala quede con las mismas y propia jurisdicción que siempre ha tenido a excepción de la que se puso al cuidado de la Junta de Abstos que ha de correr al del corregimiento y al de las personas a quienes yo destinase, para este manejo... y encargo y confío a la conducta del Marqués del Rafal la administración de las sisas, fuentes, empedrados, limpieza, riegos, palenques, plantíos de árboles, composturas de caminos, reparos maiores y menores de puentes y también los cuarteles y utensilios de

las tres compañías de guardias de corps, de los regimientos de infanteria española y walona y de la guardia de alabarderos, con los propios y rentas de Madrid". A.H. N. Consejos, libro 1479.

CAPITULO VII. LAS REFORMAS DE CARLOS III

El último año del reinado de Fernando VI había sido difícil. La muerte de su mujer, Doña Bárbara de Braganza, agudizó el estado de melancolía del rey. Desde su viudedad, Fernando VI había decidido recluirse en el castillo de Villaviciosa. Este lugar estaba próximo a la Corte y, por lo tanto, era cómodo para los ministros que debían despachar con el rey pero era un sitio triste y no reunía las condiciones para curar un estado melancólico. Uno de los amigos y biógrafos de Carlos III, el conde de Fernán Nuñez nos lo describía así:

"(Sus) espesas murallas parecían, más que otra cosa, una prisión y no un lugar destinado y propio para distraer el ánimo de un melancólico, y la aridez de sus inmediaciones no eran tampoco capaces de contribuir a este fin...(1).

Tal vez por lo inhóspito del lugar y probablemente por el curso natural de la enfermedad, la melancolía del rey, según Fernán Nuñez, evolucionó:

"...pasando esta a su segundo grado degeneró en manía...No volvió a salir del castillo encantado en que le habían puesto para alegrarle, y pasaba horas enteras paseandose solo en su cuarto. Al fin, un día se encerró desde por la mañana, y, no obstante de que era sumamente devoto, no abrió ni para oír misa ni para nada" (2).

Mientras que Fernando permanecía enfermo, las instituciones de la monarquía seguían funcionando aunque no sin cierta desazón. Durante el año que duró la incapacidad de Fernando las leyes y pragmáticas que precisaban su rúbrica aparecieron con un encabezamiento distinto que no dejaba de sorprender a sus súbditos. "Conviene al servicio del rey" fue la fórmula ideada por su hermano y heredero, el futuro Carlos III, desde Nápoles para que el aparato de la monarquía hispana siguiese funcionando (3). La maquinaria del estado no se había detenido pero se respiraba un cierto aire de precariedad. No se podían tomar grandes decisiones, ni por supuesto realizar nuevos proyectos. En esta situación es comprensible que a la muerte de Fernando VI, acaecida en 1759, su sucesor fuese recibido con auténtica devoción(4).

Carlos III llegó al trono de España después de haber sido durante 25 años rey de las Dos Sicilias. Su experiencia napolitana influyó mucho en los proyectos reformistas concebidos para la monarquía hispana. En el reino de las Dos

Sicilias había contado para las tareas de gobierno con la colaboración del toscano Tanucci que desempeñó los cargos de ministro de Justicia y desde 1755, de ministro de Estado. Tanucci no viajó a España con Carlos sino que permaneció junto al heredero de las Dos Sicilias, el tercero de los hijos varones del rey, Fernando. A pesar de la distancia Tanucci siguió ejerciendo su influencia sobre Carlos de Borbón a través de la correspondencia que mantenían y que tanto alegraba al rey(5).

Las reformas de Carlos en Nápoles tuvieron como objetivo la transformación de los antiguos territorios virreinales de Nápoles y de Sicilia en un estado soberano, el reino de las Dos Sicilias. No era una tarea fácil. Por un lado existían presiones externas que intentaban limitar el poder y la autonomía del nuevo rey. Isabel de Farnesio y Felipe V no podían entender que el joven reino fuese otra cosa que un aliado de España y sobre todo de los intereses territoriales de sus soberanos. Guerras y paces que nada tenían que ver con los asuntos de las Dos Sicilias se sucedían. Solo la muerte de Felipe V dió libertad a Carlos de Borbón para realizar una política propia en el marco de las relaciones internacionales(6).

Además de los límites externos a la soberanía de las Dos Sicilias, existían fuerzas internas que dificultaban el ejercicio del poder regio. La iglesia y la nobleza eran fuerzas feudales que había que corregir. Las reformas

carolinas no lograron terminar con el poder de la iglesia y de los barones napolitanos pero si mostraron al entonces joven rey las dificultades que cualquier reforma entrañaba y sobre todo le enseñaron a pactar.

Carlos tuvo que realizar en Nápoles una política de reformas contenida, menos ambiciosa que la de otros monarcas de su siglo pero, quizás por ello, más eficaz(7).

Algunos historiadores, sin embargo, consideran que la política carolina no fue del todo eficaz. Ya en el siglo XIX Vincenzo Cuoco estableció que la diferencia entre las intenciones y los resultados de las reformas llevadas a cabo por Carlos y su colaborador Tanucci, no se debieron sólo a la oposición de los grupos privilegiados sino a la esencia misma de las reformas. Para Cuoco el problema estribaba en que las reformas carolinas seguían confundiendo el poder legislativo y el poder judicial. No intentaron crear instituciones encargadas del gobierno y otras encargadas de aplicar la justicia. Tampoco privilegiaron el papel de los ministros frente al de los organismos sinodiales. El "Foro contunuo siendo el centro de todos los asuntos" afirmaba el historiador italiano, y por lo tanto las decisiones gubernativas del rey eran vulnerables. Los letrados situados en los organismos sinodiales, en "el foro", podían fácilmente convertir en asuntos contenciosos las disposiciones regias, frenando así las reformas.(8).

Vicenzo Cuoco, aunque a finales del siglo XIX, coincide

con las reflexiones que Gallego Anabitarte expone en su obra Administracion y jueces: Gubernativo y contencioso. Así afirma Anabitarte que:

"España no cayó de forma alguna en el "absolutismo", sino que encontró su constitución en el principio fundamental de distinción entre lo "gubernativo y contencioso" sobre el que se iba a basar "nuestro sistema" de justicia, y con ello un principio jurídico vinculante para limitar el poder real...Durante el antiguo Régimen el poder político y las grandes decisiones estaban en manos del rey... pero los súbditos tuvieron en "lo contencioso" una formidable arma para parar medidas reales que les afectaron directamente en sus derechos, y además impedir "revolucionarias" reformas... en la época del Despotismo ilustrado"(9).

La no separación entre lo gubernativo y lo contencioso fue una de las características de las reformas que Carlos de Borbón y Tanucci decidieron para el reino de las Dos Sicilias y fue también una característica de las reformas que Carlos y sus ministros llevaron a cabo en España.

La llegada de Carlos a España no supuso un cambio importante en la composición del equipo de gobierno. Wall continuó al frente de las Secretarías de Estado y de Guerra,

Arriaga de las de Marina e Indias, Muñiz de la de Justicia siendo solamente sustituido Juan Francisco Gaona, conde de Valparaíso, por el italiano Marqués de Esquilache, al frente de la Secretaria de Hacienda(10). Sin embargo Carlos III llevó a cabo algunas acciones que auguraban simpatía por las etapas reformistas de los reinados de su hermano y de su padre. Así liberó de su larga prisión a Macanaz que tanto había influido en la primera etapa del reinado de Felipe V y también levantó el destierro del Marqués de la Ensenada, que regresó a la Corte lleno de proyectos y de ansias de poder(11).

Los primeros conflictos internos del reinado de Carlos III se produjeron en el año 1763 al enfrentarse el Secretario de Estado y de Guerra, Ricardo Wall con el inquisidor general. La pugna, iniciada por un problema de censura, se decidió a favor del inquisidor lo que ocasionó la dimisión de Wall. En septiembre de 1763 el rey había decidido quien debería ocupar las secretarías vacantes. La de Guerra la dirigiría Arriaga, mientras que para la de estado nombró a otro italiano, el Marqués de Grimaldi. Un nuevo cambio ministerial se produjo en el año 1765 al fallecer el titular de justicia Muñiz y nombrar para su cargo el rey a un burócrata mantefista, Manuel de la Roda. Otros letrados que no habían pasado por los colegios mayores se encontraban situados en puestos claves. Desde 1762 Pedro Rodríguez de Campomanes conocido abogado de la Corte y

también manteísta, ocupaba el cargo de fiscal del Consejo de Castilla. La otra fiscalía la desempeñaba desde 1766 el conde de Floridablanca(12).

Las primeras reformas de Carlos III fueron impulsadas desde la fiscalía del Consejo de Castilla que Campomanes ocupaba. Tanto la libertad de comercio para los cereales como la incorporación de los señoríos de la corona, así como la propuesta de desamortización eclesiástica, fueron proyectos preparados por Campomanes aunque impulsados por el Secretario de Hacienda, Esquilache (13).

Estas reformas iniciales del reinado no fueron bien recibidas ni por el pueblo, que sufría un encarecimiento de los precios de las subsistencias, sobre todo del pan, ni por la iglesia ni la nobleza que veían recortados sus privilegios económicos(14). El malestar social tuvo como consecuencia los motines que surgieron primero en la Villa y Corte y luego en otros lugares del reino durante la primavera de 1766.

7.1. LOS MOTINES DE 1766 Y LAS PRIMERAS REFORMAS MUNICIPALES.

Los protagonistas del motín de Madrid, no reconocieron que las causas principales del mismo fuesen el precio de las

subsistencias o el disgusto por el recorte de unos privilegios que siempre habían gozado nobleza e iglesia. El problema, para los amotinados, radicaba principalmente en la presencia de extranjeros al frente de las Secretarías así como en la promulgación de pragmáticas que, según ellos, estaban inspiradas en costumbres de países vecinos que nada tenían que ver con las tradiciones de la monarquía hispana. Aunque el bando del diez de marzo de 1766, que prohibía el uso de las capas largas y de los sombreros redondos, fuese la octava vez que se promulgase desde 1723, a los madrileños les seguía indignando(15). La agresividad de los amotinados no se concentró ni en los repesos ni en las tiendas de comestibles, sino sobre todo aquello que simbolizaba lo no español, lo extranjero.

El conde de Fernán Nuñez testigo de los sucesos nos cuenta como "una multitud de pueblo se acercó a Palacio y a la casa del marqués de Squilace, gritando ¡Viva el rey y muera Squilace!"(16).

Esta primera algarada no logró sus objetivos porque el ministro no estaba en casa y logró huir. Además de contra Esquilache las turbas dirigieron sus ataques contra la Guardia Valona, un cuerpo militar que había creado Felipe V y que estaba a su vez integrado por extranjeros. El lunes 24 de marzo, segundo día de motín, la muchedumbre se enfrentó a la Guardia Valona matando a diez de ellos y quemando los cadáveres de dos en los arrabales de Madrid

porque "...les parecía que ofrecían a Dios un gran sacrificio en quemarlos porque estaban persuadidos todos de que los valones eran judíos o herejes y entre ellos corrió la voz de que uno de ellos tenía rabo"(17).

Ese mismo día 24 la Sala de Alcaldes, que era la institución encargada de promulgar los bandos relativos al orden público de la Villa y Corte, no paró de trabajar. A las cinco de la tarde fijó el primer bando del día, en el cual el rey daba marcha atrás en sus últimas disposiciones. Así la Sala afirmaba:

"Que el bando publicado ultimamente para prohibir el uso de las capas largas y sombreros chambergos, sin embargo de que por ordenes anteriores estaba prohibido en la maior parte, aora quiere se permita el uso de dichas capas y sombreros chambergos, y todo trage español en todo genero de personas, sin incurrir en pena alguna..."(18).

En el mismo bando el rey se comprometía a bajar el precio del pan y del aceite y otorgaba el "perdon general de todos los exzesos cometidos hasta la publicación del bando". Ahora bién, Carlos exigía a cambio la retirada de los amotinados de las calles.

Nada más fijar los alcaldes este primer bando en distintos puntos de la Villa, se recibió una nueva orden de

Palacio ampliando las concesiones regias. Así el rey prometía:

" La retirada del marqués de Squilace, nombrandole subcesor español, a Don Miguel Muzquiz, la retirada de las Guardias Walonas de esta corte, y que se quite la Junta de Abastos y se gobiernen estos como antes de la Junta." (19).

Estas nuevas disposiciones se añadieron a las anteriores y se fijaron en las calles a las siete y media de la tarde.

Las concesiones regias lograron sus objetivos y la noche del veiticuatro los tumultos habían cesado. El rey, de todas formas, estaba asustado y decidió esa noche retirarse de la Villa y Corte y refugiarse en Aranjuez. La actitud del rey ocasionó nuevas algaradas a la mañana siguiente por lo que Sala continuó trabajando y promulgando bandos. Los bandos del día veinticinco, sin embargo, sólo contenían una novedad: también bajaría el precio del jabón y del tocino(20).

Los amotinados exigían mucho más. Querían que Carlos III confirmase todas las promesas aparecidas en los bandos fijados por la Sala de Alcaldes. Enviaron un emisario a Aranjuez que regresó el miercoles veitiséis con una carta del rey confirmando sus concesiones. Fue suficiente para que

el pueblo madrileño volviese a sus casas y entregase a las autoridades las armas utilizadas en la revuelta. De todas formas el tumulto había sido muy grave. Según Laura Rodríguez las bajas totales ascendieron a 21 muertos y 49 heridos entre los amotinados, y 129 muertos y varios heridos entre la tropa(21).

Los motines se extendieron por otras ciudades del reino, pero los amotinados en provincias exigieron solo cambios en la administración y precio de los abastos(22).

Terminadas las revueltas, Carlos III estaba dispuesto a realizar cambios, no sólo porque lo había prometido sino también porque lo consideraba necesario.

El primer cambio ministerial se produjo en pleno motín de Madrid al sustituir a Esquilache y nombrar a un español para su cargo.

El rey había prometido, sin embargo, otras reformas, sobre todo en el campo de la administración de los abastos de la Corte, que había que preparar y aplicar. También Carlos estaba descontento con las instituciones encargadas del orden público de la Corte y del reino. Es decir estaba disgustado con la Sala de Alcaldes y con el Consejo de Castilla por lo que a nadie sorprendió la decisión del monarca de sustituir al Gobernador del Consejo, el obispo de Cartagena y nombrar a un militar de prestigio y hombre culto, el conde de Aranda(23).

El nuevo Gobernador se convirtió junto a los fiscales

del Consejo, Campomanes y Floridablanca, en los verdaderos artífices de la política interior de Carlos III en los años que sucedieron al motín de Madrid.

Carlos, a partir de 1766, impulsó el cometido del Consejo de Castilla frente al de los Secretarios. No sabemos si su intención fue la de dar una imagen de españolidad a su gobierno al apoyarse en el sistema institucional tradicional de la monarquía hispana, o si es que, como afirmaba el historiador Vincenzo Cuoco al estudiar la experiencia napolitana de Carlos de Borbón, el rey, en estos primeros años de reinado, estaba convencido de la necesidad de que "el Foro continuara siendo el centro de todos los asuntos" y en realidad prefería el gobierno sinodial de los Consejos al personal de los Secretarios, distanciándose así ideológicamente de Felipe V y de Fernando VI.

Aunque el pueblo de Madrid estuviese convencido de que la causa de todos sus males estaba en la mala gestión de los ministros extranjeros del rey, Carlos III y su equipo de ministros del Consejo de Castilla sabían que la causa de los sucesos violentos, al margen de la existencia o no de provocadores, estaba en la mala administración y gestión de los abastos y en la incapacidad de las instituciones encargadas de mantener el orden y la tranquilidad de los pueblos.

En Madrid, desde 1743, se había encargado de gobernar los abastos una junta, la Junta de Abastos, integrada por

miembros del Consejo de Castilla, miembros del Ayuntamiento y de la Sala de Alcaldes. La junta promulgaba disposiciones, organizaba y los brazos ejecutores eran para algunas materias los Alcaldes de Corte y para otras los regidores(24). Al estallar los motines estaba claro que la responsable de la mala gestión de los abastos era la Junta y el día 24, el rey, como en otro lugar señalamos, decidió suprimirla.

El Conde de Aranda y Campomanes, encargaron a dos alcaldes de Casa y Corte una investigación en los archivos de la Sala para averiguar como se administraban los abastos antes de la creación de la Junta.

Ni la Sala de Alcaldes ni el Consejo de Castilla querían, después de los sucesos de 1766, tener capacidad en materia de abastos. No es de extrañar, por lo tanto, que en el informe los alcaldes relegasen toda responsabilidad sobre los abastos.

Reconocían, sin embargo, que desde la llegada de la Corte a Madrid hasta comienzos del siglo XVIII el responsable de los abastos fue el Consejo: "por cuyo motivo en el tumulto del día 28 de abril del año de 1699 atribuyó el Pueblo al conde de Oropesa la falta de pan y no al Corregidor que no tenía parte en ello"(25). Pero a partir de las algaradas de finales del siglo XVII, el Consejo exigió ser exonerado de "semejantes asuntos" y el Corregidor se convirtió en responsable de los abastos de la Corte. El

informe afirmaba que el Corregidor delegaba en "dos capitulares, en el Síndico Procurador y en los escribanos de Ayuntamiento".

Tras analizar el informe elaborado por los Alcaldes de Corte, Aranda y Campomanes decidieron que fuese de nuevo el Corregidor y no el Consejo de Castilla el responsable de los Abastos de la Corte. Pero si el Ayuntamiento se debía responsabilizar de un asunto tan importante para la tranquilidad pública como el del abastecimiento de la población, era necesario introducir cambios en la Corporación.

En los ayuntamientos se encargaban de los abastos una comisión integrada normalmente por dos o tres regidores, el Procurador General y dos escribanos. Carlos III decidió crear tras los tumultos de 1766 dos cargos nuevos: el de Procurador Síndico personero y el de Diputados del Común(26).

Las competencias de estos nuevos oficios eran muy similares a las que tenía el Procurador General en los ayuntamientos. El auto acordado de 5 de mayo de 1766 establecía la creación de cuatro Diputados del común para los pueblos de mas de 2000 vecinos con "voto, entrada y asiento" en los Ayuntamientos y cuyas funciones serían "las de tratar y conferir en punto de abastos, examinar los pliegos y propuestas que se hicieren, y establecer las demás reglas económicas tocantes a estos puntos que pida el bien

comun".

Además de los Diputados del Común, por el mismo auto acordado, se creaba el oficio de Procurador Síndico Personero que tendría también asiento y voz en el ayuntamiento pero no voto y cuya función era la de "pedir y proponer todo lo que convenga al publico generalmente, e intervenga en todos los actos que celebre el ayuntamiento, y pida por su oficio lo que se le ofrezca"(27).

La razón por la que Carlos III creó oficios con "competencias similares a las de oficios tradicionales que ya existían en los ayuntamientos fue la seguridad que tenía el rey de que los oficios tradicionales, a lo largo de los siglos, habían alterado su naturaleza y ya no cumplían las funciones que las ordenanzas les encomendaban.

Desde luego, si examinamos el caso de Madrid, el rey y sus asesores tenían razón.

El oficio de Procurador General de la Villa de Madrid, como en otro lugar señalamos, dejó de elegirse por el común en 1493, al obtener los regidores de la villa un privilegio real por el cual podían elegir al Procurador General, al Mayordomo de Propios y a otra serie de oficios menores(28). De todas formas los regidores debían elegir al Procurador General todos los años y además la persona designada debía de reunir una serie de requisitos para evitar la posible corrupción. Uno de ellos era el de no tener parientes desempeñando otro oficio municipal(29).

En el siglo XVIII estas premisas no se cumplieron. El oficio de Procurador General era vitalicio y lo que se hacía todos los años era renovarlo. Además se violaban todas las normas que prevenían la corrupción porque los procuradores eran siempre miembros de familias propietarias de regimientos.

Analicemos el caso del Procurador General José Antonio de Pinedo que desempeñaba el oficio en el año de los motines. José Antonio de Pinedo era propietario de un regimiento de Madrid que ocupó desde 1733 hasta 1756 fecha en que quedó vacante el oficio de Procurador General. A partir de ese momento empezaron los cambalaches del regidor madrileño. Jose Antonio de Pinedo deseaba ocupar la vacante de Procurador General porque era un cargo mejor y más claramente remunerado que el de regidor(30). Como le parecía excesivo ser Regidor y Procurador al mismo tiempo decidió elegir a su hermano Manuel como teniente de su Regimiento y se presentó como candidato a Procurador General siendo elegido por los otros regidores. José Antonio de Pinedo no sentía ninguna vergüenza por ser procurador mientras su hermano era regidor y nos atreveríamos a afirmar que consideraba su situación como legítima.

Al crearse el nuevo oficio de Síndico Personero y celebrarse las primeras elecciones en Madrid estas las ganó Jerónimo Serrano, hombre próximo en ideas y amigo del Fiscal del Consejo Campomanes. La situación municipal escandalizó

al nuevo Síndico y decidió junto al fiscal si no terminar, por lo menos recortar los abusos de los Regidores madrileños. Una de las situaciones de mayor corrupción era la del Procurador General y además consideraron que existiendo la nueva figura de Síndico Personero podrían hacer desaparecer el antiguo oficio. El nuevo Síndico, Jerónimo Serrano, elevó un escrito al Consejo exigiendo la desaparición del oficio tradicional por duplicidad de funciones. El fiscal del Consejo dictaminó favorablemente ante las pretensiones del Síndico Personero y el rey, por Real Cédula del 15 de noviembre de 1767, decidió suspender el oficio de Procurador General de Madrid "por la experiencia de que como dependientes de la elección de los regidores coadyuben sus excesos, en lugar de reclamarlos". Pues bien, nuestro procurador, Antonio de Pinedo, también remitió un escrito al Consejo de Castilla en el que enumeraba como derechos adquiridos una serie de irregularidades y además exigía una pensión equivalente a su antiguo sueldo como indemnización hacia su persona al desaparecer el oficio que ocupaba(31).

El problema, por lo tanto, no estaba en las funciones que tenían los antiguos oficios de Procuradores Generales sino en que estas no se cumplían por haber dejado de ser electivos y estar muy próximos al cuerpo de regidores que presumiblemente debían controlar. Por ello el rey lo que alteró en los nuevos oficios de Diputados del Común y

Síndicos Personeros fue la forma de acceso.

Los nuevos oficios serían electivos. El cuerpo de electores lo constituían los varones vecinos de la Villa, seculares y contribuyentes. Para ser elegible además de la condición de elector se exigía, entre otras cosas, no estar desempeñando oficio en el Ayuntamiento. Las elecciones eran indirectas. En un primer momento se celebraban por parroquias, eligiéndose en cada una de ellas un número de compromisarios. Estos, posteriormente y en presencia del Corregidor, elegían entre ellos a los Diputados del común y al Síndico personero.

El rey y sus ministros consideraban que además de la mala gestión municipal en materia de abastos había otras cosas que corregir si se querían evitar motines como los de la primavera de 1766.

La institución encargada de velar por el orden público del reino, el Consejo de Castilla, había fallado. El Consejo sólo elaboraba las normas para la tranquilidad pública y supervisaba la gestión de las autoridades locales que debían ejecutarlas. De todas maneras era el responsable último de los sucesos. El Gobernador del Consejo fue sustituido por el enérgico Aranda pero había que tomar otras medidas. Sobre todo en la Villa y Corte que, en lugar de ser el lugar más tranquilo del reino, era donde se iniciaban algaradas y motines. Desde el 26 de noviembre de 1766, el Conde de Aranda tenía preparado su proyecto de reforma de la Sala de

Alcaldes, organismo que aunque dependiente del Consejo, velaba directamente por el orden público de Madrid(32).

El proyecto de reforma de la Sala de Alcaldes preparado por Aranda no pretendía alterar "en la substancia su antigua jurisdicción". Dividía Madrid en ocho cuarteles en lugar de los once que tenía, y ponía al frente de cada uno a un alcalde de Casa y Corte. Como los alcaldes eran doce quedaban cuatro como suplentes entendiendo Aranda las suplencias como un aprendizaje del oficio de alcalde cuartelero. Los alcaldes tendrían jurisdicción civil y criminal en sus cuarteles y uno de los suplentes debía "formar un juzgado verbal o sumarísimo..a fin de conocer unicamente de los recursos caseros".

Todos los alcaldes debían residir en su cuartel y junto a ellos dos oficiales, dos porteros y los cuatro alguaciles "que estan destinados para cada alcalde". En cada cuartel se establecería a su vez "una partida de invalidos para asegurar la tranquilidad del Quartel, para auxiliar a las justicias en las prisiones en que fuese necesario , y para depósito interino de los presos". Además de los soldados ayudarían al alcalde "seis o más cabos de barrio" que como alcaldes pedáneos subalternos del alcalde de cuartel, cuidaran de zelar, contener y remediar los desordenes abituales"(33).

El funcionamiento de la Sala de Alcaldes sería también distinto. Todos los días se reunirían todos los alcaldes,

tanto cuarteleros como suplentes, "para publicar las ordenes superiores, tratar de los asuntos generales y comunicar entre si lo ocurrido en los cuarteles". Después se separarían en dos salas la de lo civil y la de lo criminal. Las penas capitales debían dictaminarse por las dos salas y como siempre consultárselas al rey antes de su ejecución.

Aranda cerraba sus reflexiones con la duda de que hasta que punto eran necerios los juzgados de los Tenientes de la Villa. En este sentido coincidía con los proyectos reformistas de Macanaz y de Ensenada que pretendían separar las funciones gubernativas de las judiciales dejando las primeras para el Ayuntamiento y las judiciales para la Sala de Alcaldes(34).

El proyecto de Aranda fue consultado a la Sala de Alcaldes que lo aceptó casi en su totalidad . La Sala, como era lógico debido a su continuo enfrentamiento con el Ayuntamiento, recomendaba la extinción del Juzgado de los Tenientes de la Villa. Además, no contenta con la desaparición de los tenientes, recomendaba, nada menos, que "escusar el empleo de corregidor dando al actual la primera vacante del Consejo de Hacienda subrogando al alcalde de corte Decano para ir a presidir el Ayuntamiento y Villa..."(35). Es decir, la Sala veía en la reforma una oportunidad de gobernar a la institución contra la que había mantenido tantos enfrentamientos.

La última palabra sobre la extinción del Juzgado de los

Tenientes y del Corregimiento madrileño la tuvo el fiscal del Consejo de Castilla. Campomanes coincidía con el antiguo asesor de Carlos III, Tanucci, en la no separación de funciones gubernativas y judiciales. Por lo tanto no estaba de acuerdo con suprimir las instituciones de la Villa. Así afirmaba el fiscal Campomanes:

" La villa de Madrid tiene dos aspectos; uno de pueblo particular con Corregidor, Thenientes, Ayuntamiento y Diputados y Personero del Común: ordenanzas municipales; voto en cortes y otras prerrogativas que le pertenecen por su derecho propio, con anterioridad de residir la corte...desde Felipe III.

Este aspecto en nada debe mudarse, ni quitarse a la villa sus magistrados municipales de Corregidor y Tenientes..."(36)

La lectura de todos estos expedientes llevó al rey a la promulgación de la Real Cédula de 1768 por la que se dividía "la población de Madrid en ocho cuarteles, señalando un alcalde de Casa y corte y ocho alcaldes de Barrio para cada uno"(37). El contenido de la misma coincidía, casi en la totalidad, con el proyecto del Gobernador del Consejo, el conde de Aranda, reforzando, eso sí, la figura de lo que Aranda había denominado "cabos de barrio". Los Alcaldes de

Barrio tuvieron su propia instrucción promulgada el 19 de septiembre de 1768(38).

Uno de los puntos más interesantes y novedosos propuestos por Aranda y aceptados por el rey Carlos III fue el de la inclusión de la "partida de inválidos" en cada uno de los ocho cuarteles en que quedaba dividido Madrid. Las Compañías de Inválidos habían sido creadas por Felipe V en 1732 como medio de ocupar a los soldados que habían sido dados de baja por problemas físicos o síquicos. Existían dos tipos de compañías de invalidos: la de inválidos útiles y la de inválidos impotentes(39). Como es lógico para Madrid se eligieron a los inválidos útiles y se les asignaron "Cuarteles materiales" en cada uno de los ocho cuarteles de Madrid. Las partidas de Inválidos debían "asegurar la tranquilidad del Quartel, auxiliando a la justicia en las prisiones en que fuere necesario"(40). Además la sede o el "cuartel material" de estas partidas de invalidos servirían como cárceles provisionales antes de que los reos fueran trasladados a la Cárcel de Corte. Los jefes de las partidas de invalidos debían encargarse de "enterarse del vecindario" con una finalidad poco creíble: la de "poder dar auxilio con más facilidad"(41).

Esta inclusión de militares, sujetos por lo tanto a Fuero Militar, dentro de la reforma de la Sala de Alcaldes tenía más importancia de la que tradicionalmente se le ha concedido. Si hasta 1.768 existieron problemas por

acumulación de competencias entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento a partir de entonces tenemos una nueva jurisdicción planteando conflictos: la jurisdicción militar.

La Real Cédula de 1768 no sólo recogió las recomendaciones del Conde-Presidente sino que también siguió algunas indicaciones del fiscal Campomanes. Así no se escindirían las atribuciones judiciales que el Ayuntamiento de Madrid siempre tenido. "Los Alcaldes de Casa y Corte, Corregidor y Tenientes de Madrid -establecía la Real Cédula- quedan con la jurisdicción acumulativa, o preventiva para todos lo casos prontos, y oír a los que recurrieren a ellos, como hasta aquí, pues la distribución en quarteles solo conduce a la mayor facilidad, y a hacer responsable al alcalde que la regente...". Se respetaban pues los oficios de Teniente de Corregidor así como el Juzgado de Madrid(42).

De todas las reformas llevadas a cabo en el siglo XVIII sobre las instituciones de Gobierno y Justicia de la Villa y Corte estas fueron las menos contestadas por la Sala y el Ayuntamiento. Probablemente porque no alteraron las funciones de los dos organismos y estos no se sintieron diezmados en sus prerrogativas ni privilegios. No pretendieron, a pesar de la primera opinión de Aranda, separar las funciones de justicia de las de gobierno, especializando a la Sala de Alcaldes en las materias judiciales y al Ayuntamiento en el gobierno político y económico de la Villa. En ese sentido estas primeras

reformas carolinas se distanciaron de la Nueva Planta promulgada por Felipe V para la Sala y el Ayuntamiento y del Gobierno Político y Militar de Madrid ideado por los ministros de Fernando VI.

Las reformas no fueron contestadas pero tampoco fueron eficaces. Los enfrentamientos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de Madrid no cesaron porque las reformas habían mantenido como "acumulativas" la mayoría de las materias de gobierno y justicia en la Villa y Corte. Además se habían introducido a "partidas de Inválidos" en los ocho cuarteles de Madrid. Los Inválidos como militares estaban sometidos a una disciplina propia y prestos, desde luego, a obedecer a su jefes y oficiales por encima de cualquier otra autoridad civil.

La situación en Madrid no había mejorado con estas primeras reformas carolinas sino que más bien se había complicado y por eso a nadie le extrañó la creación, catorce años después, de una nueva institución que intentaba mejorar el gobierno y la administración de justicia de la Villa y Corte.

7.2. LAS REFORMAS DE FLORIDABLANCA: LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA.

Las primeras reformas locales del reinado de Carlos III se habían llevado a la práctica pero no habían resuelto las dificultades que la acumulación de competencias entre la Sala y el Ayuntamiento ocasionaban en el gobierno y la administración de justicia de la Villa y Corte. Si hacemos caso al Corregidor José Antonio de Armona lo único que habían provocado era confusión y descontento.

"Hay en Madrid una Sala de Alcaldes de Casa y Corte que consta de un gobernador y doce alcaldes; de estos doce salen ocho alcaldes cuarteleros para los ocho cuarteles de que consta su recinto, y en estos ocho cuarteles viene a ser cada alcalde como un corregidor: obligaciones simultáneas con el Corregidor y sus dos tenientes, precisas en unos y en otros con precisa responsabilidad..."

Y continuaba Armona

"A proporción de los aumentos de Madrid desde que los Reyes vinieron a fijar en ella su residencia ...se aumentan las jurisdicciones con el aumento de jueces y

jurisdicción militar...En cada caso por cada suceso previsto o imprevisto, se da un paso más en el aumento de jueces, de jurisdicciones separadas y obligaciones siempre comunes a unos y otros, de donde viene precisamente la confusión de autoridades, el concurso inevitable de las competencias, el mandar y desmandar uno lo que manda y desmanda el otro, el desobedecer un vecino a su juez porque otro juez le permite lo que el primero le niega"(43).

Aunque las primeras reformas carolinas no hubiesen resuelto los viejos problemas de Madrid trascurrió un tiempo sin que se intentara mejorar la situación. Hubo que esperar a que se produjeran cambios políticos importantes que afectasen a los ministros y consejeros de Carlos III para que los madrileños viesan llegar una nueva reforma sobre su sistema de gobierno y de administración de justicia.

Desde 1766, año de la ascensión del conde de Aranda a la presidencia del Consejo de Castilla, se fueron perfilando en la Corte grupos políticos con opiniones enfrentadas.

Alrededor de la enérgica figura de Aranda surgió el grupo o -como lo ha denominado Olaechea- "el partido" aragonés(44). No podemos hablar de una ideología concreta de los "aragoneses" pero si de una serie de elementos comunes. Por un lado eran "españoles". Es decir eran partidarios de

las instituciones, organismos y elementos tradicionales de la monarquía hispana. No querían cambios que fuesen "burdas" imitaciones de lo extranjero(45). Por otro eran reformistas porque creían que tanto la organización como el funcionamiento de las instituciones y organismos "españoles" podían racionalizarse, y por último eran elitistas: la cuna y educación significaron mucho para los "aragoneses". Estos tres elementos aparecen muy claros en el "Plan de Gobierno" elaborado y remitido por Aranda el 22 de abril de 1781, al entonces Príncipe de Asturias, don Carlos(46).

Aranda, en su programa político, que era en realidad lo que contenía su "Plan de Gobierno", muestra su "españolismo" al defender la necesidad de la pervivencia del sistema sinodial. Las Secretarías eran necesarias pero debían complementarse con el sistema tradicional de los consejos. Y nos atreveríamos a afirmar que para Aranda era mejor resolver los asuntos de forma colegiada -como ocurría en los consejos- que a través de un solo individuo. Así al juzgar la actuación de cada una de las Secretarías en su "Plan de Gobierno" la que funcionaba mejor era sin duda la de Gracia y Justicia porque no tenía autonomía del Consejo de Castilla:

"La de Gracia y Justicia en su constitución y materias que corren por ella, esta más ligada que las otras, porque una gran parte de sus mayores negocios llega a

sus manos por tribunales que los formalizaron, de cuyo dictamen no puede desentenderse, ni dejar de dar cuenta a la letra; sí sólo exponer al soberano lo que ocurriere según el examen hecho por sí antes de presentar el expediente al despacho; y en esto no sólo no hay mal alguno, sino que es convenientissimo que el monarca vea las cosas a todos aspectos, que es el modo de acertar en su decisión, y no el de una sola como en otras secretarias"(47).

También en el "Plan de gobierno" escrito por Aranda aparecía la necesidad de aplicar reformas para mejorar el funcionamiento de la monarquía hispana. Defendía así la creación de dos figuras nuevas: la del ministro confidente y la del Consejo de Estado. Según Escudero "la figura de "ministro confidente" -o también ministro interventor- en realidad corresponde a la figura de primer ministro" que "aparece desgajado de los restantes secretarios del Despacho"(48). La idea de crear un Consejo de Estado, por encima de la figura de los Secretarios del Despacho, es coherente con el pensamiento de Aranda. Siempre funcionaban mejor los organismos colegiados que los individuos sólo. Así explicaba Aranda la organización institucional que proyectaba para la monarquía hispana:

"Pero el mal está en que cada secretaria va por su lado. Son seis justamente, como un tiro de caballos enganchados al tronco, que sin cochero mayor y delantero tirará el que quiera, y aun tirando se irá cada uno por su lado; con que los seis secretarios necesitan de un cochero mayor que le toca serlo al Soberano, como de un delantero que los lleve por la ruta de su cochero mayor le mandó, y este pudiera serlo una persona en quien la magestad tuviese confianza de que guiaría a su gusto"(49).

Y continuaba Aranda definiendo lo que era su deseado Consejo de Estado: "este crisol donde purificar qualquiera expediente en que huviera intervenido el ministro y uno o más secretarios, y donde reveerlo y hallarle el verdadero aspecto aún dudoso..."(50).

El elitismo de Aranda y su grupo era obvio. La mayoría eran militares de alta graduación y aristócratas que miraban con recelo y desprecio a esos pequeños hidalgos que habían logrado introducirse en los Consejos. En una carta enviada por Aranda a su amigo y confidente el príncipe de Asturias, en 1781, se refería así a su gran enemigo político, el Conde de Floridablanca, entonces flamante ministro de Estado: "Vea su alteza el contraste de dos nacimientos, dos educaciones, dos caracteres, dos profesiones, dos plumas bien diferentes;"(51).

Frente al "partido" aragonés se situaban "los golillas". Domínguez Ortiz nos recuerda que "la golilla, un cuello blanco liso y almidonado, fue introducido por Felipe IV en la Corte y el personal administrativo para desterrar las lujosas gorgueras"(52). Golillas llevaban los letrados que pertenecían "al Consejo de S.M." es decir los miembros de la carrera administrativa que se iniciaba en las Audiencias y Chancillerías y concluía normalmente en los Consejos. Al grupo de los "golillas" pertenecían el Secretario de Estado Grimaldi, y los fiscales del Consejo de Castilla Floridablanca y Campomanes así como algunos de los letrados situados en los Consejos. Los "golillas" no eran elitistas sino que, por el contrario, muchos de ellos fueron manteístas, es decir no tenían el linaje para ser miembros de los Colegios Mayores. Eran reformistas -como los aragoneses- pero no les importaban las reformas "extranjerizantes".

Aunque los "golillas" eran capaces de aceptar influencias de otras cortes europeas sus reformas fueron muy distintas de las realizadas por los equipos reformistas de Felipe V y de Fernando VI. Los "golillas" no podían permitir reformas que perjudicasen a sus propias instituciones: los Consejos. Así sus programas de reformas fueron "acumulativos". Creaban instituciones nuevas pero sin restringir las atribuciones de los organismos tradicionales. No pretendieron separar, como hicieron Macanaz y Ensenada,

las funciones judiciales de las meramente administrativas(53).

El enfrentamiento entre los "golillas" y los "aragoneses" era algo conocido no sólo por la clase política y los representantes de las cortes extranjeras(54) sino por toda la población. A veces adquiría tintes cómicos como ocurrió con motivo de la representación de una obra clásica en el teatro del Príncipe en Madrid. Así nos relataba el suceso el Corregidor Armona

" se había representado tal comedia en que los alguaciles salen con su serio traje de golilla, y había notado que alguna vez se les insultaba con pullas y dichos vulgares, con lo cual se hacia ridículo el más respetable traje de la justicia..."

Y continuaba el Corregidor con su relato

"Orden pronta y ejecutiva -del fiscal del Consejo Campomanes- para que ningún alcalde ni alguacil salga representado en las comedias con golilla y pelucón, sino con vestidos de militar -oficio de la mayoría de los "aragoneses"-(55).

Semejante decisión de Campomanes no podía por menos que indignar a nuestro Corregidor Armona, que era además un gran

conocedor del mundo del teatro(56). José Antonio de Armona elaboró una representación en donde, entre otras muchas cosas, afirmaba:

"...sin añadir ahora la impropiedad de los trajes en su vestuario, siendo asunto que tanto recomienda como tan preciso para distiguir con ellos los tiempos, las naciones, las dignidades, los oficios, y los hombres, que autores de las comedias españolas del siglo pasado no pudieron dar otro traje que el de la golilla a los jueces y alguaciles; que los vestidos cortos, llamados de militar, no se conocieron en España hasta el siglo presente"(57).

El primer enfrentamiento abierto entre "aragoneses" y "golillas" se dirimió a favor de estos últimos. En el año 1772 Carlos III conocía la confrontación existente entre los fiscales del Consejo de Castilla, que eran golillas, y Aranda, presidente del mismo, y como sabemos, cabeza visible del grupo "aragonés". Campomanes y Floridablanca habían enviado al rey un memorial quejándose del presidente porque "actuaba despoticamente, invadiendo su jurisdicción y invadiendo los derechos del monarca"(58).

No sólo existían problemas dentro del Consejo de Castilla. Aranda también se opuso a la política llevada a cabo por el Secretario de Estado Grimaldi, miembro destacado

del grupo de los "golillas". El Conde de Aranda, entrometiéndose en asuntos al margen de sus competencias, criticó duramente la política exterior de Grimaldi por considerarla contenida y en líneas generales poco agresiva(59). La situación de enfrentamiento fue solucionada por Carlos III al destituir, en el año 1773, al Conde de Aranda como presidente del Consejo de Castilla y nombrarlo embajador de España en Francia(60).

Un segundo cambio importante se produjo en 1776 al ser sustituido, por algunos fracasos en política exterior, el Secretario de Estado Grimaldi y ser elegido para su cargo el Conde de Floridablanca. No fue un fracaso de los "golillas" porque a Grimaldi el rey Carlos III le permitió nombrar a su sucesor y logicamente eligió a un hombre que tenía sus propias ideas políticas. Floridablanca se convirtió así en ministro de Carlos III. En el año 1782, tras el fallecimiento de Manuel de la Roda, buen amigo y seguidor de Aranda, la Secretaría de Gracia y Justicia pasó también a desempeñarla Floridablanca consolidándose claramente el poder de los "golillas" frente al de los "aragoneses"(61).

Una de las primeras reformas del conde de Floridablanca desde la Secretaría de Gracia y Justicia se centró en el gobierno y la administración de justicia en la Villa y Corte.

El 17 de marzo de 1782, Carlos III a propuesta de Floridablanca, creó la Superintendencia General de Policía

para "Madrid su jurisdicción y Rastro"(62). Las causas para la creación de esta nueva institución aparecían en el Real Decreto del 17 de marzo. Así "el aumento y extensión que ha tenido de algunos años a esta parte la población de Madrid su terreno y edificios, vecindario y concurrentes de dentro y fuera del reyno, y las muchas providencias y reglas de policia a que han obligado las circunstancias" eran los motivos que hacían necesaria la nueva figura del Superintendente General. El primero en ocupar la Superintendencia fue el teniente de Corregidor don Bernardo Cantero de la Cueva que gozó de "plaza efectiva en mi consejo que por ahora será supernumeraria hasta la primera vacante en que entrará quedando aquella suprimida"(63).

Las obligaciones del Superintendente de Policia eran muchas:

"velar en la ejecución de las leyes, autos acordados, vandos, Decretos, y providencias mías y de mi consejo, que miren a la policia material y formal, corrigiendo a los contrabentores, multandolos, y aplicandolos a los destinos que estubieren señalados en las mismas leyes, autos acordados...y representando lo que estimase conveniente en los casos en que deba alterar, añadir o establecer alguna cosa de nuevo, sea al mi Consejo, en Sala primera de gobierno, donde a de tener siempre su asistencia, o sea a mi Real persona por medio de la

primera Secretaria de Estado a que estan agregados los negocios de la policia de Madrid"(64).

La Superintendencia General de Policia, ideada por Floridablanca, reunía todos los elementos que definían al grupo de los "golillas" ahora liderados por el ministro de Estado y de Gracia y Justicia.

Habiamos definido a los "golillas" como reformistas que, a diferencia del grupo de los "aragoneses", no les importaban las reformas "extranjerizantes". La Superintendencia era un claro ejemplo de ello. En el Real Decreto de creación de la nueva institución se afirmaba que se creaba la figura de Superintendente "a semejanza de lo que se practica en todas las demás cortes"(65). Sin embargo, como habiamos señalado, el reformismo de Floridablanca se diferenciaba mucho del de los ministros de Felipe V y de Fernando VI porque nunca intentó limitar las funciones de las instituciones que ocupaban los letrados que entraban en la carrera administrativa. Así la Superintencia era una institución que iba a gozar de competencias "acumulativas" con los otros dos organismos que tenían que gobernar y administrar justicia en la Corte. El Real Decreto del 17 de marzo reconocía:

"que la Sala de Corte, Alcaldes de Quartel y de Barrio, el de la comision de vagos, el Corregidor de

Madrid y sus Tenientes y todos los demás que tienen obligación de cuidar de la Policía de Madrid en lo material y formal, han de continuar como hasta aquí acumulativamente"(66).

Si los "golillas" eran burócratas con una larga carrera en audiencias, chancillerías y consejos y además no eran elitistas era lógico pensar para el nuevo cargo en letrados que no perteneciesen a la alta nobleza. Desde 1782 hasta 1787 lo fue Bernardo Cantero y desde 1787 hasta 1792 el Alcalde de Casa y Corte Mariano Colón de Larreátegui, miembro de una familia de letrados con amplia tradición en los consejos(67).

Las mismas características, típicamente "golillas", que tenía la nueva reforma sobre la administración de justicia y el gobierno de la Villa y Corte, fueron la base para su fracaso.

Muchos de los miembros del Consejo de Castilla, sobre todo aquellos que eran miembros de la nobleza, seguían simpatizando con el "españolismo" de su viejo Presidente Aranda, y se sentían molestos con estas instituciones copiadas de las de "otras cortes". Así se expresaba el Consejo en un informe sobre la Superintendencia remitido al rey en 1792

"No entra el consejo en el por menor para convencer los inconvenientes, los riesgos, las contradicciones y las fatales consecuencias que pueden traer a qualquier reino el adoptar algún establecimiento de otro, que altere el gobierno de sus pueblos"

Y continuaba el Consejo haciendo gala de un profundo "españolismo" tan querido a los "aragoneses"

"Esta es una verdad que la aseguran las historias, y bastaría para demostrarla la sola consideración de que cada nación así como tiene diferente suelo, alimentos, genio, trage, costumbres que forman su peculiar character, del mismo modo le son privativas sus practicas, sus leyes, y forma de gobierno en lo general y lo particular de sus pueblos, con que se crían y al que aman los naturales, contemplando su conservación como parte de la felicidad para la vida humana"(68).

Desde luego, concluía el Consejo, la Superintendencia General de Policía era "desconocida en las leyes del Reino ...sin embargo de haberla en otros paises no se había creído necesario y acaso ni aun adaptable al nuestro"(69). Esa "extranjerización" de la nueva reforma fue una de las causas de su vulnerabilidad. Para muchos miembros de los consejos todo lo extranjero era en si mismo inaceptable.

Hubo, sin embargo, motivos menos ideológicos para criticar la nueva institución. El hecho de ser una reforma "acumulativa" abría la puerta a problemas de competencias entre el Superintendente, la Sala de Alcaldes y el Corregidor. Además la Superintendencia no sólo tenía que compartir sus atribuciones con los otros organismos de la Corte sino que, en los diez años de sus existencia, no se llegaron a perfilar claramente cuáles eran éstas.

En el Real Decreto de creación de la Superintendencia General de Policía se hacía referencia a la preparación de "una instrucción separada, que le comunicaré sirviendo de tal por ahora este decreto"(70). La instrucción nunca llegó a promulgarse como reconocía el propio Consejo de Castilla en 1792:

"Desde aquel año (1782) ha estado en uso la Superintendencia General de Policía, y al Consejo no se le ha comunicado instrucción ni reglamento que prescriba las facultades de ese empleo, y sin saberlas todos sus individuos, son testigos de su exorbitancia y de los clamores del Publico contra este establecimiento"(71).

El Consejo no era el único en desconocer la existencia del Reglamento sino que el propio Superintendente, Mariano Colón de Larreátegui reconocía, en el año 1792, que "desde

el año 1787 en que tomé posesion de la Superintendencia gral. de Policia ...he solicitado varias veces se forme el Reglamento indicado en dicha Real Cédula de erección, y no se ha verificado"(72).

Sin reglamento y reconociéndose en el Real Decreto de creación que la Superintendencia, Sala de Alcaldes y Ayuntamiento actuarían "acumulativamente" es lógico que los conflictos entre las tres instituciones estallaran.

La Superintendencia lo primero que tuvo que compartir o tener "acumulativamente" con las otras dos instituciones de la Corte fue la sede y los oficiales que debían trabajar en la Superintendencia. El Decreto del 17 de marzo reconocía que el Superintendente debía ejercer sus funciones desde el propio Ayuntamiento. Así establecía que "el mismo ayuntamiento facilitará alguna de sus casas para la asistencia del Superintendente en los días y horas que no perjudique a otros destinos, franqueándole aquella y las demás cárceles para los objetos de su encargo"(73).

Al Corregidor de Madrid, que entonces era José Antonio de Armona, no pareció importarle cederle sitio al nuevo Superintendente en la Casa Consistorial ni en la Cárcel de la Villa pero, sin embargo, no se mostró tan generoso a la hora de traspasar oficiales municipales. En el mismo Real Decreto se exigía que "de los alguaciles y porteros que tiene el Ayuntamiento de Madrid, se dexten uno de estos y seis de aquellos a disposición del Superintendente General

de Policía"(74). Nuestro Corregidor, José Antonio de Armona que rara vez protestaba las órdenes reales sí utilizaba argucias diversas. En este caso eligió con verdadero celo a los oficiales que debían trabajar con el superintendente. De los siete porteros y alguaciles municipales nombrados para ayudar al Superintendente éste quiso devolver a cinco: Antonio López, Matias Carbonell, Francisco Fiel, Juan Antonio Varas y Tomás Toledo consiguieron desesperar al nuevo Superintendente(75). El Corregidor Armona, sin embargo, no estaba dispuesto a readmitirlos en el Ayuntamiento. Así nos cuenta el suceso la Corporación madrileña.

"le combinó (Armona) a saber si los excluía de su ronda por algún delito que hubiesen cometido, porque si ellos no eran buenos para servir a la ronda de policía tampoco lo podían ser para la servidumbre de la Villa o rondas de los dos tenientes pero que si los debolbía porque su ronda se compusiese de menos individuos..."(76).

El Superintendente no se iba a conformar sólo con alguaciles y porteros sino que pronto reclamó escribanos y no sólo del Ayuntamiento sino también de la Sala de Alcaldes(77). Como era lógico las instituciones tradicionales de Madrid no tenían ningún interés en

traspasar oficiales que les eran necesarios. Tampoco los oficiales estaban contentos con su nuevo destino. Así lo reconocía el Superintendente Colón de Larreátegui en 1792 al afirmar que " Andrés Nuñez, Vicario Huerta y Antonio Cirilo, Porteros los dos primeros de Sala, y el último de Corregidor, me suplicaron (y se lo concedí) les permitiera volver a sus juzgados, en atención de las pocas ganancias que había en este tribunal"(78).

Los enfrentamientos mayores entre la Sala de Alcaldes, el Ayuntamiento y la Superintendencia surgieron, sin embargo, no por problemas de la composición de la nueva institución sino por tener los tres organismos competencias "acumulativas".

En materia de justicia el Decreto de creación sólo reconocía al Superintendente capacidad para intervenir en los asuntos de la policía material y formal pero por vía "económica, gubernativa y ejecutiva, como lo son todas Leyes y vandos de Policía, sin apelación o recurso; pues cualquiera quejoso en casos graves podrá recurrir a mi real persona". En el mismo Decreto se establecía que "que en los casos en que de los procedimientos, perjuicio a tercero o motivo de formar instancia judicial cuidará el superintendente de remitirlo todo al juez o tribunal que corresponda"(79). Por lo tanto juicios verbales y por faltas leves eran los que debía atender nuestro Superintendente. En caso de que las diligencias mostrasen gravedad suficiente

para abrir un proceso judicial debía remitirlos a la Sala de Alcaldes o al Juzgado de los Tenientes. Hasta ahí lo que el Real Decreto establecía.

Nuestros superintendentes, sin embargo, exageraron sus atribuciones. Así el Consejo de Castilla encontró, en el año 1792, nueve casos resueltos por el entonces Superintendente, Mariano Colón de Larreátegui, que debían haber sido resueltos en la Sala de Alcaldes o en el Juzgado de la Villa. También el Consejo acusaba al Superintendente de haber infringido "penas corporales o infamantes" cuando "por los asuntos que el Superintendente conoce no se imponen". Así -continuaba el alto tribunal- "llegó el caso de imponerse y efectuarse la pena afrentosa de azotes por el Juzgado de Policía sin noticia del Gobernador del Consejo que teniendo su posada inmediata a la cárcel de Villa de donde salió el reo, se halló con esta nobedad al bolver del Consejo y restituirse a su casa"(80).

Más grave fue para el Consejo la práctica instituida por los superintendentes de impedir que sus presos fuesen visitados en la cárcel de la Villa en las visitas que semanalmente hacía el Consejo a los presos de la cárcel de la Villa y a los de cárcel de Corte. Tampoco permitía el superintendente que fuesen visitados en las visitas extraordinarias en las que acudía el Consejo pleno celebradas en la Pascua de Navidad, Resurrección y Espíritu Santo. De nuevo el Superintendente Colón de Larreátegui lo

reconocía en sus informes. "Que quando tomé posesión de este empleo -afirmaba Larreátegui-ya encontré la practica de que ningún preso por este juzgado se visitase y así he continuado haciendo"(81).

No sólo existieron enfrentamientos en materia de justicia. El Superintendente promulgó disposiciones sobre asuntos que la Sala de Alcaldes o el Corregidor creían "privativos". Con la Sala de Alcaldes se enfrentó por algunas disposiciones sobre "botillerías y fondas". Con el Ayuntamiento los enfrentamientos fueron más numerosos. Nos los resume la propia Corporación

"hubo otros oficios y contestaciones de la época de la Superintendencia ya sobre los aceyteros que venden aceyte por las calles y manchaban a las gentes, yntentando alterar la costumbre que se havia observado...Ya en el modo de conducir las carnes desde el matadero a las tablas de la Plaza Mayor y plazuelas; ya sobre alterar las horas de la entrada y salida en Madrid de las carreterias"(82).

Frente a los intentos del Superintendente de alterar costumbres "ancestrales" el Corregidor, José Antonio de Armona, "contestó inmediatamente instruyendo al Superintendente de los motibos por los que estaban establecidas así". Y el pueblo de Madrid, apoyado por la

actitud del Ayuntamiento y de la Sala de Alcaldes ignoró las disposiciones del Superintendente pues, como reconoce la Corporación, "las cosas continuaron sin novedad alguna"(83).

A pesar de que la Superintendencia no había solucionado los problemas de gobierno y la administración de Justicia en la Villa y Corte sino que, por el contrario, los había complicado un poco más, no fue hasta la caída de su mentor, el conde de Flridablanca, cuando se suprimió la nueva institución .

La muerte de Carlos III acaecida en 1788 y la subida al trono de Carlos IV no supusieron cambios en la composición ministerial.

Carlos III le había recomendado a su heredero que mantuviese al frente de la Secretaria de Gracia y Justicia y de la de Estado al Conde de Floridablanca y así lo hizo durante los cuatro años iniciales del reinado(84).

Los motivos que llevaron a establecer los primeros cambios ministeriales a Carlos IV no están todavía muy claros. Para algunos historiadores, como John Lynch, fue exclusivamente la política exterior preconizada por Floridablanca la que le llevó a su destitución. La actitud de dureza del Conde de Floridablanca frente a la Revolución Francesa, las pésimas relaciones mantenidas con el gobierno revolucionario y su negativa a aceptar el juramento que Luis XVI había tenido que hacer de la Constitución, más que ayudar al rey de Francia, cosa que deseaba ardientemente su

primo Carlos IV, ponían en peligro la continuidad borbónica en el país vecino. Así Floridablanca, según John Lynch, habría sido cesado en 1792 "víctima no del partido aragonés...sino de su intransigencia respecto a Francia...Carlos IV sacrificó a su ministro por las relaciones exteriores"(85). Sin embargo muchos otros historiadores, como es el caso de Antonio Domínguez Ortiz, sin menospreciar las causas relacionadas con la difícil política internacional consideran que también hubo motivos en la política interior de Floridablanca, entre otras su obstinado enfrentamiento con los "aragoneses", que justificasen el cambio(86).

Sea por su política exterior o por una mezcla de factores el caso es que el 18 de febrero de 1792 Floridablanca fue cesado nombrándose en su lugar a su viejo enemigo político el conde de Aranda(87). La hora del grupo de los "aragoneses" por fin había llegado.

Una de las primeras medidas de Aranda como Secretario de Estado afectó al sistema de gobierno y administración de justicia de la Corte. Desde el mes de mayo del año 1792, el Conde de Aranda le había pedido al Consejo de Castilla un informe sobre la actuación de la Superintendencia General de Policía durante sus diez años de existencia.

La mayoría de los miembros del Consejo de Castilla, como en otro lugar señalamos, no simpatizaban con la Superintendencia de Policía. Las razones de la animosidad

del Consejo eran obvias. En primer lugar la Superintendencia era, como advertimos anteriormente, una institución "extranjerizante". Para los consejeros de Castilla no sólo era un organismos calcaldo de instituciones exteriores en cuanto a su composición y competencias sino que también la forma como fue creada la Superintendencia violaba todas las tradiciones españolas. Lo español era -siempre según nuestros consejeros- el proceso que había seguido Aranda antes de promulgar sus reformas municipales.

"Quando en el año de 1768 se hallaba el presidente del Consejo el conde de Aranda presentó cierto proyecto dirigido a mejorar el gobierno y administración de justicia en la Corte, y habiendose remitido al Consejo para su examen la propuesta, y pedido sobre ella informe a la Sala de Alcaldes, y oydo al fiscal, consultó al glorioso padre de S.M. su parecer(sic), y de todo resultó publicase la Real Cédula"(88).

La Superintendencia, sin embargo, había sido creada por iniciativa única del Secretario de Gracia y Justicia Floridablanca infringiendo todas las tradiciones españolas al no consultar al máximo organismo colegiado: el Consejo de Castilla. Así continuaba el Consejo su interesante reflexión:

"La Superintendencia en la forma que nació, y subsiste es contraria a Derecho; y contiene derogación de leyes, cuya letra y espíritu cree el Consejo, no se hicieron presentes al glorioso padre de V.M. pues de otra manera no era posible hubiera condescendido en semejante establecimiento para el qual se excusó pedir el dictamen del Consejo porque aquel habría expuesto desde luego y manifestado los vicios, defectos e inconvenientes que podría tener"(89).

Tampoco le gustaba al Consejo de Castilla que la Superintendencia escapase a su control. Recordemos que el Superintendente no necesitaba la intermediación del Consejo porque podía "representar lo que estimare conveniente...a mi real persona por medio de mi primera secretaría de Estado". El propio Consejo reconocía en su dictamen final sobre la institución de policía que "este Tribunal por su naturaleza y por el estado informe en que se halla, es muy expuesto a competencias y abusos, particularmente no teniendo subordinación alguna al Consejo"(90).

Por todas estas razones no es de extrañar la reflexión última del Consejo sobre la Superintendencia General de Policía:

"Que el establecimiento de la Superintendencia, ni es, ni fue útil, que no es necesario, que es contrario

a las leyes de España, y perjudicial, por lo que conviene que cese desde luego"(91).

Nada podía agradar más al nuevo Secretario de Estado, Aranda, que el dictamen del Consejo de Castilla. Al Conde, como "aragonés", una institución que imitaba a organismos extranjeros y que además escapaba al control de la máxima institución colegiada, el Consejo de Castilla, no le debía gustar. Además, fue una reforma de Floridablanca alguien a quién Aranda guardaba un profundo rencor(92).

Carlos IV, decidió el 1792 la supresión de la Superintendencia General de Policía reconociendo además que el nuevo modelo de administración de justicia y de gobierno de la Villa y Corte debía ser el creado por Aranda catorce años antes.

"Es mi voluntad que se observe enteramente el Reglamento de mil setecientos sesenta y ocho, con la división dede ocho quarteles baxo un Alcalde de mi Casa y Corte, habitante dentro del mismo sin dispensa, y la subdivisión de ocho barrios en cada uno, según que así se estableció..."(93).

Tras el fracaso de la Superintendencia General de Policía, de nuevo la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de la Villa quedaban con toda la responsabilidad en el gobierno y la

administración de justicia de la Villa y Corte. Eso sí una responsabilidad "acumulativa" en muchas materias por lo que los conflictos institucionales no tardaron en aflorar.

La situación no había variado mucho desde que en 1713, Felipe V intentase las primeras reformas globales sobre las instituciones que administraban justicia y gobernaban la Villa y Corte: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el Ayuntamiento madrileño.

Ninguna de las reformas del siglo XVIII habían logrado solucionar el problema causado por la acumulación de funciones de la Sala y de la Corporación. Respetando las ordenanzas y privilegios de los dos organismos y con la fuerza de la burocracia tradicional castellana situada en las audiencias, chancillerías, la Sala y los consejos era imposible mejorar la situación caótica del gobierno y la administración de justicia de la Villa y Corte.

NOTAS DEL CAPITULO 7

(1) Conde de Fernan Nuñez, Vida de Carlos III.(1798), Facsimil de la obra, Madrid, 1988. pag. 115. Además de esta excelente biografía escrita por el sexto conde de Fernán Nuñez, don Carlos Gutierrez de los Rios, que sirvió como embajador de Francia durante el reinado de Carlos, existen también otros dos clásicos. La obra de Antonio Ferrer del Rio, Historia del reinado de Carlos III en España, Madrid, 1890-1896, 6 volúmenes, y la de Manuel Dánvila y Collado, El reinado de Carlos III Madrid, 1890-1896, 6 volúmenes. Un resumen de la bibliografía política existente sobre el reinado de Carlos en el artículo de Pere Molas Ribalta, "El Estado y la Administración en la España de Carlos III" en Actas del Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Tomo I, Madrid, 1990.

(2) Conde de Fernán Nuñez, Vida.. pág. 128.

(3) La fórmula nos la cuenta el conde de Fernán Nuñez en la obra citada, pág. 132.

(4) El trabajo de Pablo Fernández Albadalejo "La monarquía " incluido en Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración", vol. I, Madrid, 1989, contiene un excelente análisis del reinado de Carlos III (pp. 52-89). El autor comienza su estudio afirmando que "Como tradicionalmente solía ocurrir la proclamación de un nuevo monarca levantó grandes expectativas. La de Carlos III, ocurrida el 11 de septiembre de 1759, levantó quiza más de las que cabía esperar..." pág. 52.

(5) Una puesta al día de la bibliografía sobre Tanucci en el excelente artículo de Luigi Barreca, "Bernando Tanucci en la historiografía italiana y española" publicado en las Actas del coloquio internacional sobre Carlos III y su siglo", Madrid, 1990.

(6) Un interesante resumen de la política napolitana de Carlos de Borbón en la obra de Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1988, pp. 24-40. También el artículo de Vicente Rodríguez Casado titulado "La vida política en el reinado de Carlos III" en Carlos III y la Ilustración, t. I, Madrid, 1988.

(7) Fernández Albadalejo, "La Monarquía", pp. 56 y 57.

(8) Vincenzo Cuoco, Saggio Storico sulla rivoluzione napolitana del 1789, Florencia, 1926, citado por Luigi Barreca en la obra ya citada "Bernando Tanucci en la historiografía española e italiana", pp. 565-566.

(9) Gallego Anabitarte, Administración y Jueces: Gubernativo y contencioso, Madrid, 1971, pp. 58-59.

(10) Un estudio sobre los cambios ministeriales del reinado de Carlos III en José Antonio Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en Español, t. 1, Madrid, 1979. Los primeros cambios del reinado en las páginas 267-288.

(11) La mayoría de los historiadores de la época carolina coinciden en las ambiciones de Ensenada al iniciarse el reinado de Carlos III. Ver, por ejemplo, la obra de Felipe Abad León, El Marqués de la Ensenada, Su vida y su obra, Madrid, 1985.

(12) Sobre la figura del fiscal Campomanes la obra de Laura Rodríguez, Reforma e ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro R. Campomanes, Madrid, 1975. En la misma obra aparecen las biografías de los principales políticos del periodo. La de José Moñino, conde de Floridablanca, aparece en las pp. 62-63.

(13) John Lynch, Bourbon Spain 1700-1808, London, 1989, en la página 268 afirma como "la política de reformas fue diseñada por Campomanes y seguida por Esquilache..."

(14) El abastecimiento de la capital de la monarquía hispana y las consecuencias de la proclamación del libre comercio de granos ha sido estudiado por Concepción de Castro en su obra El pan de Madrid, Madrid, 1987. Los cambios en los precios de pan los recoge Antonio Domínguez Ortiz en su obra Carlos III ..., así en la página 66 señala "que el pan ...había subido desde 25 maravedises la pieza de dos libras en 1760 hasta 48 (doce cuartos) en en la primavera de 1766, y alzas similares habían experimentado el aceite y el tocino".

También un excelente resumen de los avatares del abastecimiento del pan en la Corte durante el siglo XVIII en la obra del que fue Corregidor de Madrid durante los años 1777 a 1792 José Antonio de Armona, Noticias privadas de Casa útiles para mis hijos(¿1789?), edición de Joaquín Álvarez Barrientos, Emilio Palacios Fernández y M^a del Carmen Sánchez García, Madrid, 1988. pp. 118-124.

(15) Laura Rodríguez en su libro sobre Campomanes explica como el bando de las capas y los sombreros redondos había sido promulgado en 1716, 1723, 1729, 1738, 1740, 1745 y 1760. Reforma e ilustración.... pág. 228.

(16) Conde de Fernán Nuñez, Vida de Carlos...., pág.199.

(17) Texto recogido por Laura Rodriguez del Archivo Privado de Campomanes y reproducido en Reforma e ilustración..., pág. 235.

(18) A. H. N. Consejos, leg. 6.796. fol. 15.

(19) A.H.N. Consejos, leg. 6.796, fol. 19.

(20) A. H. N. Consejos, leg. 6.796, fol. 28.

(21) Laura Rodriguez, Reforma e ilustración... pág. 238.

(22) "La intensidad y las motivaciones de estos movimientos en provincias fueron variadas; en la gran mayoría de los casos se alegó la carestía de los víveres, producto de unas cosechas deficientes, pero también de una mala gestión de las autoridades..." Dominquez Ortiz, Carlos III..., pag 71.

(23) Para conocer la figura del Conde de Aranda es imprescindible la lectura del libro de Rafael Olaechea, El Conde de Aranda y "el partido aragonés", Zaragoza, 1969.

(24) Un resumen de la historia de la Junta de Abastos se encuentra en el informe presentado por la Sala de Alcaldes al fiscal del Consejo Campomanes el 10 de julio de 1766. A. H. N. Consejos, leg. 6.796. Por este informe sabemos que la Junta fue creada en 1743, suspendida al atribuirle el rey al Gobernador Político y Militar de Madrid, conde de Maceda, la responsabilidad de los abastos de la Corte en 1746 y puesta otra vez en funcionamiento tras el fracaso de Maceda en 1747. Fue definitivamente anulada tras los motines de la primavera de 1766. Sobre los conflictos en materia de abastos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento véase el capítulo IV del presente trabajo.

(25) A.H.N. Consejos, leg. 6.796 fol. 42.

(26) Nov. Rec. Libro VII, Título XVIII . "De los Diputados de los abastos, y Síndicos Personeros de los pueblos". Un estudio profundo de las reformas municipales de Carlos III, lo constituye la obra de Javier Guillamon, Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III, Madrid, 1980. También el artículo de Benjamín González Alonso, "Régimen municipal en el siglo XVIII" en Sobre el estado y la administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981.

(27) Nov. Rec. Libro VII, Título XVIII, Ley I. "Nombramiento de Diputados y Síndico Personero del Común de los pueblos para el buen Régimen y administración de sus abastos".

(28) A.V.M. Secretaría, Caja 356, Exp. 11.

(29) Para ser procurador se precisaba pertenecer al cuerpo de caballeros de la Villa de Madrid, ser varon, mayor de 18 años y vecino de la Villa. No se podía tener parientes hasta segundo grado ocupando ningún cargo municipal. A. V. M. Secretaría, caja 26, exp. 6; y caja 1, exp. 2.

(30) El sueldo del Procurador General según el propio Jose Antonio de Pinedo era de 24. 200 reales mientras que el de regidor era variable dependiendo de las comisiones a las que estuviese asignado el regidor. En el siglo XVIII los sueldos de los regidores rondaban los 11.000 reales. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 209. De todas formas para los sueldos de los regidores véase el apartado del capítulo 3 del presente trabajo titulado "Sueldo y remuneración de los regidores".

(31) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 209.

(32) "Reflexiones del Conde de Aranda sobre las mejoras necesarias para mejorar el gobierno y la administración de justicia en la Corte", A.H.N. Consejos, leg. 504, exp. 6.

(33) A.H.N. Consejos, leg. 504.

(34) A.H.N. Consejos, leg. 504.

(35) "Segundo Informe de la Sala del 14 de marzo de 1767 con remisión de las dos respuestas del fiscal de ella". A.H.N. Consejos, leg. 504, expte. 6.

(36) "Respuesta del fiscal del Consejo sobre el expediente sobre la nueva forma de distribución de cuarteles y distribución de negocios criminales en la Corte", A.H.N. Consejos, leg. 504, expte. 6.

(37) "Real Cédula del 6 de octubre de 1768", A. G. S. Gracia y Justicia leg. 1026. También en A.H.N. Consejos. leg. 504, exp.6.

(38) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1026.

(39) Desdevises du Dezert nos cuenta como "Felipe V se acordó de los viejos soldados de sus ejércitos, pero no persiguió la fastuosidad de sus antepasados, y España no tuvo un "Hotel royal des invalides". Nos enumera después la cantidad de compañías que seguían existiendo a finales del Antiguo Régimen: "En 1804 había 44 compañías de inválidos útiles y 26 de inválidos impotentes, que llevaban uniformes, recibían una pequeña pensión del rey y aumentaban sus ingresos ejerciendo pequeñas industrias" La España del Antiguo..., pág. 508.

(40) "Real Cédula de S.M. a consulta de los señores de el consejo por la qual se divide la población de Madrid en ocho cuarteles señalando un Alcalde de Casa y Corte, y ocho alcaldes de barrio para cada uno: se establecen dos Salas Criminales, con derogación de fueros en lo criminal, o de policia, y otras providencias para el mejor y más expedito gobierno de Madrid", San Ildefonso a seis de octubre de 1768. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1026.

(41) Ordenaba la Real Cédula de octubre de 1768: "Solo podran detenerse en el Cuartel los presos por espacio de seis horas; y pasadas estas, se han de trasladar precisamente a las cárceles de Reales de corte o de Villa" y continuaba la Real Cédula: "Se advierte por regla al oficialde cada cuartel que la tropa de su mando ha de asistir solo para auxiliar a la justicia, y que procure por su persona enterarse del vecindario para poder dar auxilio con más facilidad...", A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1026.

(42) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1026.

(43) José Antonio de Armona, Noticias privadas... pág. 118.

(44) Sobre el conde de Aranda insistimos en la obra de Rafael Olaechea, El conde de Aranda.... John Lynch afirma que el primer historiador que utilizó el término de "partido aragonés" fue William Coxe en su obra, Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon, Londres, 1815, 5 vols, V, pág. 10. Coxe utilizó el termino tras haberlo leído en los despachos que el embajador inglés, Grantham, enviaba a Londres. Así Grantham comentando la caída de Grimaldi en 1776 constataba la existencia de "the personal opposition he so frequently met with from a set of men generally called the Aragonese Party". Lynch, Bourbon Spain. 1700- 1808, Oxford, 1989.

(45) En ese sentido los "aragoneses" coincidían con la posición política del grupo de los "españoles" formado por Ensenada, Carvajal, el duque de Montemar y el duque de Huéscar entre otros. Los "españoles", como en otro lugar señalamos, protagonizaron gran parte de las reformas del reinado de Fernando VI. Para las reformas de Fernando centradas en la administración de justicia y el gobierno de Madrid véase el capítulo VI del presente trabajo. La coincidencia entre "aragoneses" y "españoles" en el apego a todo "lo español" es resaltada por Domínguez Ortiz al afirmar que "Capitaneaba el llamado "partido aragonés" el conde de Aranda, y en él conflúan varias corrientes de opinión: la integrante de lo que Teófanés Egido llama partido "castizo " o "español" que recogía la corriente nacionalista suscitada por la irrupción de la nueva dinastía y los ministros extranjeros que tanto poder acapararon con Felipe V", Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1988. pág. 100.

(46) El "Plan de Gobierno" de Aranda lo redactó el conde en 1781 siendo embajador en Francia. No fue una iniciativa propia sino que se lo pidió el futuro Carlos IV. Rafael Olaechea en El conde de Aranda... recoge "El Plan de Gobierno" como apéndice, pp. 157-182. También José Antonio Escudero dedica un apartado del capítulo III de su obra Los orígenes del consejo de ministros en España, Madrid, 1979, al análisis del "Plan de Gobierno" de Aranda, pp. 368-380.

(47) Citado por Escudero, Los orígenes..., pág. 370.

(48) José Antonio Escudero, Los orígenes... pág. 377.

(49) Rafael Olaechea, El conde de Aranda... pág. 168. También en Escudero, Los orígenes... pág. 377.

(50) "Plan de Gobierno" de Aranda, Olaechea, El conde de Aranda..., pág. 172. También en José Antonio Escudero, Los orígenes... pág. 379.

(51) Carta del conde de Aranda al Príncipe de Asturias, Paris, 16 de septiembre de 1781. Reproducida por Olaechea, El conde de Aranda... pp. 187-191. Un fragmento en Escudero, Los orígenes ... pág. 382.

(52) Dominguez Ortiz, Carlos III..., pág. 100.

(53) Para las reformas de Felipe V y Fernando VI véanse los capítulos V y VI del presente trabajo.

(54) Las alusiones de Grantham, embajador británico en Madrid a la existencia de partidos en la Corte eran continuas en su correspondencia con Londres. Véase Lynch, Bourbon Spain..., pp. 292-296. Más sorprendente es la carta enviada por el rey Carlos III a su hijo el Príncipe de Asturias con motivo de participar éste, apoyando a Aranda y a su grupo, en las intrigas de la Corte. Así se dirigía el rey a su hijo y heredero en 1776: "Corre por el Reyno que hay dos partidos en la Corte; el daño que esto puede causar no es ponderable, y es más contra ti que contra mi, pues lo has de heredar, y si crees que esto sucede ahora entre Padre y hijo, no faltarán gentes que, con los mismos fines, sugerirán a las tuyas de hacer lo mismo" Fragmento también reproducido en el libro de John Lynch, Bourbon Spain..., pág. 295.

(55) José Antonio de Armona dedica dos apartados de su obra Noticias privadas..., a su continuo enfrentamiento como Corregidor de Madrid con Campomanes. Así tanto el apartado titulado "El conde de Campomanes, gobernador interino del Consejo" como el dedicado a los "Cargos relativos al

corregimiento" son en realidad un "memorial de agravios" contra la figura del fiscal. El enfrentamiento por la censura que Campomanes quería imponer sobre la obra de teatro clásico en la pág. 141.

(56) José Antonio de Armona, como todos los corregidores de Madrid desde el corregimiento del Marqués del Rafal (1748-1753), era Juez Protector de Comedias y compañías del reino. Debía ser una ocupación que le gustase porque conocía y admiraba el mundo teatral. Armona, además, fue autor de una obra que se acaba de publicar titulada Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1785), Madrid, 1785. Sobre la localización del manuscrito y su influencia en las obras posteriores centradas en el teatro español véase la introducción de Joaquín Álvarez Barrientos, Emilio Palacios Fernández y M^a del Carmen Sánchez García en la edición realizada por la Diputación General de Alava en 1988.

(57) José Antonio de Armona, Noticias privadas... pág. 144.

(58) John Lynch, Bourbon Spain... pág. 292.

(59) En este sentido José Antonio Escudero afirmaba "Sin embargo las pretensiones de intervención del presidente del Consejo de Castilla alcanzaban a cualquier asunto importante de la monarquía, y fue precisamente en la cuestión de las Malvinas donde Aranda extremó las discrepancias debido a sus decididos propósitos belicistas frente a los criterios más prudentes de Grimaldi" en Los Secretarios..., pág. 331. También John Lynch considera que las intromisiones del Gobernador del Consejo de Castilla en materias que no eran de sus incumbencia cansaron a Carlos III y le llevaron a destituirlo. Así afirma "But the factions were divided if not on reform at least on a number of policy issues, and conflict was exacerbated by the Falklands crisis of 1770,

when the warlike Aranda poured scorn on the diplomatic efforts of Grimaldi...", Lynch , Bourbon Spain, pág. 293. Escudero, Lynch y Dominguez Ortiz también afirman que el mal carácter de Aranda podía haber sido una causa a tener en cuenta a la hora de analizar su destitución. "La salida de Aranda en 1773, salida que ha sido interpretada de diversas maneras: o bien como indicio de que la situación interna era lo bastante sólida como para no necesitar un militar al frente del Consejo de Castilla o como resultado de que el conde era un personaje incómodo en la Corte por su temperamento..." Dominguez Ortiz, Las reformas... pág. 97.

(60) José Antonio Escudero reproduce tanto la comunicación del nombramiento hecha por Grimaldi al conde de Aranda como la respuesta que el nuevo embajador en París dió al entonces Secretario de Estado Grimaldi. También en una carta remitida por Aranda a Grimaldi, el 29 de abril de 1773, este reconocía que "en mi actual colocación (se refiere a la presidencia dl Consejo de Castilla) no arribo a conservar aquella confianza que merecí a S.M. en los primeros años en que (yo era) menos práctico del oficio; y en turbulencias, aprietos y sucesos delicados conseguí con acierto y fortuna su benigno acogimiento", reproducida por Escudero, El consejo de ministros..., pp 333-334.

(61) Sobre el regreso a la Corte del conde de Floridablanca para encargarse de la Secretaría de Estado primero y después de la de Gracia y Justicia escribió Armona. "Por este tiempo vino de Roma (era embajador allí) el conde de Floridablanca, con un viaje detenido, muy incómodo por las muchas aguas y nieves del invierno. Tomo posesión de su ministerio en El Pardo, ocupando el cuarto que le corresponde. El marqués de Grimaldi quedó enteramente enojado...Antes de salir -continúa el Corregidor Armona- pasé un día a El pardo para dar a uno la "bienvenida" ya otro el "buen viaje". Comí con

los dos, y después del café nos junto el marqués (Grimaldi)...

-Aquí me siento, nos dijo, entre dos hechuras mías que estimo mucho, gloriándome de haberlas creado y de que sean mías. Armona, Noticias privadas..., pp. 112-113.

(62) El grueso de la información sobre la primera etapa de la Superintendencia General de Policía en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1026. También en los libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de los años 1782-1792 en la sección de Consejos del A.H.N. En el mismo archivo el Libro 1.491 de la sección de Consejos. Existen dos artículos recientes sobre la superintendencia Generalde Policia de Madrid que han utilizado la información procedente del A.H.N. Nos referimos al de Antonio Risco, "Espacio, sociabilidad y control social: la Superintendencia General de Policía para Madrid y su Rastro (1782-1808)" en Madrid en la época moderna: espacio, sociedad y cultura, Madrid, y el de Pablo Sánchez León y Leopoldo Moscoso Sarabia, "La noción y la práctica de policía en la Ilustración española: la Superintendencia, sus funciones y límites en el reinado de Carlos III" .

(63) "Real Decreto del 17 de marzo de 1782". A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(64) También en el "Real Decreto del 17 de marzo de 1782 se enumeran las funciones del Superintendente. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(65) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(66) "Sin estorbar al superintendente GRal -continua el decreto- que en toda la comprehension del Pueblo, y su jurisdicción, ejerza iguales facultades y tome conocimiento de lo que ocurra" A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(67) Sobre la familia Colón de Larreátegui Janine Fayard ha realizado un minucioso estudio. Así nos cuenta que el primero en llegar a Consejero de Castilla fue Don Martín de Larreátegui en 1648. Martín tuvo ocho hijos tres de los cuales entraron en la administración. Diego Manuel (alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid), Francisco (consejero de Castilla de 1646 a 1701) y Pedro (consejero de Castilla de 1704 a 1719).

Francisco Colón de Larreátegui tuvo cuatro hijos, uno de ellos Pedro Isidro fue también consejero de Castilla y padre de nuestro superintendente y también consejero Mariano Colón de Larreátegui.

Mariano Colón era por lo tanto la quinta generación de Larreáteguis en el Consejo de Castilla. Janine Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746) Madrid, 1982.pp 246-247.

(68) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(69) Todas estas alusiones a la extranjerización de la nueva institución estan localizadas en un minucioso estudio elaborado por el Consejo de Castilla sobre la Superintendencia General de Policia con un objetivo concreto: lograr su supresión. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(70) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(71) El Consejo de Castilla exigió al Superintendente General de Policía Mariano Colón de Larreategui, en el año 1792 (año de la supresión de la Superintendencia) que respondiese a nueve preguntas muy concretas sobre su institución. La primera era "Por el primer artículo pregunta el Consejo, si se ha formado y comunicado la instrucción que se reservó el el Real Decreto de diez y siete de marzo de

mil setecientos ochenta y dos según descubriese y demostrase la experiencia" A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(72) Mariano Colón de Larreátegui continuaba explicando como se las había arreglado sin la instrucción real. Así reconocía que había "arreglado las rondas, vajo las prevenciones que comprenden los números primero y segundo para el egercicio de sus funciones debiendo hacer presente al Consejo que la del numero primero es la instrucción que observan los Alguaciles de la comission de vagos, que yo serví por espacio de tres años: la del número segundo se me comunicó por el Señor Conde de Lerena con real orden de vinte y quatro de Diciembre de mil setecientos ochenta y nueve unicamente para lo que debía hacer la ronda destinada a algunos encargos de la Real hcienda que en ella se expresan". A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(73) El Decreto del 17 de marzo además de encontrarse en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026. También está en el A.H.N. Consejos, libro 1.491, fol. 344.

(74) A.H.N. Consejos, libro, 1.782, fol. 344.

(75) "Extracto de Reales Ordenes y resoluciones del Consejo en puntos de las facultades del Corregidor de Madrid en asuntos de la policía, limpieza y ornato público". A.V.M. Corregimeinto, 1-134-31, fol.11.

(76) También en el "Extracto de Reales Ordenes y resoluciones del Consejo..." fol. 12 .A.V.M. Corregimiento, 1-134-31.

(77) De las nueve preguntas realizadas por el Consejo al Superintendente de Madrid en 1792, la sexta decía así "El numero de oficiales en los ramos de la Superintendencia con

distinción los Escribanos, alguaciles, o porteros u otros dependientes agregados con expresión de los que estaban antes destinados al servicio del Ayuntamiento de Madrid y los que servían en la Sala de Corte, y a sus alcaldes...". En su respuesta el Superintendente alude a "un Plan adjunto letra A remitido al Conde de Aranda" que, por desgracia, no hemos localizado en los archivos. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(78) Esta fue la respuesta del Superintendente a la octava pregunta del Consejo que en realidad era una velada acusación de corrupción. "Si consta en la Secretaría o papeles de la superintendencia -interrogaba el Consejo- haberse separado de esta, o privado de sus oficios a alguno de los alguaciles o Escribanos u otros... en su tiempo o en el de su antecesor por estafas, u otros excesos, expresando en este caso, quienes han sido, y el destino que se les había dado. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(79) "Real Decreto del 17 de marzo de 1787", A.H.N. Consejos, libro, 1.491, fol.344.

(80) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(81) También en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(82) "Extracto de Reales ordenes y Resoluciones del Consejo en punto a las facultades del Corregidor de Madrid en asuntos de la policía, limpieza y otros puntos. A.V.M. Corregimiento, 1-134-31. fol. 13.

(83) "Extracto de Reales ordenes y Resoluciones..."A.V.M. Corregimiento, 1-134-31- fol. 14.

(84) Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1976. pp. 295-515.

(85) John Lynch, Bourbon Spain..., pp. 380-381.

(86) Afirma Domínguez Ortiz "Puede afirmarse que, aun sin el revulsivo que supuso la revolución del país vecino hubieran estallado en el nuestro las contradicciones internas...y se hubiera planteado también un problema político.

Este problema se planteaba a dos niveles: el de una lucha de poder dentro del personal gubernamental y el del choque entre el concepto tradicional y el revolucionario del estado..." Sociedad y Estado..., pp.499-500.

(87) José Antonio Escudero Los secretarios...pp. 545-549.

(88) A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(89) A.G.S. Gracia y justicia, leg. 1026.

(90) También en A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(91) Así terminaba el informe que el Conde de Aranda le había pedido al Consejo de Castilla valorando la actuación de la Superintendencia. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(92) La persecución de Aranda contra Floridablanca fue tenaz. Como señala Escudero "la pérdida de empleos representó para Floridablanca el comienzo de una vulgar persecución". Primero se fue a Hellín, donde tenía la casa familiar, pero después fue trasladado con escolta militar a la fortaleza de Pamplona, donde estuvo encerrado hasta el año 1794 en que tuvo que responder de acusaciones de malversación de fondos y de tiranía. Escudero Los

Secretarios..., pp. 551-556.

(93) A pesar de que Carlos IV accedió a los deseos de Aranda y suprimió la Superintendencia General de Policía esta se restituyó el 13 de diciembre de 1.807 y quedó suprimida definitivamente el 19 de marzo de 1808. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 1.026 y A.H.N. Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1808, libro I, fol. 392 y siguientes.

CONCLUSIONES

Las sucesivas reformas emprendidas por los monarcas de la Casa de Borbón en el siglo XVIII sobre el modelo administrativo y judicial de la Villa y Corte habían fracasado. El respeto por la compleja organización jurídica creada durante siglos estaba detrás de ese fracaso. "La Superintendencia en la forma que nació, y subsiste es contraria a derecho -afirmaba el Consejo de Castilla repitiéndose a si mismo a finales del siglo XVIII- y contiene derogación de leyes". Sólo era Derecho -para la mayoría de los letrados castellanos- aquel que respetaba la tradición y las normas legadas por los distintos monarcas castellanos. Las reformas pretendían alterar esa tradición, querían racionalizar el modelo administrativo y judicial de la Villa y Corte tarea imposible de realizar respetando la multitud de privilegios, ordenanzas y disposiciones promulgadas a lo largo de siglos y que configuraban las atribuciones y la composición de la Sala de Alcaldes y del Ayuntamiento.

La Corporación en el siglo XVIII estaba integrada por un numeroso grupo de regidores propietarios que además eran hidalgos y que entendían su oficio como una fuente regular

de ingresos y de prestigio. Estaba presidido por un Corregidor, que a lo largo del siglo fue siempre un letrado con una carrera prestigiosa a sus espaldas y que, como Corregidor de Madrid, gozaba de gran consideración social pero que en la práctica tenía escasas atribuciones. A algunos corregidores, sobre todo a aquellos que les interesaba su carrera, esta situación les humilló profundamente.

El Ayuntamiento tenía gran cantidad de privilegios y ordenanzas que habían sido promulgadas desde el reinado de Alfonso XI y que recogían cual debía ser su organización y, sobre todo, cuales debían ser sus competencias.

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte se había convertido en el siglo XVIII en una institución integrada por letrados que ansiaban hacer una buena carrera administrativa. Es decir, querían llegar a ser ministros de los consejos y si fuera posible, del Consejo de Castilla. Ser Alcalde de Casa y Corte era un desagradable eslabón que unía el puesto de oidor o fiscal de las Audiencias y Chancillerías con el de consejero, e incluso además con el de consejero de Castilla. Los estudiantes que, tras concluir su carrera de leyes en cualquiera de las universidades españolas, lograban ser elegidos por la Cámara de Castilla como miembros de las audiencias y chancillerías iniciaban su carrera en el Consejo. Se denominaban a sí mismos "miembros del Consejo de Su Magestad" y su trayectoria lógica concluía en alguna de

las altas instituciones sinodiales que integraban la monarquía hispana. Constituían, por lo tanto un grupo cerrado que defendía las atribuciones recogidas en las ordenanzas y disposiciones de todas "sus" instituciones. Audiencias, Chancillerías, Sala de Alcaldes y Consejos, fueron para estos letrados organismos intocables.

Los enfrentamientos entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de Madrid fueron, durante los siglos XVI y XVII, graves y muchas veces violentos. Detrás de los mismos estaba el solapamiento de competencias entre la institución de la Corte y la de la Villa. Tanto las ordenanzas de los Alcaldes de Corte como los privilegios y ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid reconocían a sus instituciones facultades sobre los abastos y la administración de justicia de la Villa y Corte. Los monarcas de la Casa de Austria no promulgaron ninguna norma que desligara las competencias de los organismos; respetaron la tradición y las leyes promulgadas por sus mayores. Introdujeron, eso sí, a un nuevo actor. El Consejo de Castilla debía dirimir los conflictos entre la Sala y el Ayuntamiento.

Los gabinetes reformistas de los monarcas del siglo XVIII no sólo encontraron irracional el modelo gubernativo y judicial de la Corte sino, sobre todo, ineficaz. Eran muchos los ministros, muchas las autoridades, pero nada parecía funcionar.

La Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de la Villa fueron incluidos en las primeras reformas realizadas en la corona de Castilla por Felipe V y sus ministros. Los Decretos de Nueva Planta para el Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, Consejo de Hacienda y otros organismos se promulgaron a finales de 1713. La Sala de Alcaldes fue reformada por dos motivos distintos. Por un lado como institución integrante del grupo de organismos que ocupaban los letrados castellanos en su carrera hacia los consejos. Por otro como institución que gobernaba e impartía justicia en la Corte enfrentada siempre con el Ayuntamiento de la Villa.

Las primeras reformas de Felipe V fueron instigadas por Orry y Macanaz con intenciones muy precisas. Querían disminuir el poder que tenían los consejos como primera medida para hacer triunfar cualquier cambio en la organización institucional de la monarquía hispana. Sabían que tanto el Consejo de Castilla como las instituciones cuyos nombramientos dependían de la Cámara de Castilla, estaban ocupadas por letrados, en su mayoría colegiales, que defendían sus intereses de grupo. Esta situación, que los reformistas querían alterar, se producía porque una gran parte de los nombramientos para ocupar plaza en las chancillerías y audiencias, en la Sala de Alcaldes o en cualquiera de los Consejos los preparaba la Cámara. Esta entregaba una terna al rey quién logicamente decidía. La Cámara de Castilla era un organismo ligado al Consejo de

Castilla e integrado por consejeros. Si el monarca y sus ministros podían evitar la intervención de estos letrados en los nombramientos de los oficiales de las principales instituciones de la monarquía el rechazo a las reformas se habría eliminado. Pero la tarea era francamente difícil.

Los Decretos de Nueva Planta suprimieron la Cámara de Castilla. Desaparecida ésta, la burocracia tradicional castellana dejaba de participar en sus propios nombramientos. También los Decretos incrementaron el número de miembros de los Consejos para aportar savia nueva a las instituciones tradicionales; a ser posible se elegirían para las nuevas plazas, licenciados en leyes que no fuesen colegiales y que simpatizasen con los cambios. Así, por ejemplo, la Sala de Alcaldes pasó de tener doce alcaldes a tener dieciocho y además vió aparecer la figura de los tenientes de alcaldes, oficio que también desempeñaban licenciados en derecho.

Además, por si estas medidas fuesen insuficientes para cambiar la estructura de los consejos y organismos afectados, se crearon presidencias colegiadas y así se limitó el poder que tenían los antiguos presidentes de las instituciones tradicionales. La Sala de Alcaldes pasó a estar presidida por tres ministros del Consejo de Castilla en lugar de por uno como hasta entonces. También se nombraron fiscales afectos a las reformas para lograr una defensa mejor de los intereses del rey en sus instituciones.

Pero con estas primeras reformas Felipe V, no sólo intentaba disminuir el poder de los letrados colegiales que acaparaban las instituciones más importantes de la monarquía, frenando así sus deseos de cambio. En los mismos Decretos de Nueva Planta se intentaba racionalizar el sistema de gobierno y de administración de justicia de la Villa y Corte. Para ello nada mejor -defendía Macanaz- que separar las funciones de los dos organismos. La Sala de Alcaldes quedaría como tribunal de justicia y el Ayuntamiento se encargaría de los problemas de abastecimiento, limpieza, empedrado y mantenimiento de la Villa. Se suprimió el juzgado de la Villa de Madrid y los tenientes de Corregidor pasaron a formar parte del grupo de los tenientes de alcaldes que auxiliaban a los alcaldes de Corte.

Estos primeros cambios tuvieron grandes enemigos. Por un lado los burócratas castellanos que acaparaban los consejos, Sala de Alcaldes y audiencias se movilizaron contra la reforma. No podían permitir ver disminuido el poder de "sus" instituciones porque equivaldría a un recorte del suyo propio. Tampoco el Ayuntamiento de Madrid podía comprender una limitación de sus atribuciones. Si el Ayuntamiento era privado de competencias, disminuirían las comisiones municipales y por lo tanto las retribuciones de los regidores madrileños.

Todas las instituciones afectadas actuaron de la misma

forma contra las reformas de Felipe V. Los Decretos de Nueva Planta no supusieron una derogación de las ordenanzas y privilegios que dibujaban las competencias de los organismos. Tanto los consejos como la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento madrileño elevaron múltiples consultas al monarca. Los letrados no pudieron ni quisieron entender las reformas y tenían un instrumento eficaz para frenarlas. Amparándose en las ordenanzas y privilegios de sus instituciones, continuaban actuando como si los nuevos Decretos no se hubiesen promulgado. También elaboraron consultas, escritos y reclamaciones por considerar que la Nueva Planta era "contraria a Derecho". Esta gran actividad de las instituciones afectadas entorpeció la puesta en marcha del proyecto. La situación no había mejorado sólo se había complicado.

Además, los defensores del orden tradicional iban ocupando posiciones junto al monarca y su nueva mujer Isabel de Farnesio. Nadie se extrañó cuando a finales del año 1715 las instituciones reformadas volvieron a su antigua planta. Las primeras reformas sobre el gobierno y la administración de justicia de la Corte habían fracasado.

Al iniciarse el reinado de Fernando VI la situación de enfrentamiento entre la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento continuaba. Las competencias de las dos instituciones se solapaban y el desgobierno de la Corte era evidente. Una de las primeras reformas fernandinas se centró en la Villa y

Corte de Madrid. No fue una reforma de Ensenada, porque fue anterior a su llegada a la Secretaría de Gracia y Justicia, sino de sus enemigo político, Villarías.

En realidad, las diferencias entre Ensenada y Villarías y sus respectivos partidarios era pequeña. Tenían más que ver con personalismos e intereses individuales que con profundas divergencias políticas. Ninguno de los dos Secretarios de Fernando VI había seguido la carrera de los burócratas castellanos. No habían ocupado puestos en las audiencias, Sala de Alcaldes ni en los consejos. Además tanto Ensenada como Villarías consideraban que había que limitar las funciones de los mismos. Creían que los consejos atendían a asuntos demasiado diversos y que además su forma colegiada de decisión entorpecía la resolución de los problemas. Querían potenciar el poder unipersonal de los secretarios que, especializados en las distintas materias, podían además tomar decisiones con rapidez.

Coincidían Villarías y Ensenada con los primeros ministros de Felipe V. Creían, como Orry y Macanaz, que para limitar las funciones de los consejos y potenciar la labor de los secretarios había que recortar el poder de los burócratas que ocupaban audiencias, chancillerías, Sala de Alcaldes y consejos, es decir de los letrados que formaban parte del "consejo de Su Magestad".

Sin embargo existía una pequeña diferencia entre Villarías y Ensenada. Aunque los dos admiraban el poder que, desde las reformas de Colbert, tenían los borbones de Francia y también consideraban que la organización institucional francesa era más racional que la de la monarquía hispana, sus criterios frente al papel que debía desempeñar el país vecino, diferían. Ensenada y su grupo, conocidos como "los españoles", admiraban al país galo pero pensaban que la tutela que éste había desempeñado en el reinado del primer Borbón debía de desaparecer. A Villarías y a sus seguidores -los vizcaínos- no parecía preocuparles la tutela francesa. Sin embargo, la conducta desarrollada por Villarías y Ensenada hacía parecer que sus divergencias en materias como la política interior eran mucho mas profundas.

La reforma sobre el gobierno y la administración de justicia de la Villa y Corte consistió en crear una figura, la del Gobernador Político y Militar de Madrid, que presidiese la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento. Suprimían así parte de la tutela que la Sala tenía del Consejo de Castilla porque ésta ya no estaría presidida por un ministro del Consejo. También suprimían la figura de Corregidor de Madrid, que era conflictiva porque los letrados que ocuparon el corregimiento siempre estuvieron descontentos con su escaso protagonismo real en la Villa y Corte. Separaron, una vez mas, como lo habían hecho los Decretos de Nueva Planta,

las funciones de los dos organismos, impidiendo así solapamientos de competencias y continuos enfrentamientos. La Sala quedaría como tribunal de justicia mientras que los asuntos del gobierno político y económico de Madrid los atendería la institución municipal.

El Gobernador, además, se independizaba del Consejo de Castilla al despachar directamente con el Secretario de Gracia y Justicia, y así sus órdenes y disposiciones serían rápidas y los problemas no deberían esperar siglos para resolverse. Podría haber sido perfectamente la reforma de Ensenada, pero no lo era.

La reforma se encontró con una gran oposición. Por un lado no gustó a los integrantes de la Corporación madrileña que veían disminuir las funciones del Ayuntamiento y tampoco agradó a los letrados de la Sala de Alcaldes ni del Consejo de Castilla. La Sala se vió separada del Consejo, con lo que la promoción de los alcaldes a la alta institución castellana era más difícil. La Sala se daba cuenta, a su vez, de la limitación de competencias que suponía su alejamiento de las funciones de gobierno. El Consejo de Castilla tampoco estaba contento. Un asunto tan importante, como el de la supervisión del gobierno y de la justicia de la Corte se le escapaba de las manos.

La forma de actuación de las tres instituciones afectadas fue similar a la que tuvieron frente a los Decretos de Nueva Planta. Elaboraron consultas y reflexiones

que entorpecieron la buena marcha del proyecto. La reforma de Villarías tampoco había derogado las ordenanzas y los privilegios que señalaban funciones de gobierno y de justicia para las dos instituciones y la Sala y el Ayuntamiento acudían a sus viejas disposiciones para explicar su desobediencia frente a la reforma.

Pero la novedad tampoco le gustó a Ensenada y a sus seguidores. Era un cambio realizado por sus enemigos y además el Gobernador de Madrid, el Conde de Maceda, era un activo seguidor de Villarías y su grupo. "Los españoles" tenían deseos de ocupar todas las secretarías, embajadas y puestos de relevancia y para ello había que liquidar políticamente a los seguidores de Villarías. Con toda esta oposición la reforma no pudo sobrevivir.

Cuando Villarías, debido a la incansable actividad política de Ensenada, fue destituido, todo el mundo sabía que su reforma había terminado también.

El Gobierno Político y Militar de Madrid había fracasado y lo había hecho por una alianza poco comprensible. Los miembros de los consejos y de las demás instituciones implicadas se habían unido a Ensenada y su grupo, con los que tantas diferencias ideológicas tenían, para destruir a la nueva institución.

La Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento volvieron a su antigua planta y sus enfrentamientos surgieron pronto con graves problemas para la administración de justicia y el

Gobierno de la Corte.

Durante el reinado de Carlos III también se acometieron reformas que afectaron al sistema gubernativo y judicial de la Corte. Pero las reformas carolinas fueron muy distintas a las de sus antecesores. Fueron menos drásticas porque en ningún momento pretendieron alterar las funciones que las ordenanzas y privilegios reconocían a las distintas instituciones. No pretendieron limitar el cometido de los consejos y mucho menos del de Castilla desde donde se impulsaron además las primeras reformas.

Podemos definir los cambios llevados a cabo por Carlos III sobre el sistema de gobierno y de administración de justicia de la Corte como "acumulativas". Se crearon siempre nuevas instituciones que se superpusieron a los organismos tradicionales, sin limitar sus funciones. Reforzaban así la actuación de la Sala de Alcaldes y del Ayuntamiento pero, a su vez, enrevesaron todavía más la situación. Así, tras los motines de 1766, se creó la figura de Procurador Síndico Personero y de los Diputados del Común cuyos cometidos ya desempeñaba en la Corporación el Procurador General. Se dividió la Corte en más cuarteles encomendándolos siempre a un Alcalde de Casa y Corte pero se crearon nuevas instituciones. Se implicó en el gobierno de Madrid a la jurisdicción militar al encomendar también labores de vigilancia en los cuarteles a las Partidas de Inválidos, que eran cuerpos militares. Se creó además la figura de los

Alcaldes de Barrio que debían colaborar con los alcaldes de Casa y Corte.

Estas superposiciones de instituciones en nada mejoraron la situación del gobierno y la administración de justicia de la Corte. Sin embargo, estas primeras reformas carolinas fueron las que más tiempo estuvieron en vigor. No fueron contestadas por la Sala de Alcaldes ni por el Ayuntamiento al no limitar las funciones que sus ordenanzas les atribuían.

Una muestra del mal funcionamiento de la nueva reforma fue que, catorce años después, Floridablanca consideró necesario intervenir de nuevo en el modelo administrativo y judicial de la Corte. Lo hizo también sin derogación de privilegios y ordenanzas y superponiendo instituciones. La Superintendencia General de Policía tampoco disminuyó las atribuciones de la Sala y del Ayuntamiento, sino que, por el contrario, el superintendente debía actuar acumulativamente con las instituciones tradicionales de la Corte. Los problemas, por lo tanto, no tardaron en surgir.

De todas formas el fracaso de la Superintendencia estuvo ligado al enfrentamiento entre Aranda y su grupo, "los aragoneses", con Floridablanca y sus partidarios. Las diferencias entre los dos "partidos", de nuevo, eran pequeñas. Todos eran partidarios de reformas y además coincidían en considerar que no se debían limitar las funciones de las instituciones tradicionales. Todos, en

definitiva, creían que la superposición de instituciones no era un mal sino que, por el contrario, reforzaría la actuación de los viejos organismos hispánicos. Eran, en realidad, menos ambiciosos o más pragmáticos que los ministros reformistas de Felipe V y de Fernando VI.

Las diferencias entre "los aragoneses" y Floridablanca y su grupo tenían que ver con el origen de las reformas. Aranda quería encontrar las mejoras en la constitución tradicional de la monarquía. Buscando en el pasado se podría mejorar el presente. Floridablanca defendía reformas más "modernas". No le importaba imitar a instituciones y organismos de cortes extranjeras si pensaba que podrían mejorar la organización institucional hispana. Otra cuestión les enfrentaba; los aragoneses eran miembros de la nobleza y en muchos casos eran además militares. Floridablanca y sus partidarios formaban parte del grupo de letrados que ocupaban las instituciones de la monarquía. Los enfrentamientos entre las dos facciones, unido a otra serie de factores, llevaron a la caída de Floridablanca y a terminar con su novedad sobre el gobierno de la Corte. La Superintendencia fue suprimida nada más ocupar las secretarías de Floridablanca, el conde de Aranda.

A finales del Antiguo Régimen el modelo gubernativo y judicial de la Corte seguía siendo el mismo que en 1700. La Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento continuaban compartiendo funciones de justicia y de gobierno y mantenían sus

enfrentamientos. Las reformas borbónicas habían fracasado. Los gabinetes reformistas intentaron deslindar las funciones de los dos organismos para evitar así solapamientos de competencias pero lo hicieron desde el respeto a la tradición y a las normas promulgadas por sus predecesores. Creaban instituciones nuevas o alteraban las funciones de los viejos organismos pero casi nunca derogaron las normas que desde los siglos medievales dibujaban la composición y las competencias de las instituciones. Estaba claro que facilitaban el camino a los grupos contrarios a las novedades. La burocracia tradicional castellana, situada en las audiencias y chancillerías, la Sala y los consejos, se opuso a toda reforma que supusiera una pérdida de protagonismo de "sus" instituciones. El recurso fue siempre el mismo: recurrían a las ordenanzas y privilegios concedidos durante siglos a sus organismos y los enumeraban en múltiples consultas y quejas que elevaban a la corona cada vez que se intentaba un cambio. Las consultas de las distintas instituciones eran siempre estudiadas y contestadas pero nunca resolvían las dudas de los ministros que de nuevo recurrían a la pregunta, a la cita jurídica, a la controversia. Al final las instituciones dedicaban más tiempo a sus recursos que a cumplir con sus nuevas obligaciones. Los asuntos de justicia y gobierno funcionaban peor que antes de aplicarse la reforma y la corona optaba por el regreso a la antigua planta de los organismos.

Otra razón, aunque de menor importancia, contribuyó también al fracaso de las reformas sobre el modelo gubernativo y judicial de la Villa y Corte. Los partidarios de las reformas nunca estuvieron unidos. Existieron personalismos y luchas por el poder que imposibilitaron una conciliación de posiciones políticas que, dentro de cada uno de los diferentes reinados, en realidad estaban próximas.

Queremos por último señalar que los objetivos de las reformas variaron a lo largo del siglo XVIII, aunque no lo hiciera el procedimiento. Las reformas de Felipe V y de Fernando VI fueron más drásticas que las emprendidas por los gabinetes reformistas de Carlos III. Intentaron escindir funciones de justicia o de gobierno de las instituciones. Consideraban que era la única forma de mejorar el funcionamiento de las mismas y de evitar sus enfrentamientos. Las reformas carolinas que afectaron a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento de Madrid no fueron tan ambiciosas. Habían aprendido que la burocracia tradicional era fuerte y defendía con ahínco el poder de sus instituciones. Intentaron racionalizar el sistema superponiendo organismos. Pero los solapamientos de instituciones y competencias no racionalizaban el sistema sino que, por el contrario, oscurecieron y dificultaron todavía más el sistema de justicia y gobierno de la Villa y Corte.

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

FUENTES.

La búsqueda y localización de fuentes siempre constituye una de las tareas más interesantes de la labor investigadora. En el caso del presente trabajo, además, ha sido totalmente sorprendente.

Así como la localización de documentos relativos a la institución municipal fue sencilla, están perfectamente organizados en el Archivo de la Villa de Madrid, la búsqueda de fuentes para estudiar la Sala de Alcaldes ha sido larga y no siempre agradable. En el Archivo Histórico Nacional se encuentra el grueso de la información sobre la Sala de Alcaldes pero es insuficiente. El estudio de la composición de la institución se podía elaborar pero no así sus competencias.

Los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes son, en realidad, expedientes encuadrados por años que contienen información muy abundante aunque no siempre interesante, sobre asuntos tramitados por la Sala. Existen en total 255 libros con expedientes de los años 1579 hasta 1834 pero son

de consulta difícil y pesada por los escasos resultados que se obtienen al examinarlos. El excelente catálogo de Angel González Palencia no evita horas de trabajo innecesarias. Al estar organizado alfabeticamente, para estudiar un sólo asunto hay que revisar los 255 libros de la colección.

Nuestra búsqueda en el Histórico Nacional era infructuosa porque no localizabamos ni las ordenanzas ni los privilegios que dibujaban cuales debían ser las atribuciones y la composición de la Sala de Alcaldes . Muchas cuestiones quedaban por contestar y muchos asuntos sin resolver después de años de trabajo en el Histórico. Pero no todo iban a ser desazones. Tras consultar otros archivos madrileños como el Archivo General del Palacio Real, los fondos manuscritos de la Biblioteca Municipal y de la Nacional, sin obtener grandes resultados, llegó la sorpresa. Curiosamente la mayoría de la documentación que ha permitido elaborar nuestra Tesis se encuentra en los fondos del Archivo General de Simancas. La sección de Gracia y Justicia contiene numerosa documantación sobre el gobierno y la administración de justicia de la Villa y Corte. Todas las reformas borbónicas que afectaron a la Sala y al Ayuntamiento están allí, y no sólo los reales decretos sino también las consultas, y los informes tramitados por las instituciones. Además, también logramos localizar en Diversos de Castilla las ordenanzas de los Alcaldes de Corte básicas para comprender la institución. El trabajo era ya posible y las

dudas quedaban resueltas. Por fin teníamos las reales disposiciones que configuraban un modelo ideal de institución y los documentos que nos remitían a la práctica cotidiana de los organismos.

Para una mejor organización de las fuentes hemos preferido clasificarlas en legislación y fuentes documentales.

LEGISLACION

Las normas que dibujaban la composición y competencias del Ayuntamiento madrileño aparecen resumidas en dos libros del Archivo de Secretaría, que está incluido en el Archivo General de la Villa de Madrid:

-Libro de Noticias de privilegios, Oficios sus elecciones, Gobierno y otras cosas. A.V.M. Secretaría, libro 150.

-Cereemonial o colección de noticias en Madrid. A.V.M. Secretaría, libro 150.

En los libros, sin embargo, sólo aparecen extractos de las normas, las disposiciones completas están diseminadas entre los distintos grupos que componen el Archivo de Secretaría, principalmente en el de Autoridad local, provincial y nacional (grupo IV) y el de clases varias

(grupo XXIV).

La localización de las normas que afectaron a la Sala de Alcaldes ha sido más difícil. Revisando la obra de Natividad Moreno Garballo, Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional, y la de Antonio Pérez Martín y J.M. Sholz, Legislación y jurisprudencia en la España del antiguo Régimen, fue posible localizar algunos Reales Decretos dirigidos a la Sala de Alcaldes que alteraban su composición y competencias. La mayoría de estas normas se hallan dispersas en tres colecciones de libros de la sección de consejos del Archivo Histórico Nacional: "Colección de impresos o colección corriente (libros 1.473-1515), Prágmáticas y Cédulas Reales (libros 1516-29) y Prágmáticas en fuerza de ley (libros 1530-31). Sin embargo, las ordenanzas de los Alcaldes de Corte se encuentran en el Archivo General de Simancas en Diversos de Castilla, leg.1 número 70.

Las importantes reformas emprendidas en el siglo XVIII que afectaban a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento de Madrid fueron localizadas en la sección de Gracia y Justicia del Archivo General de Simancas aunque también están reproducidas en el Archivo Histórico Nacional concretamente en los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de los años en que se produjeron las reformas.

Se han revisado también las disposiciones reales que afectaron a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento contenidas

en la Nueva y en la Novísima Recopilación. La edición utilizada ha sido la de Marcelo Martínez Alcubilla en sus Códigos Antiguos de España.

FUENTES DOCUMENTALES.

La legislación dibujaba un modelo ideal de institución que, a veces, se alejaba de la realidad cotidiana del organismo. En el caso, además, de dos instituciones en continuo enfrentamiento, como fueron la Sala de Alcaldes y el Ayuntamiento de Madrid, las normas nos siempre fueron cumplidas. Es necesario, por lo tanto, revisar el funcionamiento cotidiano de las instituciones si se quiere conocer como eran realmente. Las principales fuentes documentales proceden del Archivo de la Villa de Madrid, del Archivo General de Simancas, del Archivo Histórico Nacional así como del Archivo General del Palacio Real. También hemos localizado manuscritos importantes en la Biblioteca Nacional y en la Municipal de Madrid.

ARCHIVO DE LA VILLA DE MADRID

Archivo de Secretaria

Cajas Sección 1.

- 61 Competencias Ayuntamiento.
- 413 Forma que se ha de guardar en las
elecciones de oficios.

Cajas Sección 2

- 1 Hidalguías.
- 5 Resultado de elecciones tradicionales.
- 26 Hidalguías.
- 44 Hidalguías.
- 246 Pruebas de Regidores.
- 247 Modo que debe votar Madrid para las
provisiones de empleos.
- 287 Título de Regidor Despachado al Duque de
Lerma.
- 293 Pruebas de Regidores.
- 304 Procurador General.
- 305 Calidades de los Regidores.
- 306 Estatuto de Madrid.
- 307 Estatuto de Madrid (1638).
- 317 Información varia sobre oficios enajenados.
- 311 Salarios y Comisiones.
- 355 Oficios tradicionales.
- 356 Oficios concejiles.
- 359 Número de Regidores.
- 397 Nombramientos de Corregidores.

- 398 Lista de Corregidores.
- 421 Nombramientos de jueces de residencia.
- 422 Acuerdos de Madrid sobre su jurisdicción.
- 449 Jurisdicción de Madrid

Cajas Seccion 3.

- 168 Competencias de la Junta de Abastos.
- 356 Elecciones de oficios.
- 363 Incorporaciones de oficios.

Libros

- 42-44 Libros de elecciones (1711-1781).
- 45 Hidalguías.
- 150 Comisiones y patronatos.
- 196-230 Libros de Acuerdos (1768-1800).
- 212 Propios y Arbitrios.

Archivo de Corregimiento

Cajas Sección 1.

- 61 Atribuciones Ayuntamiento.
- 134 Facultades Corregidor.

Cajas Seccion 2.

- 256 Policia de la Corte.
- 457 Competencias Corregidor.

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

Gracia y Justicia

Legajos

- | | |
|---------|--|
| 1-3 | Expedientes diversos sobre asuntos tratados en el Consejo de Castilla. |
| 783-789 | Asuntos varios relativos al corregimiento de Madrid. Reformas de Fernando VI. |
| 801-803 | Competencias entre tribunales. |
| 804-808 | Sala de Alcaldes. Distribución de cuarteles, pliegos diarios, relaciones de causas seguidas en los juzgados de la corte. |
| 822-823 | Informes reservados sobre funcionarios. |
| 1.026 | Superintendencia General de Policia. |

Cámara de Castilla.

Legajos

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Ordenanzas de los Alcaldes de Corte |
| 11 | Procuradores del número de Madrid. |

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

Consejos Suprimidos.

Libros.

- 724-741 Libros de plazas. Resúmenes de nombramientos de los miembros de las Audiencias, Chancillerías, Sala de Alcaldes y Consejos.
- 1171 Varias noticias y autos de la Sala.
- 1196 Decretos de Nueva Planta.
- 1170 e Toma de razón de los Alcaldes. Ascensos y nuevos nombramientos.
- 1410 Indice General d los asuntos tramitados por la Sala contenidos en los Libros de Gobierno.
- 1420 Advertencias para el ejercicio de la Plaza de alcalde de Casa y Corte.
- 1422 e Noticias de varios papeles existentes en la Sala.
- 1464 Competencias de los Alcaldes de Corte.
- 1473 Privilegio a los Escribanos de Madrid.
- 1474 Sobre oficios enajenados.
- 1475 Supresión de la Nueva Planta.
- 1478 Conflicto entre la Sala y el Ayuntamiento por las fiestas de toros.
- 1479 Gobierno Político y Militar de Madrid.
- 1480 Junta de Abastos
- 1483 División de la población de Madrid en cuarteles.
- 1485 Restablecimiento de los Alcaldes de cuartel y de barrio
-

- | | |
|--------|--|
| 1491 | Creacion de la Superintendencia General de Policia |
| 1507 e | Discurso del Gobernador de la Sala. |
| 1501 | Ampliación del Rastro de la Corte. |
| 2703 | Sisas y abastos de Madrid. |

Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de los años 1579 a 1817.

Legajos

- | | |
|-----------|--|
| 504 | Reformas de Carlos III. |
| 6.796 | Abastos de la Corte. |
| 11.580 | Junta de incorporaciones. |
| 11.562 | Escribanos Madrid. |
| 3.643/45 | Nombramientos de Alcaldes de Casa y Corte. |
| 42.512 | Sentencias del Consejo sobre apelaciones de causas tramitadas por los Tenientes. |
| 42.598/99 | Residencias. |
| 42.646/47 | Residencias. |

ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO REAL DE MADRID.

Sección administrativa.

Legajo

- | | |
|-----|------------------------|
| 696 | Fuero de la Real Casa. |
|-----|------------------------|

BIBLIOTECA MUNICIPAL

M.B. 2003 Ordenanzas de Bosques y Montes, rios y
 volateria
M/57 Comisiones y patronatos de Madrid

BIBLIOTECA NACIONAL MADRID

Manuscritos

6.750 Consultas diversas de los consejos.
11267 Abasto de carne.

BIBLIOGRAFIA

ABAD LEON, Felipe, El Marqués de la Ensenada. Su vida y su obra, Madrid, 1985.

AGUILAR PIÑAL, Francisco, Los Alcaldes de Barrio, Madrid, 1978.

ALONSO ROMERO, M^a Paz, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982.

ALTEA, Conde de, Historia del Palacio de Santa Cruz (1629-1983), Madrid, 1989.

ALVAR EZQUERRA, Alfredo, "Algunas noticias sobre la vida diaria en la cárcel de Corte de Madrid: la visita de 1588-89" en A.I.E.M., t. XXIII, Madrid, 1986, pp. 309-332.

El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, 1989

ALVAREZ DE BAENA, J. Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de la monarquía de España, Madrid, 1786.

-Hijos de Madrid ilustres, Madrid, 1789-91.

AMADOR DE LOS RIOS, José, Historia de la Villa y Corte de Madrid, Madrid, 1860-64, 4 vols.

ANES, Gonzalo, Economía e ilustración en la España del Antiguo Régimen, Barcelona, 1969.

-El Antiguo Regimen: los Borbones, Madrid, 1979.

- ARDEMANS, Teodoro, Ordenanzas y otras diferentes que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla, Madrid, 1760.
- ARMONA, José Antonio de, Memorias cronológicas sobre el teatro en España, (1785), Vitoria, 1988.
- Noticias privadas de casa útiles para mis hijos, (1789), Madrid, 1989.
- ARROYAL, Leon de, Cartas político - económicas al conde de Lerena, Madrid, 1968
- ARTOLA, Miguel, Los afrancesados, Madrid, 1976.
- Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, 1978.
- "El Estado" en Enciclopedia de Historia de España, vol. 2, Madrid, 1988. pp. 93-165.
- BAENA DE ALCAZAR, M, Los estudios sobre administración en la España del siglo XVIII, Madrid, 1968.
- BAHAMONDE MAGRO, Angel, "Pascual Madoz y la modernización de la ciudad de Madrid: la peninsular empresa inmobiliaria, 1.861-1.863" en Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, 1992, pp. 379-405.
- BARRECA, Luigi, "Bernardo Tanucci en la historiografía española e italiana", Actas del Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990. pp. 565-577
- BELMAS, Mariano, "Las ordenanzas municipales en España" en La Administración, t. II, 1988, pp. 44-51.
- BENNASSAR, Bartolomé, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1983.
-

- BERMEJO CABRERO, José Luis, Derecho y administración pública en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985.
- BERNARD, G, "Liste des secretaires d'etat espagnols de l'avenement des Bourbons à 1808", Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 1956, pp. 387-394.
- BOUDRILLART, Alfred, Philippe V et la Cour de France, Paris, 1890.
- BRIGGS, Larry, A pilgrimage to the home of Joseph de Gálvez, the father of California, Oakland, 1949.
- BURGOA RUIZ DE NAVAMUEL, "Apuntes sobre los organismos rectores del abastecimiento de Madrid (1743-1766)" en Homenaje a los profesores José M^a Jover y Vicente Palacio Artad, Estudios Históricos, t. II, Madrid, 1990.
- BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, El pensamiento socioeconómico en Campomanes, Oviedo, 1982.
- CABALLERO, Fermín, Noticias topográfico-estadísticas sobre la administración de Madrid, Madrid, 1840.
- CABRERA BOSCH, Maria Isabel, "El poder legislativo en la España del siglo XVIII (1716-1808), La economía española a finales del Antiguo Régimen. t. IV, Las instituciones, Madrid, 1982, pp. 187-268.
- CAMPOMANES, Conde de, Epistolario, t. I, edición de Miguel Avilés Fernández y Jorge Cejudo, Madrid, 1983.
-

CARBAJO ISLA, Maria F. La población de la Villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, Madrid, 1987.

CARLE, M^a Carmen, Del Concejo medieval castellano- leones, Buenos Aires, 1968.

CASTILLO DE BOBADILLA, J, Política para corregidores y señores vasallos en tiempo de paz y de guerra y para jueces eclesiásticos y seculares y para regidores y abogados, (1704), Madrid, 1978.

CASTRO, Concepción de, La Revolución Liberal y los municipios españoles, Madrid, 1979.

- "Política ilustrada y abastecimiento de Madrid" en Historia económica y pensamiento social. Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral, Madrid, 1983.

- "El comercio de granos y la economía de Madrid en los siglos XVII y XVIII" en Papeles de economía, t. 20, Madrid, 1984, pp. 350-360.

- "El pósito de Madrid: evolución y crisis" en Madrid en la sociedad del siglo XIX, t. 2, Madrid, 1986 pp. 229-245.

- El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987.

CERVANTES, Miguel, Novelas ejemplares, Madrid, 1983.

CLAVERO, Bartolomé, "Delito y pecado en la España del Barroco" en Sexo Barroco y otras trasgresiones premodernas, Madrid, 1990.

CONSTANCIO GUTIERREZ, Madrid de Villa a Corte, Madrid, 1962.

COS GAYON, Historia jurídica del Patrimonio Real, Madrid, 1881

-Historia de la administración pública española, Madrid, 1851.

COXE, William, España bajo el reinado de la Casa de Borbón desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III, Madrid, 1846, 3 vols.

CUESTA PASCUAL, Pilar, "Los Alcaldes de Barrio en el Madrid de Carlos III y Carlos IV" en A.I.E.M, t. XIX, Madrid, 1982, pp. 363-391.

CUOCO, Vincenzo, Saggio Storico sulla rivoluzione napoletana del 1789, Florencia, 1926.

DANVILA, Alfonso, Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza, Madrid, 1905.

DANVILA Y COLLADO, Manuel, El reinado de Carlos III, Madrid, 6 vols. 1890-1896.
-El poder civil en España, 6 vols. Madrid, 1889.

DELEITO PIÑUELAS, José, Sólo Madrid es Corte, Madrid, 1949

DEMERTON, George, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Madrid, 1971.

DESDEVEISES DU DUZERT, Georges, "La Chambre de Juges de l'Hotel et de la Cour en 1745" en Revue Hispanique, t.36, 1916, pp. 1-51.
-La España del Antiguo Régimen, (1897-1904) Madrid, 1989.

DÍOS, Salustiano de, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986.

-El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, 1982.

DOMERGUE, Lucienne, Jovellanos a la Société Economique des Amis du Pays de Madrid (1778-1795), Tolouse, 1971.

DOMINGO PALACIO, Timoteo, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Madrid, 1888-89, 4 vols.
Manual del empleado, Madrid, 1875.

DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, "La galera o cárcel de mujeres de Madrid a comienzos del siglo XVIII" en A.I.E.M, t.IX, Madrid, 1973, pp. 277-285

-"La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económico sociales", Seminario de Historia social y económica, Madrid, 1975.

-Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976.

-Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1988.

-"Poder real y poderes locales en la época de Carlos III", Coloquio Internacional. Carlos III y su siglo, Madrid, 1990. pp.19-33.

DONEZAR Y DIEZ DE ULZURRUM, Javier, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen, Madrid, 1984.

DORÉ, Gustave; DAVILLIER, Ch., Viaje por España (1862), Madrid, 1982, 2 vols.

EGIDO, Teófanos, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII, Valladolid, 1971.

-"Madrid 1766; motines de Corte y oposición al

gobierno", en Cuadernos de Investigación Histórica, t.3, 1979, pp. 125-154.

ELLIOTT, J.H., La España Imperial, Barcelona, 1978.

ESCOLANO DE ARRIETA, Práctica del Consejo Real, Madrid, 1796, 2 vols.

ESCUADERO, José Antonio, Los secretarios de Estado y de Despacho, 1474-1724, Madrid, 1969, 4 vols.

-Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado, Madrid, 1979, 2 vols.

FARRALDO, J; ULRRICH, A, Corregidores y alcaldes de Madrid Madrid, 1906.

FAYARD, Janine, "La tentative de réforme du conseil de Castilla sous le règne de Philippe V (1713-1715)", Mélanges de la Casa de Velazquez, t.2, 1966, pp. 66-378.

-Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982.

-"Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)", Cuadernos de Investigación Histórica, t. 6, 1982, pp. 109-136.

FERNAN NUÑEZ, Conde de, Vida de Carlos III (1789), Madrid, 1988.

FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo, "Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del XVIII" en Estudios de hacienda de Ensenada a Mon, Madrid, 1984, pp. 157-175.

-"La monarquía", Actas del Congreso Internacional sobre

- Carlos III y la Ilustración, t. 1, El rey y la monarquía, Madrid, 1989, pp. 1-89
- FERNANDEZ HIDALGO, Ana Maria, "Una medida innovadora en el Madrid de Fernando VI. El Gobernador Político y Militar de Madrid", Cuadernos de Investigación Histórica, t .7, Madrid, 1987.
- FERNANDEZ VILLAMIL, Enrique, Notas sobre el hospital de la Corte, Madrid, 1928.
- FERRER BENIMELLI, José A, "Carlos III y la masonería de Nápoles", en I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna, Nápoles, 1985.
-"Las asociaciones ilícitas en tiempos de Carlos III", en Seguridad publica en el reinado de Carlos III, Madrid, 1989
- FERRER DEL RIO, Antonio, Historia del reinado de Carlos III Madrid, 1856, 4 vols.
- FLORIDABLANCA, Marqués de, Escritos políticos, La instrucción y el memorial, Murcia, 1982.
- FUENMAYOR, Pablo, "Las cárceles de la Villa", en R.A.B.M., t. I, madrid, 1955, pp.74-102.
- GALLEGO ANABITARTE, Administración y jueces: gubernativo y contencioso, Madrid, 1971.
- GARCIA DE ANDRES, Inocente y otros, Madrid. Villa, Tierra y Fuero, Madrid, 1989.
- GARCIA GARCIA, Carmen, "La administración de las rentas municipales en el Antiguo Régimen. La Contaduría
-

General de Propios y Arbitrios (1760-1824), Tésina inédita, defendida en el Dto. de Historia Moderna y Contemporánea, U.A.M., Madrid, 1984.

GARCIA MARIN, José Maria, La Reconstrucción de la Administración territorial y local, Madrid, 1987.

GARCIA MONERRIS, Encarnación, La Monarquía absoluta y el municipio borbónico, Madrid, 1991.

GARCIA DE VALDEAVELLANO, Luis, Curso de Historia de las Instituciones españolas, Madrid, 1973.

GARRIGA, Carlos, "Observaciones sobre el estudio de las Chancillerías y Audiencias castellanas" en Hispania entre derechos propios y derechos nacionales, 2 vols. Milán, 1990, vol. 2, pp. 757-803.

GIBERT, Rafael, El Concejo de Madrid, Su organización de los siglos XII al XIII, Madrid, 1949.

-El antiguo Consejo de Castilla, Madrid, 1964.

GIL AYUSO, Junta de Incorporación. Catálogo de los papeles que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1934.

-Noticia bibliográfica de los textos y disposiciones legales de los reinos de Castilla en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1935.

GONZALEZ ALONSO, Benjamín, El Corregidor castellano, Madrid, 1970.

-Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981.

-"La Justicia", Enciclopedia de Historia de España, t.2, 1988, pp. 343-347.

GONZALEZ DE AMEZUA Y MAYO, Agustín, El Bando de Policía de 1591 y el Pregón General de 1613 para la Villa de Madrid, Madrid, 1933.

-Las primeras ordenanzas municipales de la Villa y Corte de Madrid, Madrid, 1926.

GONZALEZ DAVILA, Gil, Theatro de las Grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España Madrid, 1623.

GONZALEZ PALENCIA, Angel, Archivo Histórico Nacional, Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Catálogo por materias, Madrid, 1925.

GOMEZ MOLLEDA, Maria Dolores, "Viejo y nuevo estilo en la corte de Fernando VI", t. 4, Eidos, 1957.

- "El Marqués de la Ensenada a través de su correspondencia íntima", t. 2, Eidos, 1955. pp. 48-90.

GUARDIA HERRERO, Carmen de la, "El Ayuntamiento de Madrid durante el Antiguo Régimen" tesina inédita leída en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la U.A.M., en 1984.

GUILLAMON ALVAREZ, F. Javier, Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III, Madrid, 1980.

- "La reforma policial bajo Carlos III: Establecimiento de los Alcaldes de Cuartel y de Barrio, en Seguridad pública en el reinado de Carlos III, Madrid, 1989.

GUIMERA Y PEDRAZA, Marcos, El conde de Floridablanca, Madrid, 1929

GUTIERREZ NIETO, Juan Ignacio, "La capitalidad de la monarquía hispana", Revista de Occidente, t.7 (Extraordinario), 1983, pp 52-67.

HERNANDEZ BENITEZ, Mauro, "Los Regidores de Madrid en el siglo XVIII", en Anuario de Historia del Derecho Español, t. 56, 1986, pp. 637-681.

HERNANDO ORTEGA, Francisco, Relaciones topográficas de Felipe II: relaciones inéditas de la provincia de Madrid, Madrid, 1987.

HERR, Richard, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1964.

HERRERO, Javier, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1988.

HULL, Anthony H. Charles III and the revival of Spain, Massachusetts, 1980.

JACOBS, Michael, A Guide to Andalusia, Londres, 1990.
Madrid, Londres, 1992.

JIMENEZ DE GREGORIO, La formación de la actual provincia de Madrid en el censo de Floridablanca (1786), Madrid, 1980.

JORDAN DE URRIES, Ramón, Cartas entre Campomanes y Jovellanos, Madrid, 1975.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Obras, Madrid, 1859 (B.A.E. vols. 46-50).

- KAGAN, Richard L. "Pleitos y poder real. La chancillería de Valladolid (1500-1700)" en Cuadernos de Investigación Histórica, t. I, pp. 292-314.
- KANY, Charles E. Life and Manners in Madrid 1750-1800 Berkeley, 1932.
- KOSSOK, M, "Les exemples méditerranéens: l'Espagne" en L'Absolutisme éclairé, Budapest, 1985, pp. 271-289.
- LAVISSE, Ernest, Louis XIV, 2 vols. Paris, 1978.
- LEON PINELO, Anales de Madrid (1659?), Madrid, 1970.
- LOPEZ GOMEZ, Maria Angeles, "Los gobernadores de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte", Hidalguía, 1987, pp.
- LOZANO HERNANDO, M^a Encarnación, "Regidores de Madrid: 1700-1750" en A.I.E.M, t. XVI, Madrid, 1978, pp. 281-315.
- LUNENFELD, M, Keepers of the city. The corregidores of Isabella I of Castile (1474-1504), Cambridge, 1987.
- LYNCH, Jonh, Bourbon Spain. 1700-1808, Oxford, 1989.
- MARTIN GAITE, Carmen, El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento, Madrid, 1970.
- MARTIN ORTEGA, Alejandro, Pedro Vergel Alguacil de la Casa y Corte de Su Magestad, Madrid, 1965.
- MARTIN POSTIGO, Maria de la Soterraña, Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1979.
-

MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo, Códigos antiguos de España, Madrid, 1885, 2 vols.

MARTINEZ ROBLES, Miguel, Los oficiales de las secretarías de la Corte bajo los Austrias y los Bñobones, Alcalá de Henares, 1987.

MARTINEZ RUIZ, Enrique, La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración, Madrid, 1988.

MARTINEZ DE SALAZAR, Antonio, Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo, Madrid, 1964.

MATEOS DORADO, M^a Dolores "La actitud de Carlos III durante el año "sin rey" (1758-1759) en Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración", t. I El rey y la monarquía, Madrid, 1989, 3 vols. pp. 299-223.

MATILLA TASCON, La Unica Contribución y el Catastro de Ensenada, Madrid, 1947.

MAYANS Y SISCAR, Gregorio, Epistolario, t. VIII, Los manteístas y la cultura ilustrada, Estudio preliminar de Antonio Mestre, Valencia, 1988.

MENDIZABAL, " Investigaciones acerca del origen, historia y organización de la Real Chancillería de Valladolid", Revistas de Archivos, Bibliotecas y Museos, t.30, 1914. -"La Real Chancillería de Valladolid y su Archivo", Hidalguía, t. 1, 1953.

MERCHAN FERNANDEZ, Carlos, Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1988.

MILLARES CARLO, Agustín, Contribuciones documentales a la historia de Madrid, Madrid, 1971

MOLAS RIBALTA, Pedro, "La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico", Historia social de la administración española, Barcelona, 1980.

"El estado y la administración en la España de Carlos III", Actas del coloquio internacional, Carlos III y su siglo, t.I Madrid, 1990. pp. 521-557.

"La administración en la España del siglo XVIII", Historia General de España y América, t. X-2, pp. 87-143.

MORENO GARBALLO, Natividad, Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional, 2 vols. Madrid, 1977

MOUSNIER, Roland, Les Institutions de la France sous la Monarchie Absolue, Paris, 1974.

MOZAS, Manuel, Don José de Carvajal y Lancaster ministro de Fernando VI. Apuntes de su vida y su obra, Jaen, 1924.

OLAECHEA, Rafael, El Conde de Aranda y el "Partido Aragonés", Zaragoza, 1969.

ORTEGA RUBIO, Juan, Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia, Madrid, 1921.

OZANAM, Didier, La Diplomacia de Fernando VI. Correspondencia entre Carvajal y Huéscar, 1746-1749,

Madrid, 1975.

- "Política y amistad: Choiseul y Grimaldi.

Correspondencia particular entre ambos ministros (1763-1770)" en Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, t. I, El rey y la monarquía, Madrid, 1989. pp. 213-237.

PALACIO ARTAD, Vicente, La gestión política y el pensamiento reformista del conde de Floridablanca, Murcia, 1984

- "El reinado de Carlos III en los despachos de los embajadores imperiales" en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CLXXXV- cuaderno III, Madrid, 1988, pp. 491-501.

PASTOR MATEOS, Enrique, "Catálogo de los fondos documentales del Archivo de la Villa referentes a gremios, oficios y profesiones" en R.B.A.M, t. XVI, Madrid, 1947, pp. 394-467.

PEREZ DE LA CANAL, Miguel Angel, "La justicia en la corte de Castilla durante los siglos XIII al XV", Historia, Instituciones, Documentos, t. 2, 1974.

PEREZ DE GUZMAN Y GALLO, Juan, "Documentos para la Historia de Madrid" en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. LXII, Madrid, 1913, pp. 371-384.

PEREZ SAMPER, M^a Angeles, "Yo el Rey. Poder y sociedad entre dos reinados", en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CLXXXV, cuaderno III, Madrid, 1988, pp. 501- 587.

QUINTANA, Jerónimo de la , Historia de la Antigüedad, Nobleza y Grandeza de la Villa de Madrid, Madrid, 1629, 2 vols.

RIPIA, Juan de la, Práctica de la administración de las rentas y visita de los ministros que se ocupan de ellas Madrid, 1769.

RISCO, Antonio, "Espacio, sociabilidad y control social: la Superintendencia General de Policía para Madrid y su Rastro (1782-1808)", Madrid en la Epoca Moderna: espacio, sociedad y cultura, Madrid ?

RODRIGUEZ, Laura, Reforma e Ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodriguez de Campomanes, Madrid, 1975.

RODRIGUEZ CASADO, Vicente, La política y los políticos en la España de Carlos III, Madrid, 1962
-"La vida política en el reinado de Carlos III" en Carlos III y la Ilustración, Cátedra Campomanes, t. I, Madrid, 1988. pp. 70-91.

RODRIGUEZ VILLA, Antonio, Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, Madrid, 1878.

RUBIO-ARGUELLES, M^a Angeles, Un ministro de Carlos III. D. José de Gálvez y Gallardo, Marqués de la Sonora, Ministro General de Indias, Visitador de Nueva España, Madrid, 1949.

RUBIO PARDOS, Carmen, "Indices Generales del Archivo de la Villa" en R.A.B.M., t. I, Madrid, 1977, pp. 166-175.

RUMEU DE ARMAS, El testamento político de Floridablanca, Madrid, 1962.

SALVA, Jaime, El Marqués de la Ensenada, Madrid. (Sin fecha).

SANCHEZ ALONSO, Maria Cristina, Impresos de los siglos XVI y XVII de temática madrileña, Madrid, 1981.

SANCHEZ GARCIA, Maria del Carmen, "Las ingerencias institucionales vistas por un corregidor del Madrid de Carlos III: Don José Antonio de Armona y Murga", Coloquio internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, pp. 243-257.

SANCHEZ LEON, Pablo; MOSCOSO SARABIA, Leopoldo, "La noción y la práctica de policía en la Ilustración española: la Superintendencia, sus funciones y límites en el reinado de Carlos III". en Actas DEL Congreso Internacional sobre "Carlos III y su siglo", t. I, El rey y la monarquía, Madrid, 1989, pp. 495-513.

SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1957.

SECO SERRANO, Carlos, "Carlos III: semblanza de un rey ilustrado", en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CLXXXV- cuaderno III, Madrid, 1988, pp. 425-447.

SIGUENZA, Fray José, La fundación del Monasterio del Escorial(?), Madrid, 1988.

SIMON DIAZ, José, Fuentes para la historia de Madrid y su provincia, Madrid, 1964.

TOMAS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI XVII y XVIII), Madrid, 1969.

- "Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla", Actas del

I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970.

- "Dos casos de incorporación de oficios públicos a la Corona en 1793 y 1800", Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971.

- "La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)" Historia, Documentos Instituciones, t. 2. Sevilla, 1974.

- Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1982.

TORRAS I RIBE, J.M, "La venta de oficios municipales en Cataluña", Actas del IV Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1984.

TROPAS DE CASA REAL: REALES CEDULAS, Madrid, 1988

VARELA, Javier, Jovellanos, Madrid, 1988.

VARELA HERVIAS, E. "Índice General del Archivo de la Secretaría" en R.A.B.M, t. 12, Madrid, 1945, pp. 89-102 y 343-348.

VIÑAS MEY, Carmelo; Paz, Ramón, Relaciones histórico geográficas estadísticas de los pueblos de España. Provincia de Madrid, Madrid, 1971

VOLTES, Pedro, "Felipe V y los Fueros de Aragón", Revista de Estudios Políticos, t. 84, 1955.

WALSH, William Thomas, Felipe II, Madrid, 1946.

ZUAZNAVAR Y FRANCIA, José Maria, Noticias para literatos acerca de los Archivos públicos de la hoy extinguida

Sala de los Señores Alcaldes de Casa y Corte, San
Sebastian, 1834.

APENDICES

APENDICE I. ORDENANZAS PARA LOS ALCALDES DE CORTE
HECHAS POR LA REINA DOÑA JUANA Y DON CARLOS, SU HIJO.
ZARAGOZA 21 DE MAYO DE 1518(1).

Doña Juana e Don Carlos su fijo a los de nuestro Consejo, oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa y corte e chancillerias, e a todos los corregidores, asistente, alcaldes e otras justicias e jueces cualesquier de todas las cibdades, villas e lugares de los nuestros reinos e señorios e acada uno e qualquier de vos en nuestros lugares e jurisdicciones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escribano publico. Salud e gracia. Sepades que a nos es fecha relación que hasta aqui a avido e ay mucho desorden en la expedicion de los pleitos e negoçios asi çiviles como crimynales que penden ante los alcaldes de nuestra casa e corte a cuya causa las personas que prosiguen sus pleitos e causas antellos o son demandados, son fatigados o se les hazen algunas bexaciones y que en cobrar las rreveldias que antellos se acusan y en el llevar de los derechos que perteneçen a lo escribanos de sus audiencias y escribanos del crimen y en las hexecuciones y penas que perteneçian a los alguaziles de nuestra corte se les llevan mas derechos de los que deven, y son obligados a pagar y que en el poner de los preçios de los mantenymientos y cosas que se vienen a vender en nuestra corte y en nuestras cosas que son a su cargo de hazer que no aya horden que conviene y por quanto commo a reina y Rey y señores en lo temporal perteneçe remedyar, mandamos a los dichos del nuestro consejo ver y planear sobre ello e por ello, visto e consultado connigo y el Rey, fue acordado que debiamos proveer sobre ello en la forma y manera siguiente:

Mandamos que los alcaldes de nuestra casa e corte ahora ni de aqui en adelante no pongan sustitutos que libren ny resçiban rebeldias ni hagan otros auctos algunos por los dichos nuestros alcaldes ny por algunos de ellos en sus provincias ni en sus audiencias salvo que ellos por si mysmos hagan sus abdiençias y esten en ellas dos oras enteramente y no menos so pena que qualquiera de ellos que lo contrario hiziere caiga e yncurra en pena de diez ducados de oro por cada vez para los pobres de la carzel y el tal sustituto que ansi por ellos librare fuere letrado que por el mismo fecho no pueda tener oficio por el tiempo de un año o si fuere alguazil o persona que tenga otro qualquier oficio de nos, sea suspendido del dicho oficio por tiempo de un año.

Los dichos nuestros alcaldes ny los alcaldes de las nuestras audiencias que residen en la villa de Valladolid y en la çibdad de Granada, ni alguno de ellos no pidan ni

lleven cosa alguna de las execuciones que mandaren hazer e guarden e cumplan las hordenanças que cerca de esto dispone sin embargo de qualquier carta que en contrario desto se aya dado aunque aya remate o no le aya so las penas en la dicha hordenança contenidas.

No hagan ni consientan los alcaldes de nuestra casa e corte hazer procesos por escripto de quantia de doszientos maravedises avaxo eccepto en las causas de nuestrsas rentas e pechos e derechos ny los escribanos los escriban e que los pleitos que procesos pudieren breve y justamente de se pagar lo hagan sobre los quales encargamos las conciencias .

No tengan de aqui adelante los dichos nuestros alcaldes ni alguno dellos relator alguno que les haga relacion de pleito alguno çivil que penda ante ellos ny para los que fueren remetidos en qualquier manera aunque sean grandes o pequeños ni relator alguno se lo relate so pena de cinco mill maravedis para nuestra cámara e destierro de nuestra corte por un año. En la qual dicha pena conservo al relator por cada vez ansi hiziere relacion de algun pleito çivil a qualquier de los dichos alcaldes .

Los dichos nuestros alcaldes no den mandamientos generales y quando para vender las prendas de las rebeldias execuciones e asentamientos que se hizieren o oviessen de dar algunos mandamientos hagan en ellos saber expresamnete a las personas contra quien los dieren como son para vender las dichas prendas e aperçebilles el dia que ha de ser el remate dellas e si el mandamiento no fuere como dicho es y fuere general que la venta que de las tales prendas se hizieren sean ninguna e no para perjuicio del emplazado ni le corra termino alguno para las poder quitar y el alcalde sea obligado a le dar al emplazado la prenda o prendas que el fueren sacadas libremente sin costa ni dinero alguno e que si se partiere del lugar donde estuviere a la sazón nuestra corte que el alcalde o otra persona que la tuviere no lleven las dichas prendas e las dexen en lugar çierto adonde las partes las puedan quitar dexandolas por memorial ante la justicia o escribano del concejo so pena que si ansi no lo hiziere y cumpliere pierda el derecho y la prenda se rrestituya al dueño libremente.

Los dichos nuestros alcaldes o alguno de ellos no den mandamientos de execucion en poca ni en mucha cantidad ni de asentamiento ni embargos ni para sacar prendas ni para hexecutar otras cosas a ningun escribano ny otra persona alguna que no sea alguazil de nuestra corte e quel escribano y a otra persona que lo rrescibiere del mysmo fecho por la primera vez caiga en pena de suspension de su oficio de escribano por tiempo de un año y por la segunda vez que le doble la pena y por la tercera que sea privado del dicho oficio y no pueda usar mas y el que lo rescibiere que no fuere caiga en pena de diez mill maravedis para la nuestra Cámara y por la segunda vez pague la dicha pena con el doble y por la tercera sea desterrado de nuestra corte perpetuamente.

Los dichos nuestros alcaldes o alguno de ellos por si mismos pongan los precios del pan e vino e cevada e paja e carnes e caça y abes e otros mantenimientos que se truxeren a vender a nuestra Corte de fuera parte ynformandose de los fieles rregidores de la cibdad o villa o lugar donde estuviere nuestra Corte, del preçio de las cosas que ansi oviere de poner para que mas justamente las pongan los quales dichos nuestros alcaldes se repartan por semanas para que las cosas que han de tener cargo en los dichos mantenymientos y abastos y que cada dia vayan a las carnerias e pescaderias y candelaria e regatoneria e bodegonos, e vean como e de que manera e a que precio se dan los dichos mantenymientos e provean como aya abasto de todo e asy mismo en las cossas que vendieren los regatones e bodegoneros las den a justos e razonables preçios e cada uno quenta a los otros de lo que le fuere encomendado so pena de suspension del oficio por diez dias. E que no consientan que los alguaziles de nuestra Corte pongan los presçios de las dichas cosas ny alguna de ellas ny los dichos alguaziles sean osados de los poner so pena de suspension de sus oficios por seis meses.

Quando los del nuestro consejo ovieren de yr a visitar la cárzel de nuestra corte como lo mandan las leyes de nuestros reinos, los dichos nuestros alcaldes al tiempo que los del nuestro Consejo ansi visitaren, los den quenta y razon por memorial, de los presos que en dicha carzel estuvieren toda aquella semana de la visitacion pasada e las causas porque fueron presos y de las sentencias que contra ellos dycen y las causas porque los soltaron e todo lo que a los de nuestro consejo les peresciere ser necesario y cumplidero de se ynformar.

Los alguaziles de nuestra Corte vayan a la visitacion que los de nuestro Consejo ovieren de hazer en la cárzel los sabados de cada semana y lleven ante ellos todas las armas que ovieren tomado aquella semana del de la visitacion pasada y les den razon de que personas las tomaron y porque causa para que alli se condenen o hagan dellas lo que fuere justicia.

Todas las condenaciones en que condenaren los dichos alcaldes o qualesquier de ellos para la nuestra Cámara asi a quales quier concejos o personas particulares en quando fueren de camino con nos o qualquier de nos, o con los de nuestro consejo o con otra persona por nuestro mandado que sean obligados a lo manifestar luego en viniendo a nuestra corte ante uno de los nuestros escrivanos del crimen y que acuda con las tales penas a la persona y por la forma y manera que son obligados a lo hazer quando los dichos alcaldes esten juntos en nuestra corte so pena que los que de otra manera llevaren o lo detuviesen e no lo manifestaren ny acudieren con ello como dicho es lo paguen con quatrotanto para dicha nuestra Cámara

E los dichos nuestros alcaldes vean por simysmos los dichos e depusiciones de los testigos en las causas

crimynales al tiempo de la publicación de los testigos sin lo encomendar ny cometer a relator alguno para que pareciendo o presumyendose la ynocencia del preso pueda ser dado sobre fiadores caruleras y mandamos que relator alguno no les haga relacion dellos al tiempo de la dicha publicacion so pena de diez mill maravedis para la nuestra Cámara por cada vez que ansi les hizieren la dicha relacion quando alguna persona pusiere demanda a otro ante qualquier de los dichos alcaldes y el dicho alcalde determinare luego la dicha causa aunque aya juramento o posiciones o otros auctos quel escribano no pueda llevar derecho de mas de por la demanda e mandamos que ninguno de los escrivanos asyenten ny hagan auctos algunos que los procesos que ante ellos pasaren aunque sean de dozientos maravedis arriba sy no les fuere pedido por las partes que los hagan e asienten o si el alcalde que conosçiere de la causa no los mandare hazer de su oficio ny llevar ny lleven por ellos derechos algunos so pena de pagar lo que por ellos llevaren con el quatro tanto para nuestra Cámara por la primera vez e por la segunda que sea privado del dicho oficio que no le pueda usar mas.

Los porteros e personas que tienen cargo de emplazar ny hagan ny puedan hazer emplazamiento alguno para que se pueda hechar rebeldia salvo emplazando de un dia para otro y se pueda asentar rebeldia a persona alguna negoçiante ny cortesano si el portero que oviere emplazado no dyere fee que emplazo a la tal persona en su persona o a su muger o fijos sy los toviere o a su criado e que no vaste dezir que lo notyfico a sus huespedes o a vezinos o a otras personas estranas y que las dichas rebeldias se hechen e asyenten por los escryvanos en presencia de los dichos alcaldes y no estando ellos ausentes y que los dichos alcaldes esten las dichas dos oras y no menos en las dichas audyencias e que si menos estovieren que no se puedan hechar ny llevar las rebeldias e que aunque ayan estado el dicho tiempo si la parte emplazada vinyere estando el dicho alcalde presente no se le pueda hechar ny llevar rebeldia so pena que la rebeldia que de otra manera hecharen y cobraren qualquier de ellos pague çinco mill maravedis de pena para la nuestra Cámara la rebeldia que fuere acusada en tiempo y como deben se aya de cobrar y coger del que fuere emplazado que biviere en la cibdad villa o lugar donde nos estovieremos dentro de tercero dya primero siguiente y del que biviere dentro de las cinco leguas dentro de nueve dyas primeros siguientes y si no se cogieren y cobraren en este termyno como dicho es que los tales emplazados no sean tenydos a las pagar ny los puedan prender por ellos so pena quel que los cobrare por el mysmo hecho los pague con las setenas y el alcalde que las llevare las buelva con el doble.

El portero o persona que emplazare no cojan ni cobren las rebeldias de las personas que el huviere emplazado salvo que el alcalde embie otro portero o persona a lo cobrar el qual sea persona conosçida e fiable e aunque la vayan a cobrar fuera de la çibdad, villa o lugar donde estuviere

nuestra Corte no lleve por el camyno cosa alguna so pena de pagar con el quatro tanto lo que llevare por razon del dicho camyno y quel portero o otra persona alguna que cogiere las rebeldias que el oviere emplazado o llevare algo por el dicho camino pague lo que cogiere con el quatro tanto por la primera vez que lo hiziere e por la segunda que lo pague con las setenas y sean privados de los dichos ofiçios.

Si alguna persona o su procurador pidiere ante los dichos nuestros alcaldes o qualquier de ellos alguna cosa que dyga que se le debe y pidiere que juro el demandado y el demandado jure que no le deve cosa alguna que en tal caso no pague el tal demandado derechos algunos e si el demandado pidiere ser rresçibido a prueba y no probare que se le deve lo que pidiere quel escrivano no lleve costas ny derechos algunos de la parte demandada salvo que los pague el que pidio pro ser reçibido a prueba el tal demandador provare su demanda que en tal caso el que fuere demandado pague los dichos derechos e costas aviendo lugar de derecho de las pagar.

Mandamos que las personas que demandaren alguna cosa ante los dichos nuestros alcaldes ayan de pagar y paguen enteramente a los dichos escrivanos todos los derechos que justamente les pertenegen y ellos son obligados a pagar de los pleitos que ante ellos truxeren sin hazer ygual alguna con los dichos escrivanos ny con alguno de ellos para los soltar parte alguna de los dichos derechos y en quanto a lo que han de llevar de los pleitos de alcavalas que ante ellos pasaren guarden e cumpla la ley del quaderno que en este caso dysponen.

Quando quier que fuexe ynterpuesta algund apellaçion de qualquier de los dichos nuestros alcaldes que luego que la parte llevare la fee de nuestro escrivano de Cámara de como esta presentando en el dicho grado de apellaçion ante los de nuestro Consejo que luego sin dilaçion alguna los escrivanos de los dichos nuestros alcaldes den al dicho nuestro escrivano de cámara el dicho proçeso originalmente ponyendo en el por escrito los derechos que desde el principio ovieren llevado a cada uno de las partes por razón del dicho proçeso lo de cada parte sobre sy expresando de que auctos lo llevo firmada de su nombre so pena de myll maravedis los quales mandamos que se hexecuten en los que en la dicha pena cayeren y que el escrivano o escrivanos que no dyeren ni entregaren en tiempo los tales proçesos sean obligados de pagar el ynterese a las partes.

Los dichos escrivanos de los dichos nuestros alcaldes no lleven derechos ny vista ny otra cosa alguna de los proçesos que ovyere para los llevar originalmente en grado de apellacion o en otra qualquier manera ante los de nuestro consejo so pena que pague con el quatrotanto lo que ansi llevare por la primera vez y por la segunda se le doble la pena y por la tercera por el mesmo fecho pierda el oficio .

Mandamos en quanto nuestra merced e voluntad fuere que los dichos nuestros alcaldes e cada uno de ellos nombren e

presenten cada dos escrivanos que tengan titulo de escrivanos para cada una de las dichas sus abdiencias que sean personas asperitas y de confianza ydoneos y suficientes los quales traigan ante los de nuestro Consejo para que por ellos sean vistos e conocidos e si yendo tales los aprueven por que puedan usar de los dichos oficios y no en otra manera y allende desto por que juren que guardaran nuestro servicio y usaren bien fielmente de los dichos oficios y que no partiran con ellos los derechos e guardaran todas las hordenanças en esta carta contenydas y el aranzel y todas las otras cosas que por razon de sus oficios son oblygados a guardar e cumplir e mandamos que despues que ansy fueren aprovados los dichos escrivanos como dicho es que los dichos nuestros alcaldes no los puedan remover ny quitar de los dichos oficios syn causa y razon legitima y con acuerdo e mandamyento del presidente de nuestro Consejo y que ningun criado ny allegado de los dichos nuestros alcaldes y escrivanos que no tenga titulo de nuestro escrivano se asyente ny de fee en abdiencia alguna de los dichos nuestros alcaldes de auctos ny de rebeldias ny de otras cosas sc pena quel que lo contrario hiziere cayga e yncurra en las penas en que yncurren los que usan de oficios publicos syn tener poder ny facultad para ello.

No piden ni lleven cosa alguna los dichos nuestros alcaldes ellos por si ny por ynterpositas personas dyrete ny yndirete a los escrivanos que nombraren para las dichas sus abdiencias ny a otro por ellos por los nombrar en los dichos oficios y los llevar ante los de nuestro Consejo so pena que lo pague con otro tanto para la nuestra Cámara .

Los dichos nuestros alcaldes no partan con los escrivanos que son o seran de aquí delante en sus audyencias derechos algunos de los auctos e proçesos mandamientos y hexecuciones y escripturas y otras cosas que ante los dichos escrivanos pasaren en sus audyencias o fuera de ellas por si ny por otra ynterposita persona o personas en poca o en mucha cantidad dyreta ny yndyrete publica ny secretamente so pena que el alcalde que alguna cosa llevare de los derechos de los dichos escrivanos contra la forma suso dicha pague lo que así llevare con el quatrotanto para la nuestra Cámara y los dichos escrivanos sy se lo dieren sean privados por el mysmo fecho de los dichos oficios de escrivanos y dende en adelante no puedan usar mas de ellos .

Los escrivanos de los dichos alcaldes tengan aranzel por donde an de llevar sus derechos en las audyencias donde los dichos nuestros alcaldes libraren, puesto e fijado en una tabla publicamente en lugar donde las personas que quisieren lo puedan bien ver y leer y saber los derechos que pagan y mandamos que los dichos escrivanos no lleven derechos demasiados de mas de los en el contenydos y conforme a estas nuestras hordenanças, so pena que el escrivano que no la guardare y alguna cosa llevare demasiada la buelva con el mas del quatro tanto para la nuestra Cámara y que los dichos nuestros alcaldes miren y tengan cuydado de

ver los derechos que los dichos escrivanos llevan que sean conforme al dicho aranzel y las dichas hordenanças y no permitan ny den lugar a lo contrario so la dicha pena.

Mandamos que de aqui en adelante quando nuestra merced e voluntad fuere los dichos alguaziles de nuestra casa e corte e cada uno de ellos repartan ante si todos los derechos de las execuciones que hizieren por ellos e por cada uno dellos en nuestra corte asi por nuestro mandado e de los de nuestro Consejo commo de los dichos nuestros alcaldes y qual quier de ellos ansi por sentencias commo por obligaçiones e mandamyentos commo en otra qual quier manera asi mesmo las sentencias e penas de mesones y mesoneros y mercaderes y panos y cera y otras cosas de que aquellos derechos e alguna parte segun las leyes de nuestros reinos seyendo condenados en nuestra corte e por los dichos nuestros alcaldes lo qual todo deposesyten uno de ellos el qual por ellos fuese nombrado para que de ally se repartan entre todos ellos por yguales partes estando en nuestra corte aunque alguno de ellos por dolencia no pueda venir o estando fuera de la dicha nuestra Corte por nuestro mandado no llevando otro salario alguno ny pagandoselo luego de nuestra Cámara y quel que ansi fuere depositario tenga quenta e razon de lo que resçibiere y de los alguaziles que ansy residen en nuestra corte y de los que fueren y vyniern a ella para les acudyr a cada uno con lo que les cupiere de su parte justamente el qual haga juramento en forma devida e de derecho que cumplira lo que dicho es e que no haga fraude ny engano ny encubierta alguna contra los dichos alguaziles ny alguno de ellos.

Los dichos alguaziles de nuestra corte e cada uno de ellos a quien mandare el alcalde o alcaldes o diere la parte o el escrivano algund mandamiento para prender o hazer execucion o sacar prendas e hazer embargo o asentamyento o asentamyentos o otra qualquier cosa ora sea en la çibdad villa o lugar donde nos o cualquier de nos estuviéremos o los de nuestro consejo o dentro de las cinco leguas sea obligado a lo cumplir y executar con mucha dyligencia so pena que por la primera vez que ansy no lo hiziere o fuere remiso en lo hazer sea suspendido del alguazilazgo por un año e pague el ynteres a la parte e por la segunda vez se le doble la pena y por la tercera vez sea privado de dicho oficio y pague la parte del dicho ynteres.

Tengan mucho cuydado e deligencia los dichos nuestros alguaziles y cada uno de ellos de yr a bisitar cada dia las carnererias de nuestra corte para que no se hagan pesos falsos y de andar de dia e no se yr por los lugares publicos y mancebías para habitar que no haya ruydo ni questionnes so pena que el que no lo hiziere no lleve las piernas de los carneros ny las perdyces de las mujeres que suelen llevar.

Los nuestros escrivanos del crimen de aqui adelante usen por sus personas los dichos ofiçios commo son obligados y que no pongan sustitutos en ellos salvo por causas legitimas que sobrevengan haciendolo saber primeramente a

los dichos nuestros alcaldes y con su licencia y no en otra manera y mandamos que resciban ellos mysmos por sus personas los testigos en las causas criminales delante de alguno de los dichos nuestros alcaldes o de un alguazil con su licencia so pena de suspension de los dichos oficios.

Los dichos nuestros escrivanos del crimen tengan arancel por donde han de llevar sus derechos ellos y el alcaide de la carzel de nuestra corte puesto e afixado en una tabla uno en la dicha nuestra carzel de nuestra corte y otro en sus posadas donde usen sus oficios los cuales esten publicamente en lugar donde todos los puedan ver y leer y sepan lo que han de pagar que conforme a ellos los dichos escrivanos e alcaldes lleven sus derechos y no en otra manera ny en mas cantidad de lo que en ellos contenido y que los dichos nuestros alcaldes los apremien a ello so pena de çinco reales por cada vez que los dichos escrivanos y alcaldes no lo cumplieren los quales sean para los pobres de la carzel.

Los dichos nuestros alguaziles ni sus hombres ny alcaides de la carzel de nuestra corte e guarda de los presos ni alguno de ellos no sean osados de tomar davidas de dyneros ny presentes de joyas ny viandas ny otras cosas algunas de las personas que prendieren y estubieren presos en la dicha cárcel de nuestra corte ny los apremyen en las prisiones mas de lo que deven ny les den soltura ny alibios de prisiones ny les suelten sin mandado de los dichos nuestros alcaldes ny prendan a ninguno sin su licencia salvo si hallaren alguno hazer malheficio por que deva ser preso y en tal caso lo lleve ante los dichos nuestros alcaldes y antes que lo metan en prision y despues de preso que no lo suelten sin licencia de los dichos nuestros alcaldes como dicho es, e quando alguno prendyieren no le pidan ny lleven los quatro maravedies que los presos solian pagar ny otra cosa alguna y que si el preso lo pagare que quando lo soltare se la resceban en cuenta de lo que oviere de pagar de carcelaje e sy los dichos alguaziles o sus hombres o alcaide de la cárcel guarda de los presos alguna cosa llevaren contra la forma suso dicha lo paguen con el doble.

Mandamos al dicho alcaide de la cárcel de nuestra corte que las viandas e cosas que se llevaren a los presos de la cárcel se las den luego enteramente sin las tomar cosa alguna de ellas e que no vendan a los dichos presos carne ny pescado ny pan ny vino ny otras cosas algunas en poca ny en mucha cantidad so pena de suspension del dicho oficio de alcaldya. No consyienta el dicho alcayde de la carzel que por nueva entrada de presos les haga daño ni deshonor alguno por otros presos ny por otra perssona alguna aunque digan que lo hazen burlando como algunas vezes se hazia a los presos que nuevamente metian presos en la carzel de nuestra corte, so pena que el alcayde que lo consyntiere o mandare hazer sea pibado del dicho oficio y cada preso que ansi no lo cumpliere pague un real de pena por cada vez para los pobres de la dicha cárcel y el alcayde de la dicha cárcel

tenga en cárcel apartada a las mujeres que se llevaren presas de manera que no esten entre los hombres ny de lugar a que ellos tengan avitación con ellas so la dicha pena.

Y porque las dichas ordenanças sean mejor cumplidas y hexecutads hordenamos y mandamos que todos los dichos nuestros alcaldes e alguaziles de nuestra casa e corte y los escrivanos de los dichos nuestros alcaldes y escrivanos del crimen e alcayde de la cárcel asi los que ahora son como los que seran de aqui adelante vengan personalmente ante los de nuestro consejo y so cargo de juramento que hizieron al tiempo que fueron resçibidos en sus ofiçios prometan cada uno de ellos que en lo que es a su cargo y les toca y atañe guardaran e cumpliran todo lo en esta carta y hordenanças de ella contenido y que no yran ny pasaran contra ellas en tiempo alguno ny por alguna manera e que cada e quando supieren e a su notiçia viniere que alguno o algunos de ellos no las cumple lo dyran e haran relaçion de ello a los de nuestro Consejo para que lo mandamos proveer como convenga porque vos mandamos a todos e cada uno de vos que veais las dichas ordenanças que de suso van ynsertas e yncorporadas e las guardeys e cumplais y hexecuteis y hagades guardar e cumplir y hexecutar en todo e por todo segun que en ellas se contyene y contra el tenor y forma de lo en ella contenýdo no vayades ny pasedes ny consintades yr ny pasar por alguna manera en tiempo alguno so pena de la mia merced e de diez myll maravedis para la nuestra Cámara a cada uno que lo contrario hiziere e demas mandamos al home que esta nuestra carta mostrare que nos emplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte do quiera que nos seamos del dia que vos emplazare hasta quinze dias primero siguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonyo signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .

Dada en la çibdad de çaragoça a veynte e un dias del mes de mayo año del nasçimyento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de myll e quinientos e diez e ocho años. Yo el rey. Yo Ruyz de Castañeda secretario de la Reina e del Rey su fijo nuestros señores la fyze escrevir por su mandado archipiscopus lyçençiatu Zapata doctor Caravajal liçençiatu de Santiago episcopus de Almeria liçençiatu de Coalla doctor Guevara. Registrada liçençiatu Ximenez por Chanciller Joan de Santillana.

APENDICE II. ORDEN DEL EMPERADOR DON CARLOS SOBRE LOS DERECHOS QUE HAN DE LLEVAR LOS ALCALDES POR LAS REBELDIAS. MONZON JULIO DE 1542(2).

El Rey.

Alcaldes de nuestra Casa e corte yo soy informado que hasta ahora aveis llevado e llevais por cada rebeldyia de los que llamais que son fuera del lugar donde nuestra corte reside setenta e dos maravedis e por ser tan grandes e demaseados derechos muchos labradores e personas miserables no pueden pagar y dexan perder las prendas que por ello les sacan y queriendo proveer en ello mando dar esta my çedula por la qual mando que vos ny alguno de vos no podais llevar ny lleveis por cada rebeldía sino lo que hasta aquí aveys llevado de las rebeldyas de los que estan en el lugar donde reside nuestra corte e que en las que esta permytido que lleveis en el cobrar y hechar guardéis e hagáis guardar las hordenanças que sobre esto se hizieron en la çibdad de Zaragoza el año de myll e quinientos e diez e ocho años e que lo hagáis asentar en el aranzel de los derechos que aveys de llevar por que las personas sepan lo que han de pagar e no fagades ende al. Fecha en Monçon a veynte e çinco días del mes de jullyo de mill e quinientos e quarenta y dos años .

Yo el Rey por medio de su maestro Juan Vazquez.

APENDICE III. REAL CEDULA DEL 1 DE JULIO DE 1603 APROBANDO Y CONFIRMANDO DOS ACUERDOS DE MADRID SOBRE LAS CALIDADES QUE HAN DE TENER LOS QUE FUERAN A SER REGIDORES DE ELLA (ESTATUTO DE MADRID)(3).

Por quanto por parte de vos el Concejo justicia y regimiento de la villa de Madrid nos ha sido hecha relacion que siempre han sido los regidores della personas de Titulo Cavalleros y gente noble y principal y de muchas partes y calidades hasta que de algunos años desta parte lo an pretendido ser algunos que no tienen las que conviene a la reputacion y autoridad desa republica, y que deseando atacar este dano y los inconvenientes que de admitir personas semejantes resultarian y que se conserve el dicho ayuntamiento en su nobleza y autoridad especialmente en tiempo que havemos hecho merced al Duque de Lerma de un regimiento desa Villa hizistes sobre las calidades que han de tener los dichos regidores dos acuerdos el uno en veinte y tres de Octubre del ano pasado de mill y seiscientos y dos, y el otro en once de diciembre del mismo ano que firmados de Francisco Martinez Escribano de vuestro ayuntamiento enel nuestro consejo de la Cámara fueron presentados que uno en pos de otro son del tenor siguiente:

-Primero Acuerdo-

En Madrid miercoles veinte y tres dias del mes de octubre de mill y seiscientos y dos años se juntaron en el ayuntamiento de la dicha villa Los Señores Licenciado Silva de Torres del Consejo de Su Md Alcalde de su casa y Corte y Corregidor desta Villa y su tierra, Gregorio de Usatigue, Francisco Enrriquez, don Lorenzo de Prado, Juan Fernando de L. Luis de Valdés Juan Gonzalez de Almunia Miguel Martinez del Sel, don Gaspar Chacon, Pedro Bravo de Urosa Don Phelippe de Vera Regidores,

En este Ayuntamiento el Sr. don Gaspar Chacon dijo que despues que entro en este ayuntamiento, a entendido que la Magestad del Rey don Philippe nuestro señor que esta en el cielo, el ultimo crecimiento que hizo de quatro regidores fue en don Lope Capato y don Lorenzo de Vargas y don Phelippe de Guevara, y don Juan Hurtado de Mendoza, con calidad quellos mismos por sus personas sirviesen los dichos oficios y los renunciassen en otros de su calidad y que esto no se ha guardado y que a la autoridad de esta villa y de su republica conviene que si algunos regimientos de aqui adelante se acrecentaren o renunciaren sea en personas tales quales convenga a la autoridad y reputacion desta republica pues es tan grandiosa que supplica a la a la Va lo mande ver y considerar, y acordar lo que les pareciere mas conveniente. Y visto por la Villa y aviendolo tratado y

conferido con mucha consideracion, de conformidad se acordó que se suplique a S.M. y en su Consejo de Cámara que los regidores que de aquí en adelante huvieren de ser de esta Villa, sean personas de la calidad que convenga a su autoridad y reputación y que no sean personas que ellos ni sus padres ni abuelos ayan tenido oficios mechanicos ni tienda publica y lo mismo se escriba al señor duque de Lerma y se escriba a los señores Gabriel de Galarca y Felix de Vallejo que lo soliciten y hagan las diligencias necesarias y escriban las cartas los señores don Juan de la Barrera y don Gaspar Chacon, saquelo del libro del ayuntamiento Francisco Martinez.

-Segundo Acuerdo-

En Madrid a once de diciembre de mill seiscientos dos años se juntaron en el Ayuntamiento de la dicha Villa los Señores licenciado Orive de Vergara Teniente de Corregidor de la dicha Villa y su tierra por su Magestad y Gregorio de Usategui, Francisco Enriquez, Diego de Urbina, don Juan de la Barrera Juan Fernandez, Alonso Lajo, Francisco Martinez, don Martin de Montalvo, Juan de Almunia, Pedro Fernandez de Alarcon, Luis del Valle miguel martinez del Sel, P. Bravo de Hunosa don Phelippe de Vera regidores.

En este ayuntamiento haviendose visto el acuerdo hecho por esta villa en veinte y tres del mes de Octubre pasado sobre la calidad que han de tener los regidores de esta villa y lo que an escripto de nuevo los señores Gabriel de Galarca y Felix de Vallejo, se acordo que los regidores de aqui adelante fueren de esta villa tengan las calidades que la sentencia de Montalvo y la Concordia de Bovadilla mandan que tengan los que huvieren de ser procuradores de Cortes de esta villa, Conque ni ellos, ni sus padres ni abuelos ayan tenido officio mechanico ni tienda de paños, joyeria ni lenceria ni otro ningún genero de tienda en que se venda cosa alguna, y este acuerdo se hizo de conformidad. Y se supplica a su Magestad y señores de su Consejo sea servido de mandar que inbiolablemente se guarde y cumpla este acuerdo y los señores Gabriel de Galarca y Felix de Vallejo hagan las diligencias necesarias saquelo del libro del ayuntamiento Francisco Martinez.

Y nos supplicastes que para que lo contenido en los dichos acuerdos tenga cumplido efecto fuesemos servidos de mandarlos aprobar y confirmar, como la nuestra merced fuese, y Nos teniendo consideración a todo lo que esta referido y a lo mucho y bien que la dicha Villa nos a servido y sirve en todas ocasiones lo havemos tenido por bien y por la presente aprovamos loamos y confirmamos los dichos acuerdos arriba insertos e incorporados. Conque donde dize que ellos ni sus padres ni Aguelos no ayan tenido oficios mechanicos ni tienda de paños ni joyeria ni lenceria ni otgro ningún genero de tienda se limite solamente a las personas y padres

de los regidores sin pasar a los abuelos, y con esta limitación queremos y mandamos que lo contenido en los dichos acuerdos se obseve, cumpla y essecute aora y de aqui adelante por el tiempo que fuere nuestra voluntad y que contra su tenor y forma no se vaya ni pase en manera alguna so pena de la nuestra merced, y mandamos a los de nuestro Consejo Presidentes y oydores de las nuestras Audiencias y Chancillerías y a otros quales quier nuestros juezes y justicias destos nuestros reinos y Señorios que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra cédula y lo en ella contenido Fecha en Valladolid a primero de Jullio de Mill seiscientos y tres años.

Yo el Rey.

Por mando del Rey Nro. Señor su S^o Luis de Velasco.

V. Md. aprueva y confirma dos acuerdos sobre las calidades que han de tener los que fueren Regidores della en la forma y con la limitacion que en esta cedula se declara.

APENDICE IV. FORMA QUE SE HA DE GUARDAR EN LAS ELECCIONES DE OFICIOS QUE ESTA VILLA DE MADRID PROVEE EL DIA DE SAN MIGUEL DE CADA AÑO. Y QUANDO SU Magestad, QUE DIOS GUARDE MANDA LLAMAR A CORTES, EN LA ELECCION Y NOMINACION DE SUS PROCURADORES EN ELLAS(4).

Aviendose tratado pleyto entre los Cavalleros Escuderos de esta Villa, con la Justicia, y Regidores della. Sobre que pedian avian de entrar en el ayuntamiento a votar en el nombramiento de los oficios que la Villa proveía cada año, y las posturas de las carnes, y pescado, y otras; y a las derramas que se huvieran de hacer. El señor Rey don Juan dió su Real provision, y comission para ajustar lo referido al señor Licenciado Alfonso Diaz de Montalvo, del Consejo de su Magestad, fecha en Valladolid en 11 de Octubre de 1453. Y el dicho señor, aviendole seguido el pleyto en todas las instancias, y hecho informacion secreta. Pronunció sentencia en siete de Enero de 1454, en que declaró, tocar la eleccion de los dichos oficios, y posturas de carnes, pescado, y otras, y las derramas a los Regidores desta Villa en su Ayuntamiento, con la Justicia, y por ante el Escrivano del Consejo.

Pero por quanto la provisión, e dacion de los oficios avia de ser a los Cavalleros Escuderos de la Villa, a quien tocava. Se hiziesen las elecciones por las parroquias, para que los tuviessen los habiles, y pertenecientes para ellos.

Y luego sobre lo mismo, y forma de la elección hizieron concordia los Cavalleros Escuderos desta Villa con el Ayuntamiento della, siendo Corregidor de Madrid el señor Juan de Bobadilla; y el Consejo por sus autos ha declarado mas por extenso lo que en estas elecciones se ha de guardar, que es lo siguiente.

Forma de la eleccion

Que el dia del señor S. Miguel se junten los Cavalleros Regidores cada un año, assi los que estuvieren en esta Villa, como dos leguas alrededor, a hazer la eleccion de los oficios en su Ayuntamiento, aviendo procedido primero, que el Escrivano del Conscejo aya pedido a los Curas de las colaciones a quien tocara, la memoria de los parroquianos: Y el dicho escrivano sea tenuto de la mostrar el dicho dia. Y si acaeciére aver dexadose de poner alguno por descuydo, o en cubierta, no por esso dexe de entrar en la suerte, y qualquiera del Ayuntamiento lo puede avisar; procurando personas idoneas, y pertenientes para los dichos oficios de los cavalleros Escuderos de la Villa, y que la dicha eleccion la hagan dichos Regidores sin aficion, parcialidad ni venderia, y en personas que no sean sus continuos comensales de sus altezas, por tierra ni acostamiento,

procurando que sea en concordia, a persona que lo merezca, y sea habil para servir el dicho oficio; y sino se conformaren echen suertes entre los que lo fueren de los cavalleros Escuderos de la Parroquia a quien tocara la suerte.

Que si el cavallero Escudero a quien tocara algun oficio no lo aceptare, o hizieren ausencia de esta Villa, se nombre otro, y se entienda a gozado, y no se le admita a la eleccion hasta que los demás ayan gozado. Que a ninguno que gane cartas del Rey, o Reyna nuestros Señores, ni de ningun Grande, ni que aya pedido votos antes deste dia, se pueda votar por el, pena de quedar por perjuros, y caer en caso de menos valer.

Que si aceciare ser la parroquia tan pequeña que no aya persona habil y suficiente, se nombre de otra de su quadrilla; y si la tal parroquia dipiere iguala ante los dichos regidores se la den, y aunque no la pida la pueden fazer con otra de su cuadrilla.

En quanto a los Fieles, sean dos, de cada parroquia el suyo, que sean de los Cavalleros Escuderos hisjodalgo; y para que conste serlo, presente en el Ayuntamiento desta villa los papeles de su nobleza.

Que ayan de ser naturales desta Villa, o casados con hijas de naturales, o por aver vivido diez años a la continua tener vezindad desta Villa.

Que las informaciones de su nobleza, ayan de estar hechas en sus naturalezas, conforme a las leyes, y Prematicas destos Reynos.

Que tengan en la parroquia, por donde pretendieron entrar tres años de asistencia continua.

Que en aviendo tenido alguno destos oficios, no pueda bolver a entrar, hasta que los demas de su parroquia ayan gozado.

Que en aviendose votado por alguno, sino saliere aprobado no se pueda bolver a votar por el.

En quanto a las elecciones de Procuradores de Cortes, siempre que el señor Rey llamare a ellas, ayan de nombrar dos procuradores por esta villa. El uno de los Cavalleros Regidores. Y el otro de de los Cavalleros Escuderos de la parroquia a quien tocara, guardandose en la eleccion la orden, forma, y requisitos de parroquia, y naturaleza, o vezindad, y papeles de Nobleza arriba referidos.

Que el procurador que fuere nombrado, deva dar del aver de la dicha Procuracion, a doze hidalgos de las parroquias a quien tocara la suerte, cada uno quatro mil ciento y sesenta maravedis.

Y en quanto a la Procuracion, e Mayordomo que en la Sentencia entran con los demas oficios de turno por las Parroquias, entre los Cavalleros Escuderos de ellas, en la Concordia del Señor Juan de Bobadilla se manda que se haga

la eleccion de dichos oficios, segun, y como más bien le pareciere conviene a la Villa, y su pro y aumento.

Y en quanto a la Escrivania del Concejo, dize, que por quanto es oficio fiable, importa el secreto, y maña, y industria del que assi lo huviere de ser, y este oficio no puede ser añaal, se encarga a los dichos regidores tomen por Escrivano del Cabildo a persona de las partes que se requiere de los dichos Cavalleros Escuderos, mirando al pro y beneficio de la dicha Villa.

Que qualquiera de los elegidos en qualquiera de los oficios referidos deba dar fianças legas, y abonadas de usar bien, y fielmente su oficio.

Y de todo lo referido, y guardarlo y cumplirlo faran los dichos Regidores juramento, poniendo las manos en un libro missal de esta forma.

Que juravan a Dios nuestro Señor, y a Santa Maria, y a la señal de la Cruz, y a las palabras de los santos evangelios, que con sus manos derechas tocaron como buenos, y fieles Christianos, temientes a Dios nuestro Señor, que en el dar, y proveer de los dichos oficios de Fieldades, y demas referidos, guardaran las sentencias del señor doctor Alonso Diaz de Montalvo, y concordia del señor Juan de Bobadilla, Corregidor de esta Villa, e no excederan dellas, y la guardaran, segun en ellas se contiene, sin aficion, ni parcialidad, siguiendo el tenor, y forma de la dicha sentencia, y concordia, y los autos de los señores del Consejo, sobre la forma de las dichas elecciones: y si assi lo hizieren, que Dios nuestro señor les ayude, en este mundo a los cuerpos, y en el otro a las animas; y lo contrario haziendo, se lo demande mal, y caramente, como aquellos a sabiendas se perjudican. Y assi lo juran y Amen.

APENDICE V. REFLEXIONES DEL CORREGIDOR DE MADRID MARQUES DEL RAFAL SOBRE LA CONSTITUCION EN QUE SE HALLA MADRID. SAN LORENZO, 19 DE NOVIEMBRE DE 1747 (5).

Para explicar mi humilde reconocimiento por la singular honra, que he debido a la piedad de V.M. en dignarse conferirme el corregimiento de Madrid me faltaron expresiones en la carta que respondi al Ministro, que de orden de V.M. me dio el aviso, y lo mismo me subcedio con las palabras el dia que con este motivo me puse a los pies de V.M. y repitiendo con el mas profundo respeto las debidas gracias a V.M. tengo por indispensable para poder corresponder en algun modo a la confianza que he merecido a V.M. hacer presente que la constitución en que se halla Madrid es mui digna de reflexion expecialmente por lo que mira al abasto de Granos que pide la mayor atencion y cuidados para lograr por ese medio, que no falte a lo menos lo que se necesite quando no pueda lograrse la abundancia y en esto parece que debe ponerse toda la aplicación y desvelo.

Pudiera conducir para las providencias, que deben darse, o los cassos que puedan ocurrir informar a V.M. del estado, y forma con que se gobernaba Madrid antes de la formación de la junta de Abastos, pero lo omito por no molestar los oydos de V.M. persuadiendome bastara para el fin a que se dirige esta representación hacer presente a V.M. lo que es público, y notorio de que nunca o rara vez se encontraron los abastos que no fuese a subidos precios atribuyendolo generalmente, y lo a manifestado la experiencia, a la subordinacion y dependencia que tenía el Ayuntamiento con el Consejo, la oposicion que se experimentaba y otros motivos que solían concurrir de lo que resultaba dificultarse y retardarse tanto las Providencias, que las mas veces llegaban tarde, y consiguientemente no producían los favorables efectos, que se esperaban; esta reiterada experiencia con otras superiores razones que concurrieron movieron el Real animo del Rey Padre de V.M. a formar la Junta de Abastos que produjo mui favorables efectos, a excepción de algunas quexas que se oyeron sobre perjuicios que ocasionaron, y si fueron ciertos fue sin duda por exceso de su celo.

Despues se dignó V.M. erigir en Gobierno el Corregimiento confiriendolo al Conde de Maceda con las prerrogativas extensiones y facultades que son notorias; esta nobedad dio motivo a que se subscitasen repetidos recursos, y quexas, pero los mas nacieron de la presidencia de la Sala de Alcaldes de Corte, que tambien se le confirió, viendose despojados de toda la dependencia y manejo que creian les correspondía contribuyendo tambien mucho para la turbación y recursos lo que se extendía aquella nueva

Jurisdiccion por todo el reyno, que no la conocia y no dejó de causar algunos perjuicios.

Echo yo cargo de lo expresado y que la real intencion de V.M. es apartar los inconvenientes que se encontraron y que cada jurisdiccion se ciña a lo que le corresponde, me parecia que el modo era poner los assumptos en que huviesen de intervenir la Sala, Tribunales o el Corregidor con una total separación y que podría practicarse en esta forma.

Respecto de que esta varias veces declarado lo que toca a la Sala podría quedar con lo que siempre ha tenido con la misma Jurisdiccion, y Facultades a excepcion de lo que se aplico a la Junta de Abastos que siempre conduce quede en el Corregidor o personas a quien V.M. se sirbiese destinar para esse manejo; y por lo que mira a la proteccion de hospitales que continuasen en la conformidad que oy estan al cargo del Proctector ministro del Consejo: Al Corregidor podría encargarse de la administración de las sisas, Fuentes, empedrados, limpieza, riegos, palenques, plantios de Arvoles, composturas de caminos, reparos mayores y menores de puentes; y asi mismo quarteles, y utensilios de los tres Regimientos de Guardias de Corps, de Ynfanteria española, y Valona, y Franquicia de la compañía de Guardias Alabarderos, con los Propios y Rentas de Madrid con la apelación a la Real persona de V.M. por la Secretaria del Despacho de Gracia y Justicia, y en caso de no ser de la aprobacion de V.M. podría formarse una junta compuesta del Governador del Consejo, de un ministro deel, un Regidor, y el mismo Corregidor entrando por Secretario el que lo es de la presidencia de la Sala por lo que convendría dilatar esta providencia hasta ver lo que produce la de la mudanza de gobierno, y entonces podría tomarse con mas conocimiento esta resolucion, y mas quando para todo lo que necesite dar providencia el Corregidor debe acudir a sacar Provisiones del Consejo.

Es digno de consideracion el estado en que se halla la corte que son necesarias, mui promptas y actibas diligencias que pueden malograrse con qualquiera pretexto que se dilaten; que por estas graves raxones en la urgencia del año de 37 tan fatal en Andalucia, seme confirio ami la comision de cuidar y visitar aquellas Provincias, con todas las facultades que residen en el Governador del Consejo, y inhibición de todos los Tribunales y produjo los favorables efectos que son notorios lo que hubiera sido dificil por otros medios.

Finalmente creeria señor faltar a mi obligacion si en semejante coyuntura no hiciere presente a V.M. lo que dejo expuesto; y lo que puede conducir al importante fin de la provision de Madrid poder dar promptas y activas providencias sin obstaculos que las embarazen, y tratar en la misma conformidad con los que conviniese; pero subordinado, y rendido siempre para partir a servir mi empleo en la conformidad y con las circunstancias que fuern del agrado de V. Magestad, pues en mi no ay otro arvitrio,

ni deseo que aceratar a obedecer las ordenes de V.Magestad en lo que alcanzase mi cortedad.

Dios guarde la Real Catholica Persona de V.Magestad los muchos años que esta monarchia necesita. San lorenzo y Noviembre 19 de 1747.

El Marqués del Rafal.

APENDICE VI. DECRETO DE S.M. SOBRE LA REGLA Y FORMA QUE SE HA DE OBSERVAR EN EL DESPACHO DE LOS NEGOCIOS Y PLEYTOS EN LA SALA DE ALCALDES. MADRID 11 DE ENERO DE 1714(6).

Entre otros puntos que contiene la Resolucion que tome a consulta de ese Consejo sobre la regla y forma que se ha de observar en el despacho de los negocios y pleytos en la Sala de Alcaldes y el que en la segunda y tercera Sala se vean y traten todo lo que toca adentro y fuera de la Villa de Madrid en todo lo qual en que no concurren causas que se deven reservar a la Sala Plena, y en que el primer presidente reparta en estas dos Salas los negocios de calidad que se puedan dividir en ellos con ygualdad; y porque teniendo ahora presente que los negocios destas dos Salas estan regulados en dos clases que son Provincia y Villa (mediante la extincion del Juzgado de los Thenientes de la Villa) he resuelto que no se dividan sino que cada una de las clases se señale para cada Sala de suerte que a la segunda Sala se la destine la clase de Provincia y a la tercera la de la Villa con la advertencia de que en quanto a la jurisdicción que ha de tener la tercera Sala y es la que tenían los Thenientes de la Villa deve entenderse en lo jurídico y contencioso pero no en el gobierno publico Politico y economico, y en los pleytos y conservaduria de los propios y arbitrios porque en todo esto y en lo demás que fuere privativo del Corregidor y Regidores y del Ayuntamiento ha de quedar como hasta aquí a estado y sin alguna novedad.

Tendrase entendido en el Consejo de Castilla para su puntual cumplimiento y dispondra luego en Madrid a 11 de Enero de 1714. =Al primer presidente del Consejo. =Vino por copia de la Sala firmada del señor Abad de Vivanco.

APENDICE VII. REAL RESOLUCION SOBRE LOS PUNTOS DE DUDAS QUE SE EXPUSIERON EN COLSULTA DE LA SALA DE ALCALDES EN VISTA DE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA. MADRID. 28 MARZO DE 1714(7).

El Rey Dios le Guarde en Resoluzion a la Consulta de cinco de este mes con que el Consejo puso en sus Reales manos la del 30 de Henero, en que la Sala hizo presente que haviendo sido el principal objeto de S. Magd. en la Nueva Planta, y arreglamento de los tribunales, la vuenta expedizion de los negocios para alivio de sus vasallos; deseava corresponder en sus execuciones, a ttan lohable, justo y piadoso fin; Pareciendola combeniente para el mayor acierto, poner en su Real noticia la ynteligencia en que esta el nuevo Reglamento en los puntos y casos que ha ttenido por dudosos para conseguir Su Real aprovacion a su concepto, o el mas seguro y expresivo a que deva arreglarse expuesto el dictamen del Consejo, sobre cada uno de los dieciseis puntos que contienen la consulta de la Sala.

Se sirvio dezir que por lo que toca al primer punto en razon de que no hallando la Sala en el plan, clausula que la reduzca a juez inferior ordinario ni la prive del conocimiento de la Segunda instancia que tenia en lo criminal, y estando pattente en el ser la Real mente de S.M. asi con el aumento de Ministros, como de Presidentes honrrar ese tribunal para hazerle mas respetable y temido, por lo que se yntteresa en la quietud de la Republicca en el prompto castigo de los delitos. Parecia a la Sala que la Orden formada en el Consejo, a que se da el conocimiento de las apelaciones, que a el vinieren, habra de enttender en casos extraordinarios por recursos, o Consultas en lo preciso mas no en todo lo criminal de sentencias como de autos interlocutorios en que se onerara mucho al Consejo, desauthorizaria la Sala y retardaria la Vindicta publica. Que aunque este conzepto de la Sala es conforme en parte con lo resuelto por S.M. en Decreto de 11 de Dziembre proximo pasado, que el la motivo el dia 24 de Henero el qual ymitta el conociemiento del Consejo a las apelaciones de causas graves, como las de muertte, Azottes, Verguenza, Minas, Galeras, y multtta que pase de 500 pesos, todavia parece urgente los graves mottivos que la Sala tenia para la ynteligencia en que esttava, pues quando S.M. la compone demas numero de Ministros para sus acierttos; Creya dever a S.Mgd. mayores confianzas no restringiendo antes si aumentando la Jurisdiccion que ttenia, y que quede desembarazado el Consejo para su mas Superior ynstittutto sirviendose S. Mgd, con que la Sala consute al Consexo las Sentencias de muerte que antes consultava a su Real Persona relebando sus piadosos oydos de estas melancolicas noticias, quedando las demas penas y sentencias, para revistarse o despacharse en la misma Sala, asi porque las mas de las

penas que refiere el secreto de S. Mgd. son de ley en que no hay arbitrio, como por ser las que con mas zeleridad piden su execuzion para escarmiento de una resistencia; de un hurto manifiesto; un escalamiento; una aprehension de Armas prohibidas; un tormento y ha mandado dar en Sumaria o en Plenaria segun la gravedad de la materia, en que clama el pueblo por el castigo y que qualquiera dilacion le parece tolerancia, y da aliento a efectuar otros mayores excesos malograndose el fin y la Real mente de S.M. dirigida principalmente a la tranquilidad y Paz publica.

Por lo que se refiere a este primer punto declaro que de la Sala de Alcaldes al Consejo sobre las apelaciones de las causas criminales, se deve entender en quantto a las penas de muerte; Galeras; minas y Destierros a presidios, y que las demas no ay recurso de apelazion sino es que sean multas que pasen de 500 pesos.

(Resumen al margen) Punto primero que tengan apelazion al Consejo las Penas de muerte, Galeras, Minas, Destierro a Presidios, multas que pasen de 500 Pesos; Y que en las demas no ay recurso de apelacion.

En lo que tocca al segundo punto sobre que confiando S.M. de los Ministros de la Sala la agrega S.M. ttodo el Despacho Zivil de Provincia, la Villa y sus Thenientes, dividido en dos Salas ordinarias y la plena segun la cantidad de la causas; restablecerse en el Consejo Sala de Provincia para las apelaciones, aunque expresamente, no quita a la Sala, aquellas de 100.000 maravedis abajo, de que conocían desde ellas en segunda ynstancia parece conforme al Real animo de S. Magd. en la brevedad a que tiran todas las ligneas del arreglamiento que ocupandose Catorze Ministros en Sala Plena, siete en las ordinarias, en la decision de un pleyto que antes le hacia un alcalde o un Theniente saldramas acrisolada la justicia sin que necesitte pasar a otro tribunal la segunda instancia con mayor costa, y retardazion de los vasallos de S. Mgd. mayormente en ttodos los autos interlocuttorios pudiendo revistarse todo en las mismas Salas ordinarias o en la Plena a que solo la apelazion de los casos reservados a esta pasen al Consejo en la definitiva.

En lo que toca a este segundo punto; resuelvo que todas las apelaciones de los pleytos zibiles que pasen de 100.000 maravedis vengán al Consejo y las demas se detterminen en la Sala=

(Resumen al margen) Segundo punto sobre que todas las apelaciones que pasen de 1000.000 mrs. vengán al Consejo y las demas se determinen en la Sala.

En el tercer punto sobre que expresa S.M. en su Real Decreto que no haya concurrencia de Tribunales ni de Ministros de diversas Salas dentro de uno mismo para que cada uno se conttenga en los limites de su jurisciccion, que limitada se le concede; a entendido la Sala deverse esto

observar estando completo el numero de ministros de ttodas, motivo porque desde que se publico la Nueva Planta a presidido las tres Salas ordinarias y la Plena Don Ambrosio Bernal, por hallarse unico presidente; pero que pudiendo acaecer falten los tres por lexitimo impedimento o ausencia y no deviendo considerarse del Real Agrado de S.M. cesen las Salas en los dias señalados pareze consiguiente a la planta y mente de S. Mgd. las presida el mas antiguo, que concurriere en cada una de ellas.

Sobre el tercer punto declaro no dever presidir los alcaldes en ausencia del Presidente pues no se considera puedan faltar todos tres Presidentes=

(Resumen al margen) Sobre el tercer punto que no presidan los alcaldes en ausencia del Presidente pues no se considera puedan faltar todos tres.

En el quarto punto en razon de que manda S. Mgd. que los negocios en que hubiere de haber pena de muerte o pasen de 10.000 Ducados se vean en la Sala, compuesta de dos presidentes, y doze Alcaldes a lo menos cree la Sala que pudiendo en muchos dias no haver este numero por estar lexitimamente impedidos, se retardara la administración de Justizia sino entendiese se podra componer esta Sala plena de ttodos los Alcaldes que pudiesen concurrir aunque no fuesen Doze hallandose un solo Presidente o el mas antiguo en su defecto.

En este quartto punto queda satisfecho con el precedente.

(Resumen al margen) Quarto punto sobre que pudiendo acaecer no haver precisamente 12 Alcaldes para la Sala Plena por estar algunos lexitimamente impedidos ni dos Presidentes podra componerse de todos los los que asistieran y un Presidente. Queda satisfecho con el prezedente.

En el quintto punto sobre que pueda acaecer en las salas ordinarias, asi criminal como ziviles el mismo defecto de ministros, que si por evitar la concurrencia o por considerar limitada la jurisdiccion no pudiera suplirse con alcalde consignado a otra Sala donde abundase cesara el curso de los pleitos. Le parece a la Sala que en el dia que no hubiese tres ministros para componer Sala de lo Zivil o Criminal tenga obligacion de asistir a ella uno el mas moderno de una de las otras dos por su turno, havisado por el Presidente de la Sala diminutta.

Por lo que mira a este quinto punto Declaro que faltando el numero de ministros señalado para las salas que se dize, podra el presidente de la primera Sala repartir en estos casos, como en los graves negocios, los ministros que le pareziere conbenientte de otras salas en que faltaren algunos y solo por el tiempo de la ausencia.

(Resumen al margen) Quinto punto sobre que pudiendo faltar el numero de Ministros señalado para las Salas que se dize, podra el Presidente de la primera Sala repartir en

semejante caso como en los graves negocios los Ministros que le pareziere de otras Salas y solo por el tiempo de la ausencia.

En el sexto punto en que se ha manifestado la experiencia que la variedad de los dictámenes obliga a la discordia de vottos en las determinaciones y que no estando Prevenido este caso en la Nueva Planta parece ser conforme a la mente de S.Mgd. y division de Salas que haviendo Juez de la misma que no hubiere concurrido a la vista del pleito este lo vea en remision y no haviendole en la Sala criminal ordinaria, lo vea el mas antiguo de las ziviles por su turno y siendo la remision en Sala Zivil con numero dispar y haviendo segunda remision, los de la Sala criminal, y remittido en Sala Plena, y no quedando ministro que lo pueda ver pase al Consejo la remision.

En el caso que previene la Sala en el sexto punto, se observara, que si puede venir el Ministro que faltara su votto decidira, y no pudiendo venir se llamara al fiscal, y en su ausencia uno de los Abogados Reales y su votto dezidira.

(Resumen al margen) Sextto punto sobre que el baloramiento dispar y la variedad de dictámenes obliga a la discordia los votos; en este caso si pudiere venir el ministro que faltare su voto decidira y no pudiendo venir se llamara al fiscal y en su ausencia uno de los abogados Reales y su votto decidira.

En el septimo punto sobre prohibir el Real Decreto de S. Mgd. la complicazion de ministros dentro de un mismo Tribunal entiende la Sala no oponerse a que los Alcaldes consignados a Salas Ziviles puedan como particulares actuar en las causas que ocurrieren haciendo prisiones sumarias, hasta poner los autos en estado de confesion que los haya de remitir a la Sala Criminal o Plena conforme su calidad donde se mande tomar la confesion por uno de los Alcaldes de ella pues lo contrario fuera opuesto a su propio ynstituto sino les qudara a ttodos la jurisdiccion Criminal para actuar hasta este estado preciso en un Pueblo tan numeroso como la Corte donde lo esta asi practicando.

En este septimo punto me conformo con lo que parece al Consejo entiende vien la Sala.

(Resumen al margen) En el septimo punto que en el primer conocimiento puedan actuar todos los alcãldes aunque esten asignados a las salas Ziviles en todo genero de causas; y pase luego a la Sala que corresponda.

En el octabo punto en razon de que haviendo causas en lo Civil que no insten menos que las criminales en sus primeras diligencias se malogran faltando la prompta y recta Administracion de Justicia sino se pudiera dar providencia en ellas fuera de la Sala por la retardazion de dias y de oras como son la abertura de un testamento; prevenzion de un

abintestato (en que se intersea la Real Jurisdiccion por la concurrencia con los eclesiasticos) y arraigos por deudas de los que se ausentan o se teme alzamiento o Retiro requissittorias de prision de causas ziviles, prevencion de ynventario en que son ynteressados menores proveerlos de curador ad litteri y poner cobro a los vienes y otras semajantes en los quales ha parezido a la Sala sera conforme al Real animo de S.M. y no opuesto al Nuevo Reglamento pueda darse providenzia prompta por qualquiera de los Alcaldes en su Quartel por ante un escribano real y echas aquellas primeras diligenzias que no admitten dilazion entregar los autos a la Secretaria a quien tocara para que inmdiatamente de cuenta a la Sala donde se continue sin cometter la determinazion de cosa alguna si solo la execucion como incompatible por el tribunal. Y por quanto en los pleytos pendientes en las Salas pueda haver pedimento que requieran prompto expediente y providencia y fuera gran daño se retardaran en los dias que no ay Salas ha parezido para poder evitar este perjuicio se nombre un Alcalde Semanero en cada Sala Civil por su turno y que qualquiera de estos dos en su semana con asistencia del Secretario en Gefe y con toda la autoridad de Sala pueda dar las providencias a estos expedientes que no puedan esperar a ocurrir a la Sala o ay peligro en la dilazion y que lo demas se remita a la Sala que tocara ya sean de ofizio o de pedimento de parte los acuerdos donde se decida todo lo que a ellas llegare sin que se pueda cometer ni remitir a alguno de los Alcaldes la determinazion como opuesto a la Real mente de S.M.

En este octavo punto me conformo con lo que paereze al Consejo de tener la Sala verdadera ynteligenzia en el.

(Resumen al margen) Octavo punto sobre que se nombre un Alcalde semanero para que con asistencia del Secretario en Gefe y con toda la autoridad de la Sala puedan en las matterias civiles que pidan brevedad dar todas las providenzias promptas en los caso que por menor se expresan.

En el nobeno punto sobre que haviendose llevado siempre las Reales atenziones de S.M. y sus gloriosos Progenitores el amparo de los menores y huerfanos y conservazion de su Real Jurisdiccion en que por su propio ynteres velavan los escribanos dando notizias promptas a los alcaldes asi de los abinttesttattos como de la muerte de los que dejavan herederos menores en que prozederan omisos faltandoles su antigua utilidad, pareze conforme a la Real Mente de Su Magestad que todas las diligenzias en todos estos casos, se huviesen de executar en fuerza del acuerdo del semanero, dado con los secretarios; y a que estos no puedan asistir, las hayan de hazer aquellos escribanos que hubieran dado la noticia para la prompta prevncion y administraci3n de la justicia. En este noveno punto en que ttan bien asiente el Consejo a la inteligenzia de la sala me conformo con el parecer del consejo con tal que luego que suzedara qualquiera de los casos que previene la Sala, de cuenta al presidente

para que el envíe secretario, y oficial en cuyo interin ha de conttinuar es Secrettario que huviere prevenido el qual tendra su derecho como si hubiera actuado en todo.

(Resumen al margen) En el nobeno punto sobre que la principal attenzion deve llevar al amparo de los menores y huerfanos que por su utilidad davan nottizia prompta los escribanos de los abinttesttattos por cuya razon devan hazer los escribanos todas las diligencias y prevenziones a que se conformo S.M. con tal que luego que suceda alguno de estos casos den quenta al presidente para que el embie secretario u oficial en cuyo interin han de continuar el escribano que huviere prevenido y esste llevara su derecho como si hubiera actuado en todo.

En el dezimo punto sobre que en la nueva Planta considera Su Magd. la Sala de Alcaldes parte o apendizze del Consejo dirigiendose a un tpo. y a uno y a otro con ygualdad los Reales Decretos y ordenes de S.M. no comprehendiendo los demas tribunales que como separados no concurren con el Supremo Consejo como la Sala de Alcaldes al presente ha concurrido, y concurre cuya union ha sido siempre lo mas apreziabile de los ministros que la han compuesto, y en que ha consistido lo mas grande de su authoridad con que ha ynfundido a los delinquentes viendo reverberar en ella las leyes de S. Magd. comunicadas por su Real Consexo de que oy la prettenden separar los Secretarios en Gefe de el ynterponiendose con preferencia a toda la Sala y sus Presidentes, haziendo cuerpo distinto el que S. Magd. quiere sea uno, y alterando el orden dado en el Reglamento de que los Secretarios siempre sean los ultimos lo qual desauthoriza a la Sala haciendo no pequeña disonancia sean los juezes de S.M. preferidos de los Secretarios a quien S.M. por esta causa señalo el ultimo lugar en cada tribunal no pudiendo hazer consequenzia lo que suzede quando la Sala concurre con el Consejo a la Consulta con S.M. ante si separandose el Secretario de esta para llamar a ambas Puertas, queda la Sala incorporada con el Consejo sin ynterposizion del Secretario y quando este se une para la Consulta no concurre ya la Sala por haverse separado del Consejo en cuya prudente y bien premeditada coordinazion halla la Sala el mas eficaz apoyo de su pretension pues quando el fiscal General y Abogados Generales han incorporado con el Consejo, llevan el lugar dado en el arreglamento mas quando se sientan como cuerpo separado, en la consulta observan methodo diverso en la precedencia diferencia que se observe siempre quando los Alcaldes eran mas antiguos que el fiscal del Consejo pues le precedian en el concurso siendo preferido quando se separava el tribunal; y no dissonando esto entre ministros de un grado no parece pudiera disonar que entre la Sala y Secretarios del Consejo se observara lo mismo en las concurrencias precediendo estos solo a los secretarios de la Sala como ministros de una misma jerarquia, y no a la misma Sala y sus Presidentes;

En este decimo punto a que en las procesiones concursos de yglesias y otros semejantes hayan de hyr los Presidentes y Alcaldes unidos con los ministros del Consejo despues del fiscal general y abogados generales sin que los secretarios del Consejo los dividan en que parece al Consejo que en estos casos y concurrencias de la Sala con el Consejo se guarde lo que se ha practicado en las funciones del Consejo despues de la Nueva Planta en que (como es devido) han precedido los quatro Secretarios en Gefe de el siempre unidos con el cuerpo del Consejo, de que son parte ynseparable a los presidentes de la Sala y sus alcaldes. Me conformo con lo que parece al Consejo.

(Resumen al margen) Dezimo punto sobre que no devan preferir los Secretarios del Consejo de Castilla a los presidentes y Alcaldes de la Sala en las funziones publicas; A que se sirvio mandar que los quattro Secretarios en Gefe del Consejo siempre esten unidos con el cuerpo de el como parte ynseparable del Consejo.

En el onzeno punto sobre que al tiempo que aspira la Sala que la conserven en la benignidad de S.M. en aquel onor a que la elebo la Real venefiziencia de S.Mgd. en la nueva Planta no olvida ser los ministros de que se compone los que deven a S. Mgd. la primera confinaza para el fin a que los destina, y que han de ocurrir con el mayor desvelo a la quietud de la Republica y escarmiento de los delinquentes pero tenía enttendido que considerando S. Mgd. el mucho tiempo que los ocupa la precisa asistencia a las Salas necesittando las oras restantes para poner las causas en estado de sentenziar como para prevenirse a su mas recta dettermination de mas de otros muchos encargos que ttienen en lo politico y economico asi de Capillas, Repesos, Comedias, Concursos publicos, y otros, havia sido el real animo de S.Mgd. en la creazion de los thenientes executasen estos lo incompattible con la embarazada ocupacion de los alcaldes como lo previene S.M. en su Real Decreto comettiendo a los Thenientes las continuas Rondas consecuencia precisas a la obligacion de responder de sus quarteles actuando en ellos hasta poner las causas en estado de confesion dando cada uno, quenta a su alcalde para que le dirija a las mas acertadas operaciones a diferencia del Quartel ageno en que solo pueden conozer del primer echo o ruido y pasar ynmediatamente la noticia a Presidente para que nombre alcalde y asi se repressento por el Presidente de la Sala y no dissono al Consejo en quanto al modo de actuar los thenientes en el propio quartel.

En quanto a este onzeno punto en que parece al Consejo que la Sala reparta vien, pero que en quanto a Repesos, asistencia a la visita de mesones, Posadas, Casas de Juego, Garitos y Lugares publicos, en que se juntan los bagamundos a jugar y otros semejantes que necesitan vissitarse con frecuencia, se puede executar por los thenientes, y que estos haian de dar quentta de ttodo a los alcaldes cada uno

su Quartel sin que por esto queden los alcaldes fuera de la obligacion de executar lo por sus personas quando combenga, ni de la de responder de sus quarteles como esta prevenido en la Ley 20 Titulo 6 Libro 2º y en otras de la Recopilacion. Me conformo con el parecer del Consejo.

(Resumen al margen) Onzeno punto sobre la forma de actuar de los thenientes sus continuas rondas en la precisa asistencia a las salas los alcaldes, a que se sirvió resolver S. Magestad, que en quanto a repesos, asistencia a la visita de mesones, posadas, casas de juego y lugares en que se juntan bagabundos a jugar y otros que necesitan visitarse se puede executar por los Thenientes y que estos den quenta cada uno a los alcaldes de sus quartel sin que por esto queden los alcaldes fuera de la obligacion de executar lo quando convenga y de responder por su quartel como esta prevenido en la ley 20, titulo 6, libro 2º.

En duodecimo punto sobre que ahora nuevamente se halla con papel mio del 13 del catorze en que de orden del Consejo supongo igual las obligaciones de los alcaldes y thenientes en rondar y responder de su quartel, y que para que esto sea al reglamentto y decretos de S.M. ha discurrido deberse entender en aquella superioridad que los alcaldes se conzede sobre los thenientes quienes deven estar a sus ordenes considerandose la ronda o respuesta que del quartel deven hacer y dar los thenientes que si la hubiesen sus alcaldes mas no en lo continuo de las rondas ordinarias, ni en lo material de responder de sus Quartel personalmente por ser esto yncompatible con los ya referidos encargos que estan expresados en los Decretos de S. Magestad en cuyo conzepto tienen entendido la Sala ser animo de S.Magestad queden reservadas las personas de los alcaldes a su prudente arbitrio rondan quando la urgencia lo pida quando inste lo grave de la inquietud o quando clame la repetizion o escandalo de los delitos o lo superior de los delinquentes pues de otra forma no hubiera diferencia entre los alcaldes y thenientes a quienes S. Magestad constituye ministros de distinto grado y se honeraran los alcaldes en responder de sus Quarteles obligacion en lo antiguo de los alguaziles como libres de las asistencias a la Sala de que oy lo estan los thenientes pudiendo a todas oras velar sobre su quartel.

En este punto duodecimo en que es el Consejo de dictamen es propia la misma declaracion que queda expuesta en el punto undezimo. Me conformo con el dictamen del Consejo.

(Resumen al margen) Duodecimo punto sobre que la mente de S. Magestad en los decretos de la nueva planta se entiende quedan reservados las personas de los alcaldes de las continuas Rondas y la Superioridad sobre los thenientes y que solo les obligue a salir quando le inste la necesidad. Resolución de S. Magestad es propio la declaracion que queda expuesta en el punto undecimo.

En el dezimo tercio punto en razon de que si a estos no se les facilitan los medios con el completo numero de alguaziles asegurada su manutencion en sueldo competente, para que puedan sin otras distracciones executar las ordenens que se les dieren sobre que la Sala tiene echa consulta (a que espera la justificada resoluzion de S.Magestad) no podran responder por ellos con aquel rigor que deven segun los Reales Decretos de Su Magestad:

En quanto a este punto treze se arreglara entendiendo la lista de los alguaziles; sus funciones titulos, sueldos y demas circunstancias que lo expliquen la forma en que deven servir.

(Resumen al margen) En el punto 13 sobre que a los thenientes no se le fazilita el medio con el completo numero de alguaziles asegurada su manutencion con sueldo correspondiente no podran responder por ellos con aquel vigor que se deve; resoluzion de Su magestad. Se arreglara entendiendo la lista de alguaziles sus funciones titulos y sueldos y demás circunstancias y que se explique en la forma en que deven servir.

En el dezimo quarto punto que mira a que nezesitando desta misma para que asi los alcaldes como sus thenientes puedan administrar justizia sin el embarazo, que hasta aquí han causado la diversidad de jurisdicciones exempcion de casas de sitios, y personas cuyas competencias y privilegios o ya ciertos o afectados impiden la aprension de los deliquentes, y la aberiguación de los delitos, y lo que mas es atropellan el respeto devido a los ministros de S. Magestad, para que asi los alcaldes como sus thenientes puedan reconocer, visitar y allanar todas las casas y sitios que se dizen privilegiados en busca de los reos o sus vienes y prenderlos y extraerlos sin que persona ministro ni cavo militar se lo ympida.

En este dezimo quartto punto sobre que los alcaldes y sus thenientes puedan visitar reconocer y allanar todas las casas y sittios que se dizen privilegiados en busca de los reos o sus vienes prenderlos o extraerlos sin que persona ministro ni cavo militar se lo impida que asiente el consejo es punto ya declarado en la resoluzion a la gran consulta que hizo el consejo a la magestad del rey Don Phelippe 4º en 8 de agosto de 1641 en que se sirvio dezir:

Los amanzevamientos he creydo siempre que el Consejo tiene auttoridad sin exceptuar ninguna jurisdicción. Con esta diferencia que es usar de modo con los ministros de los otros consejos pero no exceptuar a ninguno guardando esto y en quanto a esta parte (si bien enttiendo que no era menester) declaro, que no ay exceptuado ni es mi animo que lo aya y en los garittos tampoco salvo en las casas de los capitanes o thenientes o cuerpos de guardia pero dejando siempre al Consejo y alcaldes el entrar y zelar para dar quenta de los desordenes grandes que lo merezieren. En quanto a la jurisdicción de las guardias pues declaro que en

los amanzevamientos y garittos, y en las resistencias no sean exceptuados, ni el revender ni vender como corre con esto y se remediara si queda que hasta quittar la ttoda mas entre ttanto que no savemos como correra el negozio, no pareze necesario hazer otras cosas por aora y si en lo que queda exceptuandose remediare el daño no sera poco.

Dando el Consejo el dictamen de que pues los ministros de otros consejos no estan exceptuados de la jurisdicción ordinaria y del consejo en los amanzevamientos y garitos, ni aun la guardias en los dichos casos en el de resistencia en el de revender y vender, ni tener tiendass con mucha mayor razon no habra de estar exceptuado alguno ya de las penas y estatutos de los vandos y pragmaticas que miran al vien del Gobierno publico a la seguridad y a la quietud y venefizio del pueblo, al castigo de los delitos, prision de los reos y demas diligencias de justizia que a esto toquen. Y mas a vista de que así los alcaldes y los thenientes lo son de casa y corte y por esto entran con vara alta de justizia y la deven administrar y executar de hecho simpre que combienen dentro del mismo palacio donde estan las personas Reales y todos los Consejos y asi con mucha mayor razon lo habían de executar en los demas puestos y lugares por exemptos y privilegiados que sehan pues en otra forma jamas llegaría el caso de la prision y castigo de los deliquentes ni el de lograr la corte de la tottal quietud y seguridad ni podría ponerse freno ni enmienda a las muertes, robos y otros delittos y pecados publicos ni menos se lograria todo lo demas que mira al gobierno publico. Me conformo con el dictamen del Consejo.

(Resumen al margen) En el decimoquarto punto sobre que si no se quita todo genero de exempcion de Casa y Sitios no se lograra la recta administración de justicia S.M. se sirvió declarar no hubiese exempción de ninguna casa ni sitio real y que puedan entrar los alcaldes y sus tenientes en ttodas partes con vara alta de justizia para su mejor administración.

En el punto dezimo quinto sobre que cada uno en su quartel haga lista de los vezinos ynformandose de sus calidades y en espezial a los dueños de posadas se les pueda obligar por vandos y otras providencias de los Alcaldes o sus Thenientes a ttener prompta notizia de los huespedes que tubiesen y admitieren para poderse informar de ellos, su modo de vivir y ejercicio, su ocupación y si es precisa su asistencia en la corte, y por quanto tiempo, señalarles el conbeniente, espeleer los ociosos, castigar los mal entreetenidos y ttener conocimiento de los vezinos y forasteros para la mas fазil aberiguazion y castigo de los delitos y conservar la paz publica restableciendo estas tan antiguas como loables providencias dadas no solo en los Reynos de Su Magestad sino en los extraños.

En este punto en que se conforma el consejo con el parecer de la Sala con el dictamen de que la obligazion que

impone a los que tienen mesones y casas de posadas para que hayan de dar cuenta de todos los que vinieren a esta corte a fin de saber quienes son a que vinieren y de señalarles el termino que huvieren de detenerse precisamente en ella se ayan de estender y estienda esto también a todos los vezinos sin exceptuar a alguno de qualquier clase, calidad o condizion que sea ni aun a las comunidades eclesiasticas asi de seculares como regulares y a sus prelados pues en otra forma sería ymposible poder averiguar que gente entra y sale en esta corte, a que vienen, y en que se exercita, como vive ni otra alguna circunstancia de las que se requieren averiguar para el gobierno publico y buena administración de justicia de lo qual ninguno esta ni deve estar exceptuado y por esta razon deveran en sus relaciones yncluir no solo a los seculares sino tambien a los eclesiasticos y regulares que viniesen a ella de otros combentos o provincias cuyo punto fue consultado por el Consejo y con el se conformo la Magestad del señor Don Phelippe 4º en la citada consulta. Me conformo con lo que le parece al Consejo.

(Resumen al margen) En el dezimo quinto punto sobre se tenga puntual notticia de los vezinos que entran en esta corte; los que de nuevo vinieren a ella huespedes y forasteros haciendo averiguación quienes son, de que se mantienen, y a que vienen, conzediendoles a los huespedes termino segun la dependencia que trayga, no exceptuando a los eclesiasticos ni comunidades asi seculares como regulares. A lo que se conformó Su magestad.

En el dezimo sexto punto en la razon de la observancia de los prezios puestos a los mantenymientos y demas generos de comestibles su vondad y calidad y demas pesos y medidas que esta comettida a los alcaldes no es la parte menos prinzipal el buen regimen de la republica evitando los excesos y libertad de los tratantes y vendedores correspondientes castigos para su correccion que en esto se halla limitada la jurisdiccion de los alcaldes por diferentes decretos antiguos del consejo que aunque dados con toda justificazion, la variedad de tiempos, estado presente de las cosas y la disoluzion de los tratantes, vendedores y abastecedores, los ha hecho escudo de sus delittos ympidiendo a los alcaldes las visitas y reconocimiento burlandose de las cortas condenaziones que se les puede imponer tal vez que son apreeendidos por reportar mas utilidad en el continuado agravio que hazen al publico y viendo no pueden castigarles la reincidencia con mayor multa o pena corporal de argolla o berguenza publica propia pena de semejantes delitos y unico remedio de estos daños que podran cesar dejando S.M. al libre arbitrio de los alcaldes su castigo por todos los medios que en justizia discurrrieren conbenientes.

Por lo que toca a este decimosexto y ultimo punto parece al Consejo es muy conforme a razon y justizia lo que la sala propone y que se le deve dejar el uso libre de la

jurisdiccion no obstante a los autos acordados y decretos del consejo que en contrario aya pues por falta de jurisdiccion por haversela limitado por los citados autos y decretos no ay pesos ni medidas legales, ni genero alguno de quantos tocan al comercio publico que no se halla adulterado ni precio fixo en las cosas, todo lo qual cesara siempre que los que tienen semejante trato sepan que por la primera y demas vezes que delinquieren han de ser castigados con la multa berguenza publica y azotes, y demas penas establecidas por leyes destos reynos pero que sea sin perjuicio de los assientos presentes vien que esto no se pierda de vista en los nuevos assientos para que se les escluyan las condiciones que a esto tocara a fin de que los alcaldes tengan libre el uso de la administraci3n de justizia. Me conformo con el parecer del Consejo y sobre su observancia se impondrán las mayores penas. En caso de reincidencia y assi se tendrá enttendido en el Consejo y dispondra la mas puntual observancia del todo de esta resoluzion.

(Resumen al margen) Este dezimo sexto punto sobre que la sala deva conocer para el mejor regimen en ttodo genero de abastos de la corte y a que los obligados dellos puedan ymponerles las penas establecidas por las leyes a que se sirvió S.M. conformarse pero que fuese sin perjuicio de los asientos presentes y que no se pierda de vista en los nuevos y que los alcaldes tengan libre el uso de la administraci3n de justizia imponiendo las mayores penas en caso de reincidencia.

Y de orden de S. Magestad lo aviso a V.e. para que teniedo la Sala presente la Real Resoluci3n expresada sobre cada uno de los referidos dieciseis puntos se arregle con vigilancia a su mas puntual observancia.

Dios guarde a vuestra señoria.

28 de marzo de 1714.

El abad de Vivanco el señor Don Pasqual Felix de la Sala.

APENDICE VIII. RESTAURACION DE LA ANTIGUA PLANTA DE LA SALA DE ALCALDES. ARANJUEZ, 22 DE JUNIO DE 1715(8).

En consecuencia de lo que el Consejo de Castilla me ha representado como se lo mande en consulta del 17 del corriente que buelve adjunta y de lo que resolví en decreto de 9 de este presente mes de Junio anulando el de 10 de noviembre de 1713 y las resoluciones siguientes del año 1714 en orden a la nueva Planta de los Tribunales he vnido en restituir la Sala de Alcaldes a su antigua jurisdiccion y exercicio que la pertenece por las leyes del Reino y Reales disposiciones con toda aquella autoridad misma que tenia antes de los decretos de 10 de N. de 1713 y mando se componga de un Ministro del Consejo de Castilla que la ha de presidir con el nombre de Gobernador (para lo qual tengo nombrado a Don Marcos Sanchez Salvador) de doce alcaldes por ahora y de un fiscal, quatro escrivanos de Camara del Crimen, dos Relatores, un Agente Fiscal, un Abogado y un Procurador de Pobres y el mismo numero de Escrivanos de Provincia que tenia entendiendose que de estas doce plazas de Alcaldes que al presente dejo se han de yr suprimiendo las tres que primero vacaren para que en adelante quede reducido su numero a solo nueve y para las actuales nombro a Don Juan de Zervantes, Don Francisco Gobeo, Don Ambrosio Bernal, Don Joseph Dardon, Don Francisco Velazquez Zapata, Don Juan Gaspar Zorrilla, Don Luis de Cuellar, Don Alonso Rico, Don Lorenzo la Bastida, Don Juna Alonso Burgunio, Don Francisco Bentura Esquivel, y a Don Albaro de Villegas y para la plaza de fiscal nombro a don Thomas de Sola que actualmente era abogado general de el Consejo de Guerra y atendiendo a los meritos y servicios de Don Joseph Llopis a su antigüedad en la Sala y a los muchos achaques que padece que le imposibilitan la precisa y continua asistencia della he resuelto dejar el goce de su plaza con la livertad de asistir a la Sala quando pudiere entendiendose esta plaza además de las doce referidas y que por si vacare ha de quedar extinguida como las tres que quedan ya dichas y en orden a los sueldos de estos ministros se executara todo lo que el Consejo propone en su consulta citada de 17 y por lo que mira a la eleccion de alguaziles de Corte Porteros Escrivanos y Ofiziales de la Sala y el numero que ha de haver de ellos y sueldos que han de tener he resuelto se forme una junta de ministros del Consejo que ayan sido Alcaldes a fin que examinen las prendas de los que deven ser propuestos y nombrados para que en inteligencia de todo thome yo la ultima deliveracion y en quanto a Escrivanos de Camara de Crimen Relatores Agente Fiscal Abogado Procurador de Pobres y Escrivanos de Provincia continuaran los mismos que havia el dia 9 de Noviembre de 1713 y quedo en cuidado

de atender a proporcion de sus meritos a los demas ministros y secretarios que segun esta disposicion quedan excluidos de las Plazas que tenian en la Sala. Tendrase entendido en el Consejo de Castilla para su observancia y cumplimiento.

En Aranjuez el 22 de junio de 1715. Al Gobernador del Consejo.

APENDICE IX. DESPACHO DEL REY FERNANDO VI EXTINGUIENDO EL OFICIO DE CORREGIDOR DE MADRID Y SEÑALANDO LAS FACULTADES Y PREHEMINENCIAS DEL GOBERNADOR POLITICO Y MILITAR DE MADRID. BUEN RETIRO 1 DE OCTUBRE DE 1746.

Don Fernando por la Gracia de Dios, Rey de Castilla de Leon, de Aragon de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Havanna, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias Orientales, y occidentales, Yslas y Tierra firme, del Mar oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milan, Conde de Abspourg, de Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya, y de Molina. Por quanto por Decreto senalado de mi Real mano de veinte y quatro de Julio de este año resolví crear un Gobernador Político y Militar de Madrid, con independencia del Consejo, y las facultades que a su tiempo le comunicaria, nombrando para este empleo a vos Conde de Maceda, atendiendo a las circunstancias y distincion de vuestra persona, a vuestro merito y servicios.

Y aora en consecuencia de aquella determinacion y por formal explicacion de mi voluntad; Por otro Decreto señalado a si mismo de mi Real mano de veinte y dos de Septiembre proximo pasado. He venido en declarar, como por la presente declaro, que he extinguido el cargo de Corregidor de Madrid, y creado en su lugar el de Governador Politico y Militar de Madrid, que he concedido a vos el citado Conde de Maceda, con todas las facultades, jurisdicciones, y preheminiencias que hasta aora han usado y debido usar los Corregidores y con el aumento de todo el mando político, economico, governativo y Militar de Madrid, con todas las authoridades, distinciones, y jurisdicciones, correspondientes, segun la forma de los varios decretos y ordenes que ahora se expiden al Consejo y otros tribunales, y oficinas; y en corfirmar como confirmo la inhibicion que consta del citado decreto de veinticuatro de Julio. Que en su consecuncia, ni el Consejo, ni sus Gobernadores, ni otro tribunal alguno, tenga en adelante conocimiento, ni intervencion en todos ni en algunos negocios tocantes al mando político, económico, governativo, y Militar de Madrid, y que vos como tal Gobernador le exerzais privativa y Omnimodamente por vuestra persona y por las de vuestros subalternos que me propusiereis y yo aprovare o permitiere que nombreis según la forma de los citados Decretos, quedando con plena y unica subordinacion a mi real persona por medio del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, para que por este conducto me representeis lo que ocurra, y yo mande expedir las ordenes que deveis cumplir;

Nombrandoos para evitar disputas y competencias, como por la presente os nombro como tal Gobernador Politico y Militar de Madrid, por presidente de la Sala de Alcaldes de mi Casa y Corte, con las facultades, conocimiento, y jurisdiccion que oy tiene, sin obligacion de asistir a ella sino quando os pareciere, y sin alterar por ahora en lo general el modo, y forma de la Administracion de justicia que exerce, tratandoos como mando que los Alcaldes os traten como tal Gobernador presidente, con la distincion, honores, preheminencias, y prerrogativas con que han tratado y tratan al Gobernador del Consejo, y executen con puntualidad vuestras ordenes. Que las noticias diarias en que la Sala acostumbra a explicar lo que subcede en la Corte, y las Consultas sobre sentencias capitales que estando yo ausente devera hacerme se continuen sin novedad en lo futuro, pero por vuestro conducto, las que me aveis de dirigir por la Secretaria del Despacho de Gracia y Justicia. Que dispongais como tal Gobernador la division de quarteles entre los Alcaldes, señalando a cada uno el que tuvierais por conveniente, para que avite en él con sus Ministros conforme a lo prevenido por las Leyes destos mis Reinos, y por repetidos Decretos del Rey mi Señor y Padre.

Que se continuen las visitas de carcel sin novedad, declarando como declara, que las causas pertenecientes a la policia y economia de Madrid, no han de ser comprehendidas en ellas, respecto de corresponder a la jurisdiccion privativa del Gobierno. Que en las funciones publicas en que asista en Consejo hayan de concurrir los Alcaldes, como y en la forma que la Sala lo ha acostumbrado, a excepcion de los que estubieren empleados por vos, como Gobernador presidente de ella, y os encargo que en ocasiones oportunas me representeis los meritos con que se distinguieren cada uno de los Alcaldes, para que yo los estime, y atienda;

Y para el mas autorizado uso del empleo en calidad de Presidente de la Sala, y de Gobernador Político de Madrid, os concedo jurisdiccion económica, igual a la que reside en el Gobernador del Consejo, para que podais usarla en los casos de correspondiente naturaleza que toquen al Gobierno de Madrid, procediendo por providencia sin extrepito, ni figura de juicio;

Y respecto de que vos no podreis por vuestra persona acudir aun tiempo a todos los negocios del mando Politico, y economico de Madrid, os permito que con mi aprovacion nombreis un theniente de Gobernador, para que como tal presida los Ayuntamientos por vra. ausencia, y tenga en lo demas del Gobierno Politico y economico toda la jurisdiccion que a vos os compete en propiedad en los casos que no podais ejercerla por vuestra persona, y que os parezca conveniente la exercite vro. Theniente; y para que podais proceder conforme a derecho en las materias del Gobierno, para las

quales no se hayan señalado ministros o jueces expeciales, os permito que despues de estar en posesion del empleo de tal Governador me propongais un Ministro togado, el qual con nombre de Asesor de la Policia, substancie y determine breve y sumariamente todos los negocios de esta naturaleza, que vos le remitieredes de oficio, o instancia de partes, reservando como reservo a mi real persona, todos los recursos de sus determinaciones, sin que en el uso de la Jurisdiccion ordinaria Civil, Criminal contenciosa, que han debido exercer los Corregidores, y en las personas que actualmente administran, y exercen no se haga, como no hago por ahora nobedad alguna.

Y que para que tengais y exerzais la libre y general Administracion de todas las Rentas de Madrid, traslado, y confiero a vos como tal Governador, la Authoridad y jurisdiccion necesaria con tal que en quanto a sisas os arregleis a lo resuelto en Decreto separado de 22 de Septiembre proximo pasado, que con esa fecha dirigi al Consejo, cesando como mando cesen en sus respectivos encargos el superintendente de la Contribucion de Quarteles, y las Juntas de fuentes, limpieza y empedardo y los subalternos que tienen, para el uso de sus ministros, y que los caudales, efectos existentes tocantes a las mismas Superintendencia, y Juntas, se entreguen luego con cuenta y razon al thesorero que con mi aprovacion destinadas, y los papeles de qualquiera naturaleza que sean, se entreguen con recivo al Secretario del Gobierno, que tambien me propondreis, para que desde aquella oficina se repartan entre ella, y la Contaduria, y thesoreria, segun os pareciere.

Y para que todos los asuntos de fuentes, Quarteles, limpieza y empedrados se traten, y resuelvan con el conocimiento, y promptitud que necesitan, os mando que dividais estos encargos entre los Rregidores que propusiereis, y yo aprovara, los que han de coccurrir precisamente a vuestra Posada, a conferir, y a proponer lo que convenga practicar, y a instruirse de lo que determineis para cuidar de su execución; y por que se daran casos que vos no podais asistir destas juntas, permito, que entre en todas vro. Theniente de Governador, y que las presida siempre que vos no concurrais, y que use en tales casos el Theniente de las autoridades de propietario, según la forma de esta mi Real Resolucion, declarando como declaro, que todas las demas Comisiones, Diputaciones o encargos de asuntos tocantes al Govierno Politico y Economico de Madrid han de ser de vra. privativa autoridad como tal Governador para que por el tiempo que os pareciere las dividais a Vuestro arvitrio entre los Regidores; y en quanto a las gratificaciones que se les ayan de dar annualmente o por una vez, en poca, o en mucha cantidades permito que me las propongais, para que yo pueda resolver lo mas proporcionado

al trabajo, importancia y duracion de cada encargo; y quiero y mando que en materias tocantes a la Policia, Adorno, y limpieza de Madrid, no valga exempcion ni fuero alguno por mas privilegiado que sea. Que de qualquier duda, o controversia que en esto ocurra conozca providencialmente el Asesor de la Policia, y que si resultare algun recurso de partes se haya de dirigir necesariamente a mi Real Persona por el secretario del Despacho de Gracia y Justicia. Que considerando que para el perfecto uso de las facultades, y jurisdicciones que os concedo en las varias partes que incluye del Gobierno de Madrid podeis necesitar Ministros o subdelegados dentro y fuera de mi Corte, os permito que considereis y propongais el numero que tubiereis por conveniente; los pueblos en que hayan de residir, la distribucion de las facultades que hayan de tener, y los casos en que devan practicarlas.

Y os prohibo muy estrechamente que podais imbertir otros destinos que los que os señalo, y señalaré, en parte alguna de todos los caudales de sisas, Propios, Quarteles, fuentes, y otros qualesquiera que se libraren y recibieren para fines ordinarios, o estraordinarios de la causa publica, como asimismo que con las sobras de unos fondos suplais las faltas de los otros, sin que para qualquiera imbersion o suplemento haya precedido orden expresa mia, comunicada por el secretario del Despacho de Gracia y Justicia y para que procedais con conocimiento de lo que por ahora señalo, a cada uno de los gastos precisos ordinarios de la causa publica de Madrid os he mandado entregar las dos relaciones originales de gastos dotados, y indotados que el Consejo ha puesto en mis manos previniendoos, como os prevengo, que por este año os regleis a ellas, y que cumplido me deis cuenta de lo que huviereis observado, para confirmar, o innovar lo conbeniente.

Y os encargo privativa, y omnimodamente como tal Governador todo lo concerniente a Theatros, y Representaciones que se acostumbra en Madrid, reasumiendo en vra. persona toda la jurisdiccion, authoridad y intervencion, y manejo que hasta ahora han tenido en este particular los Ministros que han sido Protectores de los Hospitales, mandando como mando, que el que actualmente lo es quede enteramente inhivido; pero quiero que se continúe la asistencia de los Alcaldes de mi Casa y Corte a los theatros, con la authoridad que hasta aquí, y que no se haga novedad en el examen, y revision que segun el antiguo estilo de deve hacer de las represntaciones; y sí ocurriere negocio de esta clase que pida judicial ynspeccion, mando que conozca de el Asesor de Policia, guardando la forma que para las demas de igual naturaleza establezco por el expresado mi Real Decreto, y se declaran en este mi Despacho.

Y deseando ver lo mas favorables efectos de las

ynformaciones, y averiguaciones que de mi orden ha hecho Dn. Pedro de Alcazar y Montoya, con comision especial mia, en la Real Casa, Dependientes, vienes, fondos y forma de Govierno del Hospicio de Madrid; he resuelto que cese enteramente este ministro en su Comision, y que todo el mando que en su virtud ha tenido, y toda la jurisdiccion que en diferentes tiempos, y por nombramientos mios han usado el Consejo, sus Governadores, el Arzpobispo primado, o los Corregidores, los Administradores, ni otras qualesquiera personas las tengais vos como por este mi Despachpo os la encargo privativamente para que como superintendente de aquella Casa os entereis de su actual estado y me informeis lo que sea digno de reforma, permitiendootos que me propongais los ministros, y sirvientes que tuviereis por utiles, para cuios fines he mandado se os remitan los Autos y instrumentos originales que se han formado por el citado juez de Comision Dn. Pedro de Alcalzar.

Y para la expedicion de todas las ordenes tocantes al Gobierno Politico y Economico de Madrid, quiero que tengais una Secretaria con los oficiales, y escrivientes que os parecieren bastantes, y os doy facultad para que me los propongais.

Y en consideracion de los gastos, y representaciones que haveis de tener como tal Gobernador os señalo ciento veinte mil reales de Vellon de sueldo al año, con esta distincion en el fondo de sisas sesenta mill reales en Alcalvalas, cientos, y millones treinta quatro mil; en propios diez mil: en abastos once mill: y en los caudales destinados a fuentes, empedrados, y limpieza cinco mil, manteniendootos el sueldo que gozais por vuestro grado, y que se os tenga presente en los ascensos que os correspondan, relevandoos, como os relevo del derecho de la media annata por qualquiera razon que ahora devierais pagarle, y sin que esta gracia pueda alegarse por exemplar en lo futuro;

Y en su conformidad mi voluntad es que ahora, y de aqui adelante, y por el tiempo della, vos el expresado Conde de Maceda seais mi Gobernador Politico y Militar de la dicha Villa de Madrid, y Presidente de la Sala de Alcaldes de mi Casa y Corte con independencia del mi Consejo, sin que para ser recibido en ella y en el Ayuntamiento necesiteis de hacer juramento, y con las facultades preheminencias, comisiones y regalias que aqui van declaradas, y la circunstancia de que os hayan recibido como son recibidos por los Consejos los Presidentes, y Governadores.

Y mando al Gobernador, y los del mi Consejo, Alcaldes de mi Casa, y Corte, y al Consejo, Alcaldes de mi Casa y Corte y al Concejo y Regidores, Cavalleros, escuderos, oficiales y hombres Buenos de la dicha Villa de Madrid y a los demas Concejos, Jueces y Justicias a quienes lo aqui

contenido toca, o tocar puede, en cualquier manera que os hayan, y tengan por tal Governador Politico y Militar de Madrid, y Presidente de la Sala de Alcaldes de mi Casa y Corte en la forma que aquí se especifica, contiene y declara sin limitacion de cosa alguna, sin que con ningun pretexto os impidan y embarazen el uso de las respectivas Jurisdicciones que por esta mi carta os concedo. Y que os guarden y hagan guardar todas las honrras gracias mercedes, exempciones, preheminencias, prerrogativas, e inmunidades que os corresponden, y os deven ser guardadas. Y por este mi despacho os dispense; y assi mismo mando a los thesoreros que al presente son, y adelante fueren de los fondos, y caudales de sisas, alcavalas, cientos, y millones, propios, Avastos, fuentes, empedrados, y limpieza, que os den, y entreguen en cada un año, lo que en cada uno de estos efectos os he consignado hasta el cumplimiento de los ciento y vinte mill Reales que como va expresado haveis de gozar de sueldo con dicho empleo en la forma, y distribucion que queda referida; que con vuestro recibo, o carta de pago, si de quien vuestro poder, y copia authorizada deste mi Despacho en las primeras pagas, en la forma, y distribucion que queda referida, sera bien dado, y pagado, y se les pagara en cuenta en las que cada uno respectivamente diere de los caudales de su cargo, sin otro recado alguno. Y desta dicho mi Despacho se ha de tomar la Razon en la Contaduria General de la Distribucion de mi Real hacienda a que esta agregado el Registro General de mercedes. Y declaro que desta no deveis el derecho de la media annata, por haveros relevado de ella, como va expresado. Dada en Buen Retiro a primero de Octubre de mill setecientos y quarenta y seis.

Yo el Rey.

Yo Don Francisco Javier de Morales secretario del Rey nuestro Señor le hize escribir por su mandado. Gaspar Obispo de Oviedo. Don Joseph de Bustamante y Loyola. Don Thomas de Guzman y Spínola (estos nombres aparecen tachados en el original).

Don Sebastian de la Cuadra (sin tachar).

APENDICE X. REAL DECRETO DE CREACION DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA PARA MADRID Y SU RASTRO. EL PARDO 17 DE MARZO DE 1782.

El aumento y extension que ha tenido de algunos años a esta parte la poblacion de Madrid, su terreno y edificios, vecindario y concurrentes de dentro y fuera del Reyno, y las muchas providencias y reglas de policia a que han obligado las circunstancias exigen tambien que a semejanza de lo que se parctica en todas las demas Cortes, haya en esta mia una persona de autoridad, celo, experiencia y rectitud que sin distraerse a otros objetos cuide particularmente, y sea responsable de la ejecucion de aquellas reglas y providencias sin perjudicar ni disminuir las facultades obligaciones que hayan exercido hasta aora y tengan otras personas y tribunales.

En su consecuencia he resuelto crear desdeluego un Superintendente General de Policia para Madrid, su jurisdiccion y rastro, con antiguedad y plaza efectiva en el mi Consejo, que por ahora sera supernumeraria hasta la primera vacante en que entrara, quedando aquella suprimida; el qual tendrá la obligación de celar en la execucion de las Leyes, Autos acordados, Vandos, Decretos, y Providencias mias, y de mi Consejo, que miren a la Policia Material y Formal, corrigiendo a los contrabentores, multandolos, y aplicandolos a los destinos que estuvieran señalados en las mismas Leyes, Autos Acordados, vandos, Decretos y providencias; y representando lo que estimare conveniente en los casos en que se deba alterar añadir o establecer alguna cosa de nuevo, sea al mi Consejo, en Sala primera de Gobierno, donde ha de tener siempre su asistencia, o sea directamente a mi Real Persona por medio de mi primera Secretaria de Estado, a que estan agregados los negocios de la policia de Madrid.

Y para que este Superintendente se halle mas desembarazado y libre en los diferentes puntos de su cargo, sobre los quales, segun lo que descubriere y mostrase la experiencia, mandare formar instruccion separada que le comunicare sirviendo de tal por ahora este Decreto, he venido en declarar que su asistencia al Consejo, y su Sala de Gobierno, ha de ser voluntaria en los dias y horas que pudiese, y lo tubiere por conveniente en cuio caso interbendra y votara sin restriccion como uno de los demas ministros en todo lo que ocurriere y representara lo que le pareciere en lo respectivo a Policia, para que el Consejo lo tome en deliveracion y resuelva o consulte segun correspondiere a la materia de que se trate.

Asi mismo declaro que la Sala de Corte, Alcaldes de Quartel y de Barrio, el de Comission de Vagos, el Corregidor de Madrid y sus Tenientes y todos los demas que tienen obligacion de cuidar de la Policia de Madrid en lo material y formal, han de continuar como hasta aqui acumulativamente, sin estorbar al Superintendente General que en toda la comprehension del pueblo, y su jurisdiccion, exerza iguales facultades, y tome conocimiento de lo que ocurra: a cuio fin le informaran por escrito Juezes superiores, si alguna cosa les preguntare y concurriran a sus llamamientos los Alcaldes de Barrio, y demas subalternos, y obedeceran sus providencias; así como el Superintendente Gral. tampoco se embarazará en los negocios que ya estuvieren pendientes ante aquellos juezes dejandoles libremente tomar sus providencias, y no mezclandose en conocer de ellas por via de recurso ni queja; aunque si despues de tomadas, y ejecutadas hubiere reincidencias, o nuebo motivo de proceder, podra hacerlo el Superintendente General.

Igualmente declaro que estas facultades y la jurisdiccion del Superintendente Gral. han de ser por via economica, gubernativa y ejecutiva como lo son todas las leyes y vandos de Policia, sin apelacion o recurso; pues qualesquiera quejoso en casos graves podrá recurrir a mi Real Persona o directamente por dicha mi primera Secretaria de Estado o por vuestro medio; y en los casos en que de los procedimientos resultare descubrirse algun delito, perjuicio a tercero, o motivo de formar instancia judicial cuidara el Superintendente de remitirlo al juez o Tribunal que corresponda, aunque no por ello se deberán formar competencias, ni dar lugar a ellas: pues representandome lo conveniente, tomaré sin dilacion providencia sobre qualquiera de estos u otros puntos en que ocurrieren dudas o dificultades.

Para el exercicio pronto de esta Superintendencia dispondrá el Consejo que de los Alguaciles y Porteros que tiene el Ayuntamiento de Madrid se dejen uno de estos y seis de aquellos a disposicion del Superintendente General de Policia, entretanto que dispongo se arregle el numero que necesite con las dotaciones correspondientes para que sirvan con celo y pureza: Y el mismo Ayuntamiento facilitara alguna Sala de sus Casas para la asistencia del Superintendente en los dias y horas que no perjudique a otros destinos franqueandosele aquella y las demás Carzeles para los objetos de su encargo.

Tendrase entendido en el Consejo: Y en la inteligencia de haber nombrado por Decreto de este dia por tal Superintendente General a Don Bernardo Cantero de la Cueva, Teniente de Corregidor de Madrid, se expedirán luego para su cumplimiento las Cedula, Provisiones, u Ordenes que

correspondan a los tribunales y personas que hayan de cuidar de su ejecución =Señalado de la Real mano=

En el Pardo a 17 de marzo de 1782 =Al Gobernador del Consejo.

APENDICE XI. REAL RESOLUCION SUPRIMIENDO LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE MADRID. MADRID, 26 DE MAYO DE 1792.

Real Resolucion. Me conformo con el Consejo en suprimir la Suprintendencia General de Policia de Madrid creada en 1782 y es mi voluntad, que se observe enteramente el reglamento de 1768, con la division de ocho quarteles baxo un Alcalde de mi Casa y Corte, habitante dentro del mismo sin dispensa, y la subdivision de ocho barrios en cada uno, segun asi se establecio, en una forma será cada Alcalde el Yntendente particular de Policia en su distrito y un juez ordinario de el, para las ocurrencias y comodidad de los vecinos.

Declaro que asi como para todo el reino el presidente o Gobernador de mi Consejo es la cabeza de la Policia, lo ha de ser a mas fuerte razon en mi Corte, como así lo ha sido en todos los tiempos. Por esto y por la circunstacia de reunirse todas las divisiones del Casco de Madrid y juzgado de la Villa bajo una mano autorizada y natural, sin el tropiezo de la Policia que se extingue para sus independencias nada conducentes a la uniformidad y bien General; quiero que no exista la autoridad que interrumpia el orden de las otras. Todos los procesos y procedimientos de la superintendencia desde su creación, así reserbados, como publicos que se hubieren terminado, se pasaran al Archivo de la Sala y los aun pendientes a sus escribanias, dividiendose entre las dos los indecisos para su mas pronto despacho y si se reclamase sobre algunos de los archivados se bolveran a ver por las dos Salas juntas en rigurosa justicia.

El Superintendente actual asistirá a su plaza del Consejo, y se constara el exercicio del fiscal, del Comisario, y de todos otros subalternos mios, cesandoles qualquiera emolumentos y sueldos que para ello gozaren. Los que fueren dependientes y empleados, y extraídos de otras plazas de diferentes juzgados y destinos, volberan a servirlos y los que quedaren sin ninguno, y constase haber cumplido con sus obligacion, los tendra presentes el Gobernador del Consejo, para que en equivalentes servicios se vaian reemplazando. Si el Reglamento de 1768 con la experiencia de los tiempos ofreciere alguna novedad de correccion, supresion, o aumento de reglas, oiendo el Consejo a sus fiscales y a la Sala, me lo propondra con su dictamen motivado para la mejor Policia, y teniedo siempre presente el no confundir ni comprometer esta con lo que mereciere rigurosa administración de justicia, por su entidad, consecuencias y umdicta publica, sin dejar por eso de inclinar quanto pudiere a los medios, y a las

correcciones suaves, cuia observancia no descuidada consiga el fin del remedio.

Publicacion. Publicada en el Consejo la antecedente Real Resolucion oi quatro de Junio de 1792, se acordó su cumplimiento y que poniendose certificación en el expediente, se expida con su insercion la Cédula correspondiente, la qual se imprima, y comuniqué circularmente en la forma acostumbrada, sin perjuicio ni retardacion de esto, paseme certificaciones con insercion de esta Real Resolucion al Señor Superintendente General de Policia, a la Sala de Alcaldes, al Corregidor y Ayuntamiento de Madrid para su respectiva inteligencia y cumplimiento en la parte que les toca, con encargo al dicho Corregidor de que lo haga entender tambien para el propio efecto a sus Tenientes.

Y dicho que sea todo lo convenido dese cuenta para proveer lo conveniente sobre la ultima parte de la Real Resolucion de Su Magestad.

NOTAS DE LOS APENDICES

(1) "Las ordenanzas para los Alcaldes de Corte hechas por la reina D^a Juana y el emperador Don Carlos su hijo" no aparecieron reproducidas en sus totalidad en ninguna de las recopilaciones de leyes y tampoco las conservaba en su Archivo la Sala de Alcaldes durante el siglo XVIII. Sin embargo, una pequeña parte de las mismas sí aparece en la Novísima Recopilación. Así la ley I del Libro III, Título XVII titulada "Obligación de los Alcaldes de Corte a poner los precios de los mantenimientos de ella, repartiendo por semanas" corresponde a un pequeño fragmento de las Ordenanzas. También la ley II del Libro IV, título XXIX titulada "Modo de entregar los Escribanos de provincia los procesos de que se apelare al Consejo" y la ley VIII del Libro IV, Título XXX, "Obligación de los alguaciles de Corte en el cumplimiento de lo que manden los Alcaldes de ella" reproducen pequeñas partes de las Ordenanzas de los Alcaldes. Las Ordenanzas en su versión completa han sido localizadas en un manuscrito del Archivo General de Simancas, Diversos de Castilla, leg. 1, expte. 60.

(2) "La orden del emperador Don Carlos sobre los derechos que han de llevar los alcaldes por las rebeldías" es, en realidad, una confirmación de las ordenanzas de 1518. También en el A.G.S. Diversos de Castilla, leg. 1 expte. 60.

(3) El Estatuto de Madrid fue promulgado por primera vez por Felipe III. El original, manuscrito, se conserva en el Archivo de la Villa de Madrid con rúbrica y sello real en Secretaria 2-306-22. En mi memoria de licenciatura titulada

"El Ayuntamiento de Madrid en el Antiguo Régimen" reproduce como apéndice la ratificación del Estatuto realizada por Felipe IV en 1638 que incluye variaciones considerables.

(4) "La forma que se ha de guardar en las elecciones de oficios que esta Villa de Madrid provee el día de San Miguel" es un compendio que incluye la Sentencia de Montalvo (1.453), la Concordia de Bobadilla (1.473) así como las ordenanzas promulgadas por el Consejo de Castilla sobre los oficios concejiles madrileños (1.493, 1.511, 1.575, 1.713, 1.716). El original en el A.V.M. Secretaria, 1-413-15.

(5) "Las reflexioens del Marqués del Rafal sobre la constitución en que se halla Madrid" es un ejemplo de los memoriales que los corregidores de Madrid elevaron al rey protestando por el recorte de competencias de la Corporación madrileña. El marqués del Rafal fue elegido Corregidor después del fracaso del Gobierno Político y Militar de Madrid en 1747 y ocupó el cargo hasta su muerte acaecida en 1.753. Era un hombre próximo en ideas a Ensenada que fue quién lo propuso para el cargo. Intentó no causar problemas a los gobiernos reformistas y por ello su tono era menos amargo y tajante que el de sus sucesores en el cargo. El memorial del marqués del Rafal en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 783.

(6) Los Decretos de Nueva Planta dirigidos al Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes y Consejo de Hacienda han sido objeto de atención de todos los historiadores que han trabajado sobre el Consejo de Castilla en el siglo XVIII. Es el caso, entre otros, de M^a Isabel Cabrera Bosch en su obra "El poder legislativo en la España del siglo XVIII" y de Salustiano de Dios en sus Fuentes para el estudio del Consejo de Castilla, esta última obra es fundamentalmente

una recopilación de textos y por lo tanto reproduce los Decretos de Nueva Planta (pp. 128-148). Los Decretos no sólo se referían al Consejo de Castilla sino que contenían también las disposiciones sobre la Sala de Alcaldes y el Consejo de Hacienda. Hemos preferido por ello reproducir como apéndices aquellas disposiciones reales que son inéditas y que afectan sólo a la Sala de Alcaldes. "El decreto de S.M sobre la regla y forma que se ha de observar en el despacho de los negocios" tiene un interés relevante para nuestra tesis al recordar los negocios que debían permanecer como competencia municipal tras los Decretos. El original en el A.H.N. Consejos, libro 1196, fol. 37.

(7) Nos ha parecido interesante mostrar uno de los múltiples memoriales elevados al monarca por las instituciones afectadas por los Decretos de Nueva Planta. Las dieciseis dudas de la Sala de Alcaldes fueron contestadas por la corona en forma de Real Resolución que completaba y complicaba lo ordenado en los Decretos del 10 de noviembre de 1713. El original en el A. H. N. Consejos, libro 1196, folios 60 al 90.

(8) El Decreto por el cual se restaura a su antigua planta a la Salade Alcaldes, no lo reproduce Salustiano de Dios en su obra Fuentes para el estudio del Consejo de Castilla, y desde luego, tiene un gran interés para nuestra tesis. Una copia se conserva en el A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 804.

(9) "El despacho del rey Fernando VI extinguiendo el oficio de corregidor de Madrid y señalando las facultades y preheminencias del Gobernador Politico y Militar de Madrid" procede del Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, leg. 783. También algunos documentos relativos al Gobierno Politico y Militar de Madrid han sido publicados; esta vez por José Luis Bermejo Cabrero en su obra Derecho y


administración pública en la España del Antiguo Régimen, pp. 71-79. Sin embargo, nuestro Despacho procede del Archivo General de Simancas y la documentación utilizada por Jose Luis Bermejo del Histórico Nacional. El reproduce el Decreto General en que se fundó el Real Título de Gobernador Politico y Militar dirigido al Consejo de Castilla que tiene algunos puntos en común con el documento que reproducimos pero también significativas diferencias.

(10) La información relativa a la Superintendencia de Policía también procede del Archivo General de Simancas. El Real Decreto de Creación en Gracia y Justicia, leg. 1.026.

(11) "La Real Resolución del 26 de mayo de 1792" también en el A.G.S. leg. 1.026.

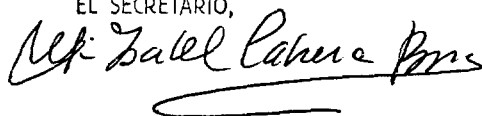
REUNIDO, EN EL DIA DE LA FECHA, EL TRIBUNAL QUE SUSCRIBE, ACORDO CONCEDER
A LA PRESENTE TESIS DOCTORAL LA CALIFICACION DE APTO (CON LAUDE) Examinada
MADRID, 3 DICIEMBRE 1992

EL PRESIDENTE,



FDO.:

EL SECRETARIO,

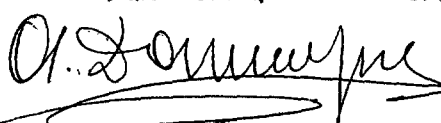


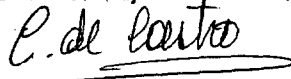
FDO.:

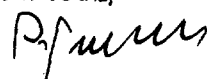
PRIMER VOCAL,

SEGUNDO VOCAL,

TERCER VOCAL,







FDO.:

FDO.:

FDO.: